

UNIVERSIDAD DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO



TESIS DOCTORAL

**Accidentes del trabajo en la industria : estudio crítico y
comparativo de las leyes de Filipinas y España**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Sancho Varias Romeroso

Madrid, 2015

Rd. 64.018

TE 568

ACCIDENTES DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA

Estudio crítico y comparativo de las Leyes

de

Filipinas y España

TESIS DOCTORAL

**Que respetuosamente presenta a la Universidad Central de
Madrid para obtener el Grado de Doctor en Derecho**

SANCHO VARIAS ROMEROSO



BIBLIOTECA
DE DERECHO

Patrocinada y dirigida por el

PROFESOR DR.D.EUGENIO PEREZ BOTIJA

**Catedrático de Política Social y Derecho del Trabajo de la
Universidad Central**

Madrid, 1.953

**A mis queridísimos padres, a quienes
debe todo lo que soy.**

"Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios" (Evangelio San Mateo, XIII, v. 21).

"Nuestra Patria a nadie olvida, y a todos dará la Justicia prometida" (FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, en el Mensaje radiado a todos los españoles el 1 de Octubre de 1937).

"Un programa económico más firme y amplio y, sobre todo, una mayor justicia social a los trabajadores filipinos" (RAMON MAGEAYSAY, Presidente electo de Filipinas).

"Necesitamos dos cosas: una Nación y una Justicia Social" (JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA).

"La dignidad humana, la integridad del hombre y su libertad son valores eternos e intangibles" (Punto 7º de FET y de las JONS).

**"El Estado se compromete a ejercer una acción constante y eficaz en defensa del trabajador, su vida y su trabajo.....y otorgará al trabajador toda suerte de garantías de orden defensivo y humanitario".
(Declaración II, punto 1 del Fuero del Trabajo).**

**"El trabajo, por su condición esencialmente humana, no puede ser relegado al concepto material de mercancía, ni ser objeto de transacción alguna incompatible con la dignidad personal del que lo presta. Constituye por sí atributo de honor y título suficiente para exigir tutela y asistencia del Estado".
(Art. 25 del Fuero de los Españoles).**

**"El Estado protegerá el trabajo especialmente a las mujeres y a los menores que trabajan, y regulará las relaciones entre el trabajo y el capital en la Industria y en la Agricultura".
(Art. XIV, Sección 6 de la Constitución filipina).**

PROLOGO

En la presente tesis, hemos tenido fundamentalmente en cuenta ese gran anhelo del hombre, que se concreta en la palabra "libertad" al que se reconducen la mayoría de sus actos en la vida. Para lograr una sociedad libre, es imprescindible el fomento y realce de la dignidad humana. Y para realzar debidamente esta dignidad humana, hemos creído preciso insistir en la necesidad de realzar, a su vez, una serie de valores humanos, que hemos denominado poder, riqueza, bienestar, ilustración, respeto, rectitud, afecto y habilidad. Y estos valores nos han servido, ya que no de varita mágica—porque no es en el terreno de la ilusión en el que hemos trabajado, sino en el terreno práctico que ofrece la vida a la consideración del jurista—sí, en cambio, de especie de termómetro que pudiera darnos el nivel de "temperatura" de Justicia y Equidad de las normas legales que regulan la materia objeto de nuestro trabajo. En otras palabras, y volviendo a nuestra terminología, hasta que punto dichas normas realzan los valores mencionados por los que poder llegar a la dignificación humana, y consiguientemente, a la consecución de aquella comunidad de hombres

libres. Y en este punto, una aclaración: Hemos dicho "nuestra" terminología y, sin pretensiones vanas, pero con la honestidad y legítimo orgullo del que presenta una obra fruto de sus personales afanes y esfuerzos, podríamos añadir también "nuestra" técnica y "nuestro" sistema de tratamiento, que podrá ser discutido y— lo que es más, y de ello no nos cabe la menor duda—, mejorado y revalorizado, pero al que nadie negará su originalidad ni las consecuencias beneficiosas que de él pueden derivarse. He ahí por qué, el autor del presente estudio se atreve modestamente a ofrecer esta nueva técnica de investigación y crítica jurídica a los juristas y comentaristas españoles, a los que, con este esfuerzo, ha querido rendir un homenaje de gratitud y reconocimiento por cuanto de provechoso y gran valor ha aprendido de ellos. Quizás, incluso, se nos dirá que no hay tal originalidad en nuestro tratamiento toda vez que este ideal que nosotros hemos buscado en las leyes laborales que nos ha tocado examinar y discutir, constituye en definitiva, la misma idea del "bonum commune" de la sociedad, ya propugnado por los Escolásticos (1) y la rica tradición juridicocristiana de la mayoría de los países tradicionales, muy en especial de la Madre Patria España.

Esto es cierto y nosotros así queremos manifestarlo

(1) Recuérdese la misma definición de ley de Santo Tomás de Aquino: "Ordonatio Rationis ad Bonum Commune....."

Porque queremos se nos interprete rectamente nuestro pensamiento y porque no por buscar originalidad íbamos a caer en heterodoxia. Pero, coincidentes en el fin, no hemos querido servirnos de los mismos medios tradicionalmente utilizados por la técnica jurídica. Y he aquí por qué hemos llamado "nuestra" a la que hemos utilizado en este trabajo, que constituye el primer intento de un estudio analítico-crítico de la materia que nos sirve de título, que bien pudiera tener repercusiones prácticas, y ello sería la culminación de nuestros esfuerzos y el mejor premio a los mismos. No olvidemos que el Derecho nace y se hace para la vida y nuestro deber de juristas es el de contribuir, con nuestro mayor o menor esfuerzo, a la resolución de los problemas que esa misma vida plantea. Y ello, con entusiasmo, decisión, y si se nos apura un poco, diría que también con coraje. Venciendo y convenciendo. Porque, para mí no cabe postura más desalentadora, lamentable y negativa que la de aquel autor --"de cuyo nombre no quiero acordarme", parafraseando al inmortal Cervantes que decía "Yo no escribo para convencer....".

Ahora bien: ¿Por qué nos hemos impuesto, como tarea principal, la de promover la dignidad humana? ¿Por qué no conformarnos, a la manera de las teorías positivistas, con promover, fomentar y defender los meros intereses vitales, humanos de la

vida cotidiana? O, tambien, ¿por qué no propugnar, por ejemplo, la indignidad humana, sin mas?. Hemos escogido la promoción de la dignidad humana como punto central de nuestro trabajo, ante todo, porque la intención original del Supremo Hacedor, al crear al hombre a imagen y semejanza Suya, fué la de hacer del hombre un ser digno, como portador que es- como dijera JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA- de valores eternos, porque tiene un alma inmortal que salvar. Y el único medio de poder salvarla (¿de qué la valdría ganar el mundo entero- como decia el místico español- si al fin la perdiera?), es el de procurar, por todos los medios, dignificarlo. Y dignificándole a él individualmente, dignificaremos tambien a la familia, a la sociedad, al Estado- ¿que son los Estados, decia el gran Pontifice BENEDICTO XV, sino agregados de individuos?- y, por último, a la comunidad internacional. Confesemos que la presente crisis de esa comunidad, y del Derecho que la rige, no obedece en definitiva, sino a la crisis de esos valores humanos, y en tanto en cuanto dichos valores no sean ampliamente distribuidos, de forma que todos puedan participar equitativamente de ellos, no nos engañemos los juristas: la paz internacional -y esto es algo que ha puesto bien claramente de manifiesto S.S. Pio XII

en sus frecuentes alocuciones a este mundo dolorido que vivimos- no podrá ser, en modo alguno, alcanzada. La paz y el orden internacionales no son, en definitiva, sino una consecuencia de la paz y el orden internos, y estos a su vez, de la paz y el orden de los individuos, pues no en vano, la Moral es una y la misma para todos y el Evangelio- el faro luminoso del que algunos ciegos se empeñan en apartarse- no contiene una regla de moral para los individuos distinta de la aplicable a las familias, a los Estados o a la comunidad internacional.

Pues bien, hemos creído cumplir con nuestro deber en esta tarea de dignificar al hombre y contribuir, con nuestras limitadas fuerzas, al afianzamiento y solidificación de esa comunidad de hombres, libres, con el estudio que hoy presentamos a la consideración del paciente lector y a la benevolencia del Tribunal Juzgador. Porque la convivencia humana y social no es como dijera muy acertadamente D. NICOLAS PEREZ SERRANO, en su Discurso de Recepción como Académico de la Real de Ciencias Morales y Políticas(1), "mera estructura o simple forma; supone alma común; supone conciencia colectiva, supone espíritu propio". Y ese es el espíritu, la conciencia y el alma que propugnamos. O -como declaró el Profesor CASCON Y MARIN, en su contestación al Discurso antes

(1) PEREZ SERRANO(Nicolás): El Poder constituyente, Discurso pronunciado en la Sesión del 9 de Febrero 1947, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

mencionado del Catedrático de Derecho Político en la Universidad de Madrid, en aquella misma ocasión-"conciencia del bien, imperio de la moral, destierro del egoísmo y de la falsía, espíritu propicio para poner en práctica aquellos principios inmutables de algo que sufre rudo combate en ciertos territorios, la civilización cristiana, elemento esencial de la vida de las comunidades sociales, de las organizaciones estatales, de las comunidades puras".

Por todo lo que antecede, el autor del presente estudio para cuya realización ha utilizado materiales de muy diversos países y que constituye el fruto de muchos esfuerzos y afanes- confía serenamente en la realización, en un futuro más o menos lejano, de aquel ideal y que su trabajo pueda resultar de alguna utilidad para el Gobierno de su propio país, que ha patrocinado sus estudios en el Extranjero e, incidentalmente, para cuantos tengan la paciencia de leerlo y comprender la buena fé y el noble afán que le ha guiado.

A. M. D. G.

S A N C H O V A R I A S R O M E R O S O

Licenciado en Filosofía y Letras, en Pedagogía y en Derecho

Madrid, a veinte de Noviembre de mil novecientos cincuenta y tres, Aniversario de la muerte de JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA, mártir de una España nueva y más socialmente justa.

-VII-

Nuestro más profundo agradecimiento y sincero aprecio al PROFESOR DR.D.EUGENIO PEREZ BOTIJA, a quien, por su ayuda entusiasta, por su acertada dirección y su inmediata supervisión, corresponde todo el mérito que pueda haber en este trabajo.

Con iguales sentimientos al PROFESOR D.JUAN EUGENIO BLANCO RODRIGUEZ, por la amable revisión del presente estudio.

AL INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA, al GOBIERNO FILIPINO, al GOBIERNO NORTEAMERICANO y a la ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS, cuyas becas y ayuda combinada hicieron posible un estudio del Derecho laboral, con amplitud mundial, de manera especial en los principales países de Europa y América, estudio del que esta tesis es uno de los resultados, nuestras gracias de corazón.

AL COLEGIO MAYOR HISPANO-AMERICANO "NUESTRA SRA. DE GUADALUPE", nuevo hogar nuestro lejos de la Patria, cuyo serio ambiente de laboriosidad y estudio ha contribuido no poco a la elaboración de esta tesis.

Y, finalmente a las Universidades del EXTREMO ORIENTE (Filipinas), YALE (E.E.U.U.) y MADRID (España), cuyas valiosas aportaciones a nuestra formación jurídica han colaborado eficazmente a la realización final de este trabajo.

ACCIDENTES DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA

I N D I C E

	Página
PROLOGO.....	I-VII
INDICE.....	VIII-XII
GUIA DE ABREVIATURAS.....	XIII

PRIMERA PARTE

Capítulo

I. ACLARACIONES

A. La dignidad humana y la legislación del trabajo.....	1
B. Planteamiento del problema.....	4
C. Los conceptos de los valores fines.....	8

II. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA LEGISLACION SOBRE RIESGOS LABORALES.....	17
--	----

III. LA PREVENCION DE ACCIDENTES

A. Obligaciones impuestas al empresario o patrono.....	24
B. Medios de prevencion.....	28

IV. ANTIGUAS BASES DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL

A. Responsabilidad contractual del Empresario.....	38
B. Responsabilidad del empresario basada en culpa aquiliana.....	41
C. Responsabilidad del empresario según algunos códigos europeos.....	43

V. LA LEY FILIPINA DE RESPONSABILIDADES DEL EMPRESARIO

A. Fundamentos de la responsabilidad del empresario.....	48
1. Diligencia que el patrono debe observar.....	49
2. Negligencia punible.....	50
3. Conexión causal entre la conducta del patrono y la lesión del obrero..	51

Capítulo	Página
B. Tiempo y lugar de la lesión.....	52
C. Causa de la lesión.....	55
D. Acción de daños y perjuicios.....	57
1. Personas titulares del derecho a la acción.....	57
2. Necesidad de informar al patrono de la lesión ocurrida.....	58
3. Cuantía de la indemnización.....	60
E. Defensas del empresario.....	60
1. Negligencia cooperante.....	61
2. Asunción del riesgo.....	62
3. Doctrina del compañero de trabajo..	63
F. Una breve crítica.....	64

SEGUNDA PARTE

LA LEY DE INDEMNIZACIÓN A LOS OBREROS

VI. PROPOSITOS Y ALCANCE DE LA LEY

A. Propósitos de la Ley.....	66
B. Base de su promulgación.....	70
C. Base del derecho del obrero a ser indemnizado.....	71
D. Diferencias entre la Ley de Responsabilidades del Empresario y la Ley de Indemnización a los Obreros.....	72
E. Exclusión de otros derechos y soluciones legales.....	73
F. nulidad contractual "ope legis".....	77
G. Interpretación de la Ley a favor del obrero.....	79

VII. DEFINICION DE LOS TERMINOS EMPLEADOS EN LA LEY

A. En general.....	82
B. Empresario.....	83
C. Contratista independiente.....	86
D. Obrero.....	87
E. Empleo industrial.....	88
F. Empleo público.....	89
G. Empleo ocasional.....	89
H. Accidente.....	90
I. Lesión o lesiones personales.....	92
J. Incapacidad parcial.....	92
K. Negligencia.....	92
L. Jornales.....	93
M. Establecimiento.....	93

Capítulo	Página
N. Hijo, hija o hijos.....	93
O. Padres.....	94
P. Hermano o hermana.....	94
Q. Nieto, nieta o nietos.....	94
R. Abuelo, abuela o abuelos.....	94
VIII. OBREROS COMPRENDIDOS EN LA LEY	
A. Clases de obreros que comprende la Ley...	95
B. Existencia del contrato de trabajo.....	98
C. Contratistas independientes y sus obreros sin derecho a indemnización.....	100
D. Obreros eventuales sin derecho a indemnización.....	101
E. Obreros contratados por el tráfico interinsular y con el extranjero.....	102
F. Obreros contratados dentro o fuera de Filipinas.....	104
IX. LESIONES QUE DAN DERECHO A INDEMNIZACION	
A. Motivos de indemnización por lesiones....	105
B. Significación de las expresiones "derivado de su empleo" y "durante el desempeño del mismo".....	107
C. Casos prácticos.....	109
D. Compensación y crítica de los requisitos doctrinales.....	112
E. Relación entre el daño resultante y el accidente como causa de aquél.....	114
X. LESIONES NO INDEMNIZABLES	
A. Motivos para la no concesión de indemnización.....	117
B. Lesión intencionada por parte del obrero.....	117
C. Embriaguez.....	118
D. Negligencia notoria.....	120
E. Peligros a los cuales está expuesto el público.....	122
XI. INDEMNIZACION EN CASO DE FALLECIMIENTO	
A. Montante de la indemnización.....	124
B. Caso de falta de acuerdo entre las diversas personas llamadas a participar en la indemnización por fallecimiento....	138
C. Bases de computación de la indemnización por fallecimiento.....	140

Capítulo	Página
D. Periodos de indemnización.....	142
E. Momento en que ha de empezar el pago de la indemnización por fallecimiento.....	144
XII. PERSONAS DEPENDIENTES DEL OBRERO	
A. Significación del término "Dependiente" en general.....	144
B. Dependencia total y parcial.....	145
C. Prueba de la dependencia,,.....	146
D. Tiempo en que se toma en cuenta la dependencia.....	146
E. Quiénes son dependientes con arreglo a la ley.....	146
XIII. INDEMNIZACION EN CASO DE INCAPACITACION PARA EL TRABAJO	
A. Incapacitación total.....	152
B. Incapacitación parcial.....	156
C. Incapacitación temporal.....	159
D. Montante de indemnización.....	160
E. Duración del pago de la indemnización.....	162
F. Revisión de incapacidades.....	163
G. Otros apoyos distintos de la ayuda económica.....	164
H. Garantía del pago de la indemnización.....	166
XIV. PROCEDIMIENTO PARA PERCIBIR LA INDEMNIZACION	
A. Procedimiento en general, según la Ley de Indemnización a los Obreros.....	174
B. Notificación del daño y reclamación de la indemnización necesaria.....	175
C. Forma de la notificación reclamación.....	177
D. Suficiencia de la notificación.....	178
E. Pago de la indemnización en caso de que no exista controversia.....	179
F. Procedimiento a seguir en el Departamento del Comisario de los Obreros.....	181
G. Mecanismo de apelaciones.....	183
RESUMEN	187
XV. A. Conclusiones comparativas de las legislaciones española y Filipina.	
B. Recomendaciones o propuestas de "legisferenda" para ambas legislaciones.	

CITAS DE JURISPRUDENCIA

Tribunal Supremo de España.....	202
Tribunal Supremo de Filipinas.....	203
Tribunal Supremo de Norte-América.....	205
Bibliografía.....	208
Códigos.....	217

APENDICE

A. LA LEY DE INDEMNIZACION A LOS OBREROS (LEY Nº 3.428.....	218
B. TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA (DECRETO-LEY DE 8 DE OCTUBRE DE 1932).....	273
C. LA LEY DE RESPONSABILIDADES DEL EMPRESARIO LEY Nº 1.874.....	308

GUIA DE ABREVIATURAS.

1. ALR	- American Lawyer's Report (EE.UU.).
2. Am. Jur.	- American Jurisprudence- Jurisprudencia Americana(EE.UU.).
3. Ancas.	- American Cases (EE.UU.).
4. Art.	- Article - Artículo.
5. Ass.	- Association - Asociación.
6. c./	- Versus - contra.
7. C.A.	- Commonwealth Act (Filipinas) Ley Commonwealth.
8. C.I.R.	- Court of Industrial Relations (Filipinas) Tribunal de Relaciones Industriales.
9. Co.	- Company - Compañía.
10. C. c.	- Código civil.
11. C. com.	- Código de comercio.
12. Corp.	- Corporation - Corporación.
13. G.R.	- General Record (Filipinas) Registro general.
14. LRA.	- Lawyer's Report Annotated (EE.UU.).
15. O. G.	- Off. Gazette (Filipinas) Gaceta Oficial.
16. No.	- Number- Número.
17. p.	- page - página.
18. pp.	- pages - páginas.
19. Phil.	- Philippine Reports - Decisiones de Filipinas.
20. R.A.	- Republic Act (Filipinas)Ley Republica.
21. R. Acc.	- Reglamento de la Ley de Accidentes del Trabajo (España).
22. Secc.	- Section - Sección.
23. Sup.Ct.Rep.	- Supreme Court Reports (EE.UU.).
24. TRI.	- Texto Refundido de la Ley de Accidentes del Trabajo en la Industria(España).
25. U.S.	- United States- Estados Unidos.
26. Vol.	- Volumen - Tomo.

PRIMERA

PARTE

I. ACLARACIONES

1. La dignidad humana y la legislación del trabajo.

2. Planteamiento del problema.

3. Los conceptos de los valores fines.

4. La dignidad humana y la legislación del trabajo.

Hoy en día, y más que en ningún otro período de la historia del hombre, se ha centrado la atención sobre la exigencia de un vasto disfrute y una ampliación de los valores dirigidos a realizar la dignidad humana(1). El poder, el respeto, la ilustración, la riqueza, el bienestar, la rectitud, el afecto y la habilidad(2)..... la formación, distribución y ampliación de estos valores son los fines claramente buscados por el hombre en su rumbo progresivo hacia una sociedad libre(3); además, el hombre moderno ha llegado a darse cuenta de que la realización de una verdadera democracia, de una sociedad que sostenga la dignidad del hombre teórica y prácticamente, depende de como estos valores humanos básicos sean formados, compartidos y ampliados(4).

Pero esta tarea de realizar la dignidad humana, de conseguir la realización del bonum commune de la sociedad, es tan gigantescas que no puede dejarse simplemente a una preocupación casual, sino que hay que concederle una atención constante, diligente, y científica(5). Es agradable y confortador

(1) MIGUEL HERNAINZ MARQUEZ: Tratado Elemental de Derecho del Trabajo, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1951, pp. 11-12.

(2) HAROLD D. LASSWELL, y MYRES S. MCDUGAL: Law Science and Policy Outline, New Haven, 1952, pp. 5-6.

(3) HAROLD D. LASSWELL: The World Revolution Of Our Time, A Framework for Basic Policy Research, Stanford University Press, Stanford, 1951, pp. 29-30.

(4) MIGUEL HERNAINZ MARQUEZ: op.cit., pp. 26-28.

(5) No es suficiente el conocimiento de los valores fines del hombre; se precisa tomar medidas para lograr la dignidad humana. Como dice CARLOS RUIZ DEL CASTILLO, en su estudio preliminar de la obra de Maurice Hauriou, Princi-

al observar que esta tendencia hacia la constitución efectiva de una comunidad mundial de hombres libres que exigen los mismos valores, ha ganado un considerable impulso en los últimos tiempos(6). Planteado de otra manera, "en este mundo contemporáneo los hombres exigen cada vez más, unos valores comunes que sobrepasan las fronteras de las naciones-estados; son cada vez más interdependientes de hecho, sin consideración a los límites de las naciones-estados para controlar las condiciones que afectan a la salvaguardia de sus valores, y cada vez se hacen más realistas en su sentido de tales interdependencias y de aquí la aplicación de su identificación para incluir en sus demandas cada vez más para sus prójimos..."(7).

En este mismo sentido de la elevación de la dignidad humana lo que impulsó a los Forjadores de la Constitución filipina a acentuar los aspectos económicos del Estado, campo lastimosamente abandonado en las Islas y, por esta razón, de manera más específica, la protección al trabajador. El Magistrado D. JOSE LAUREL ha escrito, con respecto a este problema las siguientes y significativas palabras "Conscientes de las fuerzas económicas y sociales en marcha, los forjadores de nuestra constitución afrontaron valientemente los problemas

pies de Derecho Público y Constitucional, 2ª ed., Madrid, 1927
".....Hay una antinomia frecuente entre el ideal y la conducta, entre la inteligencia que conoce los valores y la voluntad que no los realiza; es la teoría del hombre desfalliente(1º individualismo raillable, de Hauriou)".
(6) EUGENIO PEREZ BOTIJA: Curso de Derecho del Trabajo, Dosat Madrid, 1952, pp.58-59.

y dificultades que encontraron y trataron de cristalizar, con más o menos fidelidad, los problemas políticos, sociales y económicos de su tiempo, haciéndolo así con la conciencia de que las definiciones políticas y filosóficas de su generación serían, con las palabras de un gran jurista, puestas en duda por la siguiente y quizás enteramente descartadas por la tercera(8). En resumen, estas disposiciones de nuestra Constitución muestran y expresan la necesidad de llevar al acanto al interés de la comunidad con vistas al encarecimiento afirmativo de los valores humanos"(9). (Subrayado por el autor)

El campo de la legislación laboral es, en verdad un área que proporciona un elevado contingente de oportunidades para promover la dignidad humana(10). En el pasado, el trabajo fué desatendido y, considerado más bien como un mueble o como una mercancía(11), aunque hubo ciertos teólogos y moralistas que supieron vislumbrar el valor espiritual del trabajo en sus escritos y disertaciones(12). La concepción del trabajo como humano y necesidad de trato humano es de fecha reciente(13). La importancia del trabajo, sin embargo, no puede ser subestimada. La consideración de que la gran masa de la población mundial pertenece a la clase trabajadora(14), nos advierte que se ha de prestar la debi-

-
- (7) MYRES S. MCDUGAL: The Comparative Study of Law for Policy Purposes (Value Clarification as an instrument of Democratic World Order), p.1.
- (8) Magistrado Winslow en *Gorgnis c./Falk Co.*, 147 Wis., 327; 133 N.W.; 209
- (9) Opinión concurrente del Magistrado LAUREL en *Ang Tibay et al. c/ Tribunal de Relaciones Industriales et al.*, G.R. n° 46496, Gaceta Oficial Vol. 40, n° 12, pp. 189-194, 20 septiembre de 1941.
- (10) EUGENIO PEREZ BOTIJA dice ".....Ontológicamente es una de las relaciones más humanas. Si bien nosotros cuando nos hemos planteado este tema, no hemos pretendido ha-

da atención al trabajo..., a sus problemas y a sus soluciones, si realmente se ha de obtener la dignidad humana(15). En efecto, la posición de la masa trabajadora es de tal manera y hasta tal punto auténticamente estratégica, siendo así que "ningún sistema social puede elevarse por encima de su clase más inferior, así como que una cadena no es más fuerte que su eslabón más flojo(16). Parece inconcebible como una sociedad industrial moderna puede existir sin contar con esta vasta porción de la humanidad llamada la "clase obrera" que, en fin de cuentas, constituye el alma de la seguridad económica de una nación(17).

Por las razones expuestas, el derecho del trabajo merece un serio y crítico análisis de todos sus problemas con vistas a ofrecer soluciones a los mismos(18). Si se ha de llegar a la realización de una sociedad libre, esta rama del Derecho necesita ocupar en el cuadro general de la legislación un puesto más importante que el que actualmente ocupa y ha venido ocupando hasta la fecha(19).

B. Planteamiento del problema.

Si bien hemos hecho resaltar, en la exposición anterior, la importancia del Derecho Laboral como un todo para elevar la dignidad humana, este campo hasta ahora de-

cerlo solo en un sentido especulativo, de perspectivas antropocósmicas del contrato de trabajo, sino de las posibilidades prácticas de humanizarla hasta las últimas consecuencias. "Humanismo en la Relación Laboral, Discurso correspondiente al Curso Académico 1953-1954, Universidad Central de Madrid, Estados, Madrid, 1953.

(11) Gobernador General Wood, discurso inaugural ante la sexta legislatura filipina, 27 de Octubre de 1922.

(12) V. por ejemplo, este aspecto en "Estudios sobre el pensamiento social de los Teólogos-Juristas españoles, por el P. VENANCIO D. CARRO, O.P. Conferencia pronunciada durante las "Jornadas Sociales", organizadas por el Instituto Balneario de Sociología, en Madrid, 1949

entendido, presenta todo un mundo de aspectos especializados, cada uno de los cuales requiere ser tratado de manera seria y detallada. Se ha escrito una gran cantidad de literatura jurídica sobre huelgas, uniones laborales, contratación colectiva y sus cuestiones concomitantes, tales como días de descanso, horas de trabajo, salarios, vacaciones y licencias por enfermedad, etc. Sin embargo, un examen casuístico revela inmediatamente que se está en lamentable falta de un estudio serio y competente sobre la cuestión de la indemnización al obrero por los accidentes del trabajo que le pueden sobrevenir. Un obrero accidentado en Filipinas, no sabe con certeza qué ley le capacita para ser indemnizado, y mucho menos qué procedimiento ha de seguir y cuáles son sus derechos en la cuestión. El hombre corriente o, por mejor decir, el económicamente débil se encuentra hoy en una situación en la que no sabe qué hacer, y, en la mayoría de los casos, queda sin asistencia de ninguna clase en la desgracia que le ha sobrevenido. Este triste estado de cosas, que ha existido y que todavía existe, ha movido al autor del presente estudio a emprender esta disertación legal sobre las leyes de accidentes en la industria.

Sin embargo, hay que decir desde el primer momento que

(13) CARLOS GARCIA OVIEDO: Tratado Elemental de Derecho Social, 5ª Ed., Madrid, 1952, pp. 1-2. Cfr. "Fuero del Trabajo" y "Fuero de los Españoles" donde se insiste en el valor espiritual del trabajo.

(14) Ibid, pp. 18-21.

(15) MARCELO CATALA RUIZ: Historia y Doctrina Politico-Social, Gráficas González, Madrid, 1952, pp. 13-22. En el mismo sentido, V., entre otros, TOMAS ELORRIETA Y ARTAZA: La Carta del Atlántico y la Carta de Filadelfia, Madrid, 1945.

(16) Informe de la Comisión preparatoria del nuevo Código civil de Filipinas, p. 15.

(17) El llamado informe Hall, conocido también como Misión de Inspección Económica en Filipinas, Informe al Presidente de los Estados Unidos, pp. 93-94.

la realidad de los accidentes industriales comprende una multitud de aspectos especializados, cada uno de los cuales requiere no pocos esfuerzos y una investigación intensiva para llegar a obtener algún resultado que merezca ser tenido en cuenta, como contribución a dichas ramas especiales de las abrumadoras leyes de accidentes industriales. El campo de estos accidentes se ve afectado por el Código penal, por el Código civil, que incluye lesiones derivadas de las relaciones contractuales y extracontractuales (culpa aquiliana) así como por multitud de leyes especiales promulgadas por el poder legislativo (20). En consecuencia, es humanamente imposible discutir todos estos aspectos dentro de los límites de una tesis como la presente. Y puesto que un estudio completo de todas estas leyes es imposible, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y espacio, el autor se ve obligado a limitarse al estudio comparativo y a la crítica de una ley particular filipina sobre accidentes industriales, la Ley de Compensación a los Obreros (Workmen's Compensation Law), denominada también Ley nº 3.428, de 10 de diciembre de 1.927, juntamente con sus enmiendas. La comparación se hará fundamentalmente con el Derecho laboral español, ya que el autor está convencido de que, aparte de la simple razón de fácil dis-

(18) CARLOS GARCIA OVIEDO, op.cit., pp. 21-24.

(19) JOSE PEREZ LEONERO: Teoría General del Derecho Español de Trabajo, Espasa-Calpe, Madrid, 1948, pp. 19-21.

(20) Pueden mencionarse, fundamentalmente, la Ley de Responsabilidad de los Patronos nº 1.874, aprobada por el legislativo filipino en 19 de junio de 1.908 y la Ley de Compensación a los Obreros nº 3.428, aprobada el 10 de diciembre de 1.927, enmendada por la Ley nº 3.812 y posteriormente por la Commonwealth Act nº 210 y por la Republic Act nº 772. Sobre la segunda de las leyes citadas, su estudio crítico y su comparación con el derecho español, versará substancialmente esta tesis.

ponibilidad de los materiales en el lugar en que se lleva a cabo este estudio, Filipinas tiene mucho que aprender, y de que aprovecharse, en las leyes y prácticas españolas relativas a esta especial rama del esfuerzo humano.

Este estudio, por lo tanto, se limitará a una crítica de la Ley de Compensación a los Obreros y a su comparación con las correspondientes leyes españolas sobre la misma materia. En este punto vale la pena indicar que, con anterioridad a la aprobación de dicha Ley, si un asalariado resultaba lesionado o muerto en cualquier empleo para el que estuviese contratado, él o los que le representasen o estuviesen a su cargo podían de conformidad con el Código civil, resarcirse de tal lesión o muerte, solamente cuando estas pudieran ser atribuidas a la negligencia del patrono. La Ley de Compensación a los Obreros ha venido a ser la respuesta a las insistentes peticiones de reforma en la materia. La intención de esta ley es asegurar a los obreros y a los que de ellos dependen contra la posibilidad de llegar a convertirse en objeto de la caridad, concediendo una indemnización razonable para todas estas desgracias, en tanto en cuanto, naturalmente, se produzcan con motivo o dentro del ámbito propio del empleo. Según esta ley, las lesiones de los obreros ya no se consideran como el resultado de faltas o de negligencia.

cia, sino que vienen consideradas como productos de la industria misma(21).

Resumiendo: nuestro problema en este estudio, considerado desde el punto de vista de una contribución a la realización de una sociedad más libre y más justa(22), y abstracción hecha de la mayor o menor importancia que esta contribución pueda tener, no termina con la crítica de la Ley de Compensación a los Obreros y su comparación con las correspondientes leyes españolas, sino que va más allá, en el sentido de que nuestro objetivo final es hacer una investigación que nos muestre si la mencionada ley realza o no la dignidad del hombre, si consigue o no la realización de aquel bien común, objetivo principal de toda ley. Y, en el caso de que encontremos defectos en la ley que vayan en contra de la promoción de la dignidad humana, consideramos también ser tarea nuestra propugnar enmiendas, modificaciones o revisiones, según lo requiera el caso, con el objeto de contribuir con nuestro grano de arena en la construcción de aquella sociedad más libre y más justa.

C. Los conceptos de los valores fines.

Llegamos a un punto en que necesitamos aclarar la significación de la frase "realzar la dignidad del hombre" y de la

(21) Milwaukee c./Miller, 154 Wis.652, 144 N.W., Ann.Cas.1915 D.847, L.R.A.1916 A, 1.

(22) Una explicación más detallada de lo que es una "sociedad libre", tal como se entiende en este trabajo, será ampliamente expuesta en este capítulo bajo la letra C, Los conceptos de los valores fines.

construcción de una "sociedad libre".

Recientes estudios han demostrado que tanto la sociedad presente como la pasada no ha permitido al hombre el acceso a todos los valores que contribuyen a una vida integral(23). Este estado de cosas ha sido comprobado no solo en los Estados Unidos, campeones declarados de la libertad, igualdad y fraternidad, sino también en otras partes del mundo donde se han hecho estudios y se siguen haciendo corrientemente. La manera de remediar esta triste situación se presenta como un desafío ante los principales estudiosos del mundo, en los campos legal e histórico, de hoy día(24).

HAROLD D. LASSWELL, un estudioso norteamericano de reconocida solvencia cinética, dice que, actualmente, hay dos tendencias mundiales en acción, que son la tendencia hacia una comunidad de libre y la que se dirige hacia una sociedad reglamentada, pudiendo prevalecer definitivamente cualquiera de las dos. Como dijimos al principio de este trabajo, nuestro objetivo es promover una sociedad libre, y en ningún caso la dirección opuesta, en que el poder y otros valores humanos se concentran en pocas manos.

Respecto al significado de sociedad libre, el citado autor

(23) Un ejemplo de estos estudios es el proyecto de investigación sobre la Revolución y el desarrollo de las Relaciones Internacionales, dirigido por el Hoover Institute y Biblioteca sobre Guerra, Revolución y Paz de la Universidad de Stanford, E.E.U.U.

(24) La Carnegie Corporation de Nueva York ha concedido becas para estudios sobre los cambios del mundo en nuestra época. Entre los principales estudiosos americanos en esta cuestión están los Sres. HAROLD H. FISHER, C. EASTON ROCKWELL, DANIEL LERNER Y ITHIEL DE SOLA POOL.

se expresa de la siguiente manera: "La tendencia histórica hacia el alejamiento de la sociedad de castas continuará hasta que la comunidad de hombres libres se haya realizado en un plano global. Una comunidad es libre en la medida en que los valores son compartidos ampliamente, más bien que de manera mezquina: poder, respeto, rectitud, afecto, bienestar, habilidad, ilustración... (25)".

Expresándolo de diferente manera, una "sociedad libre" es aquella en que el hombre tiene acceso a todos los valores humanos fundamentales sobre la base del mérito y no a causa de la posición familiar o de cualquier otra razón o condición externa. Y una sociedad que permite el máximo disfrute de todos estos valores es una sociedad que eleva la dignidad del hombre. En otras palabras se fomenta la "dignidad humana" cuando se fomentan todos los valores humanos.

Nuestro objeto, sin embargo, no queda suficientemente aclarado con limitarnos a declarar simplemente, y en términos abstractos, que nuestro objetivo es el desarrollo de una sociedad libre donde el hombre tenga acceso al poder, al respeto, a la rectitud, al afecto, al bienestar, a la riqueza, a la habilidad y a la ilustración. En este punto es

(25) HAROLD D. LASSWELL, op.cit., pp. 6-7.

necesario aclarar el concepto de cada uno de estos valores fines, antes de continuar con el resto del estudio, con objeto de poseer un modelo preciso con el que llevar a cabo nuestra investigación.

Y así parece lo más lógico acudir a las explicaciones dadas por HAROLD D. LASSWELL, el notable expositor de estos ocho conceptos de valor, puesto que éste parece el mejor medio de llegar a su comprensión. LASSWELL ha presentado una serie de atributos demostrativos que ayudan a aclarar el significado de cada uno de esos conceptos, y que nosotros, con más o menos fidelidad utilizamos como estructura de nuestra investigación(26). Este modelo de análisis ha sido utilizado en cierta medida en los estudios de ciencias políticas y sociales que han analizado partidos políticos, grupos religiosos comunidades rurales y urbanas, investigaciones sobre las diferentes clases, que componen el conjunto social y otros temas afines. Nos atrevemos licitamente a creer que la investigación tradicional en Derecho puede ganar mucho con la ayuda de las ciencias políticas y sociales. Es sabido de todos que los modernos tratadistas del Derecho recurren a la Psicología, a la Economía, a la Sociología y a otras materias análogas, para tratar

(26) HAROLD D. LASSWELL: *op. cit.*, pp. 13-59. Véase también HAROLD D. LASSWELL y ABRAHAM KAPLAN: *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*, (New Haven, Yale University Press, 1950, que presenta un análisis de los valores específicamente el valor poder.

sus temas específicos. En nuestra opinión una aproximación de carácter estrictamente legal para proceder al estudio del Derecho, reflexionando sobre la interpretación legal de las disposiciones y tratando de armonizar las partes de la ley que se hallan en conflicto, no contribuye verdaderamente al mejoramiento del hombre, quien en último análisis, es el centro de interés de todos los sistemas legales del universo. El ser social denominado hombre es causa y objeto de todo Derecho(27), hasta tal punto que el Derecho debe, hasta donde permite la sabiduría humana, responder a sus necesidades y problemas reales. Una ley, con absoluta dependencia de su perfección material, no es una ley viva si está divorciada de las verdaderas necesidades, esperanzas y aspiraciones del hombre con vistas a una sociedad perfecta. Si repasamos el Derecho Romano y comparamos el ordenamiento legal de aquel tiempo con el actual, nos veremos obligados a admitir que se ha producido una evolución, que va desde el legalismo estricto a una etapa de leyes humanizadas.

En este estudio hemos tomado de las ciencias sociales y políticas su sistema de investigación, realizando una alicata tentativa de aplicarlo a la investigación en el campo

(27) Recuérdese la famosa sentencia de HERMOGENIANO contenida en el Digesto: "Hominum causa, omne ius, constitutum est" (Todo Derecho se ha hecho por causa del hombre).

del Derecho. Creemos que nuestra actitud al emprender este camino, está justificada porque el cuerpo legal, fundamental objeto de nuestro trabajo, está íntima y directamente ligado con la legislación social, El Derecho laboral, y consecuentemente el aspecto especializado del derecho de accidentes en la industria, se relaciona con la substancia de la Sociología, de la Economía y de la Psicología. Sin embargo, pensamos que puesto que el hombre es el centro de gravedad en todo Derecho, la aproximación psicológica y sociológica a la ley puede ser utilizada con muy buenos resultados para promover la dignidad humana a través del Derecho de la persona y de la familia, del Derecho Mercantil, del Derecho Penal, del Derecho Internacional y de las demás ramas legales, y no solo mediante la legislación social.

En este punto, nuestra tarea, pues, es aclarar siquiera sea brevemente nuestros valores fines:

Designamos estos valores con los siguientes términos: poder, riqueza, bienestar, ilustración, respeto, rectitud, afecto y habilidad. Veamos cómo y en qué sentido concebimos a cada uno de ellos.

-PODER, en cuanto participación en la facultad de dictar decisiones(28).

(28) N. FORTAS y E. E. EVANS-PRITCHARD: African Political Systems. Introducción por A. E. RADCLIFFE-BROWN, Nueva York; Oxford University Press, 1940; GAETANO MOSCA: The Ruling Class, Nueva York, E. McGraw-Hill, 1939, N. S. TIMASHEFF: Introducción to the Sociology of Law, Cambridge, Harvard University Press, 1939.

-RIQUEZA, como distribución equilibrada y justa de los ingresos económicos(29).

-BIENESTAR, en el sentido de salud mental y física(30).

-ILUSTRACION, como sinónimo de conocimiento, en cuanto base para dictar decisiones(31).

-RESPETO, en cuanto consideración y prestigio concedido al hombre(en la medida en que lo merezca)considerado como tal, deferencias basadas en el mérito de cada cual(32).

-RECTITUD, en el sentido de tipo o modelo de recta conducta y de elevado concepto de la responsabilidad(33).

-
- (29) FREDERICK J. DEWHURST y Asociados: America's Needs and Resources, Nueva York, Twentieth Century Fund, 1947; HOWARD ELLIS(ed.): A Survey of Contemporary Economics, Philadelphia, Blakiston, 1948; Readings in Business Cycle Theory(Seleccionadas por una comisión de la American Economic Association) Philadelphia, Blakiston, 1944.
- (30) L. CARMICHAEL.(ed.): Manual of Child Psychology, Nueva York, Wiley, 1946; ALBERT DEUTSCH: The Mentally Ill in America, 2ª ed., Nueva York, Columbia University Press, 1949. J.S. SIMMONS.(ed.), Public Health in the World Today, Cambridge, Harvard University Press, 1.949.
- (31) HERELSON, BERNARD, y JANOWITZ, MORRIS, (eds): Reader in Public Opinion and Communication, Glencoe, Illinois, The Free Press, 1950; DANIEL LERNER:(ed.), Propaganda in War and Crisis, Nueva York, George W. Steward, 1951; KARL MANNHEIM: Freedom Power and Democratic Planning, Nueva York, Oxford University Press, 1950.
- (32) GUNVAR MYRDAL: An American Dilemma, 2 vols., Nueva York, Harpers, 1944; P.A. SOROKIN: Social Mobility, Nueva York, Harpers, 1927; LLOYD W. WARNER, MARCIA MEEKER, y KENNETH BELS: Social Class in America (A Manual of Procedure for the Measurement of Social Status), Chicago, Science Research Associates, 1949.
- (33) J.C. FLUGEL: Man, Morals and Society, a Psychoanalytical Study, Nueva York, International Universities Press, 1943; HERMANN MANNHEIM: Criminal Justice and Social Reconstruction, Nueva York, Oxford University Press, 1946; JOACHIM WACH: Sociology of Religion, London, Kegan Paul, 1947.

-AFECTO, en cuanto expresión del cariño natural propio de las relaciones humanas, en especial entre individuos unidos por vínculos de sangre y familia(34).

-HABILIDAD, en cuanto descubrimiento y maduración del talento individual(35).

Una vez caracterizados y debidamente cualificados los citados valores, nuestra labor posterior será la de aplicarlos individual y colectivamente y teniendo siempre en cuenta las peculiaridades y necesidades del estudio a realizar, a cada uno de los aspectos de la materia que nos hemos propuesto considerar. Ellos nos darán, de acuerdo con la naturaleza y la idiosincrasia de las instituciones y supuestos que hemos de contemplar, la tónica de cada una de las disposiciones legales que rijan la materia así como la medida en que la legislación laboral en materia de accidentes de trabajo consigue la consecución de ese supremo fin que consiste en la obtención del bien común y la dignificación del hombre(36).

- (34) HANS KHON: The Idea of Nationalism, Nueva York, Macmillan, 1944; ELTON MAYO: Social Problems of an Industrial Civilization, Cambridge, Harvard University, 1945; MARGARET MEAD: From the South Seas (Studies of Adolescence and Sex in Primitive Societies), Nueva York, Morrow, 1939.
- (35) A.M. CARR-SAUNDERS y P.A. WILSON: The Professions, Oxford, Clarendon Press, 1933; MAX WEBER, "Politics as a Vocation", capítulo IV en Gerth H.H. y Mills, C.Wright. (Eds.), de MAX WEBER: Essays in Sociology, Nueva York, Oxford University Press, 1946; LOGAN WILSON: The Academic Man (A Study in the Sociology of a Profession), Londres, Oxford University Press, 1942.
- (36) Los ocho conceptos de valor y el de la dignidad del hombre han sufrido un proceso de evolución. Los profesores LASSWELL y MCDUGAL se hallan en un proceso de perfeccionamiento en su concepto mediante sus actuales proyectos de investigación en importantes universidades de los Estados Unidos. Entre las obras que pueden ser útiles para aclarar más los conceptos de "sociedad libre", "dignidad humana" y "valores fines", se encuentran los siguientes: MAX NOMAD: Rebels and Renegades, Nueva York, Macmillan 1932, p.206 y sgts.; Lectures on the Relation Between Law and Public Opinion in England in the Nineteenth Century, Nueva

York, Macmillan, 1905; FRIEDRICH GEORG JUNGER: The Failure of Technology (Perfection Without Purpose) Hinsdale, Ill., H. Regnery Co., 1949; P.A. SOROKIN, Social Philosophies in an Age of Crisis, Boston, Beacon Press, 1950; HAROLD D. LASSWELL: World Politics and Personal Insecurity, Nueva York, MacGrant Hill, 1935; JOHN VON NEUMANN y OSCAR MORGENSTERN, Theory of Games and Economic Behaviour, Brinceton, Princeton University Press, 1947; N. RASHEVSKY: Mathematical Biophysics, Chicago, University of Chicago Press, 1948; NORBERT WIENER, Cybernetics, Nueva York, Wiley, 1948; MYRES SMITH MCDUGAL: Legal Education and Public Policy (Professional Training in the Public Interest), "Yale Law Journal", L. II, 1943; MYRES SMITH MCDUGAL: The Role of Law World Politics, University of Mississippi Law Journal, XI, 1949; P.A. SOROKIN: Contemporary Sociological Theories, Nueva York, Harpers, 1928; H. TINGSTEN: Political Behaviour, Londres, King, 1937; KAUL BRAUNIAS: Das Parlamentarische Wahlrecht, ein Handbuch über die Bildung der Gesetzgebenden Körperschaften in Europa, 2 Vols., Berlin y Leipzig, de Gruyter, 1932; HAROLD F. GOSNELL: Democracy. The Threshold of Freedom, Nueva York, Ronald, 1948.

II. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA LEGISLACION

SOBRE RIESGOS LABORALES

El gran problema de nuestro tiempo gira en torno a la cuestión de saber cuál de dos instituciones, la democracia capitalista o el estado comunista(1), constituye el verdadero patrimonio y la responsabilidad ininterrumpida del pueblo. Estos dos campos antagónicos ocupan posiciones diametralmente opuestas e irreconciliables, y enfocando la cuestión desde el punto de vista realista, es absolutamente imprescindible y fácticamente inevitable el nacimiento de un nuevo orden(2). La libertad económica se ha convertido en consigna, como resultado de la comprobación de la dura realidad de que libertad política y civil carecen de utilidad si no hay una seguridad económica. Y en esta lucha por la libertad económica, los problemas de la clase trabajadora han sido, más que en ninguna otra época, objeto de la mayor atención. Así, no tiene nada de extraño que en la actualidad la situación del trabajo haya pasado a ocupar un plano internacional.

En Filipinas esta honda preocupación por el trabajo ha encontrado su expresión más alta, como era lógico que sucediera, en la ley suprema del país. Los forjadores de la Constitución filipina supieron adoptar como principio

(1) MYRES S. MCDUGAL: The Role of Law in World Politics. nº 3, Mississippi Law Journal, Mayo 1949, Vol XX, pp. 275-276.

(2) V. el Mensaje de Navidad de 1942 de S.S. Pio XII titulado, "El nuevo orden del mundo", 2ª ed., Publicaciones de la Junta Técnica Nacional de A.C.E., Madrid.

filosófico inspirador de este instrumento legal el principio de la justicia social, que obliga a nuestro Gobierno a adoptar medidas destinadas a realizar la estabilidad económica de todos los elementos componentes de la sociedad, mediante el mantenimiento del debido equilibrio económico y social en las relaciones entre los miembros de la comunidad. Entre otros el artículo XIV, Sección 6 de la Constitución, dispone que "el Estado protegerá el trabajo especialmente a las mujeres y menores que trabajan, y regulará las relaciones entre el trabajo y el capital en la industria y en la agricultura"(3). Esta disposición de la Constitución filipina, juntamente con otras distribuidas por todo el texto constitucional(4), dan fe de la magnitud y gran alcance de las complicaciones que presenta la cuestión laboral en la sociedad moderna.

Antes de entrar en el examen concreto y específico del apremiante problema de los accidentes del trabajo, que fundamentalmente nos ocupa, y al objeto de comprenderlo mejor, convendrá quizás hacer un breve estudio retrospectivo del status del trabajo con anterioridad al momento actual, en que puede decirse que ha comenzado a prestársele una definitiva atención.

Y ello, porque, en efecto, en violento contraste con el

- (3) Constitución de Filipinas, promulgada el 8 de febrero de 1935, en virtud de la ley Tydings-McDuffie, también llamada Ley de Independencia Filipina, aprobada el 24 de marzo de 1934.
- (4) Véase también el Art. II, Secc. 5; Art. VI, Secc. 6; Art. III, Secc. 1, etc. de la Constitución filipina, que dispensan protección al trabajo.

panorama actual, la situación del trabajo en Filipinas en épocas pasadas fué, realmente, de lo más lamentable. Nadie puede negar que el obrero constituía entonces un objeto de explotación por parte del patrono. El trabajador agrícola trabajaba más de lo que su constitución física podía resistir. Se le trataba como a una bestia de carga. Su participación en la cosecha no sólo era cuantitativamente mezquina, sino que, incluso, las más de las veces fué cualitativamente falseada, estafándosele ruinmente. Y, lo que aun era peor, con mucha frecuencia no recibía nada después de la cosecha, porque raramente bastaba la parte que le correspondía para pagar la deuda acumulada anualmente al propietario de la tierra.

Esto ocurría así porque el propietario, arteramente, trataba de aumentar la deuda del trabajador con el propósito de retenerle indefinidamente a su servicio. Cargado de débitos, el arrendatario se veía obligado a trabajar toda su vida en la tierra del arrendador para reintegrar las cantidades adeudadas; pero como no podía hacer frente a lo imposible, sus hijos y nietos le sucedían en la deuda, y estos, como aquél, quedaban ligados a la tierra del arrendador indefinidamente.

La suerte del trabajador doméstico no era mejor que

la del trabajador agrícola. Con muy pocas excepciones, el sirviente doméstico era víctima del despotismo de aquellos a quienes servía. No disfrutaba de horas fijas de descanso. No se le fijaba un trabajo determinado, sino que debía realizar todo aquello que se le ordenara. Y si abandonaba la casa sin permiso de las personas a quienes servía, acababa en prisión, bajo la acusación mal intencionada de robo o hurto. Incluso cuando el sirviente caía enfermo, el señor consideraba que no tenía ninguna obligación de curarle; y si hacía algún gasto en tratamiento médico, lo juzgaba como un acto de caridad(5).

El trabajador industrial no era menos explotado. Trabajaba durante dieciséis horas al día, dejándosele muy poco tiempo para el descanso y el sueño. Si convenía al patrono que trabajase en días festivos, debía hacerlo así, incluso en los propios días de descanso, ya que, de otro modo, perdía su empleo. La compensación por horas extraordinarias de trabajo era desconocida. El obrero no podía protestar contra la explotación de que era objeto, ni pedir que la compensación por su trabajo se determinara de acuerdo con la naturaleza de éste y con el número de horas de trabajo; y ello, porque si hacía algo de esto, era despedido sin miramiento alguno. Y si recurría a la huelga(6) le echaban inmediatamente.

(5) Informe de la Comisión del Código Civil de Filipinas, p.15

(6) Informe de la Comisión del Código de Filipinas, pp.13-14.

Como culminación de todo esto, si el obrero se lesionaba o perdía la vida en accidente durante el curso de su trabajo, sus herederos no podían recibir indemnización alguna a menos que acudiesen a los tribunales y probasen satisfactoriamente que el patrono era responsable del accidente por su negligencia(7). Este aspecto especializado de los accidentes del trabajo, materia de esta tesis, estuvo durante muchos años en un lamentable abandono, dando como resultado flagrantes injusticias cometidas con los obreros pobres y faltos de ayuda. Podían estos fundar su recurso solamente sobre la base de la disposición general del Código civil sobre contratos(8), o si no existía relación contractual entre el obrero y el patrono, les quedaba la posibilidad de probar los perjuicios sufridos basándose bien en el delito (9) o en la culpa aquiliana(10). La reforma en este campo era indispensable y en los comienzos del presente siglo tal necesidad de carácter urgente se atacó acertadamente por medio de la llamada "Ley de Responsabilidades del Empresario" (Employers Liability Act)(11), que es la primera ley importante aprobada por el Congreso filipino para mejorar la situación del obrero lesionado: esta ley dota al trabajador y a su familia de un nuevo procedimiento para lograr

-
- (7) En aquella época, solo dos leyes regulaban en Filipinas las relaciones entre patrono y trabajador y siervo doméstico y señor: los artículos 1.583-1.587 C.c. y los arts. 283 a 302 del Código de comercio.
- (8) Véanse las disposiciones generales del Código civil sobre contratos y especialmente los arts. 1.689-1.731, bajo el título de "Trabajo" (Work and Labor), Código civil de Filipinas. Véase también MIGUEL HERNAINZ MARQUEZ: *Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales*, 2ª ed., Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1953, pp. 11-12, sobre las limitaciones de esta teoría.

la indemnización por lesiones o la muerte según los casos.

Además al darse cuenta de las limitaciones prácticas, puestas de relieve por la experiencia que la Ley de Responsabilidades del Empresario implicaba, y deseando conceder una mayor protección al trabajador, el Poder legislativo de Filipinas aprobó la "Ley de Indemnización al obrero" (12) (Workmen's Compensation Act), que, como verá en el análisis que de ella haremos en este estudio, ha venido a conceder una protección al obrero filipino accidentado. Esta última ley mencionada, que trataremos de presentar contemplada desde distintos ángulos, representa el texto legislativo más reciente (13) de los que dan vida al precepto constitucional de proteger al trabajo (14).

-
- (9) Este concede indemnización tanto en caso de delitos deliberadamente cometidos, como en caso de delitos por negligencia. Con respecto a la negligencia criminal, véase el art. 365 del Código penal de Filipinas.
- (10) Se refiere a la responsabilidad establecida en los arts. 2.176-2.194 C.c. de Filipinas que tienen sus equivalentes en los arts. 1.902-1.910 C.C. español. Véase MIGUEL HERNAINZ MARQUEZ: op.cit., pp.8-10 sobre los defectos de esta teoría.
- (11) También denominada ley nº 1.874, promulgada el 19 de junio de 1.908. Esta ley, de la cual se hace una concisa presentación en el Capítulo V de este estudio, es de origen inglés. La Ley Inglesa de Responsabilidades del Empresario (43 y 44 Vict., c. 42) entró en vigor el 1 de enero de 1881. Desde Inglaterra pasó a los estados de la Unión Americana. El Estado de Alabama fué uno de los primeros en los Estados Unidos que se inspiró en la Ley Inglesa, promulgando la Ley de Responsabilidades del Empresario de Alabama en 1885, que es más o menos una copia de la ley inglesa. Otros estados norteamericanos siguieron este ejemplo, y entre ellos Massachusetts, que promulgó en 1.887 la Ley de Responsabilidades del Empresario de Massachusetts. Esta ley fué textualmente copiada con algunas pequeñas variaciones de detalle, de la Ley inglesa. Filipinas se inspiró en el Texto de Massachusetts, poniendo en vigor la Ley Filipina de Responsabilidades del Empresario, nº 1.874, en 19 de Junio de 1.908, que es en esencia una copia de la Ley de Responsabilidades promulgadas por el Estado de Massachusetts. De este modo la Ley filipina de Responsabilidades del Empresario viene a ser una copia de la Ley original inglesa de Responsabilidades del Empresario.

Al ser ello así, se observará que en la parte de este trabajo de investigación relativa al estudio de la Ley de Responsabilidades mencionada, hemos citado casos de las jurisprudencias británicas y americana como una consecuencia natural del orgen de la ley que se analiza.

- (12) Para la evolución de la ley de accidentes del trabajo desde primitivas civilizaciones hasta llegar a la aceptación legislativa de la teoría de riesgo profesional como se encuentra en la presente ley de Filipinas arriba mencionada véase, MIGUEL HERNAINZ MARQUEZ: op.cit., pp.27-36.
- (13) Ley nº 3,428, aprobada en 10 de diciembre de 1.927 y modificada por la Ley nº 3.812 y posteriormente por la Commonwealth Act nº 210 y por la Republic Act nº 772. La Ley Filipina de Indemnización al Obrero se inspiró en las Leyes de Indemnización a los obreros de los Estados Unidos, tal como habían sido promulgadas en los diferentes Estados de la Unión. Sin embargo, es precisamente de la legislación de Hawai de donde Filipinas ha tomado su Ley de Indemnización Al obrero, la cual es, más o menos, una copia de la Ley de Indemnización al Obrero de Hawai (Capítulo 209 de las Leyes Revisadas de Hawai, 1.925).
- (14) Supra, p. 18 nota (3).

III. LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

A. Obligaciones impuestas al empresario o patrono.

B. Medios de Prevención.

Es indudable que es mejor prevenir (1) los accidentes de trabajo hasta donde sea posible, que remediarlos (2). Como dice un refrán inglés, "una onza de prevención vale una libra de curación". Si empleamos todos los medios posible para evitar accidentes del trabajo se evitarían los gastos innecesarios de indemnización, las molestias inherentes a las formalidades propias del procedimiento a seguir para obtenerla, los sufrimientos del accidentado y su familia y, sobre todo, los perjuicios (3) que los accidentes ocasionan a la empresa (4).

A. Obligaciones impuestas al patrono para la prevención de daños.

De acuerdo con lo dispuesto en las leyes anteriormente mencionadas(5), en cuya virtud hay lugar a indemnización, como resultado de accidentes de trabajo en la industria, el

- (1) MIGUEL HERNÁNDEZ MARQUEZ, Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, 2ª (ed.), Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1953, pp. 5-6, dice que el Estado tiene doble postura ante los accidentes del trabajo: preventiva reparadora. "No basta tan solo con solucionar lo ocurrido ya; precisa también evitarlo en lo posible".
- (2) Esta es una dirección de indiscutible valor en la sociedad contemporánea. Hernández Márquez, en su Tratado Elemental de Derecho del Trabajo 5ª (ed.), Madrid, 1951, p. 548, recalca la importancia de la función del Estado en lo que se refiere a la prevención de accidentes, considerando insuficiente la mera labor legislativa, o la inspectora. Tiene que prevenir, evitar accidentes en lo posible. En el mismo sentido, U. BORSI Y F. PERGOLESI, Trattato di Diritto del Lavoro, Pauda, 1930, Vol. 3º, p. 332.
- (3) M. PALANCA y E. PEREZ BOTIJA, Prevención de Accidentes del Trabajo, Madrid, 1934, pp. 226-228. Las consecuencias dañosas de los accidentes del trabajo son muy amplias, en especial desde el punto de vista económico, constituyendo, pues, una

patrono (6) está obligado a tomar las medidas adecuadas para evitar accidentes (7).

La obligación civil de indemnizar en caso de accidentes puede surgir, en primer lugar, en virtud de lo que dispone el Código civil. Este derecho a la indemnización arranca del contrato de trabajo (8).

La Ley de Responsabilidad del Empresario impone igualmente obligaciones al patrono tendentes a la adopción de medidas de seguridad para prevenir las lesiones. La Sección I de dicha Ley declara con expresiones inequívocas que el patrono está obligado a proporcionar un lugar razonablemente seguro para el trabajo, así como también que ha de procurar a sus obreros herramientas y utensilios de seguridad para llevar a cabo su tarea(9). Este deber del patrono, lleva consigo el deber de inspeccionar o probar el lugar de trabajo y las herramientas, utensilios y maquinaria con las cuales se trabaja (10). El patrono será responsable de cualquier lesión que sufra el obrero como consecuencia de un defecto que podría haber sido descubierto mediante una inspección. En otras palabras, corresponde al patrono la responsabilidad de conocer todos aquellos defectos que una inspección adecuada hubiera revelado (11).

sabia posición al hacer todo lo posible para evitarlos. En pocas palabras no exageremos si afirmamos que "...la indemnización a la víctima o a su familia, los gastos de curación, prótesis, etc., y los gastos indirectos por ejemplo, la privación de un obrero especializado o cuya presencia sea imprescindible, la cesación momentánea del trabajo de los compañeros que acuden en auxilio del obrero lesionado, las sanciones que a veces pueden imponerse a la empresa por no haber utilizado los dispositivos obligatorios para la prevención, en fin, una serie de gastos múltiples, cuya enumeración nos haría entrar en el terreno de lo minucioso..." En el mismo sentido PAUL RAZOUS, acentúa la nota de la pérdida de tiempo que supone el accidente, aparte del sufrimiento que ocasiona al lesionado, PAUL RAZOUS,

Los deberes del patrono con respecto a la prevención de accidentes comprenden, si el trabajo o negocio en que se ocupa es complicado y peligroso, la adopción de métodos de trabajo perfeccionados y la publicación de normas y reglamentos adecuados para llevar a cabo tal trabajo. Así, el tomar las precauciones oportunas y el hacer las advertencias precisas (12) para que los obreros, especialmente cuando son jóvenes e inexpertos comprendan el peligro a que se hallan expuestos y puedan realizar su trabajo con el cuidado debido de su parte (13).

El patrono debe, además ejercer una vigilancia razonable y adecuada sobre el estado de las herramientas, maquinaria y utensilios empleados por aquellos. Y estar alerta contra los peligros que pueden surgir del desgaste ordinario de dichos instrumentos de trabajo, a consecuencia del cual pierden cantidades o se inutilizan respecto del fin para el que fueron originariamente proyectados. Está obligado a darse cuenta de que si permite que la eficacia del material de su Empresa caiga por debajo de un cierto nivel, los obreros que han de usar esos instrumentos en el curso de su trabajo, o permanecer en su proximidades, pueden resultar lesionados (14).

Cuando la Ley prescribe que se observe cierta preca-
Curso de Prevención de Accidentes del Trabajo, (ed.), española,
traducida por A. MAYORGA, G. PAYA y T. SANCHIS, Madrid, 1933.

(4) La Do. III, n.º 6º, Fuero del Trabajo, expresa la misión estatal en la prevención de accidentes: "El Estado velará por la seguridad y la continuidad en el trabajo".

(5) Supra, pp. 21-22.

(6) El patrono está obligado a tratar de prevenir los accidentes, por interés social y personal (U. BORSI y F. PERGOLESY, pp. cit., pp. 336). Análogamente, VICENTE DE ANDRÉS BUENO, La Prevención de los Accidentes del trabajo, Valladolid, 1934, pp. 1-148, alude a la colaboración del patrono en la prevención de accidentes.

(7) En la legislación española, el patrono está igualmente

ción para proteger a los trabajadores, el patrono está obligado a adoptar precisamente el mismo medio o método que la Ley especifica(15); no tiene libertad de utilizar otros, aunque en su opinión sean más eficaces. Está inclusive fuera del poder de los Tribunales investigar la cuestión de si las precauciones legalmente prescritas son las mejores o las más prudentes. Se presume que el patrono conoce las exigencias de la Ley(16).

El patrono está obligado a instruir a sus obreros sobre los peligros originados o que pueden ser originados por la maquinaria nueva o poco corriente instalada en la fábrica, por un cambio de maquinaria en uso o por la introducción de materiales o herramientas nuevos o peligrosos(17). Como consecuencia, es responsable de los daños sufridos por el obrero si aquel omite las necesarias inscripciones o como consecuencia de tal omisión resulta una lesión.

La Ley de Indemnización al Obrero, consecuentemente, impone la necesidad de que el patrono tome medidas preventivas encaminadas a impedir accidentes. Esta Ley es la culminación del principio de que la Empresa industrial lleva consigo, de manera inevitable, lesiones y pérdida de vidas del personal

empleado, acontecimientos previstos, en cierto modo, como re-
obligado a tomar estas medidas, obligación impuesta por la legislación general de accidentes del trabajo, especialmente en el Reglamento de la Ley de Accidentes del Trabajo, de 31 de enero de 1933, modificado por los Decretos de 26 de julio de 1934 y 15 de junio de 1938, en cuyo art.44 se impone taxativamente a los patronos el deber de "emplear todas las medidas posibles de seguridad e higiene del trabajo en beneficio de sus obreros", así como en el Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo, de 31 de enero de 1940(art.2 entre otros).

(8) Artículos 1711 y 1712 del Código civil de Filipinas.

(9) En el Reglamento de la Ley de Accidentes del Trabajo en la Industria, antes citado, art.46 al tratar de la prevención de accidentes del Trabajo, se indica que se consideran medidas ge-

sultado del empleo(18). La Commonwealth Act nº 104(19), reformada por la Commonwealth Act nº 696, es una de las leyes que ilustran aquélla, y en virtud de la cual se creó un Consejo Consultivo de Seguridad. En ella se dispone que, al objeto de proteger a los obreros y empleados contra los accidentes y enfermedades, las diversas empresas industriales deberán proporcionar herramientas y utensilios de seguridad, y tomar razonables medidas de este género, todo ello debidamente aprobado, de acuerdo con las disposiciones, reglamentos y órdenes promulgados en cumplimiento de esta Ley(20). Y en efecto, entre las leyes dictadas figuran las Reglas de Seguridad General, las Reglas de Seguridad de las Máquinas, el Reglamento de Seguridad en las Minas, y la Organización de Seguridad Tipo(21). Análogamente, las distintas leyes que regulan los horarios laborales, días festivos, trabajo de mujeres y menores, etc.(22), están íntimamente ligadas a la Ley de indemnización al obrero, al estar todas ellas dirigidas al logro de la seguridad en el trabajo industrial(23).

B. Medios de prevención.

Como corolario de la exposición anterior, la prevención de accidentes en el trabajo industrial debe merecer primordial atención, toda vez que el problema de la indemnización generales de indispensable adopción todas las citadas en el Catálogo de Mecanismos preventivos de accidentes del trabajo, 2 de Agosto de 1900. Por su parte, el citado Reglamento de 31 de Enero de 1940 determina en el Capítulo 2º, arts. 5-21, las condiciones que han de reunir los locales de trabajo en cuanto a higiene, espacio, etc. Y por lo que se refiere al estado de la maquinaria y herramientas, el art. 87 del aludido Reglamento dispone que el patrono ha de mantener en buen estado la maquinaria y el utilaje.

(10) A este respecto, es interesante citar el Reglamento General de seguridad e higiene en el trabajo, ya mencionado, que establece la obligación del patrono de designar agentes propios especialmente encargados de todo lo que se relacione con la prevención de accidentes (art. 89). Dentro de las obligacio-

surge únicamente cuando fallan las medidas preventivas. Las consecuencias de los accidentes de trabajo en la industria son desastrosas, cualquiera que sea el punto de vista desde el que las enfoquemos. Es problema de la moderna sociedad industrial el hacer todo lo posible para disminuir los accidentes, de manera que se vea libre de los dañosos efectos producidos por ellos(24).

Es interesante observar que hoy día se hace amplio uso de la psicología y la sociología para desarrollar la seguridad industrial(25). El estudio de la manera de pensar de los obreros y de los medios de influir en ella para lograr la seguridad en el trabajo industrial ha sido acogido favorablemente desde el momento en que se ha llegado a la conclusión por todos admitida, de que la existencia de maquinaria, procedimientos, trabajos y materiales de seguridad no es bastante si el propio obrero no está mentalmente preparado para cooperar en la tarea de la prevención de accidentes(26). Según el Profesor PEREZ BOTIJA, ni el médico ni el ingeniero son capaces, sinno se les ayuda, de asegurar la protección material del trabajador; para ganar la batalla contra los accidentes de trabajo necesitan de la ayuda de un programa combinado que contenga medios de ac-

ción psicológica, gráficos y mecánicos(27). Veamos brevemente la
nes de estos agentes ha de figurar, lógicamente, la de inspeccio-
nar los lugares e instrumentos de trabajo. MARIA PALANCA y E.
PEREZ BOTIJA, indican como reviste gran importancia la labor
de los técnicos particulares de la seguridad, establecidos por
las empresas, considerando imprescindible la existencia de un
ingeniero o de un técnico al frente del servicio de seguridad
de una empresa(op.cit., pp.33-34). En el mismo sentido JOSE MA-
RIA TALLADA, La Técnica Moderna de la Prevención de Accidentes
del Trabajo, conferencia pronunciada en Barcelona el 3 de mar-
zo de 1942, publicada por el Ministerio de Trabajo. Andlogamen-
te, V. DE ANDRES BUENO, op.cit., pp.148-149.

(11) 35 Am.Jur., Sección 141, pp.571-572. Vid, también Rincicotti
c./ John J.O'Brien Contracting Co., 77 Conn.617, 60 A 115, 69
L.R.A. 936 Budge c./ Morgan's L.y T.R. y S.S.Co., 108 La.349

triple subdivisión mencionada(20).

1) La prevención de accidentes de trabajo por medio de procedimientos psicológicos(29) es de fecha reciente, como observan los autores ante citados(30).

Pero ya hoy día se presta cada vez mayor atención a los beneficiosos resultados obtenidos por los estudios psicológicos y sociológicos en todos los aspectos de la prevención de accidentes en la industria. Se ha reconocido plenamente que el obrero es un ser humano y se le da el debido trato que su condición humana requiere(31).

Entre los procedimientos psicológicos dirigidos a actuar sobre el patrono y que se han revelado de un gran valor pueden mencionarse los siguientes: asociaciones para la prevención de accidentes, campañas de seguridad, concursos de seguridad, conferencias, Museos de Seguridad e Higiene del Trabajo(32). Medios psicológicos de análoga importancia son los dirigidos a actuar sobre el obrero, por ejemplo, los comités de seguridad (33), la colaboración de patronos y obreros, el incremento del interés en el trabajo por salarios altos, orientación y selección profesional, encuestas, concursos de seguridad, enseñanza de la seguridad en la escuela, novísimos me-

dios de propaganda, conferencias, y visitas a los museos.

32 So. 535, 58 L.R.A. 333; Clavin c./ William Tinkham Co., 29 R.I. 599, 73 A. 392, 132 Am. St. Rep. 836.

(12) Según el párrafo 3º del art. 1º del Regl. de 31 de Enero de 1940, las industrias o trabajos peligrosos habrán de estar sometidos, no solo a lo que dispone el Rgl., sino a lo que se señale en disposiciones reglamentarias particulares que "deberán", dice el propio Rgl., dictarse. Y tales disposiciones habrán de colocarse en sitios visibles de los lugares de trabajo (art. 49 del Rgl. de 31 de enero de 1933).

(13) 35 Am. Jur., Secc. 138, p. 569.

(14) 35 Am. Jur., Sección 140, pp. 570-571. Vid. también McGorty c./ Southern New England Teleph. Co., 69 Conn. 635, 38 A. 359, 61 Am. St. Rep. 62; South Baltimore Car Works c./ Schaefer, 96 Md. 568, 27 N.E. 952, 22 Am. St. Rep. 584.

enseñanza de la seguridad en las fábricas, la lección ocasional, etc(34).

A través de las diversas actividades de los patronos a que se ha hecho referencia surgen a la luz del día los problemas relativos a la seguridad industrial, al tiempo que se planean soluciones apropiadas mediante los esfuerzos combinados de aquellos. Como resultado de todo ello, ha surgido entre los patronos una conciencia de la responsabilidad que sobre ellos recae en materia de seguridad en el trabajo industrial. De manera análoga, las asociaciones obreras funcionan para desarrollar los fines de seguridad del lado de los obreros. Las medidas psicológicas que tienen una repercusión económica, tales como los castigos(35) y recompensas, y el aumento del interés en el trabajo por salarios altos, no necesitan de explicación por lo que respecta a su notable contribución a la disminución del número de accidentes en la industria, ya que su influencia sobre la mentalidad del obrero es sumamente fácil de comprender. Una innovación introducida en la moderna forma de dirección de industrias es la consistente en la ayuda prestada a los futuros obreros en la elección de su trabajo(36). Es lo que hoy se llama orientación profesional(37).

(15) En este sentido el Reglamento de 31 de Enero de 1940 dice, en el art. 1º que "tiene por objeto, con carácter general y mediante las prescripciones que impone, proteger al trabajador..." (Subrayado por el autor).

(16) 35 Am. Jur., Sección 139, pp. 569-570. Vid. También Hoffman v. Departamento de Relaciones Industriales, 209 Cal., 383, 287 P. 974, 68 A.L.R. 294.

(17) Louisville, N.A. y C.R.Co. v. Wright, 115 Ind. 308, 16 N.E. 145, 17 N.E. 584, 7 Am. St. Rep. 432.

(18) State v. Clausen, 65 Wash. 156, 117 Pac. 1101, 37 L.R.A. (NS) 466.

(19) Ley autorizando al Secretario de Trabajo a promulgar y poner en vigor Normas, Reglamento y Órdenes, para obtener la seguridad de las personas que trabajan en minas, canteras, trabajos metalúrgicos y otras empresas.

El aspecto opuesto es la llamada selección profesional, en la que se definen las características necesarias para un trabajo dado y en la que el problema consiste en buscar hombres que reúnan las características necesarias para el trabajo determinado que se trate(38). Una vez que se utilizan simultáneamente estos dos métodos, surge una necesidad interior: la educación e instrucción profesional, para completar el juego de medidas(39). La educación e instrucción profesional significa una actividad sin fin consistente en enseñar, guiar y aconsejar al obrero de manera que pueda realizar su tarea en la forma más eficiente y económica(40).

2) Las medidas gráficas o pictóricas para conseguir la seguridad industrial, son, realmente, una subclase de las medidas psicológicas, desde el momento que la influencia que ejercen es intrínsecamente mental por naturaleza. E incluso resulta difícil concebir que los procedimientos psicológicos arriba estudiados puedan ser aplicados con éxito sin la ayuda de las medidas gráficas(41), entre las que pueden citarse, como las más comunes, carteles y tarjetas, cinematógrafos, periódicos, revistas de fábrica, publicaciones, estadísticas, fichas, prospectos o envolturas de objetos(42).

Los carteles y tarjetas juegan un papel muy importante en

(20) La Commonwealth Act 104, Sección 4.

(21) Reglamentos promulgados por el Secretario de Trabajo, Departamento de Trabajo, Filipinas.

(22) Republic Act nº 679; Commonwealth Act nº 444; Act nº 3961, modificada por la Commonwealth Act nº 324 y Republic Act nº 46; Republic Act nº 239.

(23) Respecto a España, es interesante mencionar algunos de los textos legales, leyes y reglamentos existentes sobre la cuestión de prevención de accidentes, y que implantan tanto los métodos directos como los indirectos. Así el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el trabajo; la orden sobre iluminación de centros de trabajo, de 26 de Agosto de 1.940; el Catálogo de Mecanismos Preventivos, aprobado por R.O., de 2 de Agosto de 1902; Reglamento sobre trabajos prohibidos a mujeres y menores, de 1906;

la prevención de accidentes. Actúan recordando constantemente

la manera de evitar los riesgos a que está expuesto el trabajo. Regl. de 17 de Noviembre de 1925, sobre establecimientos peligrosos, incómodos e insalubres; O.M. 31 de Julio de 1944 sobre propaganda gráfica para la prevención de accidentes y material de protección del trabajador; Regl. de 13 de Diciembre de 1924 sobre lucha antipalúdica; Regls de 12 de Mayo y 4 de diciembre sobre anquilostomiasis; texto refundido del Regl. sobre silicosis (17-III-1946, refundido, a su vez, en parte, en el de enfermedades profesionales eléctricas; Regl. de 25 VI-1920 y D. de 30-XII-1941 y 27-XII-1944 sobre explosivos; Regl. 21-XI-1929, sobre seguridad de recipientes para fluidos a presión; R.O. de 23-V-1930, que contiene medidas de seguridad en la limpieza de pozos negros; R.O. de 29-IV-1916, sobre construcción de andamios; D. de 8-V-1933, sobre marcaje de peso en los fardos y D. de 15-XI-1935, sobre transporte a mano de grandes pesos; el R.D. de 19-II-1926 (regl. de 28-V-1931) prohíbe el empleo de la cerusa y sulfato de plomo en la pintura.

(24) El problema ya se vió atacado, en cierto modo, en las Leyes de Indias, que trataban de asegurar un régimen preventivo, de asistencia y reparación para los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: GUILLERMO CABANELLAS, Tratado de Derecho Laboral, Buenos Aires, 1949, Vol. 4^a, pp. 45-46. Por su parte BORSI y PERGOLESI, op.cit., vol. 3^a, p. 331, afirman que fué BERNARDINO RAMAZZINI el primero en preocuparse de lo referente a la prevención de accidentes del trabajo.

(25) Todos los autores que se han ocupado del problema dan la máxima importancia a la psicotécnica. Según TALLADA, en la conferencia antes citada, el estudio del factor humano es fundamental. Indísten en lo mismo VILLAR, M., La Psicotécnica en la prevención de accidentes del trabajo, Conferencia pronunciada el 28 de Febrero de 1942, publicada por el Ministerio de Trabajo, p. 6 y ss., MERXS, F., La prevención de los accidentes por los métodos psicológicos, Madrid, 1934; el Profesor GARCIA OVIEDO, Tratado Elemental de Derecho Social, Sevilla, 1946, p. 297, alude a los fundadores de la moderna psicotécnica, MUNSTERBEY y GIESE, VILLAR habla de MARBE (Conf. citada). Y RIUS SINTES, La seguridad industrial, Barcelona, 1942, p. 21 hace hincapié sobre el aspecto psicológico de la prevención.

(26) VICENTE DE ANDRES BUENO; op.cit., Valladolid, 1934, p. 9. Vid, también SERGIO TOVO: Las causas de los accidentes; estudio de la influencia de la fatiga. Resseña di Medicina Industriale, junio-julio 1941.

(27) Curso de Derecho del Trabajo, Madrid 1952, pp. 239-240.

(28) MARIA PALANCA y EUGENIO PEREZ BOTIJA: op.cit., p. 2.

(29) Sobre esta cuestión, vid, FERNANDO MERXS: La prevención de los accidentes por los métodos psicológicos, Madrid, 1934; MANUEL VILLAR: La psicotécnica en la prevención de los accidentes del trabajo, 1942, publicada por el Ministerio del trabajo.

(30) MARIA PALANCA y EUGENIO PEREZ BOTIJA: op.cit., Madrid 1934, p. 18.

(31) El papel de los factores psicológicos en la industria como un todo, para mencionar sólo el menor aspecto de su indispensable función en la prevención de accidentes, es motivo de investigaciones y estudios por especialistas de nuestros días,

jador. De la manera más clara y gráfica posible presentan al obrero el peligro que le amenaza y la forma en que puede librarse de él(43).

en el campo de las ciencias industriales. No hay razón para que los principios de la administración pública basados en investigaciones llevadas a cabo sobre estos factores psicológicos, no sean aplicados con idéntica fuerza a la administración industrial, teniendo en cuenta que ambas el punto culminante es el hombre. Una manera clásica de considerar la influencia de estos factores psicológicos y sociológicos sobre el trato de los hombres se encuentra en el "Some Human Aspects of Administration", International Institute of Science, Bruselas, 1952. Vid. también S.J. HOSLETT: Human Factors in Management, Harper, N.Y. 46; OTTO KLINEBERG: Social Psychology, Henry Holt, N.Y. 40; ELTON MAYO: The Human Problems of an Industrial Civilization, The McMillan Co., N.Y. 33; R.F. TREDGOLD: Human Relations in Modern Industry, International Universities N.Y.; HALE YOEHR: Personnel Management and Industrial Relations, New York, 1949; JOSEPH TIFFIN: Industrial Psychology, New York Prentice-Hall, Inc. 1948; JOHN LOCKE: An Essay Concerning Human Understanding; KIMBALL YOUNG: Social Psychology, F.S. Crofts and Co. Inc., 1947.

(32) MARIA PALANCAR y EUGENIO PEREZ BOTIJA, op.cit., pp.23-29.

(33) La implantación de los Comités de Seguridad ha dado óptimos resultados en el extranjero; FEDERICO MARCOS DE CASTRO: Los accidentes de trabajo y su prevención, publicada por el Ministerio de Trabajo, sin fecha, pp.13-16- y 17-20. La actuación del Comité de Seguridad es de gran importancia sus reuniones deben ser semanales, y siempre que ocurra un accidente de gravedad; P. RAZOUS, op.cit., p.27.

(34) P. RAZOUS, en la obra anteriormente citada (p.26) propugna la creación de premios a los contramaestres y jefes de talleres para estimular su celo en la vigilancia.

(35) M. PALANCAR y E. PEREZ BOTIJA, op.cit., pp.39-84. Este medio está recogido en el regl. general de seguridad e higiene en el trabajo art. 2º, respecto de los patronos que no tomen las medidas de seguridad ordenadas, y en el art. 3º respecto de los obreros, imponiendo sanciones que pueden llegar hasta el despido.

(36) Se cita a JUAN DE DIOS HUARTE, médico español del siglo XVII, como el primero que habló de algo muy semejante a la orientación profesional, Mira, Revista social, nº 13, p. 367, citado por Gº OVIEDO, op.cit., p.297. Aparte de los trabajos de la Oficina Internacional del Trabajo, publicados bajo el título Les problèmes de l'orientation professionnelle; J. MAILLART: Orientación funcional y formación profesional, Madrid, 1946.

(37) M. PALANCAR y E. PEREZ BOTIJA, op.cit., pp.49-51. Por su parte el Profesor GARCIA OVIEDO habla de sus métodos de orientación, el empírico y el científico. La diferencia entre ambas reside en que el primero se sirve de la razón y de procedimientos más o menos vulgares para descubrir las aptitudes del obrero, mientras que el método científico utiliza los servicios de la psicología, poniendo en práctica el uso de los llamados tests para determinar las aptitudes de cada individuo, aparatos psicotécnicos para valorar, registrar y estudiar las reacciones y apreciaciones de cada individuo sometido a prueba etc. Generalmente, ambos métodos se utilizan combinadamente (op.cit., pp.297).

(38) THOMAS L. CULHAM y BARBARA J. KINGSLEY: Accelerated Mass

Por su parte, el cinematógrafo, como medio de disminuir los accidentes, apenas si necesita de explicación alguna. Es imposible pensar en la compleja sociedad de nuestros días sin pensar al mismo tiempo en la poderosa influencia del cinematógrafo en todos los campos de la actividad humana. La práctica educativa moderna hace un amplio uso de él, debido a su probada efectividad; de tal modo que no hay una sola escuela moderna que hoy día prescindiera del cinematógrafo. El llamamiento simultáneo que hace a los sentimientos a la vista y al oído de los obreros, crea una impresión duradera y poderosa(44).

Examination for Laborer, Public Personnel Review, vol. 12, n.º 1, enero 1951, pp. 21-24.

(39) Esta materia se rige en España fundamentalmente por el Estatuto de formación Profesional, de 21 de Diciembre de 1928, modificado por D. de 27 de Enero de 1941, en cuyo art. 3º, de fundamental importancia según hace notar G. OVIEDO, op. cit., p. 297, y HERNAINZ MARQUEZ op. cit., p. 378, se expresan con detalle todos los objetivos a lograr mediante la educación profesional.

(40) Es el equivalente de la instrucción una vez dentro de un servicio y de varios programas de internado, actualmente muy en uso al servicio del Gobierno. National Administration and International Organization, Institut International des Sciences Administratives, Bruselas pp. 63-66.

(41) La importancia del reclamo gráfico ha sido hecha notar por todos los autores. No se puede negar que influye sobre los individuos de manera cierta y determinada, y su uso en el campo de la prevención, además de muy común, ha rebasado el campo del mero aviso preventivo, para constituir un medio de enseñanza al obrero de los peligros que encierra la ejecución de determinados trabajos. M. PALANCA y E. PEREZ BOTIJA, op. cit., p. 87. En análogo sentido J. MALLART y S. ESTERAS: Propaganda preventiva del accidente, publicado en la Revista de Organización Científica sin fecha; JOSE M. TALLADA, La Técnica Moderna en la Prevención de Accidentes de Trabajo, Conferencia pronunciada el día 3 de Marzo de 1942.

(42) J. MALLART y S. ESTERAS, op. cit., p. 3, amplían la relación de medio gráficos, sellos de cierre de correspondencia, bolsas de paga, sobres de cartas, etc.

(43) La forma de presentación de los mismos tiene una gran importancia en lo que se refiere a su poder de influencia sobre el obrero. De ahí que este aspecto haya sido examinado con detenimiento en más de un país.

(44) Es indudable que el empleo del cine como medio de prevención de accidentes nos puede dar por la propia naturaleza

Los periódicos, revistas de fábrica, publicaciones, estadísticas, fichas, prospectos o envolturas de objetos(45), son también, aunque en menor medida que el cine, medios valiosos de prevención de accidentes. Los impresos, como medio esencial e indispensable para la transmisión de ideas y pensamientos, desempeñan una misión humanitaria en la disminución de los accidentes de trabajo en la industria.

3) Finalmente, también merecen mención, en la suprema lucha contra los accidentes industriales, los medios mecánicos(46). Estos medios(47) pueden subdividirse en medidas directas e indirectas. Entre las correspondiente al primer grupo podemos mencionar las siguientes: construcciones, iluminación, calefacción, ventilación, anchura de los pasos entre las máquinas y la superficie libre de los talleres, botiquín de urgencia, etc. Al segundo grupo pertenecen el equipo del obrero, es decir, vestidos, delantales, blusas, cofias, gorros, guantes, calzado, gafas, pantallas, mascarillas, contra gases y aparatos respiratorios, cinturones de seguridad, etc.(48).

del mismo resultados superiores a los obtenidos por el empleo de carteles. Sin embargo, la delicadeza del uso del cinematógrafo, hace que sea preciso, tener muy en cuenta una serie de condiciones, a cuyo estudio se han dedicado, tanto organismos internacionales como expertos privados.

(45) M. PALANCAR y E. PEREZ BOTIJA, op.cit., Madrid, 1934, pp.124-128.

(46) En la evitación de estos accidentes hay que tener en cuenta no sólo el emplazamiento de las fábricas, sino los distintos procedimientos de fabricación; P. RAZOUS, op.cit., p. 10.

(47) A título de ejemplo, una abundante lista de normas de seguridad en distintos servicios, instalaciones y máquinas se encuentra en I. Rius Sintes, op.cit., pp.24-32.

(48) M. PALANCAR y E. PEREZ BOTIJA, op.cit., pp.133-213.

IV. ANTIGUAS BASES DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL

- A. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL EMPRESARIO.**
 - B. RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO BASADA EN CULPA AQUILIANA.**
 - C. RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO SEGUN ALGUNOS CODIGOS.**
-

Para adquirir un conocimiento pleno del derecho relativo a los accidentes del trabajo conviene analizar brevemente algunos textos legales anteriores a la promulgación del moderno texto legislativo denominado "Ley de Indemnización a los Obreros", que en algún modo están relacionados con la materia de nuestro estudio. El Código Civil solía ser la fuente más característica del derecho de los obreros a ser indemnizados por las lesiones que sufrieran en el curso de su trabajo. La base de la responsabilidad era el lazo contractual que existía entre las partes (1). Pero el Código Civil facilitaba también, en las disposiciones relativas a los cuasi delitos, otro procedimiento para ser indemniza-

(1) Arts. 1689-1731, Trabajo y Empleo, Código Civil de Filipinas.

do (2). Veámoslos a continuación, prescindiendo del Código Penal.(3).

A. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL EMPRESARIO.

El Código Civil de Filipinas regula las relaciones contractuales entre el trabajo y el capital. No obstante las soluciones dadas por diversas leyes especiales (4), el trabajador lesionado es libre de elegir el procedimiento que juzgue más conveniente, incluido el que se basa en el contrato según el Código Civil.

El contrato de trabajo está sometido a las disposiciones generales (5) del Código Civil sobre contratos. Y las obligaciones que nacen de los contratos de trabajo tienen fuerza de ley entre los contratantes y han de ser ejecutadas según su tenor. Sin embargo, por razón de la naturaleza misma de este contrato, que está tan sumamente ligado al interés público, el contrato de trabajo ha de responder al bien común. El actual Código civil filipino, en una nueva disposición (art. 1700) dice expresamente que los contratos de trabajo están sujetos a las leyes especiales en cuestiones de condiciones de trabajo, horarios laborales y cuestiones análogas.

(2) Arts. 2176-2194, Código Civil de Filipinas.

(3) Puede surgir responsabilidad civil de delitos cometidos intencionalmente o por negligencia, vid. art. 365 C. P. Filipino.

(4) Ley de Responsabilidades del Empresario y Ley de Indemnización al Obrero, entre otras.

(5) Artículo 1170-1174 del C.c. de Filipinas que tienen especial aplicabilidad a la cuestión de la responsabilidad del patrono con sus empleados.

logas. Y entre estas leyes especiales puede citarse la Commonwealth Act n° 104 (que autoriza al Ministro de Trabajo a promulgar estatutos, reglamentos y órdenes para establecer medidas de seguridad y, desarrollar y aumentar la seguridad de los obreros que trabajan en las minas y otras empresas, contra los peligros de lesión o enfermedad), así como la Ley n° 3071 (que regula el trabajo de mujeres y niños en tiendas, factorías, establecimientos industriales, agrícolas y mercantiles y en otros lugares de trabajo en Filipinas). Otra ley análoga (6) establece el tratamiento médico gratuito para empleados y obreros en caso de urgencia y la Republic Act n° 239* establece el tratamiento dental gratuito para empleados y obreros. Al objeto de proteger la salud del trabajador existe también la ley de Jornada de Ocho Horas (7), que es parte de todos y cada uno de los contratos de trabajo en Filipinas, disponiéndose que en caso de que sea necesario trabajar por más tiempo, el obrero deberá recibir un salario adicional del veinticinco por ciento de su jornal ordinario. Todas estas leyes especiales y otras muchas (8) figuran en cada contrato de trabajo, dando nacimiento a obligaciones positivas por parte del patrono, consistentes en to-

(6) Ley n°. 3961, modificada por la Ley n° 324 por la Republic Act. n° 46.

(7) Commonwealth Act n° 444, denominada Ley de la Jornada de Ocho Horas.

(8) Entre las que se pueden mencionar figuras: Comm. Act. n°. 213, Ley para definir y regular las Organizaciones Laborales legales, y la Comm. Act. n° 103, modificada por la Comm. Act. n° 359, Ley creando el Tribunal de Relaciones Industriales.

mar las medidas oportunas para garantizar la seguridad y el bienestar de sus obreros. Si la inobservancia de alguna de estas obligaciones positivas diera lugar a accidentes, el empresario sería responsable de los daños. En otras palabras, el artículo 1700 del Código civil es una disposición omni-comprehensiva, en el sentido de incorporar tanto las disposiciones generales sobre contratos como las disposiciones particulares relativas al contrato de trabajo que se encuentran en el Código mismo; y estas dos colecciones de normas se enriquecen posteriormente con las leyes especiales que automáticamente forman parte del contrato de trabajo.

Así, dada la complicada naturaleza del contrato de trabajo, el patrono se obliga en cada contrato a proporcionar lugares razonablemente seguros en los que se lleve a cabo la labor de los operarios, y a poner medios, trabajo y maquinaria seguros y adecuados a la tarea que los obreros tienen que desempeñar. El fundamento de la responsabilidad del patrono en este caso concreto es el incumplimiento de contrato, pura y simplemente.

La extensión de los daños indemnizables producidos por accidente sufrido por el obrero como consecuencia de incumplimiento de contrato de trabajo depende de la naturaleza del incumplimiento, dependiendo el importe de la indemnización de las circunstancias de cada caso particular (9), dependiendo de si el incumplimiento se debe a fraude o a negligencia. En este último caso, los tribunales pueden dismi-

(9) Ambrosio Padilla: Civil Code Annotated, Vol. II. p. 33.

quir o mitigar los perjuicios, de la misma manera que el juez reducirá equitativamente la cláusula penal si la obligación principal ha sido parcial o irregularmente cumplida (10).

No hay un grado fijo de diligencia o tipo del cuidado que se ha de poner que pueda indicarse como regulador del cumplimiento de la obligación del empresario. La culpa o falta de la diligencia debida está sujeta a circunstancias, especialmente referidas a personas, tiempo y lugar (11).

B. RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO BASADA EN CULPA AQUILIANA.

Basando también su indemnización en el Código civil (12), el obrero lesionado puede elegir la solución que le ofrece el concepto del cuasi delito (culpa aquilina). Pese a la inexistencia de una relación contractual entre las partes, se puede obtener un derecho a la indemnización, que avanza del hecho negligente mismo.

Estrictamente hablando, esta fuente de responsabilidad del empresario regulada en el art. 2176 del nuevo Código civil filipino, no corresponde al campo de los accidentes en la industria, ya que no hay necesidad de que exista la relación de patrono a obrero entre las partes. Sin embargo, abundan ejemplos en los que, en una situación de carácter industrial, tienen lugar accidentes a pesar de no existir la relación patrono-obrero en el momento de producirse un determi

(10) Ibid., p. 30.

(11) Art. 1173, Código civil de Filipinas.

(12) Arts. 2176-2194 del Código civil de Filipinas.

nado accidente. Así, el Tribunal Supremo de Filipinas, declaró en una ocasión haber lugar a indemnización basándose en el concepto de la culpa aquiliana cuando el obrero se lesionó o murió en el camino al dirigirse al lugar de trabajo o al venir de él, aún en ausencia de relación patrono-obrero (13).

En caso de declarar responsables a dueños o directores de Empresas por daños causados por sus empleados es necesario demostrar que la lesión por la que se reclama fue debida a negligencia por parte del demandado o sus agentes o empleados, mientras se hallaban dentro del campo de las actividades propias de su empleo. En otras palabras, si bien no es necesaria la existencia de la relación patrono-obrero entre el demandante y el demandado, es esencial que tal relación exista entre el demandado y su agente o entre aquel y las personas de cuyos actos y omisiones responde.

Con relación a la cuestión de la negligencia, convie-

(13) Agdoro o./Philippine Mining Industrial Co., 45 Phil. 816. Otros casos que confirman el criterio de que la indemnización por accidente de trabajo puede obtenerse en virtud de lo que dispone el Código civil con relación a la doctrina de la culpa aquiliana, aparte de las disposiciones de las leyes especiales, son: Chaves y Garofa o./ Manila Eléctrico Railroad and Light Co., 31 Phil. Reports, 47; Cerezo o./ The Atlantic Gulf and Pacific Co., 33 Phil. 425; Bahía o./ Litonjua y Laynes (1815), 30 Phil., 624; Cangco o./ Manila Railroad Co., (1918), 38 Phil. 768; Cuisson o./ Norton y Harrison Co. et al., 55 Phil. 18; fallos extranjeros que mantienen la misma doctrina son: Acosta o./ Porto Rico Gas Co., (1915), y Porto Rico Red., 475; Ortiz o./ Eguilaga (1918), 10 Porto Rico Fed., 350; Ryallio es Mechanics Mills, 150 Mass., 190.

no distinguir entre la negligencia que nace a consecuencia de una obligación contractual (14) y la propia negligencia como fuente de la obligación. En el primer caso, la responsabilidad es directa e inmediata, en tanto que en el segundo tal responsabilidad puede ser destruida por la prueba de haberse tenido el debido cuidado en la selección y supervisión de los empleados (15).

3. RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO SEGUN ALGUNOS CODIGOS EUROPEOS.

Como consecuencia de haber sido dictados los Códigos civiles de España, Francia e Italia (1865) antes del fin del siglo XIX, el lugar que en dichos cuerpos legales ocupan las disposiciones encaminadas a regular las relaciones entre el capital y el trabajo es de poca importancia. Redúcese la cuestión a dictar unas cuantas normas relativas al contrato de arrendamiento de servicios, más, por lo que se refiere a la responsabilidad extracontractual, las normas que regulan las responsabilidades de los patronos por los actos de sus operarios.

Antes de que se llegara a establecer una doctrina legal en lo que se refiere a la responsabilidad que contrae el patrono en materia de accidentes del trabajo, la indemnización por éstos había de tramitarse, con arreglo a las disposiciones de los Códigos civiles de cada país) (16). Sin en-

(14) Art. 1170 del Código civil de Filipinas.

(15) Art. 2180, parágrafo, 8, del Código civil de Filipinas.

(16) Con respecto a España vid. Guillermo Cabanellas. Tratado de Derecho Laboral, Buenos Aires, 1949, vol. IV, p. 68. Vid. Código civil italiano de 1866, arts. y ss.

embargo, estas normas no eran ni muy completas ni muy perfectas. En efecto, tanto el Código español, como los de Francia e Italia se limitan a regular la contratación de servicios domésticos y de trabajadores, jornaleros y obreros asalariados en general (17). Sin embargo, es un hecho cierto que el contrato de trabajo está sometido a las reglas generales válidas para los demás contratos. Por lo tanto, el patrono ha de cumplir una serie de obligaciones que le vienen impuestas por el mismo contrato, y de no hacerlo así incurrirá en responsabilidad. El incumplimiento radicará en la no observancia de las obligaciones expresadas, por regla general, en la legislación especial laboral, (18) aun cuando también pueden hallarse alguna de estas disposiciones en los propios códigos civiles (19). El empresario, pues, será responsable y deberá indemnizar cuando por no cumplir aquellas normas a que venía obligado según el contrato de trabajo, se produjo un accidente.

Se puede establecer también una responsabilidad patronal basada en la culpa aquiliana. En nuestro caso no precisa

(17) Todos los tratadistas clásicos de Derecho civil abundan en la misma afirmación. Vid. J. Castán., Derecho Civil Español. Común y Foral, Madrid, 1944, vol. III, p. 202. Las normas del Código español a este respecto, y lo mismo sucede con los restantes Códigos que estudiamos, hoy no tienen aplicación práctica sino en lo que no contradigan a las de la legislación especial de contrato de trabajo.

(18) En España, Ley de accidentes de Trabajo, Ley de Contrato de Trabajo, Puerto del Trabajo, Reglamentaciones Nacionales del Trabajo en las diversas industrias, etc.; análogas disposiciones existen en Francia, Italia y Alemania.

(19) Art. 1908 C.o. español, especialmente su nº 1; este cuerpo legal se inspira en la idea de presunción de falta por omisión de las reparaciones o medidas de precaución que se requirían para evitar el daño.

de la existencia de la relación patrono-obrero, Ahora bien, integran este concepto de responsabilidad una serie de requisitos tales que convierten la culpa aquiliana en un instrumento sumamente difícil de utilizar para solucionar los problemas derivados del accidente laboral (20). Los Códigos civiles de España, Italia y Francia disponen la obligación de resarcir los daños causados (21).

La jurisprudencia francesa, por lo demás, han dado cierta extensión al concepto de culpa aquiliana en beneficio del obrero(22).

También está el empresario sujeto a responsabilidad por los daños causados por las personas que de él dependen o por las cosas de su propiedad o que están sometidas a su custodia (23).

Con respecto al Código civil alemán, se trata a él la cuestión del contrato de trabajo de manera más perfecta que en los anteriormente estudiados. Se imponen al patrono reglas forzosas de conducta dirigidas al mantenimiento de los

(20) A este respecto, García Ormaechea (citado por Hernández Márquez, op. cit., p. 385), en conferencias dadas en el Instituto Nacional de Previsión, afirma que desde 1838, en que empezó a funcionar el Tribunal Supremo de Justicia, hasta 1900 tan solo una vez (S.T.S. de 14 de diciembre de 1894), apreció el Alto Tribunal la responsabilidad del patrono en la muerte de un obrero. En análogos términos se expresa Giovanni Pao - loni, Elementi di Diritto Civile, Turín, 1926, p. 370.

(21) C.c. español, art. 1902; C.c. italiano, art. 1151; C.c. francés, art. 1383.

(22) Véase G. Cabanellas, op. cit., vol. IV. pág. 70, quien cita a Pozzo, Accidentes de Trabajo, Buenos Aires, 1939, pág. 14

(23) C.c. español, art. 1903; C.c. italiano, art. 1153; C.c. francés, art. 1384. Teniendo como base este artículo, los tribunales franceses, como los belgas, estimaron que el accidente se producía como resultado del hecho de las cosas propias del patrono o que estaban bajo su cuidado o vigilancia, creando así una presunción de culpa del patrono.

locales y maquinaria en estado de seguridad, de tal manera que el obrero esté protegido contra los accidentes, hasta donde lo permita la naturaleza del trabajo (24). En caso de incumplimiento, el patrono deberá indemnizar, teniendo en cuenta la culpa del trabajador que haya contribuido al daño (25).

Respecto de la obligación de indemnizar en caso de muerte, se aplican las normas relativas a lesiones delictivas contra las personas (26). Por lo que se refiere a la responsabilidad extracontractual, el Código civil alemán concede una pretensión de indemnización a favor del que haya sufrido con tra derecho lesiones inferidas dolosa o negligentemente a su vida, libertad, propiedad, etc. (27).

(24) Párrafo 618, apartado 1º, y 619, C.o. alemán.

(25) Párrafo 254, C. c. alemán.

(26) Párrafos 842-846, C.c. alemán.

(27) Párrafo 832, apartado 1º. C.c. alemán.

V. LA LEY FILIPINA DE RESPONSABILIDADES DEL EMPRESARIO

A. FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO.

1. Diligencia que el patrono debe observar.
2. Negligencia punible.
3. Conexión causal entre la conducta del patrono y la lesión del obrero.

B. TIEMPO Y LUGAR DE LA LESION.

C. CAUSA DE LA LESION.

D. ACCION DE DAÑOS Y PREJUICIOS.

1. Personas titulares del derecho a la acción.
2. Necesidad de informar al patrono de la lesión ocurrida.
3. Cuantía de la indemnización.

E. DEFENSAS DEL EMPRESARIO.

1. Negligencia cooperante,
2. Asunción del riesgo.
3. Doctrina del compañero de trabajo.

F. UNA BREVE CRITICA

Uno de los textos legislativos más importantes que garantiza al trabajador un medio efectivo para ser indemnizado por el patrono en caso de accidente, es la Ley n°. 1874, es decir, la llamada "Ley de Responsabilidades del Empresario" (1). Esta Ley puede ser invocada por el trabajador le-

(1) Ley para extender y regular la responsabilidad de los patronos por las lesiones personales y la muerte, sufridas por sus obreros durante el trabajo, aprobada por el Poder legislativo filipino el 19 de junio de 1908, y modificada por la Ley n° 2473, de 5 de febrero de 1915.

sionado, en lugar de las otras fuentes de indemnización también al alcance del obrero, si cree que las disposiciones de esta Ley conviene a su caso particular mejor que las demás. Hay algunas diferencias en materia de aplicabilidad, beneficios, procedimiento y acciones defensivas articulables por el empresario, entre esta Ley, de la cual nos vamos a ocupar seguidamente, y la Ley de Indemnización al Obrero, a la que dedicaremos al resto de este trabajo. En este punto de nuestro estudio podemos afirmar que las dos leyes (2) se complementan una a otra para dar al trabajador filipino una garantía, más o menos adecuada, de asistencia material para el caso de que sufra un accidente en el curso de su trabajo (3).

A. FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO.

Según la ley que estamos examinando, se hace responsable al patrono de las lesiones sufridas por sus obreros en el curso del trabajo, basándose en la negligencia del empresario y no en los peligros inherentes al empleo (4). La indemnización de los daños, consecuentemente, surge de la ruptura de los deberes del empresario para con el trabajador, causada por la negligencia de aquél. Por consiguiente, es necesario, siempre que un obrero lesionado trate de obtener una indemnización por daños de su patrono, que consulte los

(2) Ley de Responsabilidades del Empresario y Ley de Indemnización a los obreros.

(3) Emilio Y. Hilado y Juan M. Hagad: Philippine Labor and Social Legislation, Philaw Publishing Company, Manila, 1951 pp. 481-482, dicen que la Ley de Responsabilidades del Empresario ha extendido las responsabilidades del empresario y ha creado nuevos derechos a favor de los Obreros. Vid: José P. de la Cruz. Labor and Industrial Laws of the Philippines, Manila, 1950, p. 254-255 dando la misma opinión.

(4) Sección 1, Ley 1874, modificada por la Ley nº 2473.

principios del derecho relativos a la negligencia. Para que el empresario sea responsable hay que demostrar que el deber que fué objeto de negligencia era uno de los que el patrono tenía hacia el obrero.

1. Diligencia que el patrono debe observar.

¿Cuál es el grado de diligencia que el empresario está obligado a observar en relación con la determinación de su responsabilidad? La Ley no obliga a nadie a observar una conducta de nivel superior al medio normal en su profesión o industria, y la diligencia debida es la representada por la Conducta del hombre prudente ordinario. Esta conducta en circunstancias análogas constituye el grado de diligencia exigido a los patronos (5). Las circunstancias que concurren en cada caso son de fundamental importancia para determinar la responsabilidad del empresario. Es obligación de éste poner una diligencia razonable, proporcionada a la naturaleza del negocio, con objeto de proteger a sus obreros de los riesgos propios del trabajo (6). En otras palabras, "diligencia ordinaria" o "diligencia razonable" constituyen la naturaleza de la diligencia que el empresario está obligado a observar en el suministro a sus obreros de herramientas, utillaje, maquinaria y lugares de trabajo seguros (7).

(5) Drew c./ Western Steel Car and Mfg. Co. 174 Ala. 616, 50 So. 995, 40 L. R.A. (N.S.) 890.

(6) Purdy c./ Westinghouse Electric and Mfg. Co., 199 Pa. 257, 47 A. 237, 51 L.R.A. 881, 80 Am. St. Rep. 816.

(7) Serbioe c./ Shoneman, 196. Pa. 63; 46 A. 292, 69 Am.St. Rep. 689.

2. Negligencia punible

En tanto que el cumplimiento de lo dispuesto en una ordenanza o estatuto no descarta la negligencia (8), la norma legal establecida es que la violación de un estatuto u ordenanza que impone a una persona el cumplimiento de una obligación específica para proteger a otros, supone negligencia "per se" e impone responsabilidad por lesiones del carácter de las que el estatuto u ordenanza violados trataba de evitar, y que fueron inmediatamente provocadas por la negligencia en el cumplimiento del estatuto. La violación de un estatuto que exige del patrono tomar medidas de precaución para proteger a los obreros se considera una falta por parte del empresario de las ordinariamente denominadas "negligencia punible" o "negligencia per se", que hace al patrono responsable de la lesión sufrida por un trabajador, siempre que la violación del estatuto haya sido la causa inmediata de la lesión del obrero. La prueba de que el empresario violó el estatuto en cuestión asegura un fallo de que hubo negligencia por su parte y facilita una decisión favorable a los demandantes. Esta regla encuentra aplicación con respecto a los estatutos que exigen defensas o mecanismos de protección en la maquinaria, estatutos sobre herramientas de seguridad aplicables a los obreros ferroviarios, y otros estatutos de aná-

(18) En el caso *Astudillo v. Manila Electric Co.*, 55 Phil. 427, el tribunal sostuvo que el cumplimiento de las condiciones determinadas en una ordenanza o estatuto no hace innecesarias otras precauciones exigidas por una diligencia ordinaria. El cumplimiento de lo dispuesto en un privilegio, en una ordenanza o en un estatuto no es prueba concluyente de que no hubo negligencia.

loga significación. El emplear a un menor, en contravención de lo que disponen las normas que prohíben que los menores sean empleados en determinadas ocupaciones, constituye negligencia per se, y si la violación de tales normas fuera la causa inmediata de una lesión del menor, el empresario sería responsable de tal lesión (9).

3. Conexión causal entre la conducta del patrono y la lesión del obrero.

Aun cuando un patrono haya sido declarado culpable de no haber puesto la diligencia ordinaria en el logro de la seguridad de sus empleados, tal como lo exige la ley, o de no haber cumplido una disposición estatutaria impuesta en beneficio de los obreros, solamente puede ser hecho responsable de las lesiones de sus obreros en caso de ausencia de una imposición estatutaria de responsabilidad si hay una conexión o relación causal entre su negligencia y la lesión por la que el obrero reclama (10). Según la ley mencionada, para que el obrero sea indemnizado por su patrono por las lesiones sufridas en el curso del trabajo, debe demostrar que la acción o la omisión negligente del patrono, o su incumplimiento de un deber de carácter estatutario, fué la causa inmediata, o por lo menos una de las causas inmediatas de la lesión del de -

(9) 35. Am. Jur, Sección 125, pp. 553-554.

(10) St. Louis I.M. y S. R. Co. o./ Steel, 119 Ark. 349, 178 S.W. 320, L. R. A. 1915 P. 1114.

mandante (11). El empresario no es responsable de las lesiones sufridas por un obrero a menos que la lesión sea el resultado inmediato de una conducta dolosa imputable al patrono(12)

Tenemos un ejemplo de este cuando una máquina se avería y un obrero, intentando repararla, resulta lesionado; las causas que produjeron la lesión son remotas y no inmediatas a dicha lesión. Pero cuando las reparaciones se hacen necesarias por la negligencia del patrono, tal negligencia será considerada causa inmediata de la lesión resultante (13). También es causa inmediata la negligencia del empresario cuando un obrero sufre una lesión al ir en busca de refugio, a causa del incumplimiento por el patrono del deber de suministrar al obrero medios de transporte desde el lugar a donde había sido enviado para reparar un vehículo averiado (14).

B. TIEMPO Y LUGAR DE LA LESION.

Para que un empresario sea responsable de las lesiones de sus obreros ha de resultar que en el momento de la lesión el obrero estaba realmente ocupado en el negocio del empresario. Cuando el obrero, sin haber recibido orden o sin contar con la aquiescencia del patrono, emprende voluntariamente trabajos peligrosos fuera del campo de su trabajo, y se le -

(11) Carter o./ Atlantic Coast Line R. Co., 109 S.C. 119,95 S.E. 357,11 A.L.R., 1411.

(12) 35 Am. Jur., Sec. 126. F. 555.

(13) Chicago R. I. y D.R. Company o./ Moore, 36 Okla. 450, 129 P. 67,43 L.R.A. (N.S.) 701.

(14) Schumaker o./ St. Paul y D.R. Co., 46 Minn. 39,48 N.W. 559,12 L.R.A. 257.

siona, no puede recibir indemnización del patrono, porque al comportarse de tal manera se colocó más allá de la protección dispensada por la obligación implícita del patrono. Como se dice corrientemente, para fundamentar el derecho a la indemnización por razón de servicios, el empleado ha de haber "actuado dentro de la esfera de su empleo" (15).

Un obrero no puede ser indemnizado por defectos en las vías, en los trabajos o en la maquinaria cuando no se le pidió que afrontase el peligro, por la razón de que éste estaba realmente situado en un punto del local donde las obligaciones del trabajador no le requerían y donde no tenía derecho a estar (16). Esta regla tiene su excepción en los casos en que un obrero actúa con carácter de urgencia (17). En los casos de emergencia puede por su propia voluntad traspasar la línea de sus obligaciones habituales, en un intento de salvarse de una lesión, de rescatar a otro obrero del peligro o de salvar los bienes del patrono, y si en tales caso va más allá de lo que exigen sus deberes habituales o su empleo, pero solo en la medida que las necesidades del caso requieran justa y razonablemente, observando las características del trabajo que tiene que hacer, su patrono no puede rehuir la responsabilidad por las lesiones que el obrero sufra

(15) 35 Am. Jur., Sección 167, p. 596.

(16) Cerezo o./ The Atlantic Gulf and Pacific Co., 33 Phil. 425.

(17) 35 Am. Jur., Sección 168, pp. 597-598.

mientras esté actuando en tal emergencia, basándose en que tal obrero no se encontraba dentro del ámbito señalado por su empleo (18).

Un obrero que, siendo un buen nadador, ve que uno de los troncos que está amontonando es arrastrando por la fuerte corriente, oye la orden de su capataz de que dicho tronco ha de ser recuperado, o de otro modo pagarán su valor, y salta al agua con propósito de recobrarlo, no es culpable de negligencia toda vez que no tenía tiempo para reflexionar. El capataz, cuya amenazadora orden, dada dentro de su esfera de autoridad bajo circunstancias que no dieron tiempo a reflexionar, fué tomada como un mandato y obedecida, pereciendo ahogado el que la obedeció, no puede invocar en su defensa la alegada falta de debido cuidado por parte del obrero ahogado. Ni puede invocarla tampoco el patrono del mencionado capataz, ya que el patrono es responsable de los actos que aquél realiza dentro de su esfera de autoridad (19).

Con relación a las horas de trabajo, autoridades en la materia han señalado que la relación entre el patrono y el obrero no se interrumpe por el transcurso de las horas propias de trabajo, sino que continúa mientras el obrero se encuentre en los locales del empresario, ocupado en trabajos correspondientes o incidentales a su empleo, o sujeto al con-

(18) *Saunders v. Boston and M.R. Co.*, 82 N.H. 476, 136. A.264, 50 A. L.R. 367.

(19) *Cuevo v. Barredo*, S.C.- G.R. N° 45699, 24. feb., 1938.

trol del patrono (20). Ni se puede hacer ninguna distinción basándose en el hecho de que la víctima era pagada según una tarifa específica por horas (21). Se considera, como regla general, que el obrero está ocupado en su empleo mientras va y viene de su puesto de trabajo, dentro de los locales del patrono; y el patrono, al proporcionarle un camino para ir y venir, está obligado a poner, con relación a la seguridad del camino, el grado de diligencia que se desprende del contrato de servicios (22). Si un obrero voluntaria e innecesariamente abandona su puesto de trabajo y se coloca en una circunstancia peligrosa, simplemente por su propio gusto o por su conveniencia, deja de ser un obrero por el momento, convirtiéndose en un transgresor de la ley (23).

C. CAUSA DE LA LESION.

Como dijimos anteriormente, es obligación del empresario proporcionar al obrero pasos, y trabajos y maquinaria razonablemente seguros (24) y si descuida esta obligación, puede ser hecho responsable de los daños que se deriven. Siempre

(20) Emilio Y. Hilado y Juan M. Hagad: op. cit. pp. 474-478.

(21) 35 am. Jur. Sección 169, p. 599; Sección 173 p. 601.

(22) Milburn e./ Chicago, M. St. P. y P.R. Co. 331 Mo. 1171, 56 S.W. (2d) 80; Kennedy v. Chase, 119 Cal. 637, 52 P. 33, 63 Am. St. Rep. 155; Buell v. Hines, 218 Mich. 353, 188 N. W. 422, citando R.C.L.

(23) Ellsworth e./ Metheney (C.C.A. 6 th) 104 F. 119, 51 L.R.A. 389; Pioneer Min. and Mfg. Co. e./ Talley, 152 Ala. 162, 43 So. 800; 12 L.R.A. (N.S.) 861; Stodden e./ Anderson y W. Mfg. Co., 138 Iowa 398, 116 N.W. 116, 16 L.R.A. (N.S.) 614.

(24) 35 Am. Jur. Sección 175, pp. 604-605.

que surge la cuestión de la responsabilidad del empresario, adquiriere fundamental importancia la determinación de la causa de la lesión. La causa ha de deberse a un accidente imputable a la negligencia del patrono en el cumplimiento de los deberes que impone la diligencia adecuada (25). siempre ha de existir esta relación inmediata entre el incumplimiento de los deberes del patrono y la lesión resultante, porque sin esta relación causal el patrono no puede ser hecho responsable (26). Por ejemplo, el incumplimiento del deber del patrono, si lo hubo, de instalar un sistema de alumbrado de forma que, no se produjeran interrupciones en el mismo no produjo la lesión sufrida por una operaria que, en la obscuridad, abandonó su lugar de trabajo y se lesionó al tropezar con un obstáculo transitorio, ya que no se hubiera producido lesión alguna si la operaria hubiere continuado su trabajo o permanecido en su puesto (27). En otro caso, la causa inmediata de la muerte de un obrero que sufrió quemaduras mortales en el edificio del empresario, donde había entrado para telefonar la existencia del incendio, después de que no pudo hacerlo desde otro sitio, para lo cual había abandonado el edificio, no fué la negligencia del patrono al construir y mantener el edi

(25) sección 1, Ley no 1874.

(26) Carter v. Atlantic Coast Line R. Co., 109 S.C. 119, 95 S. E. 357, 11 A.L.R., 1411.

(27) Ahern v. Amoskeag Mfg. Co., 75 N.H. 99, 71 A. 213, 21 L.R.A. (N.S.) 89.

ficio, no fué la negligencia del patrono al construir y mantener el edificio en condiciones de que pudiera arder, sino el acto del empleado al volver a entrar en el inmueble después de haberse puesto en lugar seguro (28).

Resumiendo, pues, siempre que se examina la causa de la lesión, la cuestión principal es si la negligencia del patrono constituye la causa inmediata de la lesión.

D. ACCION DE DAÑOS Y PERJUICIOS/

La situación ideal para el trabajador es recibir la indemnización correspondiente a las lesiones sufridas durante el trabajo como consecuencia de un acto voluntario del patrono. Pero sucede muy frecuentemente que hay dudas respecto al tiempo, lugar y causa de la lesión y éstas dudas se someten a los tribunales para su resolución, antes de que el patrono pague la indemnización, mediante el ejercicio de una acción formal de daños y perjuicios. Y si bien el objetivo deseable es el arreglo extrajudicial entre el obrero y el patrono de la cuestión de la responsabilidad de este último, la práctica hace frecuentemente necesario acudir a los tribunales de justicia para determinar la indemnización.

1. Personas titulares del derecho a la acción.

Si un obrero encuentra la muerte durante el trabajo, o posteriormente, a consecuencia de lesiones sufridas durante

(28) Chatanooga Light y P.Co. c./ Hodges, 109 Tenn. 331, 70 S.W. 616, 60 L.R.A. 459, 97 Am. St. Rep. 884.

el mismo, imputables a la negligencia del patrono o de alguna persona de cuyas acciones sea aquél responsable, la viuda de este obrero, o sus legítimos herederos, o sus próximos parientes que en el momento de la muerte dependan económicamente de él, tendrán capacidad para ejercitar la acción por daños y perjuicios contra el patrono (29).

2. Necesidad de informar al patrono de la lesión ocurrida.-

"No se podrá mantener acción de daños por lesiones o muerte con arreglo a esta Ley si no se envía al patrono, dentro de los noventa días de la fecha, lugar y causa de la lesión, un informe sobre la misma, o si la acción no se ejercita dentro del plazo de un año a partir de la fecha del accidente que produjo la lesión o la muerte. El informe que exige esta sección se hará por escrito y estará firmado por la persona lesionada o por otra en su nombre, o si, por razón de incapacidad física o mental, es imposible que la persona lesionada haga la comunicación dentro del plazo ordenado por esta sección, ésta debe ser hecha dentro del plazo de diez días a partir de aquel en que la incapacidad desaparezca; y en caso de muertes sin haberse dado el susodicho informe y sin que la persona haya podido hacer la comunicación en ningún momento durante los diez días siguientes al plazo arriba mencionado, la viuda, los legítimos herederos o los próximos parientes económicamente dependientes del fallecido, pueden dar el informe dentro de los treinta días siguientes a la muerte del obrero. Ningún informe dado a consecuencia de las disposiciones de esta Ley será considerado nulo o insuficiente solo por razón de algún descuido con respecto a la fecha, lugar o causa de la lesión, si no hay intención de inducir a error al empresario o éste no lo ha sido por causa de tal descuido" (30).

(29) Secc. 2, Ley no 1874.

(30) Sección 4, Ley 1874.

La Ley ordena se dé este informe para evitar que el obrero pueda simular un accidente. El conocimiento de la lesión dentro de los noventa días facilita al patrono una declaración escrita anticipada y un esquema de los motivos del reclamante para ejercitar su acción (31). El informar es una condición previa al derecho a la acción según las normas legales y ha de alegarse y probarse que se hizo, antes de habilitar al obrero para resarcirse.

El informe hará al patrono saber con claridad el tiempo, lugar y causa de la lesión, al objeto de ponerle en condiciones de investigar sobre el hecho que produjo la lesión. Se ha sostenido que no se declaraba "la causa de la lesión" en un informe a un patrono en el que solamente se decía que el accidente fué provocado por no haber dispensado el demandado la debida protección al demandante en su trabajo, y que como resultado de ello el demandante fué golpeado por un cubo que se estaba utilizando para subir cosas, produciendo la caída de la víctima en un pozo, donde sufrió lesiones graves (32). En caso de falta de informe de la lesión dentro del plazo de noventa días, la ley exige que la acción por daños se ejercite dentro del plazo de un año a partir del momento en que tuvo lugar el accidente que causó la lesión o la muerte (33).

(31) Morales c./ García, G. R. N° 36819, 22 de diciembre de 1932.

(32) Simpson c./ Foundation Co., 201 N.Y. 479, 95 N.E. 10 Ann. Cas. 1912 B. 321.

(33) Sección 4, Ley n° 1874.

3. cuantía de la indemnización.

En la acción ejercitada por un obrero contra su patrono para obtener la indemnización por las lesiones sufridas durante el trabajo, los daños se fijan de conformidad con los principios establecidos que rigen la determinación de los daños y perjuicios (34).

Cuando se quiere obtener indemnización por razón de la muerte del obrero, los daños indemnizables a los parientes que dependían de la víctima son los consiguientes al haber sido privados de una esperanza razonable de beneficios pecuniarios por la muerte injusta del obrero lesionado. La indemnización se limita estrictamente a la pérdida económica sufrida (35). En caso de que la muerte haya sido instantánea, los beneficiarios pueden resarcirse de su pérdida pecuniaria y nada más. Y el dolor y los sufrimientos que son sustancialmente contemporáneos a la muerte, o que son meros incidentes de la misma, no se han considerado susceptibles de ser fundamento de una estimación o indemnización separada de daños (36). La angustia mental no se considera elemento del daño ni tampoco los daños de carácter punitivo (37).

E. DEFENSAS DEL EMPRESARIO.

Según la Ley de Responsabilidades del Empresario éste puede hacer frente a la acción de daños y perjuicios surgida

(34) 35 Am. Jur. Seco. 518, p. 948.

(35) 35 Am. Jur., seco. 521, p. 951.

(36) 35 Am. Jur., seco. 523, p. 953.

(37) Michigan C.R. Co. v. Vreeland, 227, U.S. 59, 57 L. ed. 417.

de un accidente industrial probando que no incurrió en negligencia, probando la negligencia cooperante del demandante o que la lesión fué causada por la negligencia de un compañero de trabajo o que tuvo lugar a consecuencia de uno de los riesgos asumidos por el empleado (38).

1. Negligencia cooperante.

Cuando el patrono es demandado por lesiones sufridas por un obrero en el curso de su trabajo, puede oponerse a la acción fundándose en que el obrero fué totalmente responsable de la desgracia, o en que fué negligente, o puede declarar que el trabajador fué parcialmente responsable o culpable de negligencia cooperante, si bien para que sea una defensa eficaz la negligencia cooperante del obrero ha de ser causa inmediata y no remota (39). La negligencia cooperante capaz de destruir la acción del obrero lesionado significa un fallo por parte de éste en la observancia de cuidado o prudencia o en el uso de precauciones en favor de su propia seguridad. La negligencia cooperante lleva consigo la idea de faltar o quebrantamiento de un deber por parte del obrero (40).

Con respecto a la cuestión de la negligencia del operario, merece citarse este párrafo de una sentencia del Tribunal Supremo de Filipinas:

(38) Secciones 1, 3 y 8, Ley n.º 1874.

(39) Astudillo c./Manila Electric Company, 55 Phil., 432.

(40) Seaboard Air Line R. Co. c./ Herten, 233 U.S. 492, 58. L. ed. 1062, 34. S. Ct. 635, L.R.A. 1915 C. 1. Ann. Cas. 1915 B, 475.

"La pregunta para determinar si existe negligencia en un caso particular puede ser la siguiente: ¿Usó el demandado, al ejecutar el acto negligente que se alega, del razonable cuidado y precaución de que una persona normalmente prudente habría usado en la misma situación? Si no lo hizo así, es culpable de negligencia. Efectivamente, la ley adopta el modelo que se supone ofrecido por la imaginaria conducta del buen padre de familia del derecho romano. La existencia de negligencia en un caso dado no se determina por referencia al juicio personal del autor en la situación ante la que se encuentra. La ley toma en consideración lo que sería temerario, censurable o negligente en el hombre normalmente inteligente y prudente y determina la responsabilidad con arreglo a este patrón" (41).

En último análisis, la determinación de la negligencia, sea del patrono o del obrero, ha de hacerse considerando las peculiares circunstancias de cada caso. No puede establecerse ninguna regla definitiva, debiendo tenerse en cuenta la serie de acontecimientos correspondientes a cada accidente,

2. Asunción del riesgo.

Otro medio de defensa puesto en manos del empresario para rehuir la responsabilidad de indemnizar al obrero lesionado es la doctrina llamada de la "asunción del riesgo" (42). Un trabajador, por el mismo hecho de entrar al servicio de un empresario, asume los riesgos ordinarios del servicio o los que corrientemente se presentan como probables del mismo, habiéndose sostenido que un obrero lesionado solamente por ra-

(41) Florida C. and P.R. Co. v. Mooney, 45. Fla. 286, 35 So. 1010, 110 Am. St. Rep. 73.

(42) Northwestern P.R. Co. v. Bobo. 290 U.S. 395, 78 L. ed. 462, 54 S. Ct. 263; Rocco v. Lehigh Valley R. Co. 268 U.S. 275, 77 L. ed. 743, 53 S. Ct. 343.

ción de tal riesgo no tiene derecho estatuido a ser resarcido por el patrono (43).

La doctrina de la asunción del riesgo afirma que las lesiones que excluyen al obrero del resarcimiento no van más allá de las que resulten del riesgo ordinario del empleo o del probable del mismo. Una asunción de riesgo hecha tan solo en virtud de contrato de trabajo comprende los peligros y riesgos que son ordinarios y normalmente probables del empleo en cuestión o que son una parte del mismo, y de los que el obrero tiene conocimiento, real o implícito, o de los cuales se puede presumir que lo tiene. Comprendidos en la denominación de riesgos ordinarios están aquellos riesgos o peligros que existen después que el patrono ha hecho todo aquello que venía obligado para garantizar la seguridad de sus operarios (44).

3. doctrina del compañero de trabajo.

También puede el patrono rechazar la responsabilidad invocando la doctrina del compañero de trabajo. Esta regla libra al empresario de responsabilidad con respecto a las lesiones sufridas por un trabajador, cuando estas lesiones se produjeron solamente como resultado de la negligencia, falta de cuidado o mala conducta de otros obreros al servicio del mismo empresario y que trabajan en el mismo empleo del lesionado.

(43) Reading Co. v. Greary (C.U.A. 4th) 47 F. (2nd) 142, 79 A.L.R. 226, Chocktow, C.G.R. Co. v. Jones, 77 Ark. 367, 92 S.W. 244, 4 L.R.A. (N.S. 837, 7 Ann. Cas. 430.

(44) 35 Am. Jur. Sección 299, pp. 722-723.

nado. Esta regla, sin embargo, está sujeta a requisitos generalmente aceptados o excepción en favor del obrero, cuando la negligencia de su compañero de trabajo ha tenido lugar en el cumplimiento de alguna obligación no delegable que el patrono le confió (45).

Con respecto al fundamento de la regla, los tribunales han dado varias explicaciones. La teoría generalmente aceptada dice que el riesgo de lesión proveniente de la negligencia del compañero de trabajo contratado para el mismo empleo, es uno de los riesgos ordinarios de este, que caen dentro del alcance del principio general de que el obrero asume todos los riesgos ordinarios y normales del trabajo en que está empleado. Expresándolo de otra manera, la defensa basada en el empleo común es, simplemente, una aplicación particular del principio, más amplio, de la asunción del riesgo(46).

F. UNA BREVE CRITICA.

No cabe duda de que esta ley que acaba de presentarse, abre un camino por el cual un obrero accidentado puede obtener la indemnización de su patrón. Como se puede observar de la discusión anterior, algunas importantes doctrinas del "common law" se han deslizado en el sistema legal filipino, y como consecuencia han dado mayor protección al trabajador. Aunque no es nuestro propósito hacer un estudio crítico de es-

(45) Gulf Co. y S.P.R. Co. c./ Blohn, 73 Tex. 637, 11 S. W. 837, 4 L.R.A. 764.

(46) Labatt; Matter and Servant, Sección 1398.

ta ley, se ha incluido aquí con el único propósito de complementar el cuadro panorámico del cuerpo legal que regula los accidentes del Trabajo en la industria. Consideramos valioso hacer resaltar algunos de sus puntos importantes antes de proseguir con el cuerpo legal al cual estamos dedicando la mayor parte de este estudio.

Esta ley presenta como uno de sus más grandes puntos débiles, la confianza en la doctrina de la culpa; para decidir la reparación de los daños, el patrono debe ser declarado culpable de negligencia, de otro modo no existe el derecho a indemnización. En la industria moderna, solo una pequeña porción de los accidentes proceden de negligencia patronal, la gran mayoría caen fuera de ella, dejando así al obrero sin la protección que la ley concede. Existe también otra dificultad en la aplicación de la ley, esto es, el procedimiento para asegurar la indemnización tiene que ser judicial en caso de que el patrón rechace pagar voluntariamente los daños. Las consecuencias de este procedimiento judicial no necesitan mayor comentario. Estos defectos en la ley más otros que el tiempo y espacio limitados no nos permiten mencionar ahora, han aclarado el camino para llegar a la ley de indemnización a los obreros - respuesta a una sentida necesidad- que será objeto de un estudio crítico en el resto de esta tesis.

SEGUNDA

PARTE

LA LEY DE INDEMNIZACION A LOS OBREROS

(Ley n° 3428, promulgada el 10 de diciembre de 1927 y modificada por la Ley n° 3812, la Commonwealth Act n° 210 y la Republic Act n° 772).

VI. PROPOSITOS Y ALCANCES DE LA LEY.

- A. Propósitos de la Ley.
- B. Base de su promulgación.
- C. Base del derecho del obrero a ser indemnizado.
- D. Diferencias entre la Ley de Responsabilidades del Empresario y la Ley de Indemnización a los Obreros.
- E. Exclusión de otros derechos y soluciones legales.
- F. Nulidad contractual "ope legis".
- G. Interpretación de la Ley a favor del Obrero.

A. Propósitos de la Ley.

En todos los países adelantados se han aprobado leyes de indemnización a los trabajadores (1). Esta legislación tiene de a reparar lo que en la mayoría de los países se viene considerando como un daño (2).

(1) Vid Miguel Hernández Márquez: Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ed. Revista de Derecho Privado, 2^a Ed., Madrid, 1955, pp.57-67, para un estudio comparativo de las distintas leyes de indemnización a los obreros, en los distintos países de Europa, América, Asia y África.

(2) En la esfera internacional ha tenido muchos convenios sobre accidentes del trabajo y entre los convenios que merecen mencionar: convenio relativo a la reparación de los accidentes del trabajo (Ginebra, 1925) y convenio relativo a la indemnización de accidentes del trabajo en la agricultura (1921), que obligaba a extender a todos los asalariados agrícolas el beneficio de las leyes y reglamentos que tuvieran por objeto indemnizar a las víctimas de accidentes sobrevenidos por el hecho del trabajo o con ocasión del mismo.

Antes de la promulgación de esta Ley, bajo el Código civil, si un obrero resultaba lesionado o muerto en accidente de trabajo, él o los que le representaban o de él dependían solamente podían obtener indemnización por las lesiones o la muerte si ésta o aquellas eran imputables a la negligencia del patrono. Si el obrero tenía conocimiento de los peligros del trabajo que realizaba, se le hacía responsable del daño por él mismo sufrido. El obrero, cuyo pan, tanto como el de su familia, dependía del empleo, se veía, consiguientemente, obligado a correr un riesgo al que, simplemente por razones de humanidad, no debiera estar expuesto (3). Era necesaria una reforma que concediera al trabajador una mayor seguridad que la que hasta entonces existía y esta necesidad vino a ser cubierta por la Ley de Indemnización al Obrero. La intención de la Ley es, pues, proteger a los obreros y a los que de ellos dependen contra el de amparar que los convertiría en objetos de la caridad, concediéndoles a tal efecto una indemnización adecuada, en caso de que aquellos sean víctimas de algún accidente de trabajo. Las lesiones de los asalariados dejan de considerarse como el resultado de faltas cometidas o de la negligencia para pasar a ser un producto de la industria (4).

La Ley de Indemnización al obrero considera el riesgo de accidentes como un riesgo de la misma industria, tratán-

(3) Mobile y O.R. Co. c./ Industrial Commission of Illinois, 28 F. (2nd), 228, 229.

(4) Milwaukee c./ Miller, 154 Wm. 652, 144 N.W. 188, Ann. Cas. 1915 D. 847, L.R.A. 1916 A, 1.

dose la indemnización por lesiones consecuentes a la misma como un elemento del costo de producción, que se añade al costo del artículo y es sobrellevado por toda la comunidad. El plan consiste en cargar sobre el negocio, mediante el seguro, las pérdidas causadas, haciendo que pesen sobre el industrial y sobre el consumidor del artículo, y no sobre el obrero lesionado, las cargas originadas por accidentes. Según este esquema, la ley tiende a proteger no solo al obrero, sino también al patrono, todo ello a expensas del consumidor (5).

La Ley sustenta una concepción totalmente nueva, poniéndola en el lugar de la antigua de la responsabilidad por negligencia; si la lesión tiene lugar durante el trabajo, el coste de la indemnización ha de ser uno de los elementos que han de tenerse en cuenta en el proceso de consumo. En otras palabras, la teoría legal es que si la industria produce lesiones, el costo de la lesión ha de incluirse en el costo del producto industrial (6).

En España, cuya legislación sobre la materia también nos interesa en este estudio, como punto de comparación con el derecho filipino sobre accidentes del trabajo, al objeto de favorecer el desarrollo de la dignidad humana -siendo el obrero portador de todos los valores humanos básicos, a los que tiene derecho como ser racional- con normas fundamentales: la

(5) Emilio Y. Mijangco y Juan M. Hagad: Philippine Labor and Social Legislation, Philaw Publishing Company, Manila, 1951, pp. 497-498.

(6) Murillo c./ Mendoza, 66 Phil. 689, 699-700; 37 Gaceta Oficial, 403, 407-407.

Ley de Bases de Accidentes del Trabajo en la Industria, de 4 de julio de 1.932, 31 Decreto-Ley de 8 de octubre de 1.932 (Texto Refundido de Accidentes del Trabajo en la Industria) y el Decreto de 31 de enero de 1.933 (Reglamento de la Ley de Accidentes del Trabajo en la Industria). El propósito de las mencionadas leyes españolas sobre accidentes laborales, y sus fines, son los mismos que se tratan de obtener en Filipinas mediante la Ley de Indemnización a los Obreros (7).

Dicho de otra manera, hemos visto que el objeto de la Ley es tratar al obrero como un ser humano. En este estudio declaramos abiertamente que el propósito de la ley es elevar la dignidad humana, -asegurar al trabajador los valores humanos básicos que le hagan levantarse por encima del nivel de una bestia de carga (8). A través de toda la tesis mantendremos una atención constante sobre si la ley realiza o no la sociedad del hombre libre, objetivo que es y debe ser su meta final (9).

(7) sobre este punto, Carlos del Peso y Calvo; Manual de Accidentes del Trabajo, Librería Sáenz, Madrid, 1946, p. 6, dice: "... no es posible dejar desamparado a aquel que día tras día ha dado su esfuerzo como agente principal de la producción; no es posible dejar en la indigencia a sus deudos, cuando el accidente les priva del apoyo de aquel que como sostén de la familia atendía a su sustento. La Moral y Religión así lo mandan; la Justicia social así lo ordena".

(8) Antonio de Aguinaga Telleria; Derecho del Trabajo, Gráficas González, Madrid, 1952, p. 64, dice que la Ley de Accidentes del Trabajo fue promulgada para remediar la situación abatida y humillante en que se encontraba sumido el trabajo humano y de la que era preciso sacarlo.

(9) En Filipinas, hoy día, hacen falta actitudes cristianas y democráticas para dar libertad al trabajo. Tupas Rodolfo; The Case of Free Labor, Sunday Times Magazine, Manila, 1 de marzo de 1.955, p. 10.

B. Base de su promulgación

Se ha dicho que no hay nada en el poder de policía del Estado que justifique la Ley de Indemnización porque ésta no se ocupa de dictar medidas de naturaleza preventiva (10). "Indudablemente, la Ley de Indemnización no obliga al empresario a observar una conducta determinada en relación con las condiciones de trabajo en las distintas industrias por ella afectadas, no impone deberes con relación a los lugares de trabajo, a las características de la maquinaria, herramientas o utensilios, a las normas o reglamentos que se han de dictar o a los mecanismos de seguridad que hayan de establecerse y mantenerse. Sin embargo, actualmente, el interés público se concentra en las medidas positivas encaminadas a la protección de la vida y de la integridad física. En palabras del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, uno de los fundamentos de su preocupación por que el individuo pueda vivir y ganar sus sustento en su interés en evitar la pobreza, con sus secuelas de vicio y crimen. Y, en nuestra opinión, las leyes reguladoras de la responsabilidad de los empresarios por las lesiones o muerte de obreros, resultantes del trabajo, están tan íntimamente relacionadas con la protección de las vidas y con la seguridad de aquellos a quienes se refieren, que pueden considerarse propiamente como incluidas den-

(10) El "poder de policía" es el poder del Estado para promulgar, hacer y establecer todas o cualquier ley, estatutos y ordenanzas, no opuestos a la constitución, para el bienestar del pueblo. (Guadencio Garcia; Questions and Problems in Philippine Political Law, Revised Edition, Kiko Printing Press, Manila, 1948, p. 125).

tro de la categoría de disposiciones de policía (11). El poder de policía es para el público lo que la ley de necesidad es para el individuo. Está comprendido en la máxima *salus populi suprema lex* (12).

C. Base del derecho del obrero a ser indemnizado.

No hay duda que la Ley de Indemnización al obrero autoriza un pago a los obreros en circunstancias que el código civil no consideró susceptibles de producir acción. Con el incremento de los riesgos a que dió lugar el empleo de explosivos de gran potencia, maquinaria complicada y peligrosa, de poderosas fuentes de energía como el vapor y la electricidad, aumentó rápidamente el porcentaje de obreros con reclamaciones justas, llegándose a buscar la solución de este problema en normas legales que modificaron o eliminaron algunos de los medios de defensa establecidos en el código civil. La Ley de Responsabilidades del Empresario y la Ley de Indemnización al Obrero "son el producto del desarrollo de la idea económica y social de que la industria que siempre cargó con la depreciación e inutilización de las máquinas necesarias, debe, también, soportar el peso de las reparaciones de la eficiencia del potencial humano, sin el cual la misma industria no podría existir" (13).

(11) New York Cent. R. C. c./ White, 243 U.S. : 188, 37 S. Ct. 247, 61 U. S. (L. ed.) 667, Ann. Cas. 1917 D., 629 , L.R.A. 1917 D., 1.

(12) State c./ Mountain Timber Co., 75 Wash. 581, 135 Pac. 645, L.R.A. 1917 D, 10.

(13) Lewis, etc. County c./ Industrial Acc. Board, 52 Mont. 6, 155 Pac. 268, L.R.A. 1916 D., 628.

La responsabilidad establecida por la "Ley de Indemnización al Obrero" se basa en este principio: la empresa industrial produce inevitablemente lesiones y muertes, sufridas por las personas en ella empleadas, y que son acontecimientos previstos como resultado del servicio prestado. Parece que independientemente de lo minuciosas que puedan ser las leyes de prevención de accidentes en las industrias, independientemente de la severidad con que se apliquen, hay un elemento de valor humano que entra en el problema, que no puede ser eliminado, y que invariablemente origina lesiones corporales y, consecuentemente, pérdidas económicas a los obreros (14).

Aquí observamos un paralelismo entre las doctrinas fundamentales de la legislación de España y Filipinas sobre accidentes industriales: la teoría del riesgo profesional.

D. Diferencias entre la Ley de Responsabilidades del Empresario de la Ley de Indemnización a los Obreros.

Existe una marcada diferencia en la aplicación de ambas leyes porque en la primera, para que el empresario sea responsable, es esencial que el obrero haya actuado con el "debido cuidado" en el momento en que el accidente se produjo (15), mientras que según la Ley de Indemnización a los Obreros se produce responsabilidad para el empresario en todos los casos de accidente, excepto cuando el obrero actúa con "notoria negligencia" (16). Según la Ley nº 1874 la negligencia simple o

(14) State v. Clausen, 65 Wash. 156, 117 Pac. 1101, 37 L.R.A. (N3) 466.

(15) Sed. 1. de la Ley nº 1874.

(16) Sec. 4 de la Ley nº 3428.

cooperante no exime al empresario del pago de la indemnización establecida en dicha Ley (17). La primera de las leyes citadas ordena el pago de daños en caso de accidente, en tanto que la citada en segundo lugar implanta la indemnización no sólo en caso de accidente, sino también de enfermedad. Existe también una importante diferencia entre ambas leyes por lo que se refiere al procedimiento para hacer efectivo el pago de la indemnización. La Ley de Responsabilidades del Empresario determina que la acción de daños se interpondrá ante el tribunal de 1ª Instancia, mientras que según la Ley de Indemnización de los Obreros la acción de indemnización se tramitará ante la Oficina del Comisario para la indemnización a los obreros.

Aunque las limitaciones de nuestro trabajo no nos permiten hacer una crítica completa de la Ley de Responsabilidades del Empresario, opinamos que la Ley está necesitada de una nueva y profunda revisión. Nos referiremos a esta Ley en el capítulo dedicado a las recomendaciones.

E. Exclusión de otros derechos y soluciones legales.

Cuando, en virtud de las disposiciones de la Ley de Indemnización a los Obreros, se tiene derecho a indemnización, muchas normas legales convierten en exclusiva la solución que se ponga en práctica para obtener la indemnización, para hacer efectivo el derecho del obrero. La Ley de Indemnización a los Obreros dispone:

(17) Samones c./ Compañía Marítima, 36. Gaceta Oficial, 701.

"Los derechos y soluciones legales concedidos por esta Ley a un obrero por razón de una lesión corporal que le habilite para ser indemnizado, excluyen cualquier otro derecho y solución legal que resulten en favor del trabajador, sus representantes personales o personas que dependan de él o parientes próximos, y contra el patrono, del Código civil y otras leyes en virtud de la mencionada lesión.

"Los empresarios que contraten obreros en las Islas Filipinas para trabajar fuera de ellas, estipularán con tales obreros que las soluciones legales prescritas en esta Ley se aplicarán a las lesiones sufridas fuera de las Islas en accidentes ocurridos en y durante el cumplimiento de las obligaciones propias del empleo. Esta estipulación no perjudicará el derecho de los trabajadores a los beneficios de la Ley de Indemnización al Obrero del lugar donde ocurriera el accidente, si tal ley les fuese más favorable. (Modificada por la Red. Act. n.º 772) (18).

En la Sección siguiente se enuncia el mismo principio de exclusividad de una solución o remedio, diciendo el texto legal:

"En caso de que un obrero sufra una lesión cuya indemnización haya de ser satisfecha, según esta Ley, por personas distintas del empresario, será facultativo del obrero lesionado reclamar la indemnización del empresario, según lo dispuesto en esta Ley, o demandar por daños a otra persona, de acuerdo a derecho; y en el caso de que la indemnización fuera reclamada y concedida de conformidad a esta Ley, el patrono que hizo efectiva la indemnización o que fué declarado responsable del pago de la misma se subrogará en los derechos del obrero lesionado para repetir la suma satisfecha..." (19).

Las razones que abonan las disposiciones anteriores son fáciles de comprender. La Ley de Indemnización a los

(18) sección 5 de la Ley 3428, modificada.

(19) sección 6 de la Ley n.º 3428, modificada.

obreros se promulgó para abrogar el "Common Law" y el Código civil con respecto a los actos y omisiones culpables; bajo esta Ley no es necesario que el empresario sea culpable de una falta o negligencia para ser responsable (20). Sin embargo, según la misma Ley, el obrero lesionado en circunstancias tales que le den derecho a obtener indemnización de su patrono y también a exigir responsabilidad por daños de un tercero, tiene el derecho de elegir entre la indemnización o los daños y perjuicios; no puede obtener simultáneamente ambos tipos de compensación, no puede optar por la indemnización y ejercitar también una acción contra un tercero, como tampoco puede proceder conjuntamente según el derecho común para el resarcimiento de daños y según la Ley de Indemnización al Obrero para obtener indemnización (21).

El principio que rige la regla de la solución exclusiva trata de evitar que se produzca la anómala situación de un obrero al que se le concediera una doble compensación por una lesión sola, y, análogamente, de proteger a la parte que ha de abonar la indemnización. En la situación dada en la sección 6, por ejemplo, si se permitiera al trabajador obtener el resarcimiento de su lesión del patrono y también del tercero, no sólo obtendría indebidamente una doble indemnización por una sola lesión, sino que el empresario que pagó su indemnización al obrero no podría obligar al tercero a reembol-

(20) Samores c./ Compañía Marítima, (C.A.), 36 Gaceta Oficial, 701.

(21) Lobrin c./ Singer Sewing Machine Co., C.A.- G.R. no. 5751 dictada el 6 de noviembre de 1940.

darle la cantidad que dicho tercero debiera al trabajador. De esta manera, el resultado sería que el patrono se queda sin defensa y el obrero lesionado recibe indebidamente una indemnización doble.

Por consiguiente, la ley ha dispuesto de una manera tan expresa la exclusividad de la solución escogida para obtener la indemnización que, cuando un obrero que ha obtenido del tercero negligente una suma igual o mayor que la establecida por la Ley de Indemnización al Obrero, reclama contra su patrono amparándose en los preceptos de la Ley, su demanda no prospera. El derecho de subrogación reconocido en la sección 6 hace patente la intención de la Ley de hacer al tercero que cometió el daño responsable de todos los perjuicios causados por su acto doloso o negligente. Pueden proceder contra él el obrero, si éste quiere tratar directamente con el causante del daño, o el empresario cuando ha pagado la indemnización prescrita por la Ley (22).

(22) El Ministro de Trabajo, en una opinión publicado en el Labor Bulletin, Mayo-Junio, 1940, pp. 200-201, escribe: "El seguir considerando responsable al patrono una vez que la parte negligente abonado al trabajador una suma no menor que la indemnización legalmente establecida, nos llevaría a uno de estos resultados: 1ª obligación del patrono de abonar la indemnización, sin derecho a obtener el reembolso de lo que pagó el tercero negligente, lo que sería contrario al espíritu y a la letra de la Ley, o 2ª obligar al patrono a abonar la indemnización, concediéndole el derecho de dirigirse contra el tercero culpable para obtener el reembolso de lo pagado, obligando de esta manera a dicho tercero a satisfacer doble indemnización por un solo daño causado".

Una vez que un caso ha sido juzgado y sentenciado en dos instancias siguiendo la idea, adoptada de común acuerdo, de que la Ley de Indemnización a los Obreros es la aplicable, no puede permitirse al demandado que cambie de criterio y adopte una nueva teoría, es decir, que considere aplicable la Ley de Responsabilidades del Empresario o cualquiera otra y no la de Indemnización a los Obreros (23).

Resumiendo lo que hemos dicho anteriormente, el obrero lesionado puede elegir la vía por la que ha de obtener la indemnización, pero una vez que ha hecho una elección válida, ésta es decisiva (24).

P. Nulidad contractual "ope legis".

La Ley de Indemnización a los Obreros dispone expresamente que "cualquier contrato, reglamento o proyecto de cualquier clase dirigido a eximir al patrono de todo o parte de la responsabilidad establecida por esta ley, será nulo" (25). La Ley española también dicta normas contrarias a la misma contingencia (26).

En sus términos, la ley prohíbe cualquier intento de poner contractualmente límites a su alcance. La Ley no puede

(23) Ramos o./ Poblete et al., 40 Gaceta Oficial, 3474.

(24) Emilio Hilado y Juan Hagad, op. cit., pág. 501.

(25) Sección 7 de la Ley nº 3428.

(26) Art. 61, Texto Refundido de la Ley de Accidentes del Trabajo, 8 de octubre de 1.932. Vid. SS. de 19 de enero de 1916; 16 de abril de 1930; 3 de diciembre de 1941; 19 de Agosto de 1918 y 21 de noviembre de 1925, sobre este punto. Según Miguel Hernáinz Marquez Tratado Elemental de derecho del trabajo, 5ª edición, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1951, p. 540, esta irrenunciabilidad cabe con la norma genérica de estimar como no renunciabiles los derechos reconocidos al trabajador.

ser anulada o derogada, ni puede tampoco renunciarse o reducirse el derecho del obrero al ser indemnizado. Pero aun cuando la Ley no contuviera ninguna disposición expresa sobre la materia, nos parece que toda tentativa de anular la efectividad de esta Ley debería considerarse nula por dirigirse contra el orden público (27).

En virtud de la disposición anulatoria de las limitaciones contractuales no puede haber restricciones al derecho de indemnización derivadas de contratos entre el empresario y el asegurador. Así como tampoco producirá efecto alguno la conformidad de un obrero, dada en su solicitud de empleo, en asumir todos los riesgos resultantes de su propia negligencia en el empleo, librando así al empresario de toda responsabilidad por cualquier lesión personal que sufra el propio obrero mientras esté ocupado en tal empleo (28).

Esta disposición de la Ley tiene por objeto alcanzar la comunidad humana libre, afectando a los valores riqueza, ilustración, respeto y rectitud. Se comparte la riqueza desde el momento en que ésta asegura al obrero unos ingresos básicos con arreglo a los cuales ha de vivir, sin ser privado aquello

(27) Art. 1409 del C.c. de Filipinas.

(28) L.R.A. 1917, p. 95. Véase el caso de De la Cruz et al. c./ Compañía Marítima, G.R. n.º 38236, de 21 de Agosto de 1933, en el que se hace constar en un contrato de arrendamiento que el dueño del taller no está relacionado con el negocio que se establece en tal contrato. En el caso de Alcoresa c./ Johnston, 64 Phil. 846-847 (30 de septiembre de 1951), se declaró nulo el acuerdo en virtud del cual mediante el pago de 100 al trabajador lesionado no insistiría éste en obtener otra indemnización a la que tuviera derecho.

a lo que tiene derecho. Se favorece la ilustración en cuanto evita la decepción ordinaria en el obrero que está acostumbrado a que se le regateen sus derechos a causa de su ignorancia. El respeto se promueve al asegurar al obrero todos los beneficios de la ley, sin peligro de ser privado de una parte de la ayuda necesaria establecida por la Ley. Se exalta la rectitud al impedir que ni el obrero, ni el patrón ni el asegurador puedan anular el verdadero propósito de la Ley, pretextando acuerdos voluntariamente concluidos.

g. Interpretación de la Ley a favor del obrero.

Por regla general los tribunales han sostenido que la interpretación de la Ley de Indemnización a los Obreros debe caracterizarse por un amplio sentido de liberalidad, toda vez que esta Ley ha de clasificarse entre las de carácter reparador (29). Animada del mismo espíritu de liberalidad, la ley española viene interpretándose en esta misma dirección.

La Ley, dado que su principal propósito es la protección del trabajador que sufre un accidente durante su trabajo o padece una enfermedad contraída en el desempeño de las obligaciones propias del empleo, ha de interpretarse teniendo presente el supremo interés del obrero (30). Las ideas y com-

(29) Post o./ Mills, 76 Wash. 437, 36 Pac. 685, L.R.A. 1916 A, 358.

(30) Sobre el carácter especial de indemnización en caso de accidente del trabajo en España José Pérez Leñero: Instituciones del Derecho Español de Trabajo, Espasa-Calpe, Madrid, 1939, p. 288, dice: "El Derecho Laboral reconoce al trabajador un derecho a percibir una indemnización en caso de accidentes; este derecho necesita una garantía que, debido a las circunstancias especiales del trabajador lesionado, merece y necesita seguridades extraordinarias beneficiosas para el empresario y para el trabajador.

diciones sociales, económicas y de gobierno, tan mudables con el tiempo, así como los problemas originados por los cambios, deben también ser tomados en consideración, convirtiéndose en factores influyentes en la solución de las cuestiones de estructuración e interpretación (31). La posición del trabajador con relación al empresario en la actual organización económica ha dado carácter de imperatividad a la promulgación de esta Ley, proyectada para fomentar el ideal de la humanidad del hombre para con el hombre (32).

La actitud de los tribunales a este respecto, conducente a interpretar la Ley de manera liberal en favor del obrero está, en nuestra opinión de acuerdo con la idea de construcción de una sociedad libre. Como ya decíamos al principio de este estudio, el fin que nos hemos propuesto al realizar este trabajo consiste en examinar las leyes sobre accidentes laborales dictadas en Filipinas y en España para ver si contribuyen a la elevación de la dignidad del obrero como hombre, proponiendo recomendaciones, soluciones alternativas y cambios en aquellos puntos de las leyes en que fueran necesarias, si llegásemos a la conclusión de que las leyes de

(31) Milwaukee v. Miller, 154 Wis. 632, 144 N.W., 188, Ann. Cas. 1915 D, 847 L.R.A. 1916 A, 1.

(32) El tribunal supremo de Filipinas, en numerosas ocasiones, ha sostenido de manera clara que la Ley de Indemnización a los obreros debe ser interpretada a favor del trabajador de una manera liberal. Así, en Vargura v. Pampanga Bus Co., 62 Phil. 820, 823-824, el tribunal declaró que la Ley "debe ser justamente interpretada a favor del obrero". La Ley debe interpretarse para cumplir, no para impedir los fines para los que se promulgó por el Parlamento (Libron v. Pinalbagan Estate, Inc., G.R. no 41473, 27 de julio de 1934). La Ley es un tanto legislativo de carácter social cuyo objeto es socorrer al obrero víctima de un accidente durante su trabajo (James v. Poblano et al., 40.

accidentes del trabajo de los países mencionados no cumplían la misión que les atribuimos. Como se desprende de la misma naturaleza de la relación patrono-obrero, y como lo viene demostrando la experiencia, es la situación del obrero la que necesita de una consideración más afable y atenta, tanto más cuanto que, en cada caso, se hace necesario que la interpretación de la ley se haga de una manera liberal a favor del obrero.

gaceta Oficial 3474,25 de octubre de 1941). Las reglas de humanidad y la civilización exigen que se proteja al obrero en todos los aspectos de su trabajo (Murillo c./ Mendoza, 66 Phil 689, 705-706). Las dudas respecto al derecho a indemnización han de resolverse a favor del obrero (Francisco c./ Gombing, 63 Phil., 354). Vid. "El principio pro operario" en el curso de derecho del Trabajo, de Eugenio Pérez Botija. Ed. 1952, pág. 84.

VII. DEFINICION DE LOS TERMINOS EMPLEADOS EN LA LEY.

- A. En general.
- B. Empresario.
- C. Contratista independiente.
- D. Obrero.
- E. Empleo industrial.
- F. Empleo público.
- G. Empleo ocasional.
- H. Accidente.
- I. Lesión o lesiones personales.
- J. Incapacidad parcial.
- K. Negligencia.
- L. Jornales.
- M. Establecimiento
- N. Hijo, hija o hijos.
- O. Padres.
- P. Hermano o hermana.
- Q. Nieto, nieta o nietos.
- R. Abuelo, abuela, o abuelos.

A. En general.

siguiendo la conocida norma de interpretación legal, las palabras de una ley han de interpretarse según el sentido or-

dinario y comúnmente aceptado de las mismas; únicamente cuando la propia ley define por sí misma los términos que utiliza prevalecen estas definiciones. En consecuencia y puesto que la Ley de Indemnización al obrero define los vocablos y expresiones por ella empleados, la terminología usada en este estudio corresponderá a las definiciones dadas por dicha Ley (1).

En esta breve exposición de la terminología legal hemos incluido algunas palabras que no están específicamente definidas en la Ley; en estos casos, utilizamos las definiciones dadas por los tribunales y por los estadistas del derecho como ayuda para llegar a una interpretación exacta.

B. Empresario.

La palabra "empresario" (2) comprende en su significación a toda persona o asociación de personas, bajo la forma de sociedad anónima o no, públicas o privadas, y a los representantes legales del empresario fallecido. Incluye al propietario o arrendatario de una factoría, establecimiento o lugar de trabajo o a cualquier otra persona que sea virtualmente la propietaria o directora del negocio que se desarrolla en el establecimiento o lugar de trabajo, pero que, por existir un contratista independiente en el mismo, o por cual-

(1) En España, la Ley de Accidentes del Trabajo también define las palabras que en ella se utilizan.

(2) Posada acepta la definición dada por Gide (Tratado de Economía, tratado española de Olascoaga, p. 167): "designase con el nombre de patrono, o mejor dicho con el de empresario... a quien, disponiendo de un instrumento de producción-terra o capital- demasiado considerable para poderlo poner en obra por su trabajo personal, lo hace valer con el obrero asalariado" (Enciclopedia Jurídica Española, artículo Patrono). El concepto citado es de carácter económico.

quier otra razón, no es empresario directo de los obreros que allí trabajan (3).

(subrayado por el autor).

La primera parte de la definición no necesita de ulterior estudio. En cambio, la parte subrayada requiere alguna explicación. Lo que la Ley quiere decir es que aunque el dueño de la factoría no sea el empresario directo de los obreros que trabajan en ella, porque hay un contratista independiente en la factoría el dueño de dicha factoría, no obstante, es considerado, a los efectos de la Ley de Indemnización al Obrero, como empresario de los obreros que trabajan con el contratista independiente, con relación siempre a los trabajadores que realicen una labor que entre dentro del curso normal de los negocios del dueño. En otras palabras, cuando La Ley convierte al dueño de la factoría en empresario de los obreros allí empleados, no obstante la intervención de un contratista independiente, se refiere a los trabajadores contratados para regular el trabajo normal de la factoría, y no a los obreros de un contratista independiente que hacen un trabajo distinto del del negocio del dueño de la factoría, y separadamente (4).

La razón de esta distinción y de la regla es fácil de

(3) Sec. 39 (a), Ley 3428, modificada por la ley n.º 3812, la Commonwealth Act n.º 210 y la Republic Act n.º 772, estableciendo las indemnizaciones que han de recibir los obreros por razón de lesiones personales, muerte o enfermedad sufrida o contraídas en el cumplimiento de sus deberes.

(4) Vid. De los Santos et al. c./ Javier, G.R. n.º 37019,8 de marzo de 1933, XXI O.G. 2330, en que el tribunal sostuvo que el empresario no era responsable de las lesiones sufridas por uno de los obreros de un contratista que se dedicaba a la construcción de un corral para puercos, ya que la industria del empresario no era la construcción de edificios, sino la compra y venta y el curado de jamones.

ver. si el dueño de la factoría no fuese responsable de las lesiones sufridas por los obreros de un contratista independiente empleados en los negocios corrientes de dicho dueño, éste podría librarse de toda responsabilidad y anular totalmente las intenciones de la ley con el simple subterfugio de un contratista independiente. Por el contrario, hacer responsable al dueño de la factoría de las lesiones sufridas por los operarios de un contratista independiente no empleados en el negocio corriente del dueño, sería hacerle responsable de las lesiones sufridas por obreros sobre quienes no tiene ninguna autoridad (5).

En España, el concepto de "patrono" se entiende en el mismo sentido que en Filipinas, al ser considerados como elementos esenciales los dos de ser titular total o parcial del capital y la facultad de dirigir el negocio (6).

(5) Vid. *Re la Cruz et al. c./ Compañía Marítima*, G.R. no 38236, 21 de agosto de 1933. El trabajo de descargar un barco es parte del negocio del demandado, de transporte de cargamentos, y por esta razón el patrón no deja de ser empresario del "cargador" por el hecho de contratar a un contratista independiente. En *Almaraz c./ Gangeo*, G.R. no 42585, 29 de marzo de 1935, se determinó que la forma de establecer si una persona es el empresario de otra consiste en investigar si, en la época en que se produjo la lesión, el lesionado estaba sometido a las órdenes de tal persona y podía ser despedido por desobedecer sus órdenes o por mala conducta. Análogamente vid. *In Re Achihiro Ikoma*, 23 *Hawai*, 291, sobre el mismo aspecto.

(6) Art. 2. Texto Refundido de la Ley de Accidentes del trabajo en la Industria. Respecto de quienes son patronos, vid. SS. de 5 de julio de 1927; 2 de enero de 1932; 23 de octubre de 1933 y 27 de febrero de 1941. Quienes no son patronos: vid. SS. de 5 de julio de 1927; 21 de enero de 1932; 24 de mayo de 1933 y 3 de julio de 1941.

C. Contratista independiente.

Contratista independiente (7) es la persona que ejercita una profesión independientemente y contrata para realizar un determinado trabajo con arreglo a sus propios métodos y sin estar sujeto al control de su empresario, excepto en lo que se refiere al resultado de su trabajo. Una persona que carece de capital o dinero de su propiedad para pagar a sus obreros o para cumplir sus obligaciones con relación a ellos, y que no firma documento alguno para responder del cumplimiento de su contrato con el empresario, no reúne las condiciones o requisitos necesarios para clasificarle como contratista independiente (8).

Si el empresario alega que el operario es un contratista independiente, de cuyos actos no es responsable, pesa so-

(7) según el Bouvier's Law Dictionary, artículo "Independent contractor", cuando se emplea a una persona en la ejecución de cierta clase de trabajo, como reparaciones o mejoras en un edificio, por el dueño de éste, trabajo que requiere la práctica de cierta habilidad y buen juicio, cuya ejecución se deja por entero a su discreción, sin restricción alguna respecto de su ejercicio, y sin limitación en cuanto a la autoridad conferida con respecto a la misma, sin que se disponga nada respecto del tiempo en que ha de hacerse el trabajo, o respecto del pago de los servicios prestados, y la indemnización depende del valor del mismo, tal persona no se encuentra en relación de servicio bajo el control de un amo, sino que es un contratista independiente. En España, llámase contratista a la persona a quien, mediante una serie de formalidades, se le adjudica la ejecución de una obra o servicio público (Enciclopedia Jurídica Española, artículo "contratista"). También se puede hablar de contratista en el sentido general que hemos venido dando a la expresión "contratista independiente"

(8) Andoyo v. Manila Railroad Co., G.R. no 34722, 28 de marzo de 1932.

bre sí la carga de la prueba de tal independencia (9).

En el caso de una compañía de productos lácteos que contrató con un constructor el levantamiento de un nuevo edificio, resultando lesionado uno de los obreros contratados por el constructor, el tribunal que juzgó el caso sostuvo que tal obrero no podía considerarse como perteneciente a la empresa de productos lácteos, no teniendo, por tanto, derecho a percibir indemnización de ésta, al no dedicarse dicha compañía al negocio de la construcción, siendo esto particularmente exacto, toda vez que, de otro modo, la responsabilidad de la compañía aseguradora de la sociedad de productos lácteos se habría extendido hasta unos límites insospechados (10).

D. Obrero.

EL término "obrero" se utiliza como sinónimo de empleado, significando persona que está empleada por cuenta de un patrono o que trabaja para él en virtud de un contrato de servicios o de aprendizaje (11). No comprende en su significación a la persona cuyo empleo es puramente circunstancial y que no se dirige al cumplimiento de los fines de la ocupación o negocio del empresario. Se entenderá que toda referencia a un obrero lesionado, en caso de que éste muera, lleva implícitamente una referencia a las personas de él dependientes, tal como se definen en esta Ley, si el contexto lo exige así,

(9) Ruel v. Lidgerwood, Rural Tel. Co., 23 N.D., 6,14 R.C.L. p. 78; 5 L.R.A. 459.

(10) De los Santos et al. v. Javier, G.R. n.º 37019, 8 de marzo de 1933 XXXI. O.G. 2330. Vid. también Lineaw y Salome v. The Mountain Province, G.R. n.º 40083, 24 de abril de 1932.

(11) Obrero es el que cumple con sus manos el contrato que concluyó con su patrono (Bouvier's Law Dictionary, artículo Obrero)

o, si el empleado es un menor o incapacitado, a su tutor o más próximo pariente (12).

El elemento principal para ser considerado obrero por la Ley es el servicio a los fines de la ocupación o negocio del empresario, en contraposición a los que presta una persona cuyo empleo es puramente accidental.

En el siguiente caso no hay duda de que el fallecido era un obrero en el sentido legal. Había sido contratado por orden del capitán del barco del demandado, estando ocupado en descargar la mercancía del barco en el momento del accidente. No puede discutirse que esta clase de trabajo pertenece al negocio a que se dedicaba el apelado. Carece de transcendencia el hecho de que el fallecido fuera reclutado por un contratista porque éste, a los efectos legales, era un agente o representante del capitán del barco, quien a su vez representaba al demandado (13).

E. Empleo industrial.

La expresión "empleo industrial", en caso de empresa - rices particulares, comprende todo empleo o trabajo en un tráfico, ocupación o profesión ejercitado por un empresario con propósito de lucro, exceptuándose los servicios domésticos (14).

(12) Sec. 39 (b), Ley 3248.

(13) Hoos et al. c./ Compañía Marítima, G.R. n.º 37074, 25 de febrero de 1933, XXXII O.G. 406.

(14) Sec. 39 (d), Ley 3428. El servicio doméstico está protegido por los artículos 1689-1699 del código civil de Filipinas.

El propósito lucrativo es el criterio básico en el empleo industrial. Nuestro Poder legislativo ha creído aconsejable incluir en la Ley de Indemnización al Obrero todos los accidentes que puedan ocurrir a los trabajadores en factorías, tiendas y otros lugares de trabajo industrial, así como en los mares interinsulares del Archipiélago (15).

F. Empleo público.

"Empleo público" significa estar ocupado al servicio del Gobierno Nacional o del Gobierno de alguna provincia, ayuntamiento o subdivisión política de las Islas. No está comprendido en su significado el empleo de funcionario público elegido por votación popular, ni tampoco caben dentro de esta denominación aquellas personas que perciban más de cuatro mil ochocientos pesos anuales (16).

G. Empleo ocasional.

La Ley no da el significado de la expresión "empleo ocasional". Simplemente declara que la palabra obrero "no hace referencia a una persona cuyo empleo sea puramente ocasional" (17). Sin embargo, en numerosas ocasiones cuando no existe intención por parte del empresario de retener al obrero, y el trabajo hecho por éste no responde a los

(15) Abueg et al. c./ San Diego, C.A. G.R. núms. 773, 774 y 776, 17 de diciembre de 1946, ilustra el caso de empleo en mares interinsulares, tal como se incluye en el concepto de empleo industrial.

(16) Sección 39 (a), Ley nº 3428.

(17) Sección 39 (b), Ley nº 3428.

finos de la ocupación o negocio del patrono (18).

H. Accidente.

Evidentemente, la palabra "accidente" es el concepto básico de esta tesis, puesto que nuestra investigación tiende a lograr que, en la medida de nuestras posibilidades, se avance un paso más en el perfeccionamiento del derecho de accidentes industriales. El verdadero alcance de la expresión "accidente del trabajo" será estudiado en una sección posterior(19) por lo que en este momento nos basta con conocer uno de los elementos que constituyen esta expresión legal técnica.

Con la palabra "accidente", tal como la emplea esta Ley (20-, se quiere dar a entender que el hecho que ocasiona la lesión ha de ser circunstancial o imprevisto, y del cual la parte lesionada no es responsable legalmente. según el web-

(18) El empleo consistente en quitar un tanque fuera de uso existente en las naves de la Lucena Electric Company, cuya actividad industrial es el suministro de energía eléctrica a los habitantes de las proximidades de Lucena, se consideró totalmente ocasional (Será c/. Lucena Electric Co., G.R. n.º 38801, 20 de julio de 1933). Análogamente, el ayudar en cierto trabajo determinado, cuya duración patrono y obrero sabían que sería corta y sin que nada indicase que iba a ser periódico o continuo (Consumer's Mutual Oil Producing Co. c./ Industrial Commission, 289 Ill. 423, 124 N.E. 608); también se consideró ocasional el empleo de un camarero con tratado por un abastecedor para servir un banquete determinado, a un precio especial y el transporte, con libertad de marcharse a donde tuviera por costumbre una vez terminado el servicio (In Re Gaynor, 217 Mass. 86, 104 N.E., 339, L.R.A. 1916 A 363). Vid. también Quison c./ Norton y Harrison Co.et. al., octubre de 1930, 55 Phil. 18 y Thompson c./ Twiss, 90 Conn. 44 4,97 Atl. 328, L.R.A. 1916 E 506.

(19) Infra, Capítulo IX, p. 109.

(20) Sección 2, Ley 3428.

ter's International Dictionary, accidente es un acontecimiento que tiene lugar sin que se pueda prever o esperar.

El término, tal como se usa en la expresión "lesiones personales provenientes de algún accidente", ha de considerarse como descriptivo del estado mental del obrero en el momento de la desgracia. La palabra en cuestión se utiliza en contraposición a la frase "lesiones causadas por la acción voluntaria del obrero" (21). La palabra accidente se refiere a un suceso que está más allá de los límites de la previsión humana (22).

Una vez conocido uno de los elementos de la expresión "accidentes del trabajo", podemos apuntar que los demás elementos que han de concurrir son: existencia de una relación patrono-obrero; el riesgo debe ser peculiar del empleo y no un peligro al cual esté expuesto el público en general; el acontecimiento ha de tener lugar mientras el obrero está realizando el trabajo para el cual fué contratado; y debe haber

(21) Ibid., Sección 4.

(22) Constituyen casos de accidentes: mientras el timonel de un barco de servicio interinsular estaba ocupado en suabierta enrollando un cable que había sido utilizado para la maniobra de un barco, movió una hamaca que uno de los pasajeros había situado en el lugar en que se encontraba. El propietario de la hamaca, encolerizado, golpeó al timonel con un palo, en el momento en que aparecía un hermano de dicho pasajero, quien con una navaja acostó al timonel una punalada en el corazón, causándole la muerte instantánea (Taller yda. de Nava c./ Yachauati Steamship Co., G.R. no. 35741, 20 de diciembre de 1932, 57 Phil., 751); si ni el empresario ni el obrero pudieron haber previsto la desgracia que produjo la lesión, ha de dictarse orden de indemnización (Heits c./ Ruppert, 218 N.Y. 148, 112 N.E. 750 L.R.A. 1917 a 344); accidente es un acontecimiento inopinado y funesto que no se esperaba ni se deseaba (Wong Chee c./ Yee Wo Chom, 26 Hawad 185, citado en Pollisco c./ Basilan Lumber Co., G.R. no 38721, 25 de octubre de 1933).

una relación causal entre el daño que resulte y el hecho que lo produzca. Todos estos elementos será tratados más ampliamente en una sección posterior.

según la ley española, se entiende por accidente toda lesión corporal que el operario sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena (23). Las diferencias conceptuales serán tratadas en subsiguientes estudios. Por ahora, basta con decir que el concepto español incluye también la idea de lo inesperado (24).

I. Lesión o lesiones personales.

En "lesión" o "lesiones personales" está incluida la enfermedad. En "lesión" o "lesiones personales" o "enfermedad" queda comprendida la muerte producida por las lesiones o la enfermedad (25).

J. Incapacidad parcial.

La capacidad disminuida para asegurarse un empleo, debida a la deformación producida por una lesión, puede considerarse como "incapacidad parcial" (26).

K. Negligencia.

Negligencia es el no hacer algo que un hombre prudente, guiado por las consideraciones que ordinariamente regulan la

(23) Art. 1, T.R.I.

(24) Vid. S.T.S. de 24 de enero de 1949.

(25) sección 39 (e), Ley nº 3428.

(26) Ibidem. sección 39 (f).

dirección de los negocios, haría, o el hacer algo que una persona razonable no haría (27). El tipo de prudencia no es el de una persona determinada, sino la del hombre prudente corriente (28).

L. Jornales.

En "jornales" se comprende el valor comercial de la manutención y alojamiento, combustible y otros abonos que el obrero reciba del empresario como parte de su retribución (29).

No están incluidas en los jornales las cantidades pagadas por el empresario al obrero para cubrir gastos especiales debidos a éste por razón de la naturaleza de su empleo.

M. Establecimiento.

La palabra "establecimiento", tal como se usa en la Ley (30), significa "institución" y generalmente se refiere a empresas de naturaleza pública, comprendiendo frecuentemente los lugares donde se lleva la dirección de los negocios, así como los objetos físicos relacionados con ella (31).

N. Hijo, hija o hijos.

Las palabras "hijo", "hija" o "hijos", según las emplea la Ley, comprende en su significación a los hijastros, hijos

(27) Negligencia es la no observancia para la protección de los intereses de otras persona, de aquel grado de cuidado, precaución y vigilancia, que las circunstancias justamente exigen, y por lo que tal persona sufre un perjuicio (Boyer's Law Dictionary, artículo "Negligencia").

(28) Pollisco c./ Basilan Lumber Co., G.R. n.º 39721, 23 de octubre de 1933.

(29) Sección 39 (e), Ley 3428.

(30) Sección 39 (a), Ley 3428.

(31) Andayo c./ Manila Railroad Co., G.R. n.º 34722, 28 de marzo de 1932.

adoptivos e hijos ilegítimos reconocidos por el fallecido antes de sufrir la lesión y de él dependientes, pero no incluyen a las personas casadas, a no ser que éstas sean dependientes, en virtud de alguna razón establecido en la Ley (32)

C. Padres.

La palabra "padres" significa también padrastrros y madrastras y padres adoptivos (33).

P. Hermano o hermana.

Las palabras "hermano" o "hermana" incluyen en su significado a los hermanastros o hermanastras, medio hermanos y medio hermanas y hermanos o hermanas por adopción; no comprendo, en cambio, a los hermanos o hermanas casados, a menos que sean dependientes por alguna razón legal (34).

Q. Nieto, nieta o nietos.

El significado de las palabras "nieto", "nieta" o "nietos" se extiende a los hijos de los hijos adoptivos e hijos de hijastros; pero no comprende a los hijastros de los hijos, a los hijastros de los hijastros y a los hijastros de los hijos adoptivos, ni a los nietos casados, a no ser que sean dependientes con arreglo a la Ley (35).

R. Abuelo, abuela o abuelos.

Las palabras "abuelo", "abuela" o "abuelos" hacen también referencia a los padres de los padres adoptivos; pero no quedan incluidos en su significado los padres de los padrastrros, los padrastrros de los padres o los padrastrros de los padrastrros (36).

(32) Sección 11, Ley 3428.

(33) Sección 11, Ley 3428.

(34) Ibid.

(35) Ibid.

(36) Ibid.

VIII. OBREROS COMPRENDIDOS EN LA LEY

- A. CLASES DE OBREROS QUE COMPRENDE LA LEY.**
 - B. EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO.**
 - C. CONTRATISTAS INDEPENDIENTES Y SUS OBREROS SIN DERECHO A INDEMNIZACION.**
 - D. OBREROS EVENTUALES SIN DERECHO A INDEMNIZACION.**
 - E. OBREROS CONTRATADOS PARA EL TRAFICO INTER-INSULAR Y CON EL EXTRANJERO.**
 - F. OBREROS CONTRATADOS DENTRO O FUERA DE FILIPINAS.**
-

A. Clases de obreros que comprende la ley.

La Ley de Indemnización al Obrero ha sido proyectada para beneficiar a los trabajadores industriales (1), por lo que excluye a los obreros agrícolas y al servicio doméstico (2). Sin embargo, también se aplica a los mensajeros montados al servicio del Gobierno Nacional y de todas sus subdivisiones políticas y a los trabajadores empleados en

(1) - Sec. 1, Ley nº 3428. Vid. supra, p. 86 para la definición de empleo industrial.

(2) - Estas clases de obreros están protegidas por el Código civil.

las obras públicas y en las empresas industriales del Gobierno, así como a todas las demás personas que realicen labores manuales al servicio del Gobierno Nacional y sus subdivisiones políticas (3).

Aunque la ley es aplicable a las industrias en general, se hace una excepción en caso de accidentes ocurridos en pequeñas industrias cuyo capital sea menor de diez mil pesos y que no sean peligrosas o nocivas para los obreros (4). La única Ley aplicable a estas pequeñas industrias es la de Responsabilidad del Empresario. Aunque no es nuestro propósito hacer en este estudio una comparación entre la Ley de Indemnización a los Obreros y la de Responsabilidad del Empresario, ni investigar los motivos que indujeron a los legisladores filipinos a promulgar dos leyes especiales separadas sobre accidentes industriales, en lugar de una sola, en nuestra opinión, el Poder legislativo ha tendido a proteger la continuidad en la existencia de la pequeña industria, tan esencial para la economía de la nación como la grande. Hemos de decir que no sólo es innecesaria la existencia de negligencia por parte del patrono para que sea responsable en virtud de las disposiciones de la Ley de Indemnización al Obrero, sino que también los beneficios conce-

(3) - Secc. 3, Ley nº 3428; Vid. art. 2, TRI, respecto de las entidades gubernamentales comprendidas en la Ley española.

(4) - Sección 42, Ley nº 3428.

didos por dicha Ley son mayores que los que garantiza la Ley de Responsabilidades del Empresario. Situar a la pequeña industria en el mismo plano que la grande equivaldría a imponer a aquélla una carga indebida.

En España, la Ley de Accidentes del Trabajo en la Industria tampoco comprende a los trabajadores agrícolas (5) ni al servicio doméstico (6). Aunque es cierto que existe justificación para la multiplicidad de leyes tal como ocurre en Filipinas -Leyes de Responsabilidades del Empresario y de indemnización a los Obreros, principalmente- y en España, con los diferentes sistemas para la agricultura, departamentos ministeriales, Marruecos, Guinea y trabajadores del mar (7), tal justificación es más aparente que real. Las razones que abonan la existencia de sistemas múltiples pierden su valor cuando se consideran las dificultades que tal multiplicidad origina respecto de su administración y cumplimiento o aplicación; y la desigualdad reparadora ante accidentes con idéntica repercusión para el trabajador que los sufre (8).

-
- (5) - El Decreto-Ley de 12 de junio de 1931 trata de los accidentes en la agricultura. Para un estudio completo de la Ley vid. LUIS JORDANA DE POZAS, Los Accidentes del Trabajo Agrícola en España, Madrid, 1913.
 - (6) - Art. 8, TRL, de 8 de octubre de 1932. El art. 7 enumera las industrias o trabajos comprendidos en la Ley, y el art. 4 del mismo enumera a los Agentes de la Autoridad también comprendidos. El Capítulo X de la Ley de Accidentes del Trabajo dicta normas especiales para los Ministerios, corporaciones públicas y servicios que de ellos dependen.
 - (7) - Véanse Leyes Sociales de España, Instituto Editorial - Reus, Madrid, 1931 por M. GONZÁLEZ-ROTHVASS, J. CASTAÑO TORRES, L. MARTÍN GRANIZO, E. PÉREZ BOTIJA y M. MENÉNDEZ-PIDAL, que contienen las leyes completas sobre la materia.
 - (8) - MIGUEL HERNÁNDEZ MARQUEZ, op cit., pág. 84.

La dignidad humana se ve perjudicada por esta multiplicidad, y los valores que de manera principal se ven afectados negativamente son: respeto, ilustración, rectitud y bienestar. El respeto exige que no haya discriminaciones en las indemnizaciones concedidas por iguales lesiones sufridas. La ilustración requiere que se reduzca al mínimo posible la confusión que se produce al aplicar y escoger la ley. No debe haber diferencias en las responsabilidades de las empresas, a no ser que existan sólidas bases para ello, pide el valor rectitud. El bienestar impone que el obrero sea tratado como un ser humano en cualquier industria en que pueda encontrarse con respecto a la indemnización que haya de recibir como resultado de un accidente. El objetivo que perseguimos, esto es, la promoción de la dignidad humana, nos obliga a proponer que se lleve a cabo una unificación de leyes que sustituya a la multiplicidad que actualmente existe en España y Filipinas.

B. Existencia del contrato de trabajo.

Otro de los elementos comprendidos en la expresión a "accidentes del trabajo" es la existencia de una relación patrono-obrero en el momento del accidente (9). Al objeto de asegurar el pago de indemnización por accidente industrial según la Ley de Indemnización a los Obreros, es esencial, que en el momento del accidente, existiera un contrato de trabajo

(9) - Supra, vid. p.89.

entre el reclamante y el supuesto patrono. La ley quiere que la relación entre el patrono y el obrero tenga algún elemento de certidumbre. Quiere decir, si es que no lo dispone de manera literal, que ha de existir una relación contractual real entre las partes -esto es, un acuerdo para trabajar a cambio de una compensación o salario establecidos. No sólo se ha de haber hecho el contrato de manera formal, sino que el reclamante ha de haber comenzado efectivamente a cumplir sus obligaciones, de conformidad con el contrato (10).

La ley española (11) también exige la existencia de la relación patrono obrero, si bien no exige que tal relación tenga lugar precisamente en el momento exacto del accidente, en tanto éste sea adjudicable al empleo mismo (12). - Pensamos que la existencia de la relación patrono-obrero en el momento preciso del accidente no es necesaria porque, en último análisis, la cuestión fundamental a contestar es si la industria produjo el accidente o no. La exigencia del

(10) - Se produce una situación interesante cuando uno presta servicios realmente por otro, a instancia del empresario autorizado del último. En este caso, si resulta que el empresario inductor estaba revestido de autoridad para comprometer esa ayuda o si existían circunstancias de las cuales la ley puede deducir la existencia de autoridad para obtener la ayuda de otra persona, el que realizó los servicios no es considerado como voluntario (State o/. District Ct., 138 - Minn. 116, 165 N.W. 268, L.R.A. 1918 P 200); vid. también Catalia o./The Tayabas Lumber Co., 32 Off. Gaz., 382.

(11) - Sección I, TRI.

(12) - MIGUEL HERNAINZ MARQUEZ, op. cit., p.106.

tiempo se convierte en un hecho intrascendente. (13)

Con relación a la cuestión del valor de las legislaciones española y filipina en este punto, con respecto a la dignidad humana, pensamos que la ley española contribuye a elevar dicha dignidad humana, en tanto que la ley filipina no cumple este objetivo. El valor rectitud requiere que en tanto en cuanto la industria produce la lesión ha de ser considerada responsable de ella, independientemente de la existencia de la relación técnica patrono-obrero en el momento del accidente. Consecuentemente con nuestro punto de vista, la ley filipina debería ser modificada hasta ponerla de acuerdo con la ley española que, como hemos indicado y es nuestra opinión, está de acuerdo con la dignidad humana.

C. Contratistas independientes y sus obreros sin derecho a indemnización.

El propósito de la ley es indemnizar a los obreros por los accidentes que sufran durante su trabajo. La relación patrono-obrero es básica para obtener la indemnización, de forma tal que un contratista independiente y sus obreros no tienen derecho a indemnización (14). Ni uno ni otros en-

(13) - Sobre la relación contractual, JUAN MENENDEZ-PIDAL, De recho Social Español, Vol. II, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1952, p. 252, opina que "del sentido literal de la ley al referirse, cuando define el accidente, al hecho de que el operario ejecute un trabajo por cuenta ajena, se deduce la incidencia que el contrato de trabajo tiene en los accidentes de esta naturaleza, por lo cual debe entenderse como presupuesto necesario la existencia de un contrato o una relación de trabajo -patronal".

(14) - Supra, p. 95.

tran en el concepto de obrero tal como lo define la Ley (15). Contratista independiente es quien contrata con otro la realización de un trabajo determinado en beneficio de éste, aportando los operarios necesarios y teniendo el control absoluto de los mismos, ejecutando el trabajo totalmente según sus propias ideas, o siguiendo un plan que le ha sido trazado previamente por la persona para quien realiza el trabajo, sin estar sujeto a las órdenes de ésta por lo que respecta a los detalles del mismo (16).

En España, el concepto de contratista independiente se funda en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Accidentes del Trabajo en la Industria (17). El contratista independiente está excluido de las leyes de indemnización tanto en Filipinas como en España, al objeto de no sobrecargar al propietario de la industria. Sería injusto considerar responsable a un empresario de las lesiones sufridas por obreros sobre los cuales no tiene autoridad, sino que están sometidos a la del contratista.

D. Obreros eventuales sin derecho a indemnización.

También están excluidos de los beneficios de esta Ley, junto con el contratista independiente y sus obreros, los llamados obreros eventuales o ocasionales (18). Existe empleo --

(15) - Sección 39 (b), Ley nº 3428

(16) - L.R.A. 1916 A 118,247; L.R.A. 1918 F 206; Ann. Cas. 1916 B 794.

(17) - Vid. SS. de 30 de marzo de 1929; 21 de Octubre de 1941 y 10 de marzo de 1948.

eventual (19) cuando por parte del patrono no hay interés en dar continuidad al empleo, concebido por un periodo muy corto, y cuando dicho empleo no se dirige a cumplir los fines de la ocupación o negocio del patrono. Nosotros pensamos que la ley ha excluido a los obreros eventuales de su alcance -- porque el no hacerlo así habría supuesto la imposición de cargas injustas a la industria. Esta misma exención de responsabilidad del empresario en caso de accidente sufrido por obreros eventuales se encuentra en la legislación española (20). Este punto apenas necesita de más estudio, ya que la razón -- que inspira la norma está en patente armonía con el deseo de lograr una sociedad de hombres libres.

E. Obreros contratados para el tráfico interinsular y con el extranjero.

Por disposición expresa de la ley quedan comprendidos dentro de su ámbito de aplicación, y consiguientemente disfrutan de sus beneficios, los trabajadores dedicados al tráfico interinsular y con el extranjero (21), diciendo que "cubrirá la responsabilidad de los empresarios con relación a -- sus obreros dedicados al comercio de cabotaje e interinsular,

(19) - Sección 39 (b), Ley nº 3428.

(20) - Art. 3, TRI.

(21) - Si existe derecho de compensación bajo la Ley de Indemnización a los Obreros, debe dar compensación al -- obrero aunque su derecho esté en conflicto con las -- disposiciones del Código civil o del Código de comercio, puesto que la Ley de Indemnización a los Obreros fué promulgada para abrogar los artículos 643 y 837 -- del Código de comercio.

y también al comercio con el extranjero cuando ello esté permitido por las leyes de los Estados Unidos y de las Islas Filipinas" (22).

La expresión "comercio Interinsular" tal como la usa la Ley de Indemnización a los Obreros, está tomada en un sentido amplio que comprende el tráfico de cabotaje y el interinsular, incluyendo todos los embarques, que tengan lugar en las Islas y entre éstas en barcos de matrícula filipina. No se limita solamente al embarque hecho de un puerto de una isla a otro de otra isla diferente (23).

En España, los accidentes de trabajo en el mar se rigen por una legislación independiente (24). La ausencia en Filipinas de una ley especial que rija este tipo particular de accidentes del trabajo puede atribuirse a la mayor simplicidad de las transacciones marítimas en este país, comparadas con el más extenso tráfico marítimo español, tanto entre sus propios puertos como con el mundo exterior. Siendo esto así, es nuestro meditado parecer que la ley filipina, en su estado actual, cumple el objetivo de la dignificación humana, sin que sea necesaria, en el caso de que el tráfico marítimo de Filipinas se haga más extenso, para la realización de los

(22) - Sección 38, Ley nº 3428. Obsérvese que la ley hace alusión a las reglas de conflicto de leyes con relación a los obreros dedicados al comercio con el extranjero.

(23) - Vid. Enchico c./Dy-Linaco, G.R. nº 35584, 3 de noviembre de 1932, Gac. Of. 1713; Abueg et al. c./San Diego; Salvación et al. c./San Diego; Oching et al. c./San Diego, G. A.-G.R. nºs. 773, 774 y 775, 17 de diciembre de 1946 (L.J. Vol. XII, p. 223).

(24) - Decreto de 4 de junio de 1940.

valores humanos, la promulgación de una legislación separada.

N. Obreros contratados dentro o fuera de Filipinas.

Los obreros lesionados fuera del territorio filipino pueden invocar la aplicación de los beneficios de esta ley, sujetos también, como hemos indicado en el número anterior, a las reglas de conflicto de leyes.

"Sección 33: Lesiones sufridas fuera de las Islas. - Cuando un trabajador contratado en las Islas Filipinas sufra una lesión personal por accidente ocurrido durante su trabajo, tendrá derecho a indemnización según la legislación de -- las Islas aunque sufra la lesión fuera de éstas.

"Cuando un trabajador contratado fuera de las Islas - Filipinas sufra una lesión mientras está ocupado en los negocios de su patrono y tal lesión le dé derecho a indemniza- - ción según la ley del territorio o país en que fué contratado, puede reclamarla de su patrono en estas Islas si sus dere- chos son tales que pueden ser fácilmente determinados y reco- nocidos por los Tribunales" (25).

El propósito de esta disposición es asegurar al traba- jador filipino el respeto a su dignidad humana. Se basa so- bre la suposición de que la Ley filipina de Indemnización a los Obreros contribuye a la participación de poder, riqueza, bienestar, ilustración, respeto, afecto, rectitud y habilidad - con relación al obrero filipino, de mejor manera que si éste se sometiera a leyes de indemnización extranjeras.

IX. LESIONES QUE DAN DERECHO A INDEMNIZACION

- A. MOTIVOS DE INDEMNIZACION POR LESIONES.**
 - B. SIGNIFICACION DE LAS EXPRESIONES "DERIVADO DE SU EMPLEO" Y "DURANTE EL DESEMPEÑO DEL MISMO".**
 - C. CASOS PRACTICOS.**
 - D. COMPARACION Y CRITICA DE LOS REQUISITOS DOCTRINALES.**
 - E. RELACION ENTRE EL DAÑO RESULTANTE Y EL ACCIDENTE COMO CAUSA DE AQUEL.**
-

A. Motivos de indemnización por lesiones.

"Cuando un obrero sufra una lesión a causa de cualquier accidente derivado de su empleo y ocurrido durante el desempeño del mismo, o contraiga la tuberculosis y otra enfermedad directamente producida por el empleo, o bien -- agravada por la naturaleza del trabajo, o resultante de ésta, el patrono indemnizará en la cantidad y a la persona -- que luego se especifican..." (1).

Según nuestra Ley hay dos motivos por los que se -- puede obtener indemnización: el accidente y la enfermedad. En otras palabras, la Ley de Indemnización al Obrero es una disposición omnicomprensiva, en el sentido de que toma

en consideración ambas contingencias, accidente y enfermedad; no sucede lo mismo en España, donde, si bien en la Ley de Accidentes del Trabajo en la Industria se habla de enfermedades que tienen su origen en el trabajo hay una ley separada y especial para las enfermedades profesionales - (2). Esta diferencia entre los dos sistemas legales, más las limitaciones de tiempo y espacio impuestas por la naturaleza de esta tesis, nos obligan a concentrar nuestra atención solamente sobre los accidentes del trabajo en sentido estricto, tal como indica el nombre de nuestro estudio, haciendo tan sólo un ligero examen de las enfermedades profesionales, que requieren estudio separado si se han de tratar con profundidad.

Con referencia a la disposición antes citada, encontramos que los dos elementos básicos que aseguran la reparación por accidentes y enfermedades están constituidos - por los hechos siguientes: 1º la lesión corporal ha de derivarse del empleo y 2º ha de ocurrir durante el desempeño del mismo. Estos dos elementos son clave para obtener indemnización al amparo de nuestra Ley de Indemnización a los Obreros. En los números siguientes de este capítulo haremos un completo análisis con la correspondiente crítica. En la Ley española, la expresión correspondiente es "con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena" (3). El sistema español no ha encontrado ne

(2) - Decreto de 10-1-1.947 reglamentado por O. de 19-7-1949
(3) - Art. 1, TRI.

cesario el requisito de la ley filipina de que "ha de ocurrir durante el desempeño del mismo". En otras palabras, todo lo que exige la ley española es la relación causal entre el accidente y el empleo. Como manifestamos en la parte crítica, la Ley filipina se encuentra más lejos de lo que sería de desear en una perfecta comunidad humana que la Ley española.

B. Significación de las expresiones "derivado de su empleo" y "durante el desempeño del mismo".

Para que la lesión sirva de base al pago de una indemnización ha de surgir de cualquier accidente "derivado de su empleo y ocurrido durante el desempeño del mismo". Ninguno de estos dos elementos es bastante por sí solo. Se sufre una lesión en el curso del desempeño del empleo cuando existe una conexión causal entre las condiciones en las cuales ha de realizarse el trabajo y la lesión resultante. Si la lesión pudo haber sido tenida en cuenta por una persona prudente familiarizada con la situación considerado en conjunto, puede decirse resultante del empleo. El peligro causativo ha de ser peculiar del trabajo, y no común a todo lo que le rodea. No es necesario que hubiera sido previsto o esperado (4), pero el suceso debió tener su origen en un riesgo relacionado con el empleo, y seguirse de él como una consecuencia racional.

(4) - En *McNicol*, 215 Mass. 497, 102 N.E. 697, L.R.A. 1916 A 306.

En el caso *Afable et al. v. Singer Sewing Machine Co.*, (5), el Tribunal Supremo de Filipinas dijo: "La frase debida a y en consecuencia de empleada en la Sección 2 de la Ley nº 3426, fué cambiada en la Ley núm. 3812, diciéndose derivado de su empleo y ocurrido durante el desempeño del mismo. Discutiendo esta frase, el Tribunal Supremo de Illinois, en el caso *Muller Construction Co. v. Industrial Board* (283 Ill., 148; 118 N.E. 1028; 1 W.3.1, 943) dijo: "Las palabras derivado de su empleo se refieren al origen o causa del accidente, y son descriptivas de su carácter, en tanto que las palabras durante el desempeño del mismo hacen referencia al tiempo, lugar y circunstancias en que se produce el accidente. (*Fitzgerald v. Clark e Hijos*, 1 B.W.S.C.C., 197; *Dietzen Co. v. Industrial Board*, 279 Ill. 11; 116 N.E. 684). No fué la intención de los legisladores al utilizar estas palabras, constituir al empresario en asegurador de todas las lesiones accidentales que puede sufrir un obrero mientras trabaja, sino solamente de aquellas lesiones que surjan como consecuencia de los riesgos peculiares de la naturaleza del trabajo, dentro del ámbito del empleo del trabajador o incidentalmente, y accidentes en los cuales sea posible referir la lesión a algún riesgo o peligro al que esté expuesto el obrero en un grado especial por razón del empleo. Los

riesgos a los cuales están igualmente expuestas todas las personas análogamente situadas y que no son referibles en una manera especial al empleo determinado, quedan excluidos".

C. Casos prácticos.

Creemos conveniente presentar algunas sentencias norteamericanas y filipinas que ilustren el significado de las expresiones "derivado de su empleo" y "durante el desempeño del mismo", dada la importancia que ambas tienen en la legislación de accidentes laborales.

Un obrero abandonó su trabajo y montó en su bicicleta, saliendo con dirección a su domicilio. Cuando iba por la calle chocó con un automóvil conducido por otro obrero, sufriendo lesiones de las que resultó su muerte. Sosteniendo que el accidente no se derivó del empleo ni tuvo lugar durante el desempeño del mismo, el Tribunal declaró: "para que se dé la condición de lesión sufrida durante el desempeño del empleo ha de demostrarse que la lesión tuvo su origen en el trabajo, y además que fue sufrida por el obrero mientras estaba ocupado en los asuntos del empresario. Si se concede que la lesión tuvo su origen en el trabajo, será todavía necesario, en nuestra opinión, demostrar que el obrero estaba ocupado en los asuntos de su patrono (6).

El fallecido, en otro caso, era un capataz de línea

(16) - Indemnity Co., o./Dinkins (Tex. Div. App.), 211 S.W. 249 (1919); 18 A.C.C.A., 1034; 4 W.C.L.J. 294; en Peter S. Winchester, 28 A.R.U.S.C.C. 262; en Julius Rosenberg, 28 A.R.U.S.C.C. 263; Kirby Lumber Co., o./Scurlock, Tex. Div. App. (1921); 229 S.W. 975.

al servicio del demandado. Sus obligaciones consistían en cuidar de las distintas líneas de reparto de cerveza, viendo si se llevaban a cabo debidamente, y los sábados repartir cerveza y cobrar el importe del reparto. En la noche en que se produjo el hecho que causó su muerte, el capataz en cuestión repartía la cerveza por diversos domicilios de Atlantic City, dejando su vehículo en la calle, un tanto apartado, cuando al volver a él fué asaltado por un desconocido, que le hizo un disparo. El obrero subió a su camión y volvió a la cervcería, donde rindió cuentas a su patrono del dinero que se le había confiado y que había cobrado, después de lo cual ingresó en un hospital, donde falleció diez días más tarde, a consecuencia de una herida de arma de fuego (7).

En este caso el motivo de la agresión fué, evidentemente, el robo, no habiendo relación directa entre el trabajo hecho por la víctima del robo y la agresión. La víctima se lesionó a causa de un riesgo al que está expuesto todo el mundo.

Otro caso es el de la muerte de Ildefonso Cuarto. El 24 de enero de 1933 este obrero entró al servicio del demandado, asignándosele el puesto de guarda de almacén, en las minas del demandado en Itogon, Benguet, Mountain Province, trabajo que comenzó a desempeñar, y por el que percibía un salario de ₱ 1,10 diario. Siendo soltero, al ocurrir su muerte no dejó más dependiente que la demandante, madre suya. Sobre las 17,25 ho--

(7) - Schmoll c./Weisbrod and Hess Brewing Co., 89 N J L 150; 97 Atl., 1732.

ras de la tarde del 28 de febrero de 1933, después que dicho obrero hubo cerrado el almacén a su cargo, se dispuso a regresar a su domicilio, abandonando la mina, y en lugar de seguir el camino que ordinariamente utilizaba subió a un vagón empleado exclusivamente en el transporte de pilares de cemento, y no de pasajeros, haciendo arrancar el vagón el conductor, con el obrero dentro. El vehículo marchó con tal velocidad que en una curva descarriló; después de haber caído, la pierna izquierda de Ildefonso quedó cogida por el vagón, que fué a estrellarse contra un obstáculo, produciendo la fractura de la pierna. Fué trasladado al hospital de Baguio, donde estuvo a costa del demandado hasta el 21 de julio de 1933, en que falleció de tuberculosis pulmonar.

El Tribunal, después de estudiar las escasas pruebas presentadas en el juicio, llegó a la conclusión de que el viaje que el fallecido hizo en el vagón nada tenía que ver con su trabajo de guarda de almacén; ni siquiera era dicho vagón medio necesario de transporte para el regreso a su domicilio, al que debí volver una vez terminado su trabajo. Con respecto a esta cuestión, se determinó además que el uso del vagón por obreros distintos del conductor del mismo estaba prohibido por el empresario. Creemos, y por lo tanto sostenemos, que puesto que Cuarto no se lesionó como consecuencia de y durante su trabajo, la demandante, heredera y dependiente suya, no tenía derecho a indemnización alguna según ley (8).

(8) - Cuarto c./Itogen Mining Company, Inc., C.R. nº 42393, 17 de noviembre de 1943.

D. Comparación y crítica de los requisitos doctrinales.

Ya hemos señalado que en Filipinas la Ley habla de lesión "derivada de su empleo y ocurrida durante el desempeño del mismo", mientras que en la ley española se lee "con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena" (9). También hemos apuntado que el único requisito exigido por la legislación española es la relación causal entre el trabajo y el accidente (10). En Filipinas, en cambio, han de concurrir dos circunstancias: que el accidente tenga lugar durante el tiempo de trabajo, y la relación causal entre el accidente y el empleo.

La teoría del riesgo profesional, aceptada en ambos países, hace responsable al empresario porque es ella la crea

(9) - Supra, vid. p. 102.

(10) - Repetidas veces el Tribunal Supremo de España se ha mostrado partidario de esta doctrina. Vid. 88.30 de mayo, 22 y 24 de septiembre de 1941; 28 de septiembre de 1942; 13 de febrero de 1943 y 13 de mayo de 1941. MIGUEL HERNAINZ MARQUEZ, op.cit., p.98, dice que "el marco de la causalidad que supone la ocasión del trabajo queda enteramente comprendida con aquellas lesiones o daños que son consecuencia del mismo". (Subrayado por el autor). CARLOS GARCIA OVIEDO, Tratado Elemental de Derecho Social, 5ª Edición, C.E.H.A., Madrid, 1952, p.361, dice: "El Trabajo ha de ser causa del accidente-atropello por el camión que se conducía, caída de un andamio-u ocasión de él-atropello en una vía pública, en la que se trabaja, por un carro - que por ella transitaba-. Pero la relación entre una cosa y la otra no puede faltar" para que el accidente del trabajo exista.

dora del riesgo (11). Siguiendo la teoría aceptada, en tanto en cuanto pueda probarse que el accidente surgió del trabajo, ello será suficiente para hacer responsable al empresario(12). Añadir la carga de probar que el accidente tuvo lugar durante el tiempo de trabajo sería ir en contra de la teoría admitida e imponer un requisito innecesario. Hay casos en los que el accidente se manifiesta como una clara consecuencia del empleo, aunque no se haya producido durante el tiempo de trabajo (13). Esto es particularmente cierto y evidente en los casos de enfermedades directamente resultantes del trabajo y cuya aparición manifestada tiene lugar fuera de las horas dedicadas al empleo.

-
- (11) - "Basta al demandante con probar la relación de causalidad escribe POSADA-"entre el objeto y el daño, para poder exigir la reparación. Por tanto si una persona crea u organiza una industria, una explotación, en la que como elementos entran los operarios y los útiles de trabajo, debe saber que su funcionamiento, prescindiendo de toda idea de falta, y sólo por los peligros que entraña, ocasiona algunos daños, algunos perjuicios que debe soportar, pues constituyen un riesgo inherente al mismo trabajo". (CARLOS G. POSADA: Los Seguros Sociales Obligatorios en España, 3ª edición Revista de Derecho Privado, Madrid 1953 p. 104)
- (12) - Según E. García Ormachuea, Jurisprudencia sobre accidentes del trabajo, Madrid, 1935, p. 9, "La reparación de los daños sufridos por víctimas del trabajo constituye, por el mero hecho de su ocurrencia, una carga de la industria o explotación en que se producen, como cualquier otro gasto de la misma, de modo que basta el hecho del accidente para que surja el derecho del obrero perjudicado o de sus familiares para obtener una compensación adecuada".
- (13) - Son accidentes del trabajo tenidos en cuenta por la Jurisprudencia los producidos: cuando el obere va a su función (S.T.S. de 25 de febrero de 1930), o cuando se dirige desde el lugar de su residencia a la dehesa para comenzar su trabajo (S.T.S. de 9 de octubre de 1942), o al retirarse de la estación o terrenos donde había efectuado su labor y por los que tenía que pasar para ir a su domicilio (S.T.S. de 18 de diciembre de 1940), etc.

Después de detenido estudio, hemos llegado a la conclusión de que la doctrina dominante en Filipinas, tal como la hemos presentado en los casos prácticos anteriormente expuestos, es errónea, en tanto que la doctrina que prevalece en España merece ser seguida. Creemos que es éste un punto claro y concreto con relación al cual Filipinas tiene algo que aprender de España.

Considerando el problema desde el punto de vista de los valores observamos como el sistema legal filipino viola el principio de participación y formación de los valores, y de una manera muy particular en lo que se refiere a rectitud y riqueza. La rectitud exige que haya acuerdo entre la teoría inspiradora de la Ley y la práctica de esta teoría en forma de elementos básicos constitutivos de la existencia de un accidente de trabajo. El requisito impuesto por la Ley de Indemnización a los obreros consistente en que el accidente ocurra "durante el desempeño del empleo", al necesitar la concurrencia del tiempo infringe la rectitud desde el momento en que el empresario puede exponerse de responsabilidad aun cuando el accidente "surja del empleo". El valor riqueza, por su parte, requiere que no se prive al trabajador lesionado o a los que de él dependen, de los ingresos necesarios e indispensables para cubrir las pérdidas económicas producidas por el accidente.

2. Relación entre el daño resultante y el accidente como causa de aquél.

Para que la lesión por la que se pide indemnización sea

realmente indemnizable, ha de ser resultado de un accidente, concurrente con él, efecto suyo, o estar en alguna manera relacionada con dicho acontecimiento. Dicho de otra forma, ha de haber relación causal entre el accidente y la lesión resultante (14). Se ha sostenido repetidas veces que la concurrencia de accidente y lesión es una condición previa (15) - al derecho de indemnización.

La razón de esta regla estriba en que si la muerte o la incapacidad sobrevinieran a un obrero durante su empleo y resultantes de causas naturales se considerarán como "accidente" en el sentido de la Ley de Indemnización a los Obreros, el efecto de la regla sería convertir al empresario en asegurador de la vida y la salud del obrero (16).

Esta norma constituye uno de los puntos recomendables de ambas legislaciones nacionales.

Al llegar a este estado de nuestro estudio, podemos hacer una breve recapitulación de los elementos constitutivos del concepto de accidente del trabajo en la industria en Filipinas, una vez que hemos completado la presentación de tales elementos constitutivos, hecha en los estudios precedentes. Cuando concurren las siguientes circunstancias, se produce accidente del trabajo, según la legislación filipina:

-
- (14) - La norma se basa en el art. 1º del THI. (España) y en la Sección 2 de la Ley de Indemnización a los Obreros (Filipinas).
- (15) - *Caluso v. State*, 149 A 778, 780, 111 Conn. 128.
- (16) - *Graham v. R. F. Pearson Co.*, 31 A. 247, 284, P.A. 348.

1. Hecho casual o imprevisto que produce lesión.(17)
2. Existencia de relación patrono-obrero (18).
3. Accidente surgido del empleo (19).
4. Accidente ocurrido durante el curso del empleo (20).
5. Existencia de relación causal entre el accidente y la lesión resultante (21).

(17) - Supra, vid. pp. 87-88
(18) - Supra, vid. p. 95.
(19) - Supra, vid. pp. 102-103
(20) - Supra, vid. pp. 102-103
(21) - Supra, vid. p. 108.

X. LESIONES NO INDEMNIZABLES

- A. MOTIVOS PARA LA NO CONCESION DE INDEMNIZACION.**
 - B. LESION INTENCIONADA POR PARTE DEL OBRERO.**
 - C. EMBRIAGUEZ.**
 - D. NEGLIGENCIA NOTORIA.**
 - E. PELIGROS A LOS CUALES ESTA EXPUESTO EL PUBLICO.**
-

A. Motivos para la no concesión de indemnización.

Hay tres motivos expresamente mencionados en la Ley de Indemnización al Obrero que autorizan a denegar la indemnización. La Ley dispone que "No habrá lugar a indemnización por las lesiones causadas: (1) a consecuencia del propósito voluntario del obrero de causar tal lesión, ya a su propia persona ya a otra; (2) por embriaguez del trabajador que sufrió el accidente; y (3) por negligencia notoria del mismo" (1).

A continuación estudiaremos brevemente cada uno de estos motivos.

B. Lesión intencionada por parte del obrero.

Este motivo de la lesión infligida voluntariamente(2)

-
- (1) - Sección 4, Ley nº 3428.
 - (2) - Idem.

es tan evidente que apenas si necesita ser estudiado (3). También constituye en España una de las circunstancias que dan lugar a denegar la indemnización (4).

En nuestra opinión, este motivo está bien establecido, ya que la intención de la ley es claramente ayudar al infortunado obrero que sufre una lesión sin buscarla, y no indemnizar las lesiones que se buscaron de manera deliberada. No parece que haya en toda la Ley.

C. Embriagues.

La lesión sufrida a consecuencia de la embriagues del obrero lesionado no es indemnizable (5). La Ley de Indemnización al Obrero dispone "no habrá lugar a indemnización por las lesiones causadas por embriagues del trabajador que sufrió el accidente" (6).

La legislación no quiere proteger al obrero irresponsable que sufra una lesión provocada por la embriagues, imponiendo, en cambio, a tal obrero, una penalidad consistente en la no concesión de indemnización por la lesión produ-

-
- (3) - Pero si el obrero se mata en un acceso de delirio o locura, causados por el dolor de su lesión, su muerte no se considera causada intencionalmente, de manera que impida a sus dependientes obtener la indemnización. *Lupfer c./Baldwin Locomotive Works*, 112 A 458, 269 Pa. 275.
- (4) - Sección 1, TRI.
- (5) - Si un obrero siderúrgico trabajando en estructuras se encontraba embriagado en el lugar donde, de caerse, probablemente resultaría muerto, cayéndose efectivamente a causa de su embriagues, habría que denegar la indemnización. *Shearer c./Niagara Falls Co.*, 150 N.E. 604 242 N.Y. 70.
- (6) - Sección 4, Ley nº 3428.

cida (7).

No solo se va en contra del bienestar cuando un obrero se embriaga durante el trabajo, sino que si tal estado se hace habitual se convierte en un reto a los esfuerzos de la sociedad para lograr ciudadanos sanos. La habilidad sufre de manera precisa cuando un operario se encuentra embriagado, porque no solo no está en condiciones de desarrollar y perfeccionar su habilidad, sino que se halla privado del uso de esa habilidad.

Aunque en la legislación española de accidentes industriales no hay una norma legal definida que exima al empresario de responsabilidad por las lesiones sufridas por el obrero embriagado, durante su trabajo (8), la jurisprudencia asequible al investigador revela que los tribunales españoles (9) han sostenido la exención de esa responsabilidad del patrono (10). Desde el punto de vista español la embriaguez del obrero se considera como un espontáneo deseo

- (7) - CARLOS DEL PESCO Y CALVO, Manual de Accidentes del Trabajo, Librería General de Victoriano SUAREZ, Madrid, 1946 p.151, dice que "la embriaguez en un estado buscado de propósito por el operario contraviniendo sus deberes, y al contravenir los, rompe la relación de causalidad, ya que estos accidentes se deben, no al trabajo mismo, sino al estado en que el trabajo se presta".
- (8) - MIGUEL HERNAINZ MARQUEZ, Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, 2ª ed., Madrid, 1953, pp.130-131, dice que el patrono incurre en responsabilidad si, no obstante la embriaguez del obrero, le permite continuar trabajando en ese estado.
- (9) - SS.de 24 de abril de 1.925; 8 de julio de 1930; 12 de septiembre de 1952.
- (10) - Aun en estado de embriaguez, si se sufre un accidente, puede ser indemnizable cuando la causa del mismo no es la embriaguez. Vid. sentencia de 27 de febrero de 1948.

de su voluntad o una actitud gravemente negligente, encajando así dentro de la categoría de lesiones voluntariamente producidas, tal como las entiende la ley de accidentes industriales de Filipinas (11). Consecuentemente, también en este punto hallamos un paralelismo entre los criterios filipino y español, cooperando ambos a realzar los valores humanos.

D. Negligencia notoria.

Un tercer motivo ofrecido por la legislación filipina para denegar la indemnización es la negligencia notoria por parte del obrero que sufre el accidente (12). Mas, ¿qué es lo que constituye la negligencia notoria?

No hay definición de este concepto tal como se emplea en la Ley de Indemnización al Obrero, de forma que nos es necesario estudiar los casos fallados por los Tribunales Supremos de Filipinas y Estados Unidos, al objeto de deducir su significación. "Se define la negligencia notoria como la ausencia de incluso cuidado y diligencia e-

(11) - Sección 4, Ley nº 3428, dice claramente que la embriaguez es un motivo para denegar compensación. En España la embriaguez cabe también dentro de la doctrina de fuerza mayor (S. de 12 de septiembre de 1924), así que varía mucho la doctrina aplicable. Como dice MIGUEL HERNAÍNZ MARQUEZ, Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, 2ª Edición, Editorial Revista, de Derecho Privado, Madrid, 1953, p. 130, "nuestros textos legales en vigor no hacen ninguna mención a las consecuencias que la embriaguez pueda tener en los accidentes ocurridos a los trabajadores en tal estado".

(12) - Sección 4, Ley nº 3428.

mentales" (13). En otro caso norteamericano la negligencia notoria se definió como "la falta absoluta de cuidado capaz de hacer surgir la presunción de que la persona que comete la falta tiene conciencia de las probables consecuencias de su carencia de cuidado, siendo indiferente, o peor aun, al peligro de lesiones a personas o bienes ajenos. La negligencia ha de alcanzar un grado atrevido de desprecio hacia la seguridad de personas o bienes" (14).

En nuestra jurisprudencia la negligencia notoria ha sido definida como una especie de negligencia que comprende inadvertencia, sino un daño intencionado o algo a él equivalente (15). Un acto notoriamente negligente es el — que se ha hecho intencionalmente o bajo circunstancias capaces de transformar en intencional el desprecio y voluntario y desconsiderado de los derechos de los demás. La negligencia notoria en el derecho filipino es un término técnico prácticamente equivalente a daño intencional; la intención se expresa, o se deduce de las circunstancias (16).

En el derecho español encontramos igualmente la designación de indemnización en caso de negligencia, aunque la ley española no habla expresamente de negligencia notoria

(13) - Mobile y K. R. Co. c./Ashcroft (1872) 48 Ala. 15.

(14) - Wall c./Cameron (1882) 6 Colo. 275.

(15) - Daro et al. c./Compañía Marítima, 36 Gac. Of., 1319.

(16) - Theby c./Wisconsin Power and Light Co. (1929) 197 Wis. 601, 222 N.W. 826.

(17) como ocurre en la filipina. Sin embargo, la ley española alude claramente a la concesión de indemnización en el caso de llamado "imprudencia profesional", resultando así la exclusión de la indemnización de toda negligencia, incluyendo lo que se denomina en nuestra legislación negligencia notoria (18).

Ambas leyes, la española y la filipina, aun no con plena claridad la española, cumplen en este punto el propósito de los legisladores al poner en vigor estos preceptos. El valor rectitud resulta particularmente realizado desde el momento en que la justicia debida tanto al patrono como al obrero exige que no se indemnice al trabajador que sufre una lesión por negligencia equivalente a un dolo intencional.

E. Peligros a los cuales está expuesto el público.

Aunque la ley no lo menciona de manera expresa, se deduce de la expresión "derivado de su empleo y cargo -

- (17) - Art.6, TRI, dice que la imprudencia profesional o sea la que es consecuencia del ejercicio de un trabajo y derivada de la confianza que éste inspira, no exime al patrono de la responsabilidad.
- (18) - La Ley española deja un amplio margen en cuanto a la verdadera significación de "imprudencia extraprofesional, incluyendo imprudencia grave y menos grave. Sobre este punto, MIGUEL HERNAINZ MARQUEZ, op cit., p.123, dice que se coloca el trabajador que la realiza en una situación bien cercana a la del dolo. Según, CARLOS DEL PEGO Y CALVO; op.cit., p.156, la imprudencia extraprofesional, la constituyen cuando menos de actos insensatos, de los que solo por realizarlos, se desprende el resultado, cuando no los dolosos, en las que la intención juega un papel preponderante. Y M. GARCIA CORA CHAN, Accidentes del Trabajo en la Industria, Madrid -- 1953, p.228, afirma el estado de confusión en la materia: "En la práctica, cuando el accidente ha ocurrido trabajando o ha tenido su origen en actos propios del trabajo, resulta difícil diferenciar la imprudencia profesional de la extraprofesional....."

durante el desempeño del mismo" (19). En España equivale a la denegación de indemnización sobre la base de la -- fuerza mayor (20). Evidentemente, no sería justo otorgar indemnización cuando el accidente es debido a un peligro al cual está igualmente expuesto al público en general:

El valor rectitud exige que no se haga al patrono responsable indebidamente de un accidente que no tiene relación causal con la ejecución del trabajo por uno de sus obreros (21).

-
- (19) - Sección 2, Ley nº 3428
(20) - Art. 6. párrafo 1º, TRI.
(21) - Veanse las sentencias del Tribunal Supremo de España considerando como casos de fuerza mayor, el huracán (S. de 14 de febrero y de 14 de marzo de 1933), el hundimiento (S. de 3 de noviembre de 1933), las desgracias producidas por ejercicios militares de tiro (S. de 22 de abril de 1930), y la guerra (SS. de 4 de febrero de 1941) 4 de abril de 1.941, 23 de mayo de 1941, 19 de febrero, 27 de noviembre y 9 de julio, todas de 1942).

XI. INDEMNIZACION EN CASO DE FALLECIMIENTO

- A. MONTANTE DE LA INDEMNIZACION.**
 - B. CASO DE FALTA DE ACUERDO ENTRE LAS DIVERSAS PERSONAS LLAMADAS A PARTICIPAR EN LA INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO.**
 - C. BASES DE COMPUTACION DE LA INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO.**
 - D. PERIODOS DE INDEMNIZACION.**
 - E. MOMENTO EN QUE HA DE EMPEZAR EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO.**
-

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Indemnización a los Obreros vigente en Filipinas, procede la indemnización bien sea por muerte o por incapacidad. En el presente capítulo, tendremos oportunidad de observar cómo la dignidad humana es realizada o atropellada según los casos, al asignar indemnización a un obrero que muere como consecuencia de su trabajo y de resultas de un accidente ocurrido en el mismo.

A. Montante de la indemnización.

Si la enfermedad contraída o la lesión sufrida por el trabajador, tal como se expresa en la Sección 2 de la Ley de Indemnización a los Obreros, le produjeran la muer

te dentro de los dos años de la fecha de dicho accidente o enfermedad, el empresario hará efectiva la indemnización a las personas habilitadas para recibirla, y en el caso de que éstas no existan, pagará a la persona que re presente al obrero fallecido los gastos de entierro, sin que éstos puedan exceder de doscientos pesos, y pagará también a las personas que más abajo se mencionan, observando el orden de prelación y los períodos aquí establecidos, una indemnización semanal equivalente a los porcentajes del sueldo medio semanal del obrero, determinado en la forma que dispone la Sección 19 de esta ley, que a continuación se fijan:

(a) A la viuda o viudo dependiente del fallecido, en caso de que no haya hijos que dependan de él, el cuarenta y cinco por ciento.

(b) A la viuda o viudo dependiente, en caso de — que haya uno o dos hijos que dependan del fallecido, el cincuenta por ciento, y si hay tres o más hijos dependiendo, el sesenta por ciento. La indemnización a la viuda o viudo será para uso o beneficio de la viuda o viudo y de los hijos sujetos a la madre o al padre, y el Comisario para la Indemnización a los Obreros podrá, de vez en cuando, reajustar la indemnización entre ellos de la manera — más equitativa posible.

(c) Si no queda viuda o viudo dependiente del fallecido, sino uno o más hijos dependientes, el hijo o hi—

jos percibirán el cuarenta por ciento con el diez por ciento adicional por cada hijo que exceda de dos, hasta un máximo del cincuenta por ciento, que será distribuido por partes iguales entre los hijos, si son más de uno.

(d) Si no queda cónyuge supérstite ni hijos dependientes, pero, en cambio, existe padre o madre dependientes del fallecido, el cuarenta por ciento para el padre o la madre, si la dependencia era total, o el veinticinco por ciento si dependían sólo parcialmente, y si ambos progenitores dependían del fallecido, cada uno percibiría la mitad de dicha indemnización. Si no existiesen padres, pero sí abuelos dependientes, se pagará la misma indemnización que para el padre o la madre.

(e) Si no existiera viuda, viudo, hijo, padres ni abuelos, pero superviviera al fallecido un nieto o un hermano que dependiera de aquél, o dos o más de astos, se pagará el veinticinco por ciento por cada individuo dependiente del fallecido y el cinco por ciento por cada individuo dependiente del fallecido y el cinco por ciento adicional por cada uno más que dependiera de él, hasta un máximo del cuarenta por ciento, que será repartido por partes iguales entre los que dependan del causante, si hubiere más de uno.

(f) Si no existieran personas dependientes le-

gítimas, el patrono abonará la suma de mil pesos al Fondo de Indemnización a los Obreros, teniendo en cuenta que el mencionado Comisario ejercerá el control directo y la supervisión sobre estos fondos, sujeto a los requisitos generales de intervención, y que serán empleados en la rehabilitación de lesionados en la industria.

Cuando haya varias personas con derecho a indemnización, y no haya acuerdo con relación a la parte de ésta que cada uno ha de recibir, la Comisión de Indemnización a los Obreros actuará como árbitro y determinará la parte que se ha de adjudicar a cada beneficiario. (1)

En España, la disposición correspondiente a esta materia está concebida en los siguientes términos:

"Si el accidente produjese la muerte del obrero, el patrono queda obligado a sufragar los gastos de sepelio — por la cantidad que fija el artículo siguiente, y, además, a indemnizar a la viuda, descendientes legítimos o naturales reconocidos, menores de dieciocho años, o inútiles para el trabajo, y hermanos huérfanos menores de dieciocho años, que se hallasen a su cargo y ascendientes, o al Fondo de — garantía en la forma y cuantía que establecen las disposiciones siguientes:

1ª. Una renta igual al 75% del salario que disfrutara la víctima cuando ésta dejase viuda con uno o más hijos o nietos huérfanos menores de dieciocho años o mayores de

(1) - Véase Sec. 8, Act. N° 3428.

dicha edad inútiles para el trabajo, que se hallaban a su cuidado.

2ª. Una renta igual a la anterior cuando deje dos o más hijos o nietos huérfanos menores de dieciocho años o -- mayores inútiles para el trabajo.

Una renta equivalente al 50% del salario cuando quede un solo hijo o nieto huérfano menor de dieciocho años o mayor de esas edad inútil para el trabajo.

3ª. Una renta equivalente al 37 y $\frac{1}{2}$ % del salario a la viuda con hijos mayores de dieciocho años o sin hijos ni otros descendientes del difunto.

En el concepto de hijos se entenderán también los -- asimilados con arreglo a los preceptos contenidos en el mismo Reglamento.

4ª. Con una renta del 40% del salario, a los padres o abuelos de la víctima, pobres y sexagenarios o incapacitados para el trabajo, si no dejase viuda o descendientes, siempre que sean dos o más los ascendientes. En el caso de quedar uno sólo, la indemnización consistirá en una renta equivalente al 30% del salario que percibiera la víctima.

5ª. Con el capital preciso para constituir una renta del 30% del salario, calculado conforme al art. 37 de este Reglamento al Fondo especial de garantía, siempre que el -- obrero fallecido carezca de los derecho-habientes mencionados en los apartados anteriores.

Los hermanos huérfanos a que se refiere el párrafo --

primero de este artículo se consideraran en análogo situación a los jóvenes prohiados o acogidos por la víctima, sin que sea necesaria la inscripción en el Registro especial.

Las disposiciones de los números primero, segundo y cuarto serán aplicables en el caso en que la víctima del accidente sea mujer; pero la del número primero y la del tercero, sólo beneficiarán al viudo cuando su subsistencia dependiera de la mujer víctima del accidente. Las contenidas en el párrafo primero y números primero y segundo de este artículo serán aplicables a los hijos adoptivos y a los jóvenes prohiados o acogidos por la víctima, siempre que estos últimos estuvieran sostenidos por ella, con la antelación, por lo menos, de un año al tiempo del accidente y no tengan otro amparo.

La inutilidad o incapacidad de los derechohabientes a que se refiere este artículo, ha de entenderse no producida por accidente del trabajo que hubiesen sufrido y por el cual perciban renta igual o superior a la que, en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, le correspondería percibir.

En los Registros civiles correspondientes a cada localidad, se abrirá un Registro especial donde se hará constar el nombre de cada acogido, el de la persona que lo acogja y la fecha del acogimiento, sin que pueda reclamarse derecho a indemnización estando incumplido este precepto"(2)

(2) - V. art. 29, R. Acc.

Con objeto de que pueda obtenerse una idea gráfica y clara de los dos sistemas, ofrecemos a continuación una tabla comparativa de indemnización en caso de fallecimiento, deducida de las disposiciones vigentes a este respecto en España y en Filipinas:

(Véase cuadro adjunto)

I N D E M N I Z A C I O N E N C A S O D E F A L E C

CLASIS DE PERSONAS DEPENDIENTES		Montante de indemnización por semana (1)	
		FILIP.	ESPAÑA
1.	(1. FILIPINAS: Viuda o viudo dependiente sin hijos.	45%	
	(2. ESPAÑA: Viuda con hijos mayores de 18 años o sin hijos ni otros descendientes del difunto.....		57 1/2%
2.	(1. FILIPINAS: Viuda o viudo dependiente con uno o dos hijos..... Con tres o más hijos, máxima de.....	50% 60%	
	(2. ESPAÑA: Viuda con uno o más hijos o nietos huérfanos menores de 18 años o mayores de dicha edad inútiles para el trabajo, que se hallen a su cuidado (con hermanos huérfanos también).....		75%
3.	(1. FILIPINAS: Sin viuda o viudo dependiente pero con hijo o hijos dependientes..... 10% adicional para cada hijo en exceso de 2, máxima de	40% 50%	
	(2. ESPAÑA: (a) Dos o más hijos o nietos huérfanos menores de 18 años o mayores inútiles para trabajo (o hermanos también menores)..... (b) Si un solo hijo o nieto huérfano menor 18 años o mayor inútil para trabajo (o hermanos menores).		75% 50%
4.	(1. FILIPINAS: Sin viuda, viudo o hijos, pero con madre o padre dependientes (lo mismo para abuelos, si no existen padres). Totalmente dependiente... Parcialmente dependiente..... (Si son 2, la 1/2 para cada uno)	40% 25%	
	(2. ESPAÑA: Padres o abuelos de la víctima, pobres, sexagenarios o incapacitados para el trabajo si no dejase viuda ni descendientes..... En el caso de quedar uno solo.....		40% 30%
5.	(1. FILIPINAS: Sin viudo, viuda, hijos, padres o abuelos, pero hay nietos, hermano o hermana dependiente Si es uno..... 5% adicional para c/u, máxima de.....	25% 40%	
	(2. ESPAÑA (Véanse nº 3 (a) y (b)		

(1) Es un tanto por ciento del salario base.

ALIMENTACIÓN

Ante de in- ción por a (1)	Periodo de indemnización		Duración máxima	
	ESPAÑA	FILIPINAS	ESPAÑA	FILIP. ESPAÑA
37 1/2%		(a) VIUDA mientras no contrae nuevo matrimonio. (b) VIUDO durante incapacidad.	Mientras no contrae nue- vo matrimonio	208 semanas Vita licia.
75%		(a) VIUDA hasta que contrae nuevo matrimonio. (b) HIJOS hasta cumplir los 18 años; Si no está casado y si inútil, hasta duración in- capacidad.	(a) VIUDA mientras no contrae nuevo matrimonio. (b) HIJOS y NIETOS hasta cumplir 18 años.	208 semanas Vita licia.
75% 50%		Hasta cumplir 18 años; si no está casado y si inútil para el trabajo, hasta la duración de su incapacidad.	Hasta cumplir los 18 años.	208 semanas Vita licia.
40% 30%		Durante el periodo de verdadera depen- dencia.		208 semanas Vita licia.
		Hasta cumplir la edad de 18 años o si pa- sa esa edad es inú- til para trabajo has- ta la duración de la incapacidad.	Hasta cumplir la edad de 18 años.	208 semanas Vita licia.

Un análisis de ambas leyes, tal y como puede verse en esta tabla que reproducimos, pone de relieve numerosas y notables diferencias. En primer lugar, nos permitimos llamar la atención sobre el hecho de que la base para las diferencias en el montante de indemnización es el tipo de persona dependiente que ha de recibir la indemnización. En este punto, bien merece observarse el hecho de que en el sistema español los hijos están situados en la misma categoría que los nietos y los hermanos y hermanas; en el sistema filipino, en cambio, los nietos y hermanos y hermanas pueden obtener indemnización únicamente en ausencia de viudo, viuda, hijos, padres o abuelos dependientes del fallecido.

Así, y puesto que la clasificación por categorías de las personas dependientes es diferente en ambos sistemas, no puede, naturalmente, esperarse que haya una exacta equivalencia punto por punto en los montantes de indemnización para cada sección.

Al estudiar el acierto de los montantes asignados a cada tipo de persona dependiente del fallecido, habremos de guiarnos por el principio fundamental de la asignación de indemnización por fallecimiento, es decir, la asistencia y ayuda a las personas que dependían del fallecido, quienes sufren no sólo la pérdida del propio sostén y apoyo de la familia, sino también la de los ingresos necesarios para mantener a las dichas personas dependientes

de aquél (3). La indemnización no es una herencia, como algunos autores sustentan (4). Aceptando la teoría de la asistencia o ayuda y rechazando la teoría de la herencia, examinemos los diversos montantes de indemnización otorgados por la ley a las personas dependientes del fallecido, tomando en consideración, como nuestros principales y más importantes valores, el bienestar, el respe-
to y el afecto.

En el caso de viuda o viudo sin hijos ni otros descendientes, el Derecho filipino establece el 45% de indemnización, mientras que el Derecho español provee únicamente el 37 y $\frac{1}{2}$ %. Creemos sinceramente que el porcentaje establecido por el legislador español es insuficiente. Un viudo o, en su caso, una viuda, necesita, por lo menos, la mitad de lo que ganaba el esposo fallecido durante su vida, ya que, en el desarrollo normal de los acontecimientos, se considere que el salario del fallecido es apropiada y naturalmente compartido entre ambos cónyuges. El cónyuge superviviente ha estado acostumbrado a esta participación en el salario, así como al nivel de existencia — que dicha participación permitía cuando el fallecido esta

- (3) - V. MIGUEL HERNAINZ MARQUEZ, op.cit., pag.256. Véase también, la Sentencia de 17 de Marzo de 1952, que afirma: "...aun cuando es cierto que no se trata de un derecho hereditario, sino de una compensación — por la pérdida del marido...".
- (4) - En apoyo de la opinión de que la indemnización es una forma de herencia, véase F. CARNELUTTI: Il diritto del superstiti nella lege degli infortuni. Infortuni sul lavoro, vol. IV, p.4 150.

ba en vida y trabajando en su empleo. El bienestar se mina si se concede tan baja indemnización, ya que esta cantidad no es suficiente para mantener en estado normal la salud mental y física del cónyuge supérstite. Con ello, además, se declina y ataca el debido respeto, por cuanto tan menguada asignación imposibilitará al cónyuge supérstite de conseguir una completa experiencia humana. Finalmente, el afecto no queda, ciertamente, realizado con tan exiguo porcentaje, toda vez que todo cónyuge fallecido - puede esperarse que tuvo como intención el que se asignara a su cónyuge supérstite una cantidad suficiente para que éste pudiera subvenir, al menos, a las necesidades básicas de la vida. En consideración a las razones expuestas, nos atrevemos a sugerir que el legislador español - llegue, en el futuro, a aumentar la indemnización, en tales condiciones, al 45%, igualándola a la existente en la ley filipina, con objeto de alcanzar ese nivel que hemos dado en llamar "dignidad del obrero". Un montante inferior al señalado, creemos que es inadecuado, considerando las circunstancias particulares de un cónyuge supérstite.

Otra diferencia notable en los montantes asignados como indemnización por una y otra ley, se encuentra en el caso de los padres o abuelos. En la legislación laboral - filipina, hay una distinción entre la dependencia total y parcial; en España, la base se encuentra únicamente en el

número de tales personas dependientes. Creemos también aquí, que el bienestar podría ser mejor fomentado basando la compensación o indemnización en ambos aspectos, es decir, en el número de personas dependientes y en la naturaleza (parcial o total) de la mencionada dependencia. El valor bienestar exige que a cada persona dependiente le sea dada una ayuda bastante como para que pueda asegurar su salud mental y física y existencia normal. Teniendo en cuenta la teoría de la asistencia y ayuda en cuanto a la indemnización, nos permitimos sugerir la alteración, a este respecto, en ambas leyes: la filipina, debería basar la indemnización en el número de personas dependientes, aparte del mero criterio de atender únicamente al carácter de dependencia, y, a su vez, la ley española debería hacer lo mismo, sólo que al revés. Y nuestra sugerencia no se para ni detiene allí, si se quiere alcanzar, en última instancia, el bienestar. Somos de la opinión de que una medida más exacta y acortada de indemnización debería tomar en consideración el número de personas dependientes, y, al mismo tiempo, la naturaleza de la dependencia, no sólo en el caso de padres o abuelos, sino en el total y completo esquema o plan de indemnización. Creemos que, en ambos sistemas, la atención que actualmente se da únicamente a uno de los lados, en lo que respecta al cálculo de la indemnización, está muy lejos de alcanzar la "dignidad humana" a

que tantas veces nos hemos referido así como de promover a la "comunidad de hombres libres" que persigue el valor bien estar, siendo, pues, indispensable, un reajuste en ambas leyes en forma de un sistema de medida y cálculo de indemnización más exacto y apropiado a cada caso.

Con respecto a los cambios en el montante de indemnización por causa de que el cónyuge supérstite pueda contraer nuevo matrimonio o por el hecho de que los menores dependientes lleguen a la edad de 18 años, el Derecho laboral filipino dispone, generalmente que deberá pagarse a las personas dependientes que queden la cantidad que tendrían derecho a recibir en el caso de que hubieran sido ellos sólo los únicos facultados para recibir indemnización en el momento en que falleció el obrero (5).

En España, dicha situación se regula de la siguiente manera: "Cuando el obrero fallecido deje viuda e hijos menores y aquélla contraiga nuevo matrimonio antes de llegar a la edad de dieciocho años el más joven de éstos, la totalidad de la renta será percibida por los hijos menores.

Si el obrero fallecido dejó viuda o hijos menores, cuando el último de éstos cumpla la edad de dieciocho años, la viuda percibirá en lo sucesivo la renta del 25% del salario.

Si entre los hijos hubiera uno o varios inútiles o incapacitados para el trabajo, la parte de la renta que los

(5) - V. Secc. 10, último párrafo, del Act. 3426.

demás dejen de percibir al cumplir los dieciocho años a -
crecerá la de los inútiles o incapacitados mientras lo -
sean" (6).

El examen de la disposición legal filipina a este -
respecto pone de relieve que el efecto de las segundas -
nupcias contraídas por el cónyuge supérstite implica de
nuevo una clasificación de las personas dependientes de -
jadas por el fallecido, como si ningún cónyuge supérsti -
te hubiera participado originalmente en la cantidad global
concedida como indemnización en el momento de producirse
la muerte. Dicho de otra manera, el efecto sería el de -
reducir el montante de indemnización correspondiente a -
las personas dependientes dejadas por el fallecido. En -
España, como se puede colegir de la disposición legal ci -
tada más arriba, dichas personas dependientes no pueden
sufrir, en la indemnización que les corresponda, reduc -
ción de ninguna clase (7). El efecto de esta disposición
legal es el fomento del matrimonio, ya que con ella se evitan
al cónyuge supérstite preocupaciones e inquietudes acer -
ca de que la ayuda económica a las otras personas depen -
dientes pueda ser reducida, y, por consiguiente, se le da
ja en libertad de decidir voluntariamente un nuevo matri -
monio, sin verse afectado por dudas ni influencias exter -
nas. En Filipinas, por el contrario, al cónyuge supérsti -

(6) - Ofr. art. 32, R. Acc.

(7) - V. Art. 32 antecitado, párrafo 1º.

te se le impide, en la mayoría de los casos, que pueda contraer segundas nupcias a causa del temor a una reducción en la ayuda económica a aquellas otras personas dependientes, con lo que se viene a negar el valor afecto (8). He aquí un claro ejemplo en el que las leyes filipinas tienen algo que aprender de las leyes españolas.

Asimismo, otro punto interesante de comparación consiste en la distribución de la indemnización entre el viudo o, en su caso, la viuda dependiente del fallecido, y los hijos menores de edad, dependientes también. En el sistema legal filipino, la distribución se deja a la discreción del Comisario de Indemnización a los Obreros. (9) En cambio, en la ley española se establece claramente esa distribución, sin dejar ámbito ninguno de discreción a departamento oficial alguno como, por ejemplo, la Comisión de Indemnización a los Obreros (10) De nuevo surge aquí un ejemplo de las excelencias que adornan a muchas de las leyes sociales españolas, ejemplo que podría ser seguido por la ley filipina. Creemos sinceramente que las leyes españolas a este respecto fomentan lo que hemos llamado la "dignidad humana" porque enaltece, principalmente, los valores bienestar, respeto e ilustración.

Otro punto en el que el legislador filipino tiene que aprender del español es el referente al pago de la in-

(8) - V. Secc. 10, último párrafo, Act 3428

(9) - V. Secc. 8, última frase del apartado (b), Act 3428

(10)- Cfr. art. 33, TRI.

indemnización en forma de suma global, en vez de seguir el sistema de los pagos periódicos (11). Aparte de la diferencia existente en cuanto al procedimiento, la divergencia principal entre ambos sistemas legales radica en las bases para la aprobación de tal forma de pago. En Filipinas, la ley se limita a declarar simplemente, y en términos muy generales, que la indemnización puede hacerse efectiva en sus totalidad o en partes, mediante el pago de la suma total o por cantidades parciales, según el caso, siempre que el Comisario de Indemnización a los Trabajadores considere más ventajoso y conveniente conceder tal aprobación, sin poner en claro ni definir de una manera concreta y específica lo que ha de considerarse más ventajoso y conveniente. En España, el Director General de Previsión se guía por criterios específicos, como el proyecto razonado de inversión del capital suscrito por el peticionario; información sobre la conducta y asiduidad al trabajo del solicitante y el informe favorable del Departamento ministerial correspondiente sobre la posibilidad y conveniencia del establecimiento de la industria o explotación de que se trate.

B. Caso de falta de acuerdo entre las diversas personas llamadas a participar en la indemnización por fallecimiento.

"El Comisario de Indemnización a los Obreros -dice

(11) - Cfr. Secc. 22, Ley 3428 para el procedimiento en Filipinas y Orden de 29 de julio de 1939 para España

el último párrafo de la Sección 8 de la Ley de Indemnización a los Obreros (12)-, en el caso de que haya varias personas con derecho a indemnización y no haya acuerdo con relación a la parte de ésta que cada una ha de recibir, actuará como árbitro y determinará la parte que se ha de adjudicar a cada beneficiario. Personalmente, creemos que el mejor modo de evitar el desacuerdo con respecto a la participación de las diferentes personas dependientes concurrentes en la indemnización -desacuerdo que tan frecuentemente se produce en la realidad- es el de volver a formular las disposiciones legales en lo referente al montante de indemnización y a la participación correspondiente de cada una de aquéllas en el caso de que sean varias las personas dependientes que concurren en la indemnización como consecuencia de la muerte de un obrero accidentado. Y es que si conseguimos remediar la raíz del mal desde el primer momento, no habrá necesidad de recurrir más tarde a que el Comisario de Indemnización a los Obreros tenga que actuar como árbitro. En España, como ya señalábamos al tratar de los arts. 28, 29 y 30 del Texto Refundido de la Ley de Accidentes del Trabajo, hay un mínimo de confusión en cuanto a la cantidad que corresponde a cada una de las personas dependientes, ya que las mencionadas disposiciones legales estatuyen de una manera clara e inequívoca en cuánto con-

(12) - Cfr. esta disposición en el Apéndice a este estudio: Act N° 3428.

asistirá la participación de cada una en las diferentes situaciones en que aquellas pueden concurrir a la indemnización. He ahí por qué podemos afirmar que estas disposiciones legales españolas promueven y fomentan la ilustración, a diferencia de las correspondientes a este punto, vigentes en Filipinas, que se han quedado muy cortas en este sentido.

C. Bases de computación de la indemnización por fallecimiento.

A efectos de la determinación del montante de compensación a pagar a un trabajador accidentado, la ley de Indemnización a los Obreros ha adoptado, como tipo, el término medio de los ingresos semanales de un empleado durante un específico período de tiempo (13). En España, la base de indemnización es el salario que disfrutase la víctima en el momento de producirse el accidente (14). Surge aquí, de nuevo, otro ejemplo en el que el Derecho laboral español muestra una indudable y decidida superioridad sobre el de Filipinas, porque, mientras que las leyes en este último país señala en términos muy generales el concepto de salario e ingresos (15), la ley española no -

(13) - En cuanto a lo que debe entenderse por los términos "salarios" o "ingreso", véase la Sec. 39, apartado (g) del Act 3428.

(14) - Cfr. art. 28, TRI.

(15) - Sec. 39, apartado (g) del Act. 3428.

se contenta con dar una definición de carácter general (16) del salario, sino que establece reglas definidas sobre su determinación (17). El valor ilustración viene, de esta manera, a quedar enaltecido por la ley española.

Así, considerando el período de tiempo como base para la determinación del término medio del salario semanal, tenemos la sección 19 de la ley de indemnización a los Obreros, que dice textualmente: "Los salarios medios semanales se computarán de tal manera que resulte la mejor computación que pueda hacerse de las ganancias del trabajador durante las doce semanas anteriores a la lesión: disponiéndose que, si por razón del poco tiempo durante el cual el trabajador estuvo empleado o por razón de la cesación del trabajo, no fuera posible computar la remuneración, se tome en consideración el salario medio semanal ganado durante los últimos doce meses anteriores a la lesión por una persona empleada en el mismo grado y trabajo por el patrono del lesionado, o si no hubiera persona que reuniera esas circunstancias, se tomará como base el salario medio semanal de una persona empleada en el mismo grado en la misma clase de trabajo, en el mismo distrito o localidad".

Aun cuando este método de determinar la base del salario para computar la indemnización por fallecimiento pa-

(16) - V. art. 22, TRI; art. 37, R.Aec. art. 37 de la ley del Contrato de Trabajo de 26 de Enero de 1944.

(17) - V. apartados (a) hasta (g) del art. 22, TRI.

rece adecuado, un examen del sistema seguido en España pone de manifiesto que en este último país se distingue entre jornal o sueldo y destajo o unidad de obra o tarea (18). Creemos que este último método es mejor y más recomendable porque evita la generalidad y falta de concreción en la indemnización, como sucede en el sistema filipino. Se acrecenta y evalora aquí la riqueza, en el sistema español, en un grado mucho mayor, toda vez que las distinciones resultan en una diferenciación digna de elogio en el montante de indemnización recibida, basado en el método del pago de salario.

D. Períodos de indemnización.

Con respecto a la duración del período de indemnización ambas leyes están de acuerdo, ya que en los dos, tanto la viuda al contraer segundas nupcias, como los hijos menores de edad dependientes del fallecido al alcanzar la edad de 18 años, como también los padres y los abuelos si cesan en su condición de verdaderas personas dependientes, pierden sus derechos a ulterior indemnización (19). Sin embargo, si nos paramos a investigar en el punto de la duración máxima de la indemnización, encontraremos una diferencia fundamental entre ambos sistemas (20). En efecto, con arreglo al Derecho laboral filipino, la duración máxima en todos los casos es de 208 semanas; en cambio, en España, la

(18) - Orden de 1 de Abril de 1950.

(19) - V. sección 10 del Act 3428 y el art. 28, TRI.

(20) - Idem.

duración máxima en todos los casos es por el período que dure la vida de cada una de las personas dependientes, es decir, tiene un carácter vitalicio. He ahí por qué, la cuestión de qué recursos tendrán las personas dependientes de un obrero muerto en accidente de trabajo una vez que hayan pasado los cuatro años y un tercio, período considerado como el máximo para recibir indemnización en Filipinas, constituye un problema todavía sin resolver en aquella República. Y he ahí por qué, también, como de la opinión de que el sistema vitalicio vigente en España a este respecto es mejor y más recomendable que el vigente en Filipinas, porque cumple dignamente la intención del legislador de ayudar a las personas dependientes del fallecido obrero a que queden aseguradas, en vez de convertirse en objetos de la caridad pública o privada una vez que ha expirado el plazo de los cuatro años y un tercio durante el que se recibía indemnización, que el efecto inevitable — que se produce en Filipinas, como consecuencia de aquella disposición legal.

Creemos que, en este punto fundamental, el Derecho laboral filipino pida a gritos una reforma en este sentido, debiendo seguir la pauta marcada por el legislador español, cuyas disposiciones son conducentes, muy en especial en este caso, a la "dignidad humana" que toda ley, como hemos repetido tantas veces, debe tender a conseguir.

E. Momento en que ha de empezar el pago de la indemnización por fallecimiento.

El pago de la indemnización debida a los allegados de un obrero fallecido por accidente de trabajo debe empezar desde el mismo momento de su muerte, por la consideración — sencilla y fácilmente comprensible de que desde aquella fecha e inmediatamente después, las personas que dependían del fallecido necesitarán urgentemente la indemnización como sustento para sus vidas (21). El valor que ha de ser realizado — aquí es el del bienestar, por cuanto es obvio que las personas dependientes del fallecido, como acabamos de decir, necesitarán irremisiblemente de la ayuda económica que la indemnización supone, desde ese momento (22).

(21) - Véase a este respecto, la sentencia en el caso "Quijano et alios c/. Ya Rio et alios", G.R. N° 1099, de fecha 15 de Julio de 1937.

(22) - Vid. Sentencia de 6 de Marzo de 1944, que confirma — esta misma regla en el sistema jurídico-laboral español.

XII. PERSONAS DEPENDIENTES DEL OBRERO

- A. SIGNIFICACION DEL TERMINO "DEPENDIENTE" EN GENERAL.**
 - B. DEPENDENCIA TOTAL Y PARCIAL.**
 - C. PRUEBA DE LA DEPENDENCIA.**
 - D. TIEMPO EN QUE SE TOMA EN CUENTA LA DEPENDENCIA.**
 - E. QUIENES SON DEPENDIENTES CON ARREGLO A LA LEY.**
-

A. Significación del término "dependiente" en general.

El problema de la dependencia surge cuando el accidente sufrido por el obrero le causa la muerte. Esta cuestión carece de significado cuando el accidente solamente produce lesiones.

El término "dependiente" no significa de dependencia absoluta en cuanto a las necesidades de la vida se refiere, ni ha de ser necesariamente efectiva. Hemos de hacer notar que la dependencia puede ser total o parcial. Al objeto de expresarnos con más claridad, hacemos nuestras las frases del Tribunal Supremo en el caso *Caspille v. Cadwallader, Gibson Lumber Co.*:

"Según la ley de Indemnización a los Obreros, dependencia no significa dependencia absoluta para las necesidades vitales, sino más bien que la demandante consideraba las aportaciones del finado y confiaba en ellas en todo o en par

te, como medio de sostenerse de acuerdo con su situación en la vida. Una persona puede ser dependiente, según este criterio, aunque sea capaz de mantenerse a sí misma sin ayuda del difunto" (1)

B. Dependencia total y parcial.

Una persona puede ser dependiente de un obrero en el sentido de la ley aunque la dependencia sea parcial, toda vez que la orden de indemnización no exige que el solicitante dependa totalmente del fallecido (2). Existe dependencia total cuando resulta que el demandante estaba — por entero sujeto, para su subsistencia, a los ingresos del finado (3).

Ni la ley ni la jurisprudencia españolas hablan de dependencia total o parcial. En nuestra opinión, la mención de la dependencia total o parcial es superflua, toda vez que no responde a ningún propósito. En la concesión de indemnización carece de trascendencia material el hecho de que la dependencia sea total o parcial, con la sola excepción de los padres o abuelos, en cuyo caso la indemnización es mayor si la dependencia es total y menor si es parcial.

Se promovería el afecto evitando esta declaración legal.

-
- (1) - G.R. n° 41261, 26 de septiembre de 1934. Vid. también sobre la misma cuestión las notas dadas en L.R.A. 1918-A, 250 y Aneas 1918-B, 760.
(2) - L.R.A. 1917 D.157, 159.
(3) - L.R.A. 1916 A, 249; L.R.A. 1918 F, 488.

C. Prueba de la dependencia.

La dependencia, ya sea total o parcial, es fundamentalmente y en principio una cuestión de hecho, que ha de determinarse examinando todas las circunstancias del caso particular. La carga de establecer la existencia del hecho, mediante prueba directa o circunstancial, pesa sobre el que solicita la indemnización (4).

Los valores aquí interesados son: poder, riqueza e ilustración. En la determinación del hecho de la dependencia el reclamante participa en el proceso de poder a través de la presentación de la prueba adecuada. Participa asimismo de la riqueza al prueba que es persona dependiente. Y finalmente, la ilustración es la base de la orden de indemnización a conceder a cada reclamante (5).

D. Tiempo en que se toma en cuenta la dependencia.

En principio, el hecho de la dependencia ha de determinarse de acuerdo con las condiciones que prevalecen en el momento de sufrir la lesión. No es suficiente probar que durante algún tiempo anterior el demandante dependía -

(4) - L.R.A. 1918 F 403. En España también se da esta circunstancia. Vid., S.T.S. de 17 de abril de 1941 y 9 de noviembre de 1941.

(5) - El Art. 29, R.Acc. exige que en los Registros civiles correspondientes a cada localidad, se abra un Registro especial donde se harán constar el nombre de cada acogido, etc. Con esto se realiza el valor ilustración.

del fallecido en cuanto a alimentos (6).

La misma exigencia de tiempo de la dependencia está vigente en España (7). La razón inspiradora de esta regla es obvia.

E. Quiénes son dependientes con arreglo a la ley.

Sección 9. Personas dependientes del lesionado.
Las siguientes personas, y ninguna otra, serán consideradas dependientes y con derecho a indemnización según las disposiciones de esta ley:

El hijo o la hija menores de dieciocho años o incapaces, y que no hayan contraído matrimonio, dependan realmente del fallecido o no;

La viuda, sólo si vivía con el fallecido o dependía realmente de él total o parcialmente;

El viudo, sólo en caso de que sea incapaz de proveer a su propio sustento y dependiera realmente de la fallecida, total o parcialmente, en la fecha del accidente;

Los padres o abuelos, sólo en caso de dependencia total o parcial del fallecido;

Los nietos, hermanos o hermanas menores de dieciocho años, o incapaces de atender a su sustento, y totalmente dependientes del fallecido. La relación de dependencia tiene que existir al tiempo de la lesión.

Un extranjero no será considerado como dependiente en el sentido de esta Ley si no es al mismo tiempo residente en las Islas Filipinas, y todo extranjero dependiente que abandone las Islas perderá automáticamente todo derecho a beneficiarse según esta Ley. "(8)

Vemos como no es suficiente que quien reclama indemnización por muerte sea una de las personas determinadas en la sección ocho de la Ley, que trata de los beneficios por causa de muerte. Tales reclamantes tienen que reunir las exigencias requeridas a tales personas tal como figuran

(6) - Hanton & Wheeler, etc. Co., 91 Conn, 266, 99 Atl. 494, Annot 1918 B 747.

(7) - Sec. 28, TRI.

(8) - Ley n° 3428.

en la sección nueve arriba transcrita. En otras palabras, las asecciones ocho y nueve de la Ley deberían considerarse conjuntamente, siendo una complemento de la otra.

En España, la lista correspondiente de personas dependientes pone de manifiesto una diferencia fundamental con la de Filipinas, en lo que respecta al orden de prioridad. La legislación laboral española, en efecto, coloca a los hermanos huérfanos menores y nietos huérfanos menores en la misma categoría que los hijos (9). Creemos que el sistema seguido en España es mejor porque está en mayor consonancia con la teoría de la asistencia y ayuda de las indemnizaciones, separándose del orden usual de prioridad dado tradicionalmente en el Derecho Civil con la teoría de la herencia (1). Entre los valores afectados aquí, creemos que es la habilidad y conocimiento práctico el que mayormente viene a ser avalorado aquí por la ley española. Se prefiere aquí a los hermanos huérfanos menores y a los nietos huérfanos menores de edad también, sobre los padres y abuelos, ya que aquellos menores necesitan una oportunidad para poder descubrir sus habilidades y talento y cultivarlas en la mayor extensión posible. La disposición legal española toma en consideración el hecho de que los padres y abuelos tuvieron ya su época apropiada y oportuna para el completo desarrollo de aquéllas, mientras que esos menores pueden tener todavía algo que ofrecer al servicio de su (9) - V. art. 28, TRI.

patria y quizás en provecho de la Humanidad entera. Asimismo, en la elección entre ambas clases de personas dependientes, queda afectado también el valor riqueza, porque, por regla general, las personas de edad madura tienen una posibilidad más grande de la que disponen aquellos menores en cuanto a la obtención y aseguramiento de unos ingresos básicos que les garanticen su subsistencia.

XIII. INDEMNIZACION EN CASO DE INCAPACITACION PARA EL TRABAJO

- A. Incapacitación total.
- B. Incapacitación parcial.
- C. Incapacitación temporal.
- D. Montante de la indemnización.
- E. Duración del pago de la indemnización.
- F. Revisión de incapacidades.
- G. Otros apoyos distintos de la ayuda económica.
- H. Garantía del pago de la indemnización.

Uno de los más importantes aspectos del estudio de los accidentes del trabajo es la indemnización concedida en caso de daños sufridos que lleguen a producir una incapacidad para el trabajo distinta de la muerte (1). En los capítulos precedentes, hemos tenido ocasión de comprobar la diferencia fundamental existente entre el logro y consecución de la dignidad humana y el status actual de las legislaciones laborales española y filipina en lo que se refiere al aspecto de la indemnización en caso de fallecimiento. En la presente fase de nuestro trabajo, tendremos la oportunidad de comprobar, una vez más, cómo la dignidad humana puede ser perjudicada o lograda, según los casos, en lo referente a la cuestión de la indemnización.

(1) MIGUEL HERNAINZ MARQUEZ: op. cit., p. 173, dice lo siguiente: "Podemos calificar, sin duda alguna, a la teoría de la incapacidad como uno de los puntos fundamentales, acaso el que más en un terreno real, de toda la materia de accidentes. No sólo tiene una gran transcendencia intrínseca sino que puede reputarse como nervio central de otras varias manifestaciones de nuestro estudio: todos los problemas del salario, de las indemnizaciones, del seguro, etc. no son sino auténticas consecuencias de aquélla, cuyo principal papel queda así resaltado".

sación concedida en caso de incapacitación para el trabajo.

En la hipótesis o supuesto de indemnización en caso de fallecimiento, señalábamos que la teoría fundamental era la de la asistencia y ayuda a las personas dependientes del obrero fallecido. También es ésta teoría de la ayuda la que sirve de base para la indemnización en caso de incapacitación o incapacidades para el trabajo, si bien en este supuesto que ahora examinamos no se trata de una ayuda a las personas dependientes del obrero, sino de una ayuda conocida al propio trabajador accidentado. En Filipinas, se da asistencia y ayuda al trabajador a causa de la disminución de su capacidad de ingresos, como consecuencia del accidente sufrido(2); en España, la razón de esta ayuda es la limitación de los obreros en sus posibilidades para el trabajo (3). Como vemos, existe un paralelismo entre ambos puntos de vista.

Nuestra tarea en este momento será la de presentar un cuadro de los métodos de indemnización vigentes en Filipinas y en España y hacer una evolución crítica de los mismos, teniendo siempre presente, como norte y guía de nuestra exposición y crítica, la promoción y fomento de la dignidad humana y, por supuesto, y en última instancia, la de la sociedad de hombres libres y obtención del bonum commune de la misma.

Con objeto de facilitar la exposición de la materia que ahora nos interesa, incluimos una tabla comparativa entre las disposiciones vigentes en Filipinas y en España, en caso de incapacitación del obrero por accidente ocurrido en el trabajo.

(Véase dicho cuadro adjunto, a continuación)

I N D E M N I Z A C I O N		E N C A S O D E	
CLASES DE INCAPACIDADES		Montante de indemnización (1)	
		ESPAÑA	FILIPINAS
1. INCAPACIDADES <u>TOTALES</u>:			
1. Gran Invalidez (cuando queda imposibilidad de ejercer incluso las funciones más indispensables para la vida)		150%	
2. Total y absoluta para cualquier profesión.....		75%	60% (Común)
3. Total para la profesión habitual.....		55%	
II. INCAPACIDADES <u>PARCIALES</u>:			
1. Disminución de la capacidad de trabajo.....		35%	50% de la diferencia entre su salario diario semanal antes de accidente salario podría ser después
2. Permanentes parciales fijadas por la ley.....		Varia el porcentaje	50% del salario semanal
III. INCAPACIDADES <u>TEMPORALES</u> (2)		75% No hay distinción entre total y parcial	60% si es total y 50% si es parcial

(1) Es un tanto por ciento del salario base.

(2) En Filipinas, ambas incapacidades totales y parciales.
En España, no hay distinción entre incapacidad total y parcial.

CASO DE INCAPACIDADES

Caso de indemnización (1)		Periodo de indemnización		Máxima duración de la indemnización	
FILIPINAS	ESPAÑA	FILIPINAS	ESPAÑA	FILIP.	
60% (Común)	Hasta desaparecer	Hasta desaparecer	Vitalicia	208 semanas	
50% de la diferencia entre su salario medio semanal antes de accidente y el salario que podría ganar después	Hasta desaparecer	Hasta desaparecer	Vitalicia	208 semanas	
50% del salario medio semanal	Vitalicio	Número de semanas fijadas por la ley (V.Apéndice)	Vitalicia	Fijadas por la ley	
60% si es total y 50% si es parcial	Hasta desaparecer.	Hasta desaparecer.			

se.
ales y parciales pueden ser temporales.
capacidad total y parcial cuando se trata o tiene ca-

A. Incapacitación total.

La Sección 14 de la Ley de Indemnización a los Obreros, tantas veces citada, dispone lo siguiente: "En caso de que la lesión o la enfermedad causen incapacidad total para el trabajo, el patrono, durante el tiempo que dure esta incapacidad, excluidos los tres primeros días, pagará al lesionado una indemnización semanal equivalente al sesenta por ciento de su salario medio semanal, sin sobrepasar los treinta y cinco pesos ni abonar menos de diez pesos semanales, excepto en el caso de que se trata en el párrafo siguiente. En ningún caso, continuarán estos abonos semanales una vez que la incapacidad haya cesado, ni se prolongarán por más de doscientas ochó semanas, ni el total pagado en concepto de indemnización podrá exceder en ningún caso de cuatro mil pesos. Ninguna declaración de incapacidad permanente tendrá efecto hasta que hayan transcurrido dos semanas desde la fecha de la lesión.

"En el caso de un obrero cuyo salario medio semanal sea inferior a diez pesos por semana, la indemnización semanal

-
- (2) V. la sentencia en el caso "Cafete o. Insular Lumber Co., Inc". n° 42175, de fecha 10 Julio 1935, en O.G., vol. 33, p. 2544.
- (3) MIGUEL HERMAINZ MARQUEZ (op.cit., pp. 174 a 177). Según PEDRO ARNALDOS JIMENEZ (en su estudio titulado Aspectos sociales de la valorización de las incapacidades en el seguro de accidentes del trabajo, publicado en la Revista Española de Seguridad Social, núms. 1-2 de 1950, p. 44), la cuestión puede ser contemplada desde tres ángulos diferentes, principalmente: la invalidez física, la incapacidad profesional, y la incapacidad de ganancia en el mercado de trabajo. Véase también la sentencia de 1 de Marzo de 1944 en lo que se refiere a las bases para la indemnización en caso de incapacitación para el trabajo.

consistirá en el importe total de este salario medio semanal; pero si la incapacidad es permanente, la indemnización será de diez pesos en tal caso. Si la incapacidad total empieza después de un período de incapacidad parcial, se deducirá ésta del dicho período total de doscientas ochó semanas"(4).

Estudie mos la indemnización por incapacitación total, con la ayuda de la adjunta tabla comparativa. Lo que principalmente llama nuestra atención es la triple subdivisión de la incapacitación total existente en el sistema español, a diferencia del único tipo de incapacitación existente en el filipino. En efecto, fijada de una manera diferente, en Filipinas, la incapacitación total se toma únicamente en un sólo sentido, sin distinguir si la incapacitación total es para toda clase de trabajos o solamente una incapacitación total para el trabajo al que habitualmente se dedicaba el obrero en el momento de sufrir el accidente(5). El concepto filipino incluye ambas clases y, lo que es más deplorable todavía, es que no proporciona disposición legal alguna para la "gran invalidez", que consiste en aquél tipo de incapacitación total por la que la víctima queda imposibilitada no ya sólo de trabajar en cualquier tarea manual, sino incluso, de atender a sus necesidades vitales, como las de comer, vestirse, etc.(6).

(4) Las disposiciones legales correspondientes a la Sección 14 arriba citada, vigentes en España son los arts. 10, 13 y 14 del TRI (V. Apéndice de este trabajo). Véase, asimismo, el art. 35 de R. Acc. y el art. 2 del Decreto de 29 de Septiembre de 1943, sobre la indemnización en caso de gran invalidez.

(5) Tl.C.J. sección 538, pp. 818-819.

(6) V. art. 35, R. Acc.

En España, tal y como pone de manifiesto la tabla comparativa adjunta, la distinción entre gran invalidez, incapacidad total y absoluta para cualquier profesión e incapacidad total para la profesión habitual que tenía, que implica la asignación, respectivamente, del 150%, del 75% y del 50%, es digna del mayor elogio y alabanza. Somos del sentir de que está más en consonancia con el propósito y las intenciones del legislador al conceder indemnización de acuerdo con las circunstancias particulares de una incapacidad dada, frente a la disposición legal de Filipinas, a este respecto, que no contempla sino un solo tipo, con lo que resulta un criterio demasiado estrecho. Siguiendo nuestra costumbre, y examinando la cuestión presente con arreglo al esquema de valores humanos que nos hemos trazado, opinamos que, en este punto, el Derecho laboral filipino niega aquí los valores riqueza, bienestar y respeto, valores que, por el contrario, quedan altamente revalorizados en el Derecho español. Una mayor indemnización concedida por causa de gran invalidez y por incapacidad total y absoluta para cualquier profesión viene, en efecto a acrecentar la riqueza, porque asegura una más alta y merecida compensación, justificada por la naturaleza más grave de la incapacidad. Y con la afirmación y seguridad de una compensación mayor por ambos tipos de incapacidades graves, en comparación con la inea-

pacidad total para la profesión habitual (por cuanto, efectivamente, en este último caso, el obrero afectado puede obtener otros ingresos laterales dedicándose a otros trabajos) viene a revalorizarse, a su vez, el bienestar que promueve la salud corporal y física para los tres tipos de incapacidades totales. Al mismo tiempo, y por lo mismo, se obtiene la consecución y logro del respeto debido, ya que la ayuda positiva concedida al obrero posibilita a éste para esquivar y vencer la desventaja que el accidente le ha producido, muy en especial, en el caso de gran inválido, quien de otra manera, se vería privado del ulterior disfrute del completo ejercicio de sus valores humanos, es decir, sin la compensación adicional que su situación exige. No olvidemos, después de todo, que el respeto, en su más alto sentido, significa la necesidad de dar a cada individuo la oportunidad de llevar una vida de participación completa o, en caso de que ello sea imposible, como es el caso aquí, de adecuada compensación por su desgracia.

La Sección 15 de la Ley de Indemnización a los Obreros vigente en Filipinas, que trata de los casos específicos considerados como incapacidades totales y permanentes(7) y las disposiciones correspondientes del Derecho laboral español sobre el mismo punto (8) muestran una detallada coincidencia en cuanto a los fines y objetivos de ambas leyes al

(7) Vide Apéndice a este estudio.

(8) Véase el art. 14 del R.Acc. vigente en España.

definir ciertos tipos de incapacidades que pueden ser determinadas en el acto como incapacidades totales y permanentes. El valor que debe tratarse de introducir aquí es el que hemos dado en llamar ilustración, razón por la que tanto las leyes laborales españolas como las filipinas han incluido disposiciones de esta clase en sus respectivas regulaciones sobre accidentes del trabajo en la industria.

B. Incapacitación parcial.

Existe incapacitación parcial desde el momento en que un accidente o un daño destruye o menoscaba, de hecho, la facultad de un trabajador para ser eficiente o competente para el trabajo tras haber sufrido el daño, en la forma en que lo era antes de sufrirlo. Así, allí donde la facultad o poder de ganar un sustento viene a quedar dañada, debe concederse una indemnización en consonancia con la incapacitación parcial que se ha producido.

La Sección 16 de la ley de Indemnización a los Obreros dispone, a este respecto, lo siguiente: "En el caso de que la lesión o enfermedad produzca incapacidad parcial para el trabajo, el patrono, durante el tiempo que dure tal incapacidad, y con la excepción antes establecida, deberá abogar al obrero lesionado o enfermo durante un período que no podrá exceder de doscientas ocho semanas, una indemnización semanal igual al cincuenta por ciento de la diferencia entre su salario ne-

dio semanal antes del accidente y el salario semanal que probablemente podría ganar después; sin que tal indemnización pueda ser superior a dieciocho pesos semanales. En cualquier caso, los abonos semanales cesarán cuando desaparezca la incapacidad, y caso de que la incapacidad parcial aparezca después de un período de incapacidad total, este último será deducido del total de doscientas ocho semanas, no pudiendo exceder, en ningún caso, el total de la indemnización pagada, de la suma de cuatro mil pesos. No se hará declaración alguna de incapacidad antes de que transcurran dos semanas contadas a partir de la fecha de la lesión(9).

Estudienos, como de costumbre, este tipo de incapacidad con la ayuda de la tabla comparativa expuesta anteriormente. Podemos observar que las leyes españolas conceden una indemnización de un 35% del salario recibido en el momento de producirse el accidente, en el caso de incapacidad parcial, consistente en la disminución de la capacidad de ganancia. En Filipinas, para este mismo tipo de incapacidad, las leyes disponen la asignación del 50% de la diferencia entre el término medio de los ingresos semanales del obrero antes de sufrir el accidente y los ingresos semanales que podría probablemente ganar con posterioridad. Nuestra modesta opinión es que el Derecho laboral filipino, a este respecto, supera y va más allá del español; la disposición legal filipina que comentamos está más cerca de la estricta jus-

(9) La disposición correspondiente española es el art.12 del TRI.

ticia o imparcialidad, ya que admite una mayor flexibilidad en vez de la concesión general y única del 35% concedido por las disposiciones españolas. El efecto de la disposición filipina en cuestión es el de incrementar o aumentar el monto de la indemnización concedida con arreglo a la mayor o menor pérdida de capacidad. A igual que en multitud de ocasiones hemos afirmado la conveniencia de que las leyes filipinas adopten algunas de las disposiciones más adelantadas y justas del Derecho laboral español, ahora creemos que estamos frente a un ejemplo en el que el Derecho filipino marca una pauta que podría ser aprovechada por las leyes españolas a fin de conseguir que éstas se acerquen más, en este punto, a la meta de la "dignidad humana" en que con tanta frecuencia hemos insistido.

Con respecto a las incapacidades parciales permanentes especificadas por la ley, tal y como se contienen en la Sección 17 de la Ley filipina de Indemnización a los Obreros y en el art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Accidentes del Trabajo en la Industria, tanto la ley filipina como la española promueven aquí el valor que hemos llamado, ilustración, por cuanto ambos sistemas legales incluyen ciertos tipos de incapacidades, como las parciales y las permanentes, que ayudan a una rápida y acertada identificación.

C. Incapacitación temporal.

La incapacitación temporal, distinta de la permanente, con arreglo a lo dispuesto en la ley filipina de indemnización a los obreros, es una condición o situación que existe hasta que el obrero dañado se encuentra restablecido en la medida en que el carácter permanente de los daños sufridos lo permita. Así, cuando, después de que ha cesado el período de incapacidad temporal total, un obrero se encuentra sufriendo de una incapacidad permanente parcial, dicho trabajador está facultado para recibir una indemnización basada en la incapacidad parcial de carácter permanente(10).

Veamos, una vez más este problema en la tabla comparativa entre las disposiciones, al respecto, vigentes en Filipinas y España. En aquel país, la asignación por incapacidad temporal depende de si es parcial o total, correspondiendo respectivamente en cada caso el 50% o el 60%. En España, en cambio, no se tiene en cuenta si la incapacidad es parcial o permanente. La ley española, por consiguiente, establece una solución general y unitaria: el 75%. Surge aquí, de nuevo, un ejemplo más en el que, a nuestro entender, las leyes laborales filipinas tienen algún aspecto superior a las españolas. La ley filipina, en efecto, se muestra aquí más prudente y plausible cuanto que concede mayor indemnización cuando la incapacidad es total y concede una menor cuando se

(10) V. "Vishney v. Empire Steel and Iron Co.", 87 N.J.L.481; Atl., 143.

trata de incapacidad parcial. En España no se ha hecho distinción ninguna al efecto, a pesar del hecho de que no es preciso explicar, por estar suficientemente claro, que las necesidades de una persona totalmente incapacitada y otra que lo esté sólo parcialmente, durante el período en que subsiste la incapacidad temporal, no son, ni mucho menos, las mismas. Puede, pues, afirmarse, que la ley española niega aquí los valores rectitud y riqueza. La rectitud exige, en efecto, un ingreso apropiado para toda persona parcial o totalmente incapacitada, ya que si se quiere alcanzar la estricta justicia, se ha de hacer una clara distinción al respecto. Igualmente, el valor riqueza pide que se de suficiente ayuda económica, tal y como el caso en particular exija.

D. Montante de la indemnización.

Una característica más destacada del sistema español con respecto al montante de la indemnización concedida, tal como lo pone de manifiesto nuestra tabla comparativa, es la disposición legal referente a la indemnización que sobrepasa el límite del 100% marcada en el caso de gran invalidez(11). El sistema filipino fija aquí, como máximo, el 60% del término medio de los ingresos semanales y no señala en ningún caso concesión o asignación alguna ni del 100% ni igual al propio término medio semanal. El buen criterio de la disposición legal española que comentamos, al asignar el 150% en el caso de gran invalidez, no puede ser más obvio, toda vez que el 50%

(11). V. art. 2 del Decreto de 29 de Septiembre de 1.943.

de ese montante indemnizatorio se destina a retribuir a la persona que constantemente precise el incapacitado a su lado para su asistencia. He ahí por qué creemos que ha llegado el momento para las Filipinas de hacer un total reajuste y nuevo examen de los montantes de indemnización concedidos por estos supuestos, y especialmente incluir una asignación equivalente a la gran invalidez, ya que sólo haciéndolo así, puede conseguirse la consecución de los valores respeto y bienestar. Efectivamente, tal disposición viene a promover en gran medida el valor respeto, porque se da al desdichado "gran inválido" una oportunidad para disfrutar en lo posible de una vida completa, a pesar de la desgracia que le ha sobrevenido. Se logra, asimismo, la consecución del valor bienestar ya que la compensación adicional es un esfuerzo deliberado para remediar la desventaja que sufre, así como un paso progresivo para la prolongación de su vida. La tabla comparativa a que nos estamos refiriendo muestra también que en España se concede una indemnización de un 75% en caso de incapacidad total y absoluta, a diferencia de las leyes filipinas que conceden en este caso una indemnización de un 60%. Esta última disposición española, al igual que la anteriormente mencionada, nos parece estar dirigida a realzar los principales valores humanos, especialmente los de salud, bienestar, respeto y rectitud.

E. Duración del pago de la indemnización.

De la misma forma que hemos criticado duramente el límite de 208 semanas, como período máximo de indemnización, en el caso de fallecimiento, límite vigente en la actualidad en el sistema filipino, porque ello deja a las personas dependientes del obrero accidentado a la merced de la incertidumbre de recursos una vez pasado el susodicho período, nos vemos aquí en la obligación de reiterar nuestra protesta por la existencia del mismo criterio aplicable al caso de incapacitación para el trabajo. Efectivamente, y muy en especial en el caso de incapacidad total, no vemos que haya razón alguna válida y suficiente para ese límite de las 208 semanas, aunque en el caso de incapacitación parcial estamos de acuerdo en aceptar como justo tal límite máximo. Ello es lógico, claro está, en el caso de incapacitación parcial, por cuanto el obrero, en este supuesto, continúa teniendo una buena parte de su capacidad de ganancia y no queda totalmente desamparado al fin del período de las 208 semanas. Ahora bien; ello no ocurre en el caso de una incapacitación permanente total. Una vez más tenemos que hacer constar aquí nuestra insatisfacción y descontento con el Derecho filipino a este respecto y, una vez más, también, recomendar con nuestro mayor interés un cambio en este sentido, con objeto de dignificar al obrero filipino como persona humana. Los valores que, en este punto, están en peligro son los de

riqueza, bienestar y respeto. Y tan obvias y patentes son las consecuencias que se producen al poner en tela de juicio estos tres valores humanos que no creemos necesario insistir en un examen detallado y específico de cada uno de aquéllos.

F. Revisión de incapacidades.

Nos atrevemos a afirmar que uno de los aspectos o sectores cuya falta es más alarmante y nociva en el sistema filipino de indemnización por incapacidades contraídas en el trabajo es referente al mecanismo para llegar a una revisión de las mismas incapacidades. No existe disposición alguna en la Ley de Indemnización a los Obreros para la revisión de incapacidades, mientras que, en cambio, la ley española presenta un notable método al respecto(12). Lo que realmente sucede en Filipinas es que una vez que la incapacidad es clasificada al principio del pago de la indemnización, la categorización subsiste hasta la expiración del plazo de 208 semanas, a menos que la incapacitación desaparezca completamente, con el consiguiente efecto, como puede imaginarse fácilmente cualquiera, de que frecuentemente la indemnización asignada y el grado de incapacidad por el que tal indemnización existe, no coinciden. Para remediar tan triste estado de cosas, se sugiere que se incorpore al Derecho filipino un sistema de revisión de incapacidad, usan-

(12) Véase PABLO CALLEJA DE LA CUESTA: Derecho Social, Madrid, 1935, p.161, sobre algunos casos en que la cuantía ha de rebajarse o aumentarse por posible error o por el cumplimiento de circunstancias condicionales en que aquélla cuantía indemnizatoria se fundaba.

do como modelo el seguido por el Derecho español(13). Sugé-
rimos, en efecto, el sistema español porque un examen del
mismo nos muestra que en él se consiguen dignamente los va-
lores poder, riqueza, ilustración y respeto.

G. Otros apoyos distintos de la ayuda económica.

El convencimiento de hasta qué punto las leyes españolas
se hallan avanzadas y de cuán justamente consiguen alcanzar
la dignidad humana, se obtiene ampliamente con la considera-
ción de la ayuda que vá más allá de la indemnización econó-
mica, que hemos presentado en las páginas precedentes. Contempla-
da la cuestión desde este ángulo, las leyes laborales filipi-
nas están todavía muy lejos de la consecución de lo que hemos
llamado "comunidad de hombres libres". Las disposiciones legales
españolas disponen la facilitación de los aparatos ortopédicos
y prótesis que se consideren necesarios para la asistencia
del accidentado(14). La práctica usual en tales casos consis-
te en conceder una indemnización supletoria que cubra el cos-
te probable del suministro y renovación de los aparatos antes
indicados. El bienestar y la habilidad o pericia son los dos
valores que aquí se realzan. El bienestar, toda vez que ello
constituye un paso progresivo y fundamental hacia el logro de
la actividad espiritual y física en su más óptimo sentido, y

(13) V. arts. 81-85 del R. Aco. Véase también, en lo que se
refiere al procedimiento en la revisión de incapacidades
el estudio de SALVADOR HERNAL MARTIN, Revisión de las in-
capacidades del trabajo, en Revista Española de Seguridad
Social, n° II de 1950, pp. 1747 y ss., así como el de JOSE
HERNANDEZ DE VELASCO, El recurso administrativo de revi-
sión en el regimen general de accidentes del trabajo, en

(14) V. art. 36, R. Aco.

a lo largo de toda la vida, por cuanto se proporciona una adecuada ayuda para soportar adecuadamente las desventajas que la incapacitación supone. La habilidad, pericia o destreza, se consigue también porque con los mencionados aparatos las personas dañadas pueden aún ser capaces de desarrollar y cultivar ciertas habilidades o realizar ciertos trabajos útiles y provechosos no sólo para ellas mismas sino también para la comunidad entera.

Digamos finalmente, antes de terminar el examen y consideración del problema de la indemnización por incapacidad, que otro punto en el que España se halla en un estado o fase más avanzada que Filipinas es en el aspecto de la readaptación del lesionado. Existe en este punto una completa laguna en la legislación filipina. La Ley de Indemnización a los Obreros ni siquiera contiene la más ligera sugerencia o alusión en esta dirección, por extraño que ello pueda parecer, considerando que, después de todo, dicha ley constituye un moderno instrumento de legislación. Es obvio que con este servicio o ayuda adicional previsto en la legislación española, se consigue la culminación de los valores bienestar, ilustración, habilidad y respeto(15). He ahí por qué, nosotros consideramos como algo que vale la pena, el tratar de incorporar esta ayuda tan humanitaria y equitativa, que

(15) V. arts. 78-80 del citado Reglamento.

tanto enaltece a la dignidad humana del obrero, a la legislación filipina(16). La readaptación del trabajador lesionado a la vida normal de la comunidad se nos antoja- y no es vana elucubración teórica, sino problema de auténtico valor práctico, hoy más que nunca- como el punto culminante de toda obligación laboral en materia de incapacitación. Ningún país que sepa apreciar el esfuerzo individual y colectivo de sus trabajadores en pro de un mayor bienestar para la comunidad y en aras de la propia prosperidad de la Patria, podrá dejar olvidado este aspecto de la legislación obrera, en el que España, como en tantos otros, ha sabido enseñar al mundo.

H. Garantía del pago de la indemnización.

Una vez que hemos examinado detalladamente el problema de la indemnización en su doble aspecto, según se trate de indemnización en caso de fallecimiento o de indemnización en caso de incapacidad, nuestra tarea investigadora está todavía incompleta en cierto sentido, toda vez que no hemos determinado aún si los derechos del obrero a la indemnización están respaldados por alguna garantía que les asegure el ejercicio y disfrute de tales derechos(17). Mucho de otra manera, la cuestión que en la presente fase de nuestro trabajo se nos plantea es la siguiente-

(16) Sobre la cuestión de la justificación de la obligación de procurar esta readaptación, véase: J. SUAREZ MIER, Readaptación Funcional y reparación económica de los accidentes laborales, en el Boletín de Seguridad e Higiene del Trabajo, N.º 6, del año 1945, pp.14 y siguientes, y JUAN ANTONIO DE CUENCA Y GONZALEZ DEL CAMPO, en Reeducación profesional y colocación de inválidos como prestación de la seguridad social, en Revista Española de Seguridad n.º 4. de 1950, pp.441 y ss.

(17) Vid. El Seguro Social en Hispanoamérica para un estudio comparativo sobre la garantía del pago de indemnización en el caso de accidentes del trabajo en distintos países (CARLOS MARTI BUFILL: Seminario de Problemas Hispanoamericanos, Madrid, 1949).

te: ¿Existe alguna garantía en las leyes laborales españolas y filipinas que sirva para asegurar el pago efectivo y escrupuloso de la indemnización debida al obrero accidentado? La cuestión enunciada es aplicable tanto al caso de indemnización por fallecimiento como al de indemnización por incapacitación. Y es que, dicha sin ambages ni rodeos, consideramos, con un sentido realista que nadie podrá criticar, sino, antes al contrario, apoyar y secundar, que sería inútil-vale decir, totalmente vano y fútil- extendernos en un engorrioso y atractivo estudio de los derechos a la indemnización que corresponden a los obreros accidentados y de los correspondientes derechos del patrono a satisfacer cumplidamente, sin que nos preocupemos, al mismo tiempo, de tratar de encontrar una garantía efectiva para el debido cumplimiento de estos derechos y deberes(18).

El problema de la garantía del pago de la indemnización a los obreros, continúa siendo uno de los puntos sin resolver en el Derecho laboral filipino y -si se nos permite presentar la cuestión usando de un lenguaje realista- nos atreveríamos a decir que es éste el aspecto del derecho de accidentes laborales en que la legislación filipina se ha olvidado lamentablemente de valorar, como se merece, la dignidad humana. Pues -repetimos una vez más- de qué sirve insistir en la exposición de

(18) CARLOS G. POSADA: Los Seguros Sociales Obligatorios en España, 3ª ed., Revista de Derecho Privado, Madrid, 1953, p.105 dice que "lo capital hoy en las Leyes de accidentes del trabajo, lo que las distingue de otras, es su sistema de garantías contra la posible insolvencia patrenal frustrando la indemnización".

los derechos que corresponden al obrero si no existe, ni se procura que exista, la garantía correspondiente en pro del cumplimiento debido a tales derechos?...

Un cuidadoso examen y comprobación de la Ley filipina de Indemnización a los obreros pone de manifiesto que en ella se contienen dos disposiciones relativas a la garantía del pago de la indemnización, si bien ambas disposiciones, como tendremos ocasión de ver a continuación, son inadecuadas.

la primera de ellas, que constituye la Sección 30 de la citada Ley, dice textualmente: "Los patronos y empresarios podrán garantizar a sus empleados y obreros el pago de la indemnización señalada por esta Ley, asegurándola en una Compañía de Seguros. Sin embargo, los premios de la póliza serán pagados en su totalidad por el patrono, y será nulo todo contrato en el que se establezca una deducción de aquella cantidad del salario del empleado u obrero"(19).

La segunda de las disposiciones citadas se contiene en la Sección 53 de la misma Ley, que dice lo siguiente: "El Gobierno Nacional y los provinciales y municipales, así como las sociedades propiedad del Gobierno o por él controladas que utilicen trabajadores y empleados comprendidos en las disposiciones de esta Ley, depositarán en la Oficina del Comisario para la Indemnización a los Obreros una cantidad que

(19) Cfr. Apéndice de este trabajo. Act n° 3428.

será determinada por dicho Comisario, para garantizar el pago de las indemnizaciones. Tales depósitos serán recibidos por el Comisario y desembolsados a través de la autoridad del Comisario o del Vicecomisario, como indemnización a los obreros de las entidades gubernamentales que hicieron la aportación, o a los dependientes de los trabajadores, en los casos de muerte, siempre que dichos obreros o sus dependientes tengan derecho a indemnización al amparo de las disposiciones de esta Ley⁽²⁰⁾.

Tal y como puede deducirse de la disposición legal primordialmente citada, la garantía aseguradora tiene un carácter opcional para el patrono o empresario. Dicho con otras palabras, existe una completa libertad por parte del patrono para asegurar o no asegurar la indemnización debida al obrero accidentado. Y así, y como obligada consecuencia, en el caso de que el patrono o empresario no firme póliza de seguros ninguna al respecto, el obrero o empleado queda sin defensa alguna, siendo su único remedio el reclamar contra su patrono. Naturalmente, las desastrosas consecuencias de tal sistema no necesitan explicación alguna.

La segunda de las disposiciones legales citadas, es decir, la contenida en la Sección 53 de la Ley, establece una especie de garantía en el pago de la indemnización, exigiendo que el

(20) Cfr. Apéndice a este trabajo, Act nº 3428.

Gobierno Nacional y los provinciales y municipales, así como las sociedades que sean propiedad del Gobierno o las controladas por él que utilicen trabajadores y empleados comprendidos en las disposiciones de la propia Ley, depositen en la Oficina del Comisario para la Indemnización de los Obreros una cantidad que será determinada por dicho Comisario, para garantizar el pago de las indemnizaciones. Esta disposición tiene un ámbito de aplicación muy reducido, ya que el gran contingente de los empleados a que se refiere la propia Ley lo están en industrias o negocios de carácter privado. Además, la gran objeción a que este respecto puede hacerse es que el esquema previsto y regulado por la Ley no constituye un seguro o una garantía sino solamente un fondo de depósito, con lo que viene a carecer de las excelentes notas y rasgos que caracterizan al sistema de seguros, como, por ejemplo, la generalización, esparcimiento, y consiguiente disminución del riesgo individual, la investigación científica de los fondos mismos. Finalmente, los poderes discrecionales del Comisario para determinar el montante de la indemnización, que en su momento criticábamos debidamente, no puede compararse con la graduación más adecuada de las primas del seguro.

En España, existe un sistema de seguro y reaseguro obligatorio(21). Así, pues, sin necesidad de insistir más en este

(21) V. art. 36 del TRI, que establece el seguro contra el riesgo de accidente que produzca la incapacitación permanente o la muerte. La Ley de 8 de Mayo de 1942 las Ordenes de 11 de Junio, 13 de Agosto, las dos de 5 de Diciembre de 1942, 11 de Octubre 1945, 24 Noviembre y 18 Diciembre 1947; 20 Marzo; 23, 24 y 31 Julio 1948, el Decreto de 10 Agosto 10 Noviembre y la O. de 26 Octubre 1950 regulan el Servicio de Reaseguro de Accidentes que funciona dentro del Ministerio del Trabajo.

sentido, y en consideración a las provechosas ventajas que el sistema de seguros proporciona a este respecto, creemos que las Filipinas deberían emular esta excelente característica que presenta la legislación laboral española. La amplia elección de acción concedida al patrono(22), la Caja Nacional de Seguro, la Mutualidades Patronales, o bien, una Compañía de Seguros(23) asegura un procedimiento más efectivo y conveniente en cuanto a la garantía de la indemnización, a diferencia del sistema vigente en Filipinas, donde el trabajador no dispone, prácticamente, de elección de acción, excepto, naturalmente, contra su propio patrono. Además, existe el Fondo de Garantía, que da garantía adicional en caso de fallo o quiebra de cualquiera de las cuatro cantidades que acabamos de mencionar. El plan del seguro y del reaseguro obligatorio, unido al establecimiento del Fondo de Garantía constituyen los rasgos más caracterizados y notables del sistema español, que merece estudio y consideración cuidadosa por parte de la Legislatura filipina si se quiere que en aquella parte del Pacífico -donde tantas huellas imborrables quedan de la presencia de España- llegue a alcanzarse ese nivel de dignidad humana del obrero, como se ha llegado a alcanzar en la Madre Patria.

Hay todavía, a nuestro entender, y a pesar de las excelen-

(22) El art. 44 del RTI, establece los derechos de los obreros para proceder directamente contra su patrono o empresario.

(23) Véase el art. 44 del RTI, ante citado.

cia del sistema, un punto débil en la legislación laboral española, punto que, creemos, necesita de perfeccionamiento si real y verdaderamente quiere culminarse en España esa comunidad de hombres libres, que hemos dado en considerar meta y cúspide de toda legislación laboral. Nos referimos al seguro de indemnización no sólo en caso de muerte y de incapacitación permanente (como existe ahora) sino también para el caso de incapacitación temporal, es decir, la asistencia médica-farmacéutica, el pago de suministro de prótesis, y las demás obligaciones patronales que ya conocemos. La ayuda últimamente mencionada continúa siendo facultativa, en vez de tener un carácter forzoso(24).

Así, pues, y recapitulando cuanto hasta ahora llevamos dicho, y exceptuando el único defecto indicado, podemos decir con toda razón que la ley laboral española consigue dignamente la participación del obrero en los valores poder, riqueza y respeto. En efecto, hace participar del poder, porque la garantía del obrero de recibir la indemnización no queda completamente abandonada a la previsión del patrón o empresario, sino que es repartida entre las cuatro entidades. Asimismo, se participa del valor riqueza, mediante una adecuada garantía de ingresos a la parte dañada o accidentada. Finalmente, la amplia elección de acción dada al patrón, promueve, indudablemente, el valor respeto.

(24) V. EUGENIO PEREZ BOTIJA, op.cit., p.507.

XIV. PROCEDIMIENTO PARA PERCIBIR LA INDEMNIZACION

- A. Procedimiento en general, según la Ley de Indemnización a los Obreros.
- B. Notificación del daño y reclamación de la indemnización necesaria.
- C. Forma de la notificación y de la reclamación.
- D. Suficiencia de la notificación.
- E. Pago de la indemnización en caso de que no exista controversia.
- F. Procedimiento a seguir en el Departamento del Comisario de los Obreros.
- G. Mecanismo de apelaciones.

Una vez determinados los derechos del obrero a la indemnización y examinado el problema de si existe o no alguna garantía que respalde el pago efectivo de esa indemnización(1), concluyamos nuestro estudio crítico-comparativo de las leyes referentes a los accidentes del trabajo vigentes en España y en Filipinas con una consideración del procedimiento a seguir con objeto de que esos derechos a la indemnización puedan llegar a convertirse en realidad, en el caso de que el obrero sufra un accidente que dé lugar a la puesta en mar-

(1) ANTONIO RODRIGUEZ MARTIN y SALVADOR ALARCON HORCAS: Accidentes del Trabajo, Madrid, 1923, p. 13, dice ".....el trabajo humano es un deber, una misión social que ha de cumplirse, pero reconociéndole toda clase de garantías y preeminencias, por su transcendencia de hecho social necesario".

cha del mismo. Y de nuevo en este punto, en lo que se refiere a nuestra investigación de los aspectos procedimentales, nuestro punto principal de atención se dirige hacia la efectividad en la dignificación del hombre en cuan tal. En la medida en que falle dicho cauce procedimental en su objetivo de tender a la consecución de la dignidad humana, nos consideramos invocados a proponer medidas alternativas de acción para la realización última y fundamental de aquella comunidad de hombres libres, que a través de nuestro estudio hemos considerado invariablemente como la meta y coronación de todo sistema de leyes laborales.

A. Procedimiento en general, según la Ley de Indemnización a los Obreros.

La Ley de Indemnización a los Obreros, vigente en Filipinas dispone de un procedimiento propio al respecto. Exige que se dé al patrono una notificación del hecho del daño, y dispone que la reclamación de la indemnización habrá de presentarse de una manera prescrita y concreta. Con objeto de que pueda determinarse el alcance o extensión de la incapacitación, la propia Ley exige que el obrero accidentado se someta a un examen facultativo por parte de médicos o cirujanos. Además, existe un tribunal especial que entiende exclusivamente de las controversias en materia de accidentes del trabajo(2).

(2) V. Sección 46 del Act 3428, en el Apéndice a este trabajo.

Por demás, puede decirse que en España, el sistema es substancialmente el mismo.

B. Notificación del daño y reclamación de la indemnización necesaria.

A tenor de la Sección 24 de la Ley filipina de Indemnización a los Obreros, "ninguna de las indemnizaciones procedentes según esta Ley podrá prosperar si no se ha comunicado al patrono la lesión o enfermedad, lo más pronto posible después de haberlas sufrido o contraído el obrero, y si no se ha hecho la reclamación de la indemnización antes de los dos meses siguientes a la fecha de la lesión o enfermedad, o, en caso de muerte, antes de los tres meses siguientes a ésta, sin tener en cuenta si la indemnización fué reclamada o no por el obrero mismo. Esta comunicación y reclamación puede hacerlas cualquier persona que se considere con derecho a la indemnización, o cualquier otra persona en su nombre.

En caso de que el patrono haya facilitado voluntariamente la asistencia médico y quirúrgica, los servicios de hospital y los productos necesarios, no será preciso hacer la comunicación de la lesión o enfermedad dentro del límite de tiempo antes determinado; y si el patrono hubiera satisfecho voluntariamente los plazos de la indemnización, no será necesario hacer la reclamación de ésta dentro de los plazos señalados más arriba(3).

(3) V. Apéndice, Act 3428.

En España, las disposiciones legales correspondientes a la que acabamos de citar y que exigen al obrero dar cuenta al patrono del accidente tienden al cumplimiento de los mismos objetivos(4). Es digno de tenerse en cuenta que en España la ley exige al obrero dar cuenta de la producción del accidente dentro de las 24 horas siguientes al mismo, mientras que en Filipinas se concede un plazo mucho más amplio que éste. La expresión contenida en la Sección 24 de la Ley de Indemnización a los Obreros que acabamos de reproducir, de que no prosperará ninguna acción a menos que se haya comunicado al patrono la lesión o enfermedad "lo más pronto posible" una vez que hayan sido sufridas o contraídas por el obrero, abre un jalón de medida muy flexible y no deja criterios fijos y definidos para determinarla. Creemos que el plazo más corto y concreto señalado por la Ley española es mejor y más recomendable porque con él, se obtiene una mayor exactitud conveniente a todos. Se consigue el cumplimiento del valor ilustración porque un período o lapso de tiempo demasiado largo entre la producción del accidente y la notificación del mismo al patrono implica y conduce a errores en la facilitación de dicha notificación.

Ahora bien: la renuncia a la notificación y a la necesidad de reclamar en caso de que el patrono haya facilitado volunta-

(4) V. art. 183 último párrafo, del R.Acc. Para el formulario del parte al patrono véase Manual de Formularios sobre Derecho Laboral, p. 307-308 (F. CERRILLO QUILEZ, Editorial Jurídica Española, Barcelona-Madrid).

riamente la asistencia médicoquirúrgica, los servicios de hospital y los pagos de la necesaria indemnización facilitan y ensalzan el valor rectitud. Y, sin embargo, en el Derecho laboral español no aparece ninguna disposición legal de ese tenor, como hemos visto que existe, por el contrario, en el Derecho filipino.

C. Forma de la notificación y de la reclamación.

La Sección 25 de la Ley filipina de Indemnización a los Obreros dispone, a este respecto, lo siguiente: "La comunicación y la reclamación se harán por escrito, debiendo constar en la comunicación el nombre y la dirección del obrero, manifestándose con claridad el tiempo, lugar, naturaleza y causa de la lesión o enfermedad, firmándola el obrero u otra persona en su nombre, o, en caso de muerte de aquél, persona o personas de él dependientes, y otra persona cualquiera en su nombre. En la comunicación se puede incluir la reclamación".(5).

En España, el parte o notificación, aparte de los extremos arriba consignados para la legislación filipina, requiere también la indicación de "quienes lo presenciaron, el nombre y domicilio del facultativo o facultativos que practicasen la primera cura y el salario que ganaba el obrero(6). Se promueve aquí el valor ilustración porque cuanto más específicos sean los detalles contenidos en la notificación del accidente, más grande será la oportunidad o posibilidad de llegar a una deci-

(5) Cfr. Sección 25 del Act 3428, en el Apéndice a este trabajo.

(6) V. art. 183, último párrafo, del Reglamento de Accidentes.

sión válida y oportuna.

D. Suficiencia de la notificación.

Para que una notificación sea considerada adecuada, la Ley filipina establece en su Sección 27 que "toda comunicación hecha de acuerdo con las disposiciones de la Sección 25 de esta Ley podrá reputarse inválida o insuficiente por razón de alguna incorrección en la manifestación del tiempo, lugar, naturaleza o causa de la lesión, umotra dato cualquiera, a menos que se pruebe que el patrono ha sido realmente mal informado respecto de la lesión. La falta de comunicación o el retraso en hacerla no será obstáculo para el procedimiento aquí establecido si se prueba que el patrono, su agente o su representante, tenían conocimiento del accidente, o que el empresario no resulta perjudicado por tal falta o retraso"(7).

Encontramos aquí dos supuestos o casos en los que la falta de notificación no niega al obrero los derechos de que dispone con arreglo a la ley; asimismo, se disculpa aquí la incorrección en la exposición de la notificación, en tanto en cuanto, naturalmente, el patrono no haya sido realmente erróneamente informado respecto del daño que el obrero haya sufrido. Y he aquí, también, que estos dos supuestos no figuran en absoluto en la ley laboral española, por lo que, creemos, podría encontrar inspiración en ellos, con lo que las leyes laborales de la Madre Patria se dignificarían de seguir este ejemplo que brinda la legisla-

(7) Cfr. Sección 27. Act 3428.

ción filipina.

E, Pago de la indemnización en caso de que no exista contro-
versia.

Tanto la legislación laboral filipina como la española han establecido o regulado situaciones en las que la cuestión de la indemnización queda resuelta sin necesidad de recurrir a ningún complicado procedimiento, simplemente por el mutuo consentimiento de ambas partes, patrono y obrero.

En Filipinas, la Ley establece, a este respecto, lo siguiente: "La indemnización establecida en esta Ley se pagará periódicamente y con puntualidad, en igual forma que los salarios en la cantidad que resulte, y directamente a la persona o personas que tengan derecho a ella, sin necesidad de una orden formal del Comisario, excepto en los casos en que el derecho a la indemnización sea discutida por el patrono. Si el patrono o el asegurador no discuten el derecho del obrero lesionado a ser indemnizado, uno u otro deberá, antes del décimocuarto día posterior a la incapacitación o en dicho día, o dentro de los cinco días siguientes a aquél en que el patrono tuvo conocimiento del accidente por vez primera, empezar el pago de la indemnización, notificando inmediatamente al Comisario, en un impreso cuyo modelo será redactado por éste, que ha tenido lugar el comienzo del pago, acompañando la declaración subsiguiente de que el patrono o el asegurador, según los casos, notificarán al Comisario el cese del pago de la indemnización, debiendo, tan pronto como termi-

nen o suspendan dicho pago comunicarlo al Comisario en un formulario que será determinado por éste. Después de haber efectuado el pago del primer plazo de la indemnización, los siguientes habrán de hacerse semanalmente; pero el Comisario tiene facultades para determinar que cualquier pago pueda hacerse mensualmente o en cualquier otro período de tiempo, según se considere aconsejable"(8).

Podemos afirmar, sin exageración, que el ideal de la dignidad humana, se eleva aquí a su más alto pedestal, por cuanto los valores que la integran se realzan aquí. El valor poder, porque tanto el patrono como el obrero participan por mitad en la resolución de la cuestión con un procedimiento administrativo o judicial. El valor riqueza, ya que ninguna de las dos partes sufre ningún sacrificio en sus ingresos, la adecuación de los ingresos para ambas partes conduce al disfrute del bienestar. El mutuo conocimiento de los hechos sobre los que las dos partes basan su acuerdo indica que no hay menoscabo ninguno, sino, antes al contrario, una revalorización adecuada, de lo que hemos llamado valor ilustración. La libertad de elección dada al patrono y al obrero significa que, en este punto, se alcanza cumplidamente el valor respeto. El hecho de que, en este sistema, queden todas las cartas boca arriba y

(8) Cfr. Sección 45, párrafo 1º del Act 3428. V. también el art. 189 del Reglamento de la Ley de Accidentes del Trabajo, que constituye la disposición correspondiente a esta materia en la legislación española, donde entiende en estos litigios la Magistratura de Trabajo.

que todos los aspectos de la cuestión queden abiertos a la luz del día, indica claramente que el valor rectitud encuentra aquí su debido respeto y cumplimiento. Ambas partes, patrono y obrero, disfrutan, asimismo, del valor afecto porque no ha habido fricción ni disgusto por la otra parte y ambas partes también están satisfechas del arreglo realizado. Finalmente, se obtiene el cumplimiento del valor habilidad, destreza o pericia, toda vez que, por un lado, el patrono no sufre ninguna interrupción seria ni grave en el desarrollo normal de sus negocios por causa de litigios, aquí inexistentes, y que siempre resultan molestos y desagradables, y, por el otro, el obrero y su familia pueden proseguir en la realización de tareas hábiles y útiles mediante un uso prudente y comedido de los ingresos proporcionados por la indemnización.

F. Procedimiento a seguir en el Departamento del Comisario de los Obreros.

Las partes, como realmente sucede en la realidad, pueden no convenir en las consecuencias derivantes de la producción de un accidente de trabajo. En esta caso, la Ley de Compensación de los Obreros establece y regula un procedimiento a seguir, contenido en la Sección 49: "Cualquier litigio o controversia referente a la indemnización establecida por esta Ley se someterá a la decisión del Comisario en la forma que aquí se dispone.

"Se celebrará audiencia por el Comisario, a iniciativa

suya por no haberlo solicitado alguna de las partes interesadas. Hará que cada una de las partes tenga noticia de la celebración de la audiencia mediante notificación a las mismas, entregada personalmente o enviando por correo una copia de ella al último domicilio conocido. Esta audiencia puede ser aplazada libremente por el Comisario y puede celebrarse en el lugar o lugares que él designe. Las partes interesadas tendrán derecho a actuar en la audiencia por sí mismas o por abogados u otro agente o representante cualquiera, a presentar ante el Comisario los testimonios que sean procedentes para el desarrollo de la controversia, y a repreguntar a los testigos de la parte contraria. El Comisario puede admitir como testimonio y utilizar como prueba de cualquier hecho litigioso las siguientes materias, además del juramento prestado en sesión pública:

"1. Informes del médico asistente,

"2. Informes de las investigaciones ordenadas por el Comisario.

"3. Informes del patrono, incluidas las copias de horarios libros de contabilidad y otros testimonios.

"4. Documentos del hospital relativos al caso.

" El Comisario puede también ordenar que se haga un reconocimiento de la persona del obrero lesionado, o sin aviso obtener testimonio o inspeccionar el local donde ocurrió el accidente. Todos los testimonios "ex parte" admitidos por el Comisario se pondrán por escrito, y cualquier parte interesada

tendrá oportunidad de examinarlas y destruirlos con pruebas subsiguientes.

"La audiencia a que se refiere esta Ley tendrá lugar ante el Comisario o uno de los árbitros".(9).

Por lo que respecta a la legislación laboral española, se contiene un procedimiento parecido al que acabamos de exponer en los arts. 203 y 204 así como en los arts. 210 hasta el 215 del Reglamento de la Ley de Accidentes del Trabajo(10).

Apenas si será preciso señalar que el procedimiento al que nos estamos refiriendo, y tanto por lo que respecta al Derecho laboral filipino como español, puesto que ambos son similares, promueve y fomenta principalmente los valores poder e ilustración.

G. Mecanismo de apelaciones.

Ciertamente que no es posible pensar en la existencia de una auténtica "comunidad de hombres libres" sin una adecuada maquinaria de apelaciones contra las sentencias arbitrarias o injustas de los primeramente llamados a dictarlas.

"El Comisario para la Indemnización a los Obreros -dice la Sec. 46 de la Ley- tendrá jurisdicción exclusiva para oír y decidir las reclamaciones de indemnización hechas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Indemnización a los Obreros, sujeto a la apelación al Tribunal Supremo en la misma forma y con

(9) Cfr. Sección 49 del Act 3428 en el Apéndice.

(10) Cfr. los artículos en cuestión. Vid. JUAN MENENDEZ-PIDAL, Derecho Procesal Social, 2ª ed., Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950 pp. 343-349, sobre el procedimiento en materia de accidentes del trabajo en España.

los mismos plazos que marcan la Ley y las Reglas de Procedimiento para la apelación de las resoluciones del Tribunal de Relaciones Industriales ante el Tribunal Supremo"(11).

" La parte interesada que no esté satisfecha con la orden dada por el árbitro puede solicitar la revisión de la misma, pudiendo el árbitro abrir de nuevo el caso, a enmendar o modificar dicha orden, constituyendo tal orden enmendada o modificada la decisión firme, a menos que sea objetada por una petición de revisión. En caso de que el árbitro no enmiende o modifique la orden, remitirá el expediente del caso al Comisario, quien lo revisará, pudiendo, a su criterio, podrá celebrar u ordenar que se celebren pruebas adicionales, sacando sus conclusiones y emitiendo su decisión. La decisión del Comisario finalizará el litigio, a menos que una de las partes interesadas solicite la revisión. Las peticiones de revisión se harán por escrito, especificándose detalladamente los errores y las objeciones. Estas peticiones habrán de hacerse dentro de los quince días siguientes a la fecha de registro de la orden del árbitro o de la decisión del Comisario, a menos que dicho árbitro o el Comisario, dentro de los mencionados quince días, amplien el plazo. Las partes interesadas serán notificadas del registro de toda orden arbitral o decisión del Comisario, y el aludido período de quince días empezará a correr solamente después de hecha tal notificación, considerándose cumplida este requisito por el envío por correo

(11) V. Sección 46 del Act 3428, en el Apéndice.

al último domicilio de la parte interesada, de una copia de la orden o decisión"(12).

Por lo que a este punto se refiere, en España, la ley de 22 de Diciembre de 1.942 ha venido a establecer también los casos y forma en que corresponden las apelaciones en materia laboral(13).

De la disposición legal filipina que hemos transcrito, se puede colegir, sin que a ello den lugar dudas de ninguna clase, que el sistema vigente en aquel país en lo que toca a revisiones y apelaciones en materia laboral, promueve, realmente, a la consecución de la dignidad humana del obrero. De hecho, se hace participar por igual a obrero y patrono del valor poder, por cuanto se facilita y concede a ambas partes toda clase de oportunidades para agotar los remedios legales, garantizándose un procedimiento cabal y completo para ello.

Ahora bien: si examinamos más detallada y concretamente la ley española al respecto, veremos que vá un grado más lejos que la filipina, en lo que a la consecución de la dignidad humana se refiere, con el establecimiento y regulación de más de una vía para la apelación en materia laboral. En España, en efecto, existe el Tribunal Central de Trabajo, aparte del Tribunal Supremo, competente para atender de apelaciones

(12) Cfr. Sección 49 Act 3428.

(13) Véase EMILIO GOMEZ ORBONEJA y VICENTE HERCE QUEMADA: Derecho Procesal, 3ª(ed.), Vol. I, Madrid, 1951, pp.794-801 sobre este punto.

en materia laboral(14). Dicho de otra manera, la participación del valor poder es más grande aquí por razón de que el poder para decidir las controversias en apelación se divide entres dos entidades jurisdiccionales, en vez de radicar sólo en una, lo que, evidentemente, evita la concentración de poder. Y no sólo es ésta la característica del sistema español, sino que, además, conviene insistir en la existencia de la Sala de lo Social en el Tribunal Supremo, que está encargada del exclusivo manejo y consideración de los asuntos laborales, a diferencia de lo que ocurre con el Tribunal Supremo filipino, que entiende siempre y en todos los asuntos en pleno, sin distinción de salas para lo civil, lo penal o lo social. No podemos ocultar y, así queremos que quede bien de manifiesto este aspecto del sistema jurisdiccional laboral español- que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se convierta en un cuerpo o entidad especializada en materias del trabajo, lo que, indudablemente, acrecienta y realza, de una manera decisiva, el valor ilustración.

(14) SALVADOR BERNAL MARTIN: Procedimiento Laboral, 2ª ed., Librería General Victoriano Suárez, Madrid, 1952, pp. 208-209, da las razones para la admisión del recurso de suplica ante el Tribunal Central del Trabajo, entre ellas, la de que, con él se asegura al obrero un procedimiento más amplio y completo de apelación a las sentencias arbitrarias o injustas. Véase JUAN MENENIEZ -PIDAL, Derecho Social Español, Vol.I, Madrid, 1952, pp.138-140, sobre la organización y competencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

XV. RECAPITULACION:

A. Conclusiones comparativas de las legislaciones española y filipina.

B. Recomendaciones o propuestas de "lege ferenda" para ambas legislaciones.

En las páginas que anteceden del presente estudio, hemos presentado una visión de conjunto del sistema vigente en Filipinas sobre accidentes del trabajo. En la primera parte, tratáramos del análisis de las antiguas bases de la responsabilidad patronal abarcando tanto la responsabilidad penal, como la contractual y la extracontractual. Con objeto de no dejar ningún cabo suelto, hicimos un breve análisis y una ligera crítica de la Ley de Responsabilidad de los Patronos, es decir, la disposición legal que regula la indemnización que surge de los accidentes ocurridos en las pequeñas industrias. En la segunda parte, tratáramos de las disposiciones contenidas en la Ley de Indemnización a los Obreros, haciendo una crítica extensiva e intensiva, al mismo tiempo, de esta pieza de legislación laboral -la más moderna en la materia- que regula la indemnización por los accidentes de trabajo en las Islas Filipinas, Ley ésta, que constituye el fruto de muchas décadas de progreso y experiencia y la respuesta a las fervientes y lógicas aspiraciones del obrero filipino hacia una nueva política laboral, más justa y equitativa que la anteriormente existente.

A todo lo largo, y en cada una de las páginas del presente trabajo, hemos fijado, de una manera especialísima y concreta, nuestra atención en el problema que, juzgamos, es el más esencial de nuestro estudio:

LA LEY FILIPINA DE INDEMNIZACION A LOS OBREROS, ¿PROMUEVE REALMENTE LA DIGNIDAD HUMANA DEL TRABAJADOR?

Antes de comenzar a estudiar el problema con la detención y minuciosidad que una cuestión tan delicada exigía, pusimos bien en claro la posición que íbamos a adoptar: la del observador imparcial y desinteresado, que, en cierto sentido, equivale a una postura mucho más elevada que aquella en la que se encuentra el Tribunal Supremo o la Legislatura filipina, en este caso. Desde el primer momento, adoptamos una postura inequívoca en favor de la dignificación del hombre, por razón de que, al hacerlo así, podríamos contribuir, siquiera fuese en una medida muy limitada, a la consecución y logro de una sociedad libre. Después, continuamos nuestro estudio, definiendo y concretando la manera de promover la dignidad humana, y poniendo de relieve cómo la consecución y logro de ese ideal descansa en el fomento de los como valores humanos a que nos hemos referido: poder, riqueza, bienestar, ilustración, respeto, rectitud, afecto y habilidad o destreza. Estos valores han constituido la clave fundamental y preferente a lo largo de nuestros comentarios y consideraciones críticas.

Con estos elementos, entramos ya de lleno en nuestro problema. Aplicamos entonces nuestros criterios científicos —los ocho valores humanos— a lo largo de todas las situaciones y supuestos legales y prácticos evocados por la ley. Al final de cada supuesto legal, hemos ido analizándolos a través y mediante nuestro cuadro de valores, con lo que íbamos contestando, punto por punto, y parcialmente, a nuestro gran problema. Y así, tras aplicar nuestros criterios juzgadores a todas las situaciones legales que encontramos, hasta la última de ellas, al llegar al capítulo postrero, estuvimos ya suficientemente preparados, teniendo en cuenta el número de supuestos legales examinados, para formular una conclusión de nuestro detenido examen. En otras palabras, después de haber procedido inductivamente, tuvimos ya una base segura para contestar a aquél problema que nos habíamos planteado. Y la contestación inevitable, dicha con toda honestidad científica, fué la siguiente:

LA LEY FILIPINA DE INTERMINISTRACION A LOS OBREROS FALLA
EN ALGUNOS ASPECTOS DE SU MISIÓN DE PROMOVER LA DIGNIDAD HUMANA.

Forsados nos hemos visto a declarar semejante conclusión, porque tuvimos ocasión de comprobar, a lo largo de nuestro examen, que dicha ley, aunque constitu^{ya} un innegable y decidido avance y mejora sobre la legislación laboral sobre la misma materia, no consigue completamente real-

zar y acrecentar como sería de desear los valores humanos a que antes nos referíamos.

En atención a lo expuesto, y como ya indicábamos en los comienzos del presente estudio, antes de darlo por definitivamente concluido, séase nos permitido hacer varias sugerencias que puedan resultar de alguna utilidad para una futura revisión, modificación o reforma en dicha legislación, con objeto de que, un día, que desearíamos fuese lo más cercano posible, pueda llegarse a la completa y acertada contribución a esa dignidad humana que hemos venido propugnando:

1ª. La derogación de la Ley de Responsabilidad de los Patronos, en razón del principio anticuado que la informa, es decir, considerar la negligencia del patrono como la base de la indemnización compensatoria. En adelante, creemos que no debería basarse ya dicha indemnización en la negligencia del patrono, sino que la cantidad en concepto de resarcimiento debería concederse al obrero en tanto en cuanto hay una conexión causal entre el daño o el accidente sufrido y el empleo mismo. Asimismo, creemos un deber afirmar que el procedimiento judicial establecido y regulado en la citada Ley, comparado con los remedios más rápidos previstos y acordados en la Ley de Indemnización a los Obreros ante el Departamento del Comisario de los Obreros mismos, no asegura al trabajador filipino la protección que merece.

2ª. Se impone un cambio en las exigencias básicas de la Ley para la existencia de un accidente de trabajo, con obje-

to de conformar aquéllas con la teoría del "riesgo profesional". Con arreglo al sistema actualmente vigente, muchos y auténticos accidentes de trabajo no son indemnizables; por citar solamente un ejemplo al respecto, mencionaremos los accidentes en ruta. Y ello es así, a causa de la exigencia legal de que el accidente ha de ocurrir "durante el transcurso o desarrollo del empleo". Por eso, creemos que la fórmula española "con ocasión o por consecuencia del empleo" merece ser emulada por la legislación laboral filipina.

3º. Con objeto de conseguir una mayor seguridad para el trabajador filipino, sería digna de seguirse la regla de la responsabilidad subsidiaria del propietario de la obra o industria, en caso de que haya un contratista independiente. Así como ya es hora de que los contratistas independientes respondan por los accidentes, aquella responsabilidad subsidiaria dé al obrero o empleado un remedio inmediato en caso de que el contratista independiente sea insolvente.

4º. Propugnamos, asimismo, la adopción de una ley separada e independiente para las enfermedades profesionales. La inclusión de ellas en la Ley de Indemnización a los Obreros crea dificultades que deberían evitarse, en la determinación de lo que son los accidentes del trabajo, cada vez que surge una cuestión de este tipo sobre la que haya que decidirse. Una ley separada, como la existente en España al respecto, que defina claramente un grupo de enfermeda-

des como supuestos de accidentes del trabajo, produciría una mayor claridad en la materia y reduciría las dificultades con que tropieza el Comisario de Indemnización a los Obreros en su labor de interpretación.

5ª. Sería deseable también llegar a una formación más adecuada de la manera en que las personas dependientes deben participar en la indemnización concedida por la ley. En los casos en que hay más de una de aquellas personas, se dá al Comisario de Indemnización a los Obreros un poder discrecional en la mayoría de las ocasiones para decidir la participación a que cada una tiene derecho; en lugar de eso, debería hacerse una clara exposición y constatación de la participación que a cada una corresponde, como lo hacen las leyes laborales españolas, más progresivas en este punto.

6ª. Igualmente, creemos más acertado establecer un criterio definido para la asignación del pago de la indemnización en la forma de capital, en vez de dejar esta cuestión totalmente a la discreción del Comisario de Indemnización a los Obreros, al igual que ocurría en el caso anterior. Un buen modelo para la Legislatura filipina, en lo que se refiere al estudio de la corrección y enmienda de este defecto sería el procedimiento establecido por la Ley española.

7ª. Somos también de la opinión de que los nietos, huérfanos menores y hermanos huérfanos menores deben ser colocados en la misma categoría que los hijos, en cuanto a su derecho a indemnización. La categorización o clasificación en la

Ley actualmente vigente sigue el sistema típico de la teoría de la herencia. Pero la indemnización -como ya tuvimos ocasión de comprobar- no es equivalente ni se confunde con la herencia. Y es que estos menores merecen, a nuestro entender, una mayor protección que los padres y los abuelos.

8ª. Debería adoptarse un método más específico, como el existente en la actualidad en España, en cuanto a la determinación del promedio de los ingresos computables como salario regulador de las prestaciones. Debe, asimismo, hacerse una distinción según que el empleo sea remunerado por períodos de tiempo o a destajo, es decir, por pieza de trabajo realizado.

9ª. Debe llegarse, análogamente, a una graduación más científica de las diferentes categorías de la incapacitación total. Creemos que merece ser aplicada en Filipinas la cuadruple distinción de gran invalidez, invalidez total, absoluta para todo trabajo, y total para la profesión habitual. Una única indemnización de un 60% para las tres clases de incapacitación no puede decirse que esté acorde con el tipo de daño sufrido por el obrero.

10ª. Se impone también la reforma del límite de 208 semanas en concepto de indemnización por fallecimiento y por incapacitación permanente. Las pensiones vitalicias, establecidas por la legislación laboral española, aseguran a las personas dependientes y al propio incapacitado unos ingresos que, aunque limitados, les evitan convertirse en objetos de la caridad pública o privada, una vez terminado el período de las 208 semanas.

11º. Debe seguirse un sistema definido en el montante de la indemnización dada, cuando haya cambios en el número de las personas dependientes, por haber éstas alcanzado la edad de 18 años o por otras causas. En Filipinas, a diferencia de lo que ocurre en España, las restantes personas dependientes vuelven a una situación análoga a la que tenían en el momento de producirse el accidente. Un buen ejemplo a seguir sería el mantener intacto el montante de indemnización para las personas dependientes que continúen siéndolo, incluso en España en el caso de la viuda que contraiga segundas nupcias.

12º. Se hace imprescindible, por lo mismo, el establecimiento de un sistema de seguro así como de reaseguro. El legislador filipino puede obtener una gran inspiración del adecuado sistema español, que consta del Fondo de Garantía, de las mutualidades patronales, de las Compañías privadas de seguros, de la Caja Nacional del Seguro y del Servicio de Reaseguros de Accidentes de Trabajo. La falta de seguros y reaseguros es el punto más débil y la más lamentable laguna dentro del sistema legislativo laboral filipino y necesita una inmediata y urgente atención a fin de poner fin a tan deplorable estado de cosas.

13º. Es menester llegar a la adopción de un adecuado sistema de reeducación y readaptación de los accidentados. Aparte de la indemnización en metálico que pueda concedérsele y de la asistencia médica durante el período de la incapacitación tem-

poral, el obrero filipino no recibe ninguna otra ayuda.

14°. Deben satisfacerse al accidentado los gastos que origine el suministro y renovación de aparatos de prótesis y ortopedia, tal como se establece en la legislación española.

15°. Se impone la regulación de un sistema de revisión de incapacidades. Por regla general, se producen alteraciones en la gravedad de las incapacidades, necesitándose, como consecuencia, introducir cambios en el montante de indemnización, con objeto de que exista una correspondencia, punto por punto, entre las necesidades del trabajador y la ayuda que efectivamente recibe.

16°. Es necesario, asimismo, proveer a una revisión de los porcentajes de indemnización concedida en los distintos grados de las incapacidades, por ejemplo, y por citar únicamente un caso, en el supuesto de gran inválidos; en Filipinas, la indemnización máxima concedida es de un 60%, cantidad que no es adecuada a las necesidades del gran inválido, quien necesita la asistencia constante a su lado de otra persona. Digno de estudio y consideración es el 150% asignado al gran inválido por la legislación laboral española.

17°. Se hace imprescindible, también, llegar a un sistema, democrático y adecuadamente preciso, en materia de apelaciones, ya que los obreros, por su condición de económicamente débiles, no pueden permitirse a sí mismos el esperar por mucho tiem-

po a que se determinen sus derechos en caso de que surja controversia respecto a la indemnización que les corresponde. La creación de una entidad jurisdiccional similar al Tribunal Central de Trabajo existente en España, aparte del Tribunal Supremo, promovería, indudablemente, una mayor rapidez y diligencia en la resolución de estos conflictos laborales.

18º. Un límite más preciso de tiempo en lo que respecta al plazo para dar la notificación de la producción del accidente, es algo que exige, asimismo, una inmediata atención. La disposición legal actualmente vigente en Filipinas es demasiado vaga y autoriza a un plazo demasiado largo. Creemos que con la adopción de una norma que exija que la notificación se entregue al patrono dentro de las 24 horas siguientes a la producción del accidente, tal y como existe en España al respecto, daría lugar a que las probabilidades de error y fraude fuesen menores.

19º. Un programa más firme y amplio de prevención de accidentes del trabajo, análogo al ya realizado en España. Aparte de prestar una mayor atención a la mejora de los distintos aspectos de la indemnización a los obreros, tal y como acabamos de señalar en el apartado anterior, la solución real y verdadera a nuestro problema, el que hemos examinado en la presente tesis, es la de evitar la producción de accidentes. El primer punto en el que la Legislatura filipina debería fijarse con especial atención es el de emprender el problema del derecho de accidentes del trabajo en su pre-

pie raíz. El legislador filipino podría servirse, como modelo al respecto, del Reglamento Español de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y emplear medidas modernas y efectivas y medios de difusión de carácter psicológico, gráfico, mecánico, etc, con el fin de prevenir la producción de accidentes laborales, tal como se hace en España.

Aun cuando, en puridad de expresión, no nos hemos propuesto comprobar de una manera concreta si las leyes laborales españolas en esta materia promueven o no la dignidad humana, la comparación incidental hecha con las leyes de la Madre Patria, realizada con el único y exclusivo objeto de emular sus excelencias y ventajas, vino a confirmar nuestra hipótesis primitiva de que las leyes españolas son, en esta materia, decididamente más avanzadas que las filipinas, por lo que bien podemos afirmar que la Ley de Indemnización a los Obreros está todavía muy lejos de alcanzar las metas y objetivos conseguidos por el Derecho laboral español. Nos atrevemos, sin embargo, a expresar, en este sentido, nuestra opinión de que España no debería dormirse en sus laureles, pensando que sus leyes han alcanzado ya, total y definitivamente, aquel ideal consistente en la consecución de la dignidad humana. Y es que, aun cuando, por un lado, hemos podido comprobar que las leyes laborales españolas fomentan aquella dignidad humana de una manera más decidida y noble de como lo hacen las filipinas, nuestro estudio, por otro lado, nos ha mostrado también que, en algunos puntos, aquella meta es-

tá muy lejos de conseguirse y; en otros, que no se logra de una manera total y plenamente satisfactoria.

He ahí por qué, quisiéramos aprovechar esta ocasión como una oportunidad para sugerir, con la mayor modestia, pero, guiados de nuestro mejor propósito, que si España quiere continuar su marcha progresiva y ascendente, con un destacado puesto, como el que ahora tiene, entre los países cuya legislación laboral consiga promover en su más alto grado la dignidad humana, no estará de más el que se emprenda un reexamen de las disposiciones sobre accidentes del trabajo en los siguientes puntos:

1º. Simplificación y armonización de estas leyes. España tiene un sistema separado, a este respecto, para Marruecos, Guinea, para los accidentes en el mar, en la agricultura, en la industria, etc. Las razones para la existencia de múltiples sistemas fallan cuando consideramos las dificultades e inconvenientes que la dicha multiplicidad causa en su administración y cumplimiento, los posibles conflictos derivados de su aplicación, la desigualdad reparadora ante accidentes con idéntica repercusión para el trabajador que los sufre, etc.

2º. Adopción de la doctrina de la negligencia notoria o evidente. La doctrina de la imprudencia profesional da lugar, de hecho, a la negación, en algunos casos, de indemnizaciones cuya justicia y oportunidad es manifiesta.

3º. Llegar a una definitiva y concreta regulación de la

embriaguez como causa de negación de indemnización por accidentes en el trabajo. En el estado actual de la legislación, la embriaguez cae dentro de la doctrina de la fuerza mayor, autolesionismo e imprudencia extraprofesional.

4º. Establecer una escala graduada en el caso de incapacitación parcial. Actualmente, existe sólo un porcentaje concedido (del 35%) por cualquiera que sea el grado de incapacitación parcial sufrida, y puesto que no se admite discreción

judicial alguna en cuanto a la determinación del montante de la indemnización, un obrero que sufra una incapacitación parcial más grande que otro, no obtiene mayor indemnización que aquél que sufra una incapacidad parcial menor. La disposición legal filipina que concede el 50% de la diferencia entre el salario percibido en el momento de la producción del accidente y lo que probablemente obtendría, merece una consideración por parte de España.

5º. Distinción entre incapacidad total temporal e incapacidad parcial temporal. El 75% que en ambos casos se concede no se corresponde debidamente con la diferencia que existe entre los dos grados antemencionados de incapacitación temporal.

6º. El aumento de la indemnización al cónyuge superstite, al menos hasta un 45%, tal y como se estipula por la ley filipina. Consideramos insuficiente el montante del 35%, y creemos que merece consideración el estudio de las posibilidades de dicho aumento.

7a. Concesión de cantidades diferenciadas por dependencia económica y total. Esta ausencia de acertada distinción en la asignación de tales cantidades entre los dependientes totales y parciales choca con la teoría de la indemnización en concepto de ayuda.

8a. Un sistema más completo de seguros. La legislación actualmente vigente establece únicamente el seguro obligatorio para los pagos de indemnización por muerte e incapacidad permanente, pero no abarca el seguro de la asistencia médico-farmacéutica, ni el de la provisión y reposición de aparatos de prótesis y ortopedia.

En consideración a los extremos apuntados y a las razones aducidas, creemos sinceramente que todavía queda un largo camino que recorrer a la legislación laboral filipina, dada su situación actual en materia de accidentes de trabajo, así como también, como ha puesto de relieve el estudio que hemos realizado, a ciertos aspectos de la española, para alcanzar aquel ideal de una sociedad libre de hombres dignificados por los avances sociales inspirados en las perennes doctrinas cristianas. Nuestra mayor y más acariciada esperanza es que ambos países realizarán inmediatos esfuerzos para reelaborar sus leyes en esta materia, a la luz de los descubrimientos que hemos hecho a lo largo de nuestro trabajo y de los que plumas más autorizadas que la nuestra han realizado ya o pueden realizar en el futuro, con objeto de suprimir y evitar en lo posible ulteriores perjuicios y daños al acrecentamiento y progresiva con-

secución del ideal de dignidad humana.

Por insignificante que este campo de la actividad humana parezca ser, una reforma emprendida en esta línea que hemos esbozado aquí, habrá de ser una piedra fundamental en la contribución al acrecentamiento de la dignidad humana, con la consiguiente realización de una sociedad libre, así como también, y como consecuencia de ello, en un plano internacional, de una pacífica comunidad universal de hombres libres. Que no debemos olvidar, en definitiva, que el trabajo no ha sido utilizado por Dios únicamente para castigar al hombre sino también para dignificarlo. Y para que con él, gane su pan honradamente en este mundo y haga méritos para alcanzar y ganar el definitivo. Porque -como dijo maravillosamente San Agustín-"FECISTE NOS, DOMINE, AD TE, ET INQUIETUM EST COR NOSTRUM DONEC REQUIESCAT IN TE"...

CITAS DE JURISPRUDENCIA

TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA

12 de Septiembre de 1924.	30 de Mayo de 1941.
24 de Abril de 1925.	3 de Julio de 1941.
5 de Julio de 1927.	22 de Septiembre de 1941.
30 de Mayo de 1929,	24 de Septiembre de 1941.
22 de Abril de 1930.	21 de Octubre de 1941.
8 de Julio de 1930.	9 de Noviembre de 1941
2 de Enero de 1932.	19 de Febrero de 1942.
21 de Enero de 1932,	9 de Julio de 1942.
14 de Febrero de 1933.	12 de Septiembre de 1942.
14 de Marzo de 1933.	28 de Septiembre de 1942.
24 de Mayo de 1933.	9 de Octubre de 1942.
23 de Octubre de 1933.	27 de Noviembre de 1942.
18 de Diciembre de 1940.	13 de Febrero de 1943.
4 de Febrero de 1941.	6 de Marzo de 1944.
27 de Febrero de 1941.	27 de Febrero de 1947.
4 de Abril de 1941.	10 de Marzo de 1948.
17 de Abril de 1941.	24 de Enero de 1949.
13 de Mayo de 1941.	17 de Marzo de 1952.
23 de Mayo de 1941.	3 de Noviembre de 1953.

S E N T E N C I A S

T R I B U N A L S U P R E M O D E F I L I P I N A S

Abueg et al. c/ San Diego, C.A.G.R, ndms 773,774 y 776
17 de Diciembre de 1946.

Agdoro c/ Philippine Mining Industrial co., 45 Phil.816.

Alcoresa c/ Jhonston, 64 Phil. 846-847, 30 de Septiembre
de 1951.

Alminar c/ Gangoo, G.R. nº 42585, 29 de Marzo de 1935.

Andoyo c/ Manila Railroad Company., G.R. nº 34722, de
28 de Marzo de 1932.

Ang Tibay et al. c/ Tribunal de Relaciones Industriales
et al., G.R. nº 46496, Gaceta Oficial Vol. 40, nº 12 de
20 de Septiembre de 1941.

Astudillo c/ Manila Electric Company, 55 Phil. 432.

Bahia c/ Littonjua y Laines(1.815), 30 phil., 624.

Gangoo c/ Manila Railroad Co.(1.918), 28 Phil.768.

Cafiete c/ Insular Lumber co., Inc. nº 42175, de 10 de
Julio de 1935.

Catalia c/ The Tayabas Lumber Co., 32 Off. Gas. 382.

Cerezo c/ The Atlantic Gulf and Pacific Co., 33 Phil.425.

Chaves y Garcia c/ Manila Electric Railroad and Light Co.,
31 Phil Reports, 47.

Cuarto c/ Itogon Mining Co., Inc. G.R. nº 42393, de 17 de
Noviembre de 1943.

Cuevo c/ Barredo, S.C.— G.R. nº 45699, de 24 de Febrero
de 1938

Guison c/ Norton y Harrison Co., et. al., octubre de 1930,
55 Phil.18.

Duro et al c/ Compania Maritima, 36 Of. 1319.

De la Cruz et al. c/ Compania Maritima, G.R. nº 38236.
de 21 de Agosto de 1933.

De los Santos et al o/ Javier, G.R. nº 37019, de 8 de Marzo de 1933.

Edades o/ Atlantic Gulf and Pacific Co., Phil. Reports 561.

Enciso o/ Dy-Linacco, G.R. nº 25584, 3 de Noviembre de 1932.

Francisco o/ Consing, 63 Phil. 345.

Hoor et al o/ Compañia Maritima, G.R. nº 37074, dd 25 de Febrero de 1933.

Libron o/ Binalbagan Estate, Inc, G.R. nº 41475, de 27 de Julio de 1934.

Linaas y Salome o/ The Mountain Province, G.R. nº 40083, de 24 de Abril de 1934.

Lobrin o/ Singer Sewing Machine Co., C.A.-G.R. nº 5751 de 6 de Noviembre de 1940.

Morales o/ Garcia, G.R. nº 36819, 22 de Diciembre de 1932.

Murillo o/ Mendoza, 66 Phil. 689.

Pollisco o/ Basilan Lumber Co., G.R. nº 38721, 23 de Octubre de 1933.

Quijano et al o/ Ya Hio et al., G.R. nº 1099, 15 de Julio de 1937.

Rakes o/ Atlantic Gulf and Pacific Co., 7 Phil. Reports, 359, 366.

Ramos o/ Poblete et al., 40 Gaceta Oficial 3474, 25 de Octubre de 1941.

Samones o/ Compañia Maritima, 36 Gaceta Oficial 701.

Sera o/ Edoena Electric Co., G.R. nº 38801, 20 de Julio de 1933.

Taller Vda, de Nava o/ Yuchansti Steamship Co., G.R. nº 35741, 20 de Diciembre de 1932, 57 Phil. 751.

Theby o/ Wisconsin Power and Light Co. (1929) 197.

Vergara o/ Pampanga Bus Co., 62 Phil. 820, 823-824.

S E N T E N C I A S

TRIBUNAL SUPREMO DE NORTE-AMERICA

Acosto c/ Porto Rico Gas Co., (1.915) y Porto Rico Fed., 475.

Aber c/ Amoskeag Mfg. Co., 75 N.H. 99. 71 A. 213.

Elanton c/ Wealer, etc Co., 91 Conn. 226.

Budge c/ Morgan's L. y T.R. y S.S. Co., 198 Ia. 349, 32
So 535, 58 IRA 333.

Buell c/ Hines, 218 Mich. 353.

Carter c/ Atlantic Coast Line R., Co., 109 S.C. 119.

Clavin c/ William Tinkham Co. 29 R.I. 519, 73 A. 392.
132 Am. St. Rep. 836.

Chatanooga Light y P. Co. c/ Hodger, 109 Tenn. 331.

Chicago R.I. y P.R. Co. c/ Moore, 36 Okla. 450, 129 P. 67,
43 IRA (N.S.) 701.

Consumer's Mutual Oil Producing Co. c/ Industrial Commi-
sion, 289 Ill. 423, 124 N.E. 608.

Drew c/ Western Steel Car and Mfg. Co., 174 Ala. 616, 50
So., 995, 40 IRA (N.S.) 890.

Ellsworth c/ Metheney (U.C.A. 6 th) 104 F. 119, 51 IRA
389.

En Julius Rosenberg, 29 A.R.U.S.C.C., 263.

En McNicol, 215 Mass. 479, 102 N.E. 697.

Florida C. and P.R. Co. c/ Mooney, 45 Fla. 286.

Galuzzi c/ State, 149 A 778, 780 Ill Conn. 128.

Gauzman c/ R.R. Pearson Co., 31 A. 247.

Gorgnis c/ Balk Co., 147 Wis. 327; 133 N.W. 209.

Heiss c/ Rupert, 218 N.Y. 148, 112 N.E. 750.

Hoffman c/ Departamento de Relaciones Industriales, 209
Cal. 383, 267 P. 974, 68 ALR 294.

Indemnity Co. c/ Dinkins (Tex. Div. App.), 211 S.W. 249
1919; 18 N.C.C.A. 1034.

In Re Achijire Ikoma, 23 Hawai, 2-1.

In Re Gaynor, 217 Mass, 86, 104 N.E.

Kennedy c/ Chase, 119 Cal, 637.

Kirby Lumber Co. c/ Scurlock, Tex Div. App.(1921); 229 C.W. 975.

Lewis etc County c/ Industrial Acc. Board, 52 Mont. 6155.

Lovineville, N.A. y C.R. Co. c/ Wright, 115 Ind. 378, 16 N.E. 145, 17 N.E. 584, 7 Am. St. Rep. 432.

Lupfer c/ Baldwin Locomotive Works, 112 A 458, 260 Pa. 275.

McGerty c/ Southern New England Telegraph. Co., 69 Conn. 635, 38 A. 359, 61 Am. St. Rep. 62.

Michigan C.R. Co. c/ Vreeland 227 U.S. 59.

Milbur c/ Chicago, N. St. P. y P.R. Co., 331 Mo. 1171.

Milwaukee c/ Miller, 154 Wis. 652.

Mobile y C.R. Co. c/ Industrial Commission of Illinois, 28 F. (2 and), 228, 229.

Mobile y M.R. Co. c/ Askeract(1872) 48 Ala. 15.

New York Cent. R.C. c/ White, 243 U.S. 188.

Northwestern P.R. Co. c/ Bobo, 290 U.S. 499.

Oritz c/ Egnaga(1918), Lo Porto Rico Fed, 350.

Peet c/ Mills, 76 Wash. 437, 36 Pac. 685.

Pionner Min and Mfg. Co. c/ Talley, 152 Ala. 162.

Purdy c/ Westinghouse Electric and Mfg. Co., 199 Pa. 257. 47 A 237, 51 LRA 881, 80 Am. St. Rep. 816.

Reading Co. c/ Greary(C.C. A. 4 th) 47 F. (2 and) 142.

Rincicotti c/ John J. O'Brien Contracting Co., 77 Conn. 617, 60 A 115, 69 LRA 936.

Rocca c/ Lehigh Valley R.Co. 288.

Ruel c/ Lidgerwood Rural Tel. Co., 23 N.D. 614, 65 LRA 459.

Ryallo c/ Mechanics Mills, 180 Mass, 190.

Sanders c/ Boston and M.R. Co., 82 N.H. 476, 136 A. 264, 50 AIR 367.

Schmoll c/ Weiskred and Hess Brewing Co., 89 N.J.L. 150.
Seaboard Airline R.Co. c/ Horton, 233 U.S. 492.
Serbico c/ Shonaman, 196 Pa. 63, 46 A 292, 69 Am. St Rep.689.
Shearer c/ Niagara Falls Co., 150 N.E. 604.
Shumaker c/ St Paul y D.R. Co., 46 Minn. 39.
Simpson c/ Foundation Co., 201 N. Y. 479, 95 N.E. 10.
South Baltimore Car Works c/ Schaefer, 96 Md. 568, 27 N.E. 952, 22 Am. St. Rep. 584.
State c/ Clausen, 65 Wash. 156, 117 Pac, 1101.
State c/ Dietric Ct., 138 Minns 116, 165 N.W. 268.
State c/ Mountain Timber Co., 73 Wash. 581.
St. Louis I.M. & S.R. Co. c/ Steel, 119 Ark. 349, 178 S.W. 320, LRA. 1915 P, 1114.
Stodden c/ Anderson y W Mfg. Co., 136 Iowa 389.
Thompson c/ Tivien, 80 Conn. 44. 497 Atl. 328.
Wall c/ Cameron (1882) 6 Colo, 275.
Wong Chee Yee Chon, 26 Hawai 185.

B I B L I O G R A F I A

- American Jurisprudence (Jurisprudencia Americana),
Rochester.
- Aquinas, St. Thomas, Summa Theologia, Introduction to
St. Thomas.
- ARNALDOS JIMENEZ, PEDRO, Aspectos sociales de la 'valori-
zación de las incapacidades en el seguro de
accidentes del trabajo, Revista Española de
Seguridad Social, núms 1-2, 1950.
- BALTIMORE, BERNARD, and JANOWITZ, MORRIS. (eds.), Reader in
Public Opinion and Communication, Glencoe, Illi-
nois The Free Press, 1950.
- BERNAL MARTIN, SALVADOR, Procedimiento Laboral, 2ª ed.,
Librería General Victoriano Suárez, Madrid, 1952.
- BERNAL MARTIN, SALVADOR, Revisión de las Incapacidades
del Trabajo, Revista Española de Seguridad So-
cial, núm 11, 1950.
- BORSI, U. y FERGOIESI, F., Trattato di Diritto del Lave-
ro, Italia, Vol. 3ª, 1939.
- Bouvier's Law Dictionary.
- BRUNNEN, YAL, Das Parlamentarische Wahlrecht, ein Han-
buch über die Bildung der Gesetzgebenden Körper-
schaften in Europa (2 Vols. Berlin y Leipzig, de
Gruyter, 1932).
- CABANELLAS, GUILLERMO, Tratado de Derecho Laboral, Vol. IV
Buenos Aires, 1949.
- CALLEJA DE LA CUESTA, PABLO, Derecho Social, Madrid, 1935.
- CARMICHAEL, L. (ed.) Manual of Child Psychology, Nueva York,
Wiley, 1946.
- CARNICELLI, E., Il diritto dei superstiti nella lege degli
infortuni. Infortuni sul lavoro, Vol IV.
- CARRO, VENANCIO D., O.P., Conferencia pronunciada durante
las "Jornadas Sociales", organizada por el Ins-
tituto "Balme" de Sociología, Madrid, 1949.
- CARR - SAUNDERS, A. M. y WILSON, P.A., The Professions,
Clarendon Press, Oxford, 1933.
- CASTAN, JOSE, Derecho Civil español. Común y Foral, Reus,
Madrid, 1944, Vol. III.

Catálogo de Mecanismo Preventivos de Accidentes del Trabajo, 2 de Agosto de 1901.

CERRILLO QUILLERZ, F., Manual de formularios sobre Derecho Laboral, Editorial Jurídica Española, Barcelona-Madrid.

Comm. Act. nº 103, modificada por la Comm. Act. nº 559. Ley creando el Tribunal de Relaciones Industriales.

Comm. Act. nº 213. Ley para definir y regular las Organizaciones laborales legales.

Commonwealth. Act. nº 444, denominada ley de la jornada de ocho horas.

Constitución de Filipinas, promulgada el 8 de Febrero del 1935, en virtud de la Ley Tydings-McDuffie, también llamada ley de la Independencia Filipina, aprobada el 24 de Marzo de 1934.

Convenio relativo a la indemnización de accidentes del trabajo en la agricultura, Ginebra, 1921.

Convenio relativo a la reparación de los accidentes del trabajo, Ginebra, 1925.

Corpus Juris, Brooklyn, The American Law Book Co., 1932.

CUTLER, THOMAS L. y KINGSLEY BARBARA J., Accelerate Mass Examination for Laborer, Public Personnel Review, Vol. 12, nº 1, de Enero 1951.

Decreto de 8-V-1933, sobre marcaje de peso en los fardos.

Decreto de 15-XI-1935, sobre transporte a mano de grandes pesos.

Decreto de 10-I-1947 reglamentado por O. de 19-I-1949

Decreto de 10 de Agosto, 10 de Noviembre 1950, Orden de 26 de Octubre de 1950.

DE AGUIRAGA TELLERIA, ANTONIO, Derecho del Trabajo, Gráficas González, Madrid, 1952.

DE ANDRES BUENO, VICENTE, La prevención de los Accidentes del Trabajo, Valladolid, 1934.

DE LA CRUZ, JOSE P., Labor and Industrial Laws of the Philippines, Manila, 1950.

- DE CUENCA Y GONZALEZ DE OCAMPO, JUAN ANTONIO, Reeducación profesional y colocación de invalides como prestación de la seguridad social, Revista Española de Seguridad Social, núm. 4, 1950.
- DEL PESO Y CALVO, CARLOS, Manual de Accidentes del Trabajo, Librería Suárez, Madrid, 1945.
- DEUTSCH ALBERT, The Mentally Ill in America, (2ª ed.), Nueva York, Columbia University Press, 1949.
- DEWHURST, FREDERICK J. y Asociados, America's Needs and Resources, Twentieth Century Fund, Nueva York, 1947.
- ELLIS, HOWARD (ed.), A Survey of Contemporary Economics, H.K. Kinston, Philadelphia, 1948.
- ELORRIETA Y ARTAZA TOMAS, La carta del Atlantico y la Carta de Filadelfia, Madrid, 1945.
- Enciclopedia Jurídica Española.
- Estatuto de Formación Profesional de 21 de Diciembre de 1928, modificado por el Decreto de 27 de Enero de 1941.
- FLUGEL, J.G., Man, Morals and Society, a Psychoanalytical Study, Nueva York, International Universities Press, 1945.
- FORTAS, N. y EVANS PRITCHARD, E.E., African Political Systems, Introducción por E.E. Radcliffe-Brown, Oxford University Press, Nueva York, 1940.
- Fuero de los Españoles.
- Fuero del Trabajo, aprobado por Decreto de 9 de Marzo 1938 (B.O. del 10).
- GARCIA CORAGHAN, M., Accidentes del Trabajo en la Industria, Madrid, 1953.
- GARCIA, GAUDENCIO, Questions and Problems in Philippine Political Law, Revised Edition Kiko Printing Press, Manila, 1948.
- GARCIA OVIEDO, CARLOS, Tratado Elemental de Derecho Social, 5ª ed., G.E.H.A., Madrid, 1952.
- GOMEZ OMBANEJA, EMILIO y HERCE QUEMADA, VICENTE, Derecho Procesal, 3ª (ed.), Vol. I., Madrid 1951.
- GONZALEZ -ROTHVOSS, J. ; CASTAN TOBEÑAS, J.; MARTIN GRANIZO, L.;

- LEZ BOTIJA, EUGENIO ; y MENENDEZ -PIDAL, J., *Leyes Sociales de España*, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1951.
- GEORGE JUNGER, FRIEDRICH, *The Failure of Technology, Perfection Without Purpose*, Hinsdale, Ill., H. Reganery, Co., 1949.
- GUSHELL, HAROLD T., *Democracy, The Threshold of Freedom*, Ronald, New York, 1948.
- MARIQU, MAURICE, *Principios de Derecho Público y Constitucional*, 2ª ed., Instituto Editorial Reus, Madrid, 1927.
- HERNAINZ MARQUEZ, MIGUEL, *Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales*, 2ª ed., Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1953.
- HERNAINZ MARQUEZ, MIGUEL, *Tratado Elemento de Derecho del Trabajo*, 5ª ed., Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1951.
- HERNANDEZ DE VILLASCO, JOSE, *El recurso administrativo de revisión de accidentes del trabajo*, Revista Española de Seguridad Social. 10 y 11, 1951.
- HELADO, EMILIO Y. y HAGAN, JUAN M., *Philippine Labor and Social Legislation*, Philaw Publishing Company, Manila, 1951.
- HOSLETT, S.D., *Some Human Factors in Management*, Harpers, N.Y., 1946.
- Informe Bell, conocido tambien como Misión de Inspección Económica en Filipinas, Informe al Presidente de los Estados Unidos.
- Informe de la Comisión preparatoria del nuevo Código civil de Filipinas.
- KHON, HANS, *The Idea of Nationalism*. Nueva York, Macmillan, 1944.
- KLINEBERG, OTTO, *Social Psychology*, Henry Holt, N.Y., 1940.
- Lectures on the Relation Between Law and Public Opinion in England in the Nineteenth Century*, Nueva York, Macmillan, 1950.
- Ley de Bases de 4 de Julio de 1932, Accidentes del Trabajo en la Industria.
- Ley de Compensación a los Obreros, nº 3428, aprobada el 10

de Diciembre de 1927, enmendada por la Ley nº 3812 y posteriormente por la Commonwealth Act nº 210 y por la Republic Act nº 772.

Ley de Indemnización al Obrero de Hawai, Leyes Revisadas de Hawai, 1925.

Ley de Responsabilidad de los Patronos nº 1874, aprobada por el legislativo filipino en 19 de Junio de 1908.

Ley nº 3961, modificada por la Ley nº 324 por la Republic Act. nº 46.

Ley de Contrato de Trabajo de 26 de Enero de 1944.

Ley de Indemnización al Obrero de Hawai (Capítulo 209 de las Leyes Revisadas de Hawai, 1925.

Ley Inglesa de Responsabilidades del Empresario, 43 y 44 Viet., c. 42.

Los problemas de la orientación profesional, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1941.

Labbatt, Master and Servant

LASSWELL, HEROLD D. y SMITH MCDUGAL, MYRES: Law, Science and Policy Outline, Yale University, New Haven, 1951.

LASSWELL, HEROLD D. y KAPLAN, ABRAHAM, Power and Society: A Framework for Political Inquiry, Yale University Press, New Haven, 1950.

LASSWELL, HEROLD D., World Politics and Personal Security, McGraw Hill, Nueva York, 1935.

LASSWELL, HAROLD D., The World Revolution of Our Time: A Framework for Basic Policy Research, Stanford, Stanford University Press, 1951.

LERMER, RUTH (ed.) Propaganda in War and crisis. Nueva York: George W Steward, 1951.

MALLART, J., Orientación y Formación Profesional, Madrid, 1946

MALLART, J. y ESTERAS, S., Propaganda Preventiva del Accidente, publicado en la Revista de Organización Científica.

Mannheim, Herman, Criminal Justice and Social Reconstruction, Oxford University Press, Nueva York, 1946.

Mannheim, Kar, Freedom Power and Democratic Planning, Nueva York.

MARCOS DE CASTRO, FEDERICO, Los Accidentes de Trabajo y su Prevención, publicada por el Ministerio de Trabajo (sin fecha).

MARTIN BUFILE, CARLOS, El Seguro Social en Hispanoamerica, Madrid, 1949.

MONOUGAL, MYRES SMITH, Legal Education and Public Policy: Professional Training in the Public Interest, Yale Law Journal, L.II, 1943.

MONOUGAL, MYRES S., The Comparative Study of Law for Policy Purpose: Value Clarification as an instrument of Democratic World Order, Yale University, 1943.

MONOUGAL MYRES S., The Role of Law in World Politics nº 3, Mississippi Law Journal, Mayo 1.949. Vol XX.

MORAD, MARGARET, FROM the South seas, Studies of Adolescence and Sex in Primitive Societies, Nueva York, Morrow, 1939.

MAYO EITON, The Human Problems of an Industrial Civilization, Macmillan, N.Y., 1943.

MAYO EITON, Social Problems of an Industrial Civilization, Harvard University, Cambridge, 1945.

MURCE, F., La prevención de los accidentes por los métodos psicológicos, Madrid, 1934.

MURDER, GARIBALDO. The Fuling Class, Nueva York, MacGraw-Hill, 1939.

MENENDEZ-PIDAL, JUAN, Derecho Procesal Social, 2ª ed., Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950.

MENENDEZ-PIDAL, JUAN, Derecho Social Español, Vols. I-II, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1952.

MENDAL, GURGHAR, An American Dilemma, 2 vols., Nueva York, Harpers, 1944.

National Administration and International Organisation, Institut International des Sciences Administratives, Bruselas.

NOMAD, MAX, Rebels and Renegades, Nueva York, Macmillan, 1932.

Opinión del Ministerio de Trabajo de Filipinas, publicado en Labor Bulletin, Manila, Mayo-junio, 1940.

Orden de 29 de Julio de 1939 (España).

Orden sobre iluminación de centros de trabajo, de 26 de Agosto de 1.940.

Orden Ministerial de 31 de Julio de 1944 sobre propaganda gráfica para la prevención de accidentes y material de protección del trabajador.

Orden de 1 de Abril de 1950.

ORMACHEA, GARCIA.R., Jurisprudencia sobre accidentes del Trabajo, Madrid, 1935.

PACHIONI, GIOVANNI, Elementi di Diritto Civile, Turin, 1926.

PADILLA, AMBROSIO, Civil Code Annotated, Vols I-II, Manila, 1950.

PALANCA, MARIA y PEREZ BOTIJA E., Prevención de Accidentes del Trabajo, Madrid, 1934.

PEREZ BOTIJA, EUGENIO Humanismo en la Relación Laboral, Discursus correspondiente al curso Académico 1953-1954, Universidad Central de Madrid, (Estados); Madrid, 1953.

PEREZ LEÑERO, JOSE, Teoría General del Derecho Español de Trabajo, Espasa-Calpe, Madrid, 1948.

PEREZ LEÑERO, JOSE, Instituciones del Derecho Español de Trabajo, Espasa-Calpe, Madrid, 1949.

PEREZ SERRANO, NICOLAS y GASCON y MARIN, JOSE, El Poder Constituyente, Gráfica Administrativa, Madrid, 1947.

POSADA, CARLOS G., Los Seguros Sociales Obligatorios en España, 3ª ed., Revista de Derecho Privado, Madrid, 1953.

POZAS, LUIS JORDANA DE, Los Accidentes del Trabajo Agrícola en España, Madrid, 1913.

RASHEVSKY, N., Mathematical Biophysics (Chicago University of Press, 1948).

RAZOUS, PAUL, Curso de Prevención de Accidentes del Trabajo, ed. española, traducida por A. MAYORGA G. PÉREZ y T. SANCLIS, Madrid, 1933.

Readings in Business Cycle Theory (Seleccionada por una comisión de la American Economic Association) Philadelphia, Blakiston, 1948.

Reglamento de 13 de Diciembre de 1924 sobre lucha antipalúdica.

- Reglamento de 17 de Noviembre de 1925, sobre establecimientos peligrosos, infección e insalubres.
- Reglamento de 21-XI-1929, sobre seguridad de recipientes para fluidos a presión.
- R. O. de 23-V-1930, sobre medidas de seguridad en la limpieza de pozos negros.
- Reglamento de 28-V-1931 que prohíbe el empleo de la cerusa y sulfato de plomo en la pintura.
- Reglamento de la Ley de Accidentes del Trabajo, de 31 de Enero de 1933, modificado por los Decretos de 26 de Julio de 1934 y 15 de Junio de 1936.
- Reglamento de 1-III-1919 y 5-VII-1933, sobre instalaciones eléctricas.
- Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo de 31 de Enero de 1940.
- Reglamento de 25-VI-1920 y 1 de Dec-30-XII-1941 y 27-XII-1944 sobre explosivos.
- Reglamentos promulgados por el Secretario de Trabajo, Departamento de Trabajo, Filipinas: Reglas de Seguridad General, Reglas de Seguridad de las Máquinas, Reglamento de Seguridad en las Minas, La Organización de Seguridad Tipo.
- Revised Penal Code, Bureau of Printing, Manila, 1946.
- R. O. de 29 de Abril de 1916 sobre construcción de andamios.
- RIUS SINTES, I., La Seguridad Industrial, Barcelona, 1942.
- R DRÍQUEZ MARTÍN, ANTONIO y ALARCÓN FERRAS, SALVADOR, Accidentes del Trabajo, Reus Madrid, 1923.
- RUIZ, MARCELLO CATALA, Historia y Doctrina Politico-Social, Gráficas Consales, Madrid, 1952.
- RUIZ DEL CASTILLO, CARLOS, estudio preliminar de la obra de Maurice Hauriou. "Principios de Derecho Público y Constitucional. (Instituto Editorial Reus) 2ª ed., Madrid, 1927.
- Sentencia de HOMOGENIANO contenida en el Digesto.
- SIMMONS, J.S. (ed., Public Health in the World Today, Harvard University Press, Cambridge, 1949.

- Some Human Aspects of Administration, International Institute of Science, Brussels, 1942.
- SOROKIN, P.A., Contemporary Sociological Theories, Harpers, Nueva York, 1928.
- SOROKIN, P.A., Social Mobility, Harpers, Nueva York, 1927.
- SOROKIN, P.A., Social Philosophies in an Age of Crisis, Beacon Press, Boston, 1950.
- S.S. PIO XII, El nuevo orden del mundo, mensaje de Navidad de 1942; 2ª ed., Publicaciones de la Junta Técnica Nacional de A.C.E., Madrid.
- SUAREZ MIER, J., Readaptación Funcional y Reparación económica de los Accidentes Laborales, Boletín de Seguridad e Higiene del Trabajo, núm. 6, 1945.
- TALLADA, JOSE MARIA, La Técnica Moderna en la Prevención de Accidentes del Trabajo, conferencia pronunciada en Barcelona el 3 de Marzo de 1942, publicada por el Ministerio de Trabajo.
- Texto Refundido del Reglamento sobre silicosis (17-III-1946), refundido a su vez en parte, en el de enfermedad profesionales (19-VII-1946).
- TIFFIN, JOSEPH, Industrial Psychology, New York, Prentice-Hall, 1948.
- TIMASHEFF, N.S., Introduction to the Sociology of Law, Harvard University Press, Cambridge, 1939.
- TINGSTEN, H., Political Behaviour, Londres, King, 1937.
- TOVO, SEGIO, Las Causas de los Accidentes; estudio de la influencia de la fatiga. Rassegna di Medicina Industriale, junio-julio 1941.
- Tredgold, R.F., Human Relation in Modern Industry, International University, N.Y.
- TUPAS, RODOLFO, The case of Free Labor, Sunday Times Magazine, Manila, 1 de marzo de 1953.
- VILLAR, MANUEL., La psicotécnica en la prevención de accidentes del trabajo, Conferencia pronunciada en 28 de Febrero de 1942, publicada por el Ministerio del Trabajo.
- VON NEUMAN, JHON y MORGENSTERN, OSCAR, Theory of Games and Economic Behaviour, Princeton University Press, Princeton, 1947.

- WACH, JOACHIM, Sociology of Religion, London: Kegan Paul 1947.
- Warner, Lloyd W., Meeker, Marcia, y Bels, Kenneth, Social Class in America, A Manual of Procedure for the Measurement of Social Status, Science Research Associates, Chicago 1949.
- WEBER, MAX, Essays in Sociology, Oxford University Press Nueva York 1946.
- WEBSTER, International Dictionary.
- WEINER, NORBERT, Cybernetics, Nueva York Wiley, 1948.
- WILSON, IOGAN, The Academic Man: A study in the Sociology of a Profession, London: Oxford University Press, 1942.
- Wood, Gobernador General, discurso inaugural ante la sexta legislatura filipina, 27 de Octubre de 1922.
- YOEER, BAILE, Personnel Management and Industrial Relations, New York, 1949
- YOUNG, KIMBALL, Social Psychology, F.S. Crofts and Co., Inc, 1947

C O D I G O S:

Código Civil Filipino.
Código Civil español.
Código Civil francés.
Código Civil alemán.
Código Civil italiano
Código Civil belga.
Código de Comercio Filipino.
Código de Comercio español.
Código de Trabajo de España
Código Penal de Filipinas.
Código Penal de España.
Código Administrativo de Filipinas.

A P E N D I C E

A

LA LEY DE INDEMNIZACION A LOS OBREROS
TRADUCIDA AL ESPAÑOL

LEY Nº. 3428

(Con las modificaciones introducidas por la
Ley nº. 3812; la Commonwealth Act nº. 210;
y la Republic Act nº. 772).

LEY DE INDEMNIZACION A LOS OBREROS

Ley N°. 3428

(Con las modificaciones introducidas por la Ley n°. 3812; la Commonwealth Act n° 210; y la Republic Act n° 772).

LEY ESTABLECIENDO LA INDEMNIZACION QUE HAN DE RECIBIR LOS TRABAJADORES POR LAS LESIONES CORPORALES, MUERTE O ENFERMEDAD QUE SE PRODUCAN EN EL CURSO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

Puesta en vigor por el Senado y la Cámara de Representantes de Filipinas en sesión conjunta y por la autoridad de los mismos:

Sección 1. Trabajadores afectados. Esta Ley será aplicable a todos los trabajadores de la industria que se especifican más adelante.

Sec. 2. Motivos de indemnización. Cuando un obrero sufra una lesión a causa de cualquier accidente derivado de su empleo y ocurrido durante el desempeño del mismo, o contraiga la tuberculosis u otra enfermedad directamente producida por el empleo, o bien agravada por la naturaleza del trabajo, o resul-

tante de ésta, el patrono indemnizará en la cantidad y a la persona que luego se especifican. El derecho a indemnización tal como se establece en esta Ley no se perderá o menoscabará por el hecho de que la muerte, la le sión o la enfermedad fueran debidas a la negligencia de un compañero de trabajo, sin perjuicio del derecho del patrono a proceder contra la parte negligente (Modificado por la Sec. 1 de la Ley nº 3812 y por la Sec. 1 de la Rep. Act nºm. 772).

Sec. 3. Aplicabilidad al Gobierno. Esta Ley será también aplicable a los mensajeros montados al servicio del Gobierno Nacional y todas sus subdivisiones políticas y a los trabajadores y obreros empleados en las obras públicas y en las empresas industriales del Gobierno, y a cualquier otra persona que realice un trabajo manual al servicio del Gobierno Nacional y sus subdivisiones y organismos políticos: teniendo en cuenta, sin embargo, que los obreros y empleados asegurados en el Régimen de Seguros del Gobierno, y las personas que de ellos dependan, cuando tengan derecho a los beneficios de dicho Régimen de Seguros, tendrán derecho, además, a los beneficios concedidos por esta Ley (Modificado por la Sec. 2 de la Ley nº 3812; Sec. 1 de la Commonwealth Act nº 210; y Sec 2 de la Rep. Act nº 772).

Sec. 4. Lesiones no comprendidas. No habrá lugar a indemnización por las lesiones causadas: (1) a consecuencia del propósito voluntario del obrero de causar tal lesión, ya a su propia persona ya a otra; (2) por embriaguez del trabajador que sufrió el accidente; y (3) por negligencia notoria del mismo. (Modificación por la Re. Act. n° 772).

"Sec. 4-1. Derecho a indemnización adicional. En el caso de que la muerte, lesión o enfermedad del trabajador se deban al incumplimiento, por parte del patrono, de una ley, o de una orden, norma o reglamento del Comisario para la Indemnización de los Obreros o de la Oficina de Seguridad Industrial, o si el empresario hubiera violado las disposiciones de la Ley número tres mil setenta y uno o no hubiera instalado y conservado dispositivos de seguridad, o tomado otras precauciones para la prevención de accidentes o de enfermedades profesionales, deberá abonar una indemnización adicional igual al cincuenta por ciento de la indemnización fijada en esta Ley." (Disposición incluida por la Sec. 4 de la Rep. Act n° 772).

Sec. 5. Derecho exclusivo a indemnización. Los derechos y soluciones legales concedidos por esta Ley a un obrero por razón de una lesión corporal que le

habilite para ser indemnizado, excluyen cualquier otro derecho y solución legal que resulten en favor del trabajador, sus representantes personales o personas que dependan de él o parientes próximos, y contra el patrono, del Código civil y otras leyes en virtud de la mencionada lesión.

Los empresarios que contraten obreros en las Islas Filipinas para trabajar fuera de ellas, estipularán con tales obreros que las soluciones legales prescritas en esta Ley se aplicarán a las lesiones sufridas fuera de las islas en accidentes ocurridos en y durante el cumplimiento de las obligaciones propias del empleo. Esta estipulación no perjudicará el derecho de los trabajadores a los beneficios de la Ley de Indemnización al obrero del lugar donde ocurriera el accidente, si tal Ley les fuese más favorable. (Modificada por la Sección 5 de la Republic Act n°. 772).

Sec. 6. Responsabilidad de terceros. En caso de que un obrero sufra una lesión cuya indemnización haya de ser satisfecha, según esta Ley, por personas distintas del empresario, será facultativo del obrero lesionado reclamar la indemnización del empresario, según

lo dispuesto en esta Ley, o demandar por daños a otra persona, de acuerdo a derecho; y en el caso de que la indemnización fuera reclamada y concedida de conformidad a esta Ley, el patrono que hizo efectiva tal indemnización o que fué declarado responsable del pago de la misma se subrogará en los derechos del obrero lesionado para repetir la suma satisfecha: bien entendido que en caso de que el patrono perciba del tercero daños que excedan de los que él pagó o debió pagar según esta Ley, tal exceso será entregado al trabajador lesionado o a cualquiera otra persona con derecho a ello, previa la deducción de los gastos del patrono y de las costas procesales. La suma pagada por el patrono a título de indemnización o el importe de la indemnización a que el obrero o las personas que de él dependan tienen derecho según las disposiciones de esta Ley, no se admitirán como prueba en ningún litigio o acción por daños. (Modificada por la Sec. 3 de la Ley n°. 3612).

Sec. 7. Contratos prohibidos. Cualquiera contrato, reglamento o proyecto de cualquier clase dirigido a eximir al patrono de todo o parte de la responsabilidad establecido por esta Ley, será nulo.

Sec. 7-A. Nombramiento del Comisario para la indemnización de los Obreros. Se crea por esta Ley

en el Departamento de Trabajo, el cargo de Comisario para la Indemnización de los Obreros, denominado de aquí en adelante el Comisario, que estará ayudado por un Vicecomisario para la Indemnización de los Obreros. El Comisario y el Vicecomisario serán nombrados por el Presidente de Filipinas con la aprobación de la Comisión de Nombramientos y percibirán una remuneración de ocho mil cuatrocientos pesos y siete mil doscientos pesos anuales, respectivamente.

Una vez organizada la Oficina del Comisario, la actual División de Indemnización de los Obreros será disuelta, y todos sus expedientes, archivo, equipo, créditos, así como todos sus funcionarios y empleados, quedarán bajo la dirección y el control del Comisario."

(Disposición incluida por la Sec. 6 de la Rep. Act nº 772).

Sec. 8. Beneficios por causa de muerte. Si la enfermedad contraída o la lesión sufrida por el trabajador tal como se dice en la Sección dos de esta Ley, le produjeran la muerte dentro de los dos años de la fecha de dicho accidente o enfermedad, el empresario hará efectiva la indemnización a las personas habilitadas para recibirla, y en el caso de que éstas no existan, pagará a la persona que represente al obrero fallecido los gastos de entierro, sin que éstos excedan de doscientos

pesos, y pagará también a las personas que más abajo se mencionan, observando el orden de prelación y los periodos aquí establecidos, una indemnización semanal equivalente a los porcentajes del sueldo medio semanal del obrero, determinado en la forma que dispone la sección 19 de esta Ley, que a continuación se fijan:

(a) A la viuda o viudo dependiente del fallecido, en caso de que no haya hijos de él dependientes, el cuarenta y cinco por ciento.

(b) A la viuda o viudo dependiente, en caso de que haya uno o dos hijos dependientes del fallecido, el cincuenta por ciento, y si hay tres o más hijos dependientes, el sesenta por ciento. La indemnización a la viuda o viudo será para uso o beneficio de la viuda o viudo y de los hijos sujetos a la madre o al padre, y el Comisario para la Indemnización a los Obreros puede, de vez en cuando, reajustar la indemnización entre ellos de la manera más equitativa posible.

(c) Si no queda viuda o viudo dependiente del fallecido, sino uno o más hijos dependientes, el hijo o hijos percibirán el cuarenta por ciento con el diez por ciento adicional por cada hijo que exceda de dos, hasta un máximo del cincuenta por ciento, que será distribuido por partes iguales entre los hijos, si

son más de uno.

(d) Si no hay viuda, viudo o hijos dependientes, pero sí existe padre o madre dependientes del fallecido, el cuarenta por ciento para el padre o la madre si la dependencia era total, o el veinticinco por ciento si dependían del fallecido, cada uno percibirá la mitad de tal indemnización. Si no existen padres, pero sí abuelos dependientes, se pagará la misma indemnización que para el padre o la madre.

(e) Si no existe viuda, viudo, hijo, padres o abuelos, pero hay un nieto o hermano dependiente, o dos o más de éstos, se pagará el veinticinco por ciento por un individuo dependiente del fallecido y el cinco por ciento adicional por cada uno más que dependiera de él, hasta un máximo del cuarenta por ciento, que será repartido por partes iguales entre los que dependan del causante, si hubiera más de uno.

(f) Si no existieran personas dependientes legítimas, el patrono abonará la suma de mil pesos al Fondo de Indemnización a los Obreros: teniendo en cuenta que el mencionado Comisario ejercerá el control directo y la supervisión sobre estos fondos, sujeto a los requisitos generales de intervención, y que serán empleados en la rehabilitación de lesionados en la

industria.

Cuando haya varias personas con derecho a indemnización, y no haya acuerdo con relación a la parte de ésta que cada una ha de recibir, la Comisión de Indemnización a los obreros actuará como árbitro y determinará la parte que se ha de adjudicar a cada beneficiario (Modificadas por la Ley n° 3812; Sec. 2ª de la Commonwealth Act n° 210; y Sec. 7ª de la Rep. Act n° 772).

Sec. 9.- Personas dependientes del lesionado.

Las siguientes personas, y ninguna otra, serán consideradas dependientes y con derecho a indemnización según las disposiciones de esta Ley.

El hijo o la hija menores de dieciocho años o incapaces, y que no hayan contraído matrimonio, dependan realmente del fallecido o no;

La viuda, sólo si viva con el fallecido o dependía realmente de él total o parcialmente;

El viudo, sólo en caso de que sea incapaz de proveer a su propio sustento y dependiera realmente de la fallecida, total o parcialmente, en la fecha del accidente;

Los padres o abuelos, sólo en caso de dependencia total o parcial del fallecido;

Los nietos, hermanos o hermanas menores de

dieciocho años, o incapaces de atender a su sustento, y totalmente dependientes del fallecido. La relación de dependencia tiene que existir al tiempo de la lesión.

Un extranjero no será considerado como dependiente en el sentido de esta Ley si no es al mismo tiempo residente en las Islas Filipinas, y todo extranjero dependiente que abandone las Islas perderá automáticamente todo derecho a beneficiarse según esta Ley.

Sec. 10. Períodos de indemnización. La indemnización establecida en esta Ley será abonada durante los siguientes períodos de tiempo:

A la viuda, hasta su muerte o hasta que contraiga nuevas nupcias; pero en ningún caso durante más de doscientas ocho semanas;

Al viudo, mientras dure su incapacidad; pero en ningún caso durante más de doscientas ocho semanas;

Al hijo o hija, hasta que cumpla los dieciocho años; pero en caso de que se trate de hijo incapaz y que no haya contraído matrimonio, mientras dure la incapacidad; pero nunca por un tiempo superior a doscientas ocho semanas en total;

A los padres o abuelos, mientras continúan en su condición de dependencia real; pero en ningún ca-

so durante más de doscientas ocho semanas;

A los nietos o hermanos, mientras dure su estado de dependencia, tal como se define en la Sec.9- de esta Ley; pero en ningún caso durante más de doscientas ocho semanas;

Al terminar el derecho a indemnización de alguna persona según esta Sección, la indemnización abonable a las restantes personas con derecho a ella porque el tiempo durante el cual han de percibirla no ha expirado todavía, será la que tal persona recibiría si ellas solas hubieran tenido derecho a indemnización en la fecha en que ocurrió el fallecimiento.

Sec. 11. Alcance de ciertas palabras. Las palabras "hijo", "hija" o "hijos", tal como se usan en esta Ley, comprenden a los hijos del otro cónyuge habidos en anterior matrimonio, a los hijos adoptivos y a los hijos ilegítimos reconocidos por el fallecido y dependientes del mismo antes de que la lesión tuvieran lugar; pero no incluyen a las personas casadas, a menos que éstas no sean dependientes, por alguna razón establecida por la Ley, las palabras "hermano" o "hermana" comprenden a los medio hermanos o medio hermanas, hermanastros y hermanastras, y hermanos o hermanas por adopción; pero no quedan incluidos en su significación,

los hermanos o hermanas casados, a no ser que éstos sean dependientes por alguna razón establecida por la ley. Las palabras "nieta", "nieta" o "nietos" comprenden a los hijos de los hijos adoptivos y de los hijos del otro cónyuge habidos en anterior matrimonio; pero no comprenden a los hijastros de los hijos ni a los hijastros de los hijastros, ni a los hijastros de los hijos adoptivos, ni a los nietos casados, a menos que sean dependientes según la ley. La palabra "padres" comprende a los padrastrros y madrastras y padres adoptivos. La palabra "abuelos" o "abuelas" comprende a los padres de los padres adoptivos, pero no comprende en su sentido a los padres de los padrastrros, a los padrastrros de los padres ni a los padrastrros de los padrastrros. (Modificada por la Lec. 8 de la Ley. Act n° 772).

Sec. 12. Disposiciones varias relativas a los beneficios por causa de muerte. Al computer los beneficios por causa de muerte, el salario medio semanal del trabajador fallecido no se calculará a más de cincuenta pesos ni a menos de diez pesos; pero la indemnización semanal total no excederá, en ningún caso, del salario medio semanal computado de acuerdo con la Lec. diecinueve de esta Ley, ni el total de la indemnización abonada sobrepasará, en ningún caso, la suma de cuatro mil pe-

sos.

El pago de una indemnización por muerte hecho de buena fe por un patrono a una persona dependiente con derecho a ella en segundo lugar después de otro u otros dependientes, protegerá y exonerará al patrono, a menos que y hasta que el dependiente o dependientes con derecho preferente le notifiquen su o sus reclamaciones.

En caso de que la muerte tenga lugar después de un período de incapacidad total o parcial, este período se deducirá de los respectivos períodos total establecidos en la Sec. diez de esta Ley.

La indemnización de un demente será hecha efectiva a su tutor. (Modificada por la Sec. 9 de la Rep. Act n° 772).

Sec. 13. Asistencia médica. Inmediatamente después de que un trabajador haya sufrido una lesión o contraído una enfermedad y durante el subsiguiente período de incapacidad por el trabajo, el patrono facilitará al obrero la asistencia médica y quirúrgica, los servicios de hospital y productos que la naturaleza de la lesión o de la enfermedad hagan necesarios.

La responsabilidad pecuniaria del patrono con respecto a la asistencia médica y quirúrgica, ser-

vicios de hospital y productos que sean necesarios, estará limitada por el importe que normalmente se pagaría en la localidad por el tratamiento de una persona herida del mismo nivel social, si el tratamiento hubiera de ser costado por la propia persona lesionada.

En el caso de que el patrono no pueda facilitar con rapidez la asistencia médico-quirúrgica y los servicios de hospital y productos necesarios, el obrero lesionado puede obtener todo ello a expensas del patrono.

Si se prueba ante el Comisario que el obrero lesionado se negó voluntariamente a aceptar los servicios de un médico o cirujano competente, o que rechazó voluntariamente la asistencia médico-quirúrgica, y los servicios de hospital y productos facilitados por el patrono, o que voluntariamente obstruyó la labor del médico o del cirujano, o de los servicios médicos, quirúrgicos o de hospital, tal negativa por parte del obrero será interpretada como una renuncia a todos o parte de sus derechos a la asistencia médica y quirúrgica y a los servicios de hospital pagados por el empresario, y en este caso el patrono será responsable solamente por la lesión o incapacidad de cualquier clase que se hubiera producido si el lesionado hubiera aceptado los servicios médicos, quirúrgicos y de hospital y los productos ofrecidos por el patrono) bien

entendido que, sin embargo, la negativa, así como la clase de incapacidad que hubiera resultado de la lesión si el lesionado hubiera aceptado tales servicios, habrán de ser manifestados en una certificación, hecha dentro de las veinticuatro horas de tal negativa, por el médico llamado para asistir a la persona lesionada (Modificada por la Sec. 5 de la Ley n° 3812; por la Sec. 3 de la Commonwealth Act n° 210; y por la Sec. 10 de la Rep. Act n° 772).

Sec. 14. Incapacidad total. En caso de que la lesión o la enfermedad causen incapacidad total para el trabajo, el patrono, durante esta incapacidad, excluidos los tres primeros días, pagará al lesionado una indemnización semanal equivalente al sesenta por ciento de su salario medio semanal, sin sobrepasar los treinta y cinco pesos ni abonar menos de diez pesos semanales, excepto en el caso de que se trata en el párrafo siguiente. En ningún caso continuarán estos abonos semanales una vez que la incapacidad haya cesado, ni se prolongarán por más de doscientas ocho semanas, ni el total pagado en concepto de indemnización excederá en ningún caso de cuatro mil pesos. Ninguna declaración de incapacidad permanente tendrá efecto hasta que hayan transcurrido dos semanas desde la fecha de la lesión.

En el caso de un obrero cuyo salario medio semanal sea inferior a diez pesos por semana, la indemnización semanal consistirá en el importe total de este salario medio semanal; pero si la incapacidad es permanente, la indemnización será de diez pesos en tal caso. Si la incapacidad total empieza después de un período de incapacidad parcial, se deducirá ésta del dicho período total de doscientas ocho semanas. (Modificada por la Sec. 4 de la Commonwealth Act n° 210 y la Sec. 11 de la Rep. Act n° 772).

Sec. 10. Incapacidad permanente y total.

La incapacidad se considerará total y permanente si es resultado de las siguientes lesiones:

- (a) La pérdida total y permanente de la visión de los dos ojos;
- (b) La amputación de los dos pies por encima o a la altura del tobillo;
- (c) La amputación de las dos manos por encima o a la altura de la muñeca.
- (d) La pérdida de una mano y un pie.
- (e) Una lesión espinal de la que resulte parálisis completa y permanente de las dos piernas o de los dos brazos o de una pierna y un brazo.

(f) Una lesión cerebral de la que resulte imbecilidad o demencia incurables.

La anterior enumeración no se considerará exhaustiva.

Sec. 16. Incapacidad parcial. En el caso de que la lesión o enfermedad produzca incapacidad parcial para el trabajo, el patrono, durante tal incapacidad, y con la excepción antes establecida, abonará al obrero lesionado o enfermo, durante un período que no exceda de doscientos ocho semanas, a partir del primer día de incapacidad, una indemnización semanal igual al cincuenta por ciento de la diferencia entre su salario medio semanal antes del accidente y el salario semanal que probablemente podría ganar después; sin que tal indemnización sea superior a dieciocho pesos semanales. En cualquier caso, los abonos semanales cesarán cuando desaparezca la incapacidad, y en caso de que la incapacidad parcial aparezca después de un período de incapacidad total, este último será deducido del total de doscientos ocho semanas, no pudiendo exceder, en ningún caso, el total de la indemnización pagada, de la suma de cuatro mil pesos. No se hará declaración alguna de incapacidad antes de que transcurran dos semanas contadas a partir de la fecha de la lesión (Modifica-

da por la Sec. 6 de la Ley n° 3812; la Sec. 5 de la Commonwealth Act n° 210 y la Sec. 12 de la Rep. Act n° 772).

Sec. 17. Incapacidad parcial permanente. En el caso de incapacidad parcial por su naturaleza pero total por su duración, la indemnización será del cincuenta por ciento del salario medio semanal y será abonada al obrero durante el tiempo establecido en la siguiente tabla:

Por la pérdida del pulgar, cuarenta semanas;

Por la pérdidas del primer dedo, comunmente llamado dedo índice, treinta semanas;

Por la pérdida del segundo dedo, veinticinco semanas;

Por la pérdida del tercer dedo, veinte semanas;

Por la pérdida del cuarto dedo, comunmente llamado dedo meñique, diez semanas;

La pérdida de la primera articulación del pulgar o de cualquier otro dedo se considerará igual a la pérdida de la mitad del pulgar u otro dedo y la indemnización será la mitad de la antes señalada para la pérdida del pulgar u otro dedo.

La pérdida de más de una articulación del pulgar u otro dedo se considerará pérdida total del pul-

gar o dedo de que se trate: siempre que la suma pagada por la pérdida de más de un dedo no exceda en ningún caso de la cantidad establecida en esta lista para la pérdida de una mano.

Por la pérdida del dedo pulgar de un pie,
veinticinco semanas;

Por la pérdida de un dedo de un pie, que no sea del dedo pulgar, diez semanas;

La pérdida de la primera articulación de un dedo de un pie se considerará como pérdida de la mitad del dedo y la indemnización será igual a la mitad de la establecida para la pérdida de un dedo. La pérdida de más de una articulación de un dedo de un pie se considerará como pérdida de todo el dedo.

Por la pérdida de una mano, ciento sesenta semanas;

Por la pérdida de un brazo, doscientas ocho semanas;

Por la pérdida de un pie, ciento treinta semanas;

Por la pérdida de una pierna, ciento noventa semanas;

Por la pérdida de un ojo, cien semanas.

Por la pérdida completa y permanente del sen-

tido del oído en ambos lados, doscientas ochó semanas. Por la pérdida completa y permanente del sentido del oído en un solo lado, cuarenta semanas. Por la pérdida de las dos orejas, ochenta y cuatro semanas. Por la pérdida de una oreja, cuarenta semanas.

La pérdida permanente del uso de una mano, un brazo, un pie, una pierna, un ojo, cualquier dedo de la mano o del pie, o una articulación, se considerará como equivalente a la pérdida de una mano, un brazo, un pie, una pierna, un ojo, un dedo de la mano o del pie o una articulación, y la indemnización será la misma que la establecida para estos casos.

En los casos de incapacidad parcial permanente debida a lesión de cualquiera de los miembros especificados en esta lista, menor que la pérdida total del miembro o que la pérdida total de su uso, y en caso de que la incapacidad no esté indemnizada de otra manera en esta enumeración, la indemnización se pagará en la proporción establecida en esta lista para la pérdida total del miembro o de su uso, y durante el período en ella especificado. La proporción entre la incapacidad parcial permanente y la incapacidad total del mismo miembro, tal como se especifica en la lista, se determinará y la indemnización antes prescrita se pagará durante una parte

del tiempo antes determinado para la pérdida total del miembro o para la pérdida total de su uso, en consonancia con la proporción entre incapacidad y la incapacidad total de los miembros (Modificada por la Sec. 7 de la Ley nº 3812).

Sec. 15. Amputación. La amputación entre el codo y la muñeca se considerará equivalente a la pérdida de una mano. La amputación entre la rodilla y un tobillo equivaldrá a la pérdida de un pie. La amputación a la altura del codo o por encima se considerará como pérdida de un brazo. La amputación por la rodilla o por encima de ella se considerará como equivalente a la pérdida de una pierna.

La indemnización por las lesiones arriba especificadas excluirá toda otra indemnización, excepto los beneficios establecidos en las secciones trece, catorce y quince.

En caso de lesiones que desfiguren grandemente el rostro o la cabeza, el Comisario puede, a petición de parte interesada, determinar y conceder la indemnización que pueda parecer justa y adecuada en relación con la naturaleza de la desfiguración sin que la indemnización pueda exceder de cuatro mil pesos.

En todos los demás casos de esta clase de in-

capacidad no mencionados en otras secciones de esta Ley, la indemnización será del cincuenta por ciento de la diferencia entre el salario medio semanal del lesionado y su capacidad posterior de ganar un nuevo salario en el mismo o en otro trabajo, pagadera mientras dure la incapacidad parcial; pero el grado de empeoramiento estará sujeto a nueva consideración por el Comisario, a petición de parte interesada: disponiéndose que los pagos semanales no se prolonguen, en ningún caso, más de noventa y ocho semanas.

La indemnización total prescrita en esta Sección y en la inmediata anterior y la indemnización total establecida en las secciones catorce y quince de esta Ley, no excederán, juntas de cuatro mil pesos: disponiéndose que una vez que el pago haya sido hecho, durante el período especificado en la Ley para cada caso, el Comisario para la indemnización de los obreros pueda de vez en cuando, promover el examen de las condiciones del trabajador incapacitado, con el designio de extender, si ello fuere necesario, el período de indemnización; indemnización que, sin embargo, no podrá exceder de cuatro mil pesos (Modificada por la Sec. trece de la Rep. Act n° 772).

Sec. 19. Computación de salarios. Los sala-

rios medios semanales se computarán de tal manera que resulte la mejor computación que pueda hacerse de las ganancias del trabajador durante las doce semanas inmediatamente anteriores a la lesión; disponiéndose que, si por razón del poco tiempo durante el cual el trabajador estuvo empleado o por razón de la cesación del trabajo, no fuere posible computar la remuneración, se tome en consideración el salario medio semanal ganado durante los últimos doce meses anteriores a la lesión por una persona empleada en el mismo grado y trabajo por el patrono del lesionado, o si no hubiera persona que reuniera esas circunstancias, se tomará como base el salario medio semanal de una persona empleada en el mismo grado en la misma clase de trabajo, en el mismo distrito o localidad.

Sec. 20. Abonos voluntarios. Los abonos hechos por el patrono o su asegurador al obrero lesionado durante el tiempo de incapacitación, o a los que de él dependieren, que según las disposiciones de esta Ley no se deducan en el tiempo en que fueron hechos, serán deducidos de la cantidad que se haya de pagar como indemnización, una vez debidamente establecidos mediante acuerdo entre las partes interesadas, una copia certificada del cual ha de ser enviada al Comisario para la indemnización a los Curules,

o su misión a la decisión del Comisario; bien entendido que en caso de incapacidad la deducción se hará reduciendo el período de tiempo durante el cual se ha de hacer efectiva la indemnización, y no reduciendo los abonos semanales señalados en las secciones octava, quince, dieciséis y diecisiete de esta Ley (Modificada por la Sec. 14 de la Rep. Act nº 772).

Sec. 21. Abonos periódicos. Mediante acuerdo entre las partes interesadas, sujeto a la aprobación del Comisario para la indemnización a los obreros, la indemnización será pagada mensualmente o quincenalmente en lugar de semanalmente (Modificada por la Sec. 15 de la Rep. Act nº 772).

Sec. 22. Abonos globales. Cuando el Comisario lo considere muy ventajoso y conveniente, el empresario puede librarse total o parcialmente de su responsabilidad con respecto a la indemnización mediante el pago de una o varias cantidades globales, según los casos, bajo la condición de que si la suma o sumas que han de pagarse son menores que la fijada por la Ley, la reducción no podrá ser mayor del ocho por ciento; bien entendido que todo acuerdo o contrato hecho a este respecto entre las partes carecerá de validez, a

menos que se halle en conformidad con las disposiciones de esta Sección en lo que al importe de la indemnización se refiere, y se hagan en documento público, legalizado por el Juez de Paz de la localidad y atestiguado por dos testigos, uno de los cuales habrá de ser el Tesorero Municipal o la persona que actúe en su lugar, si el acuerdo tuviera lugar fuera de la ciudad de Manila, y quedando sujeto a la aprobación del Comisario para la Indemnización a los Obreros, y si se realizara en Manila, ante el Comisario para la Indemnización a los Obreros o uno de sus representantes autorizados. Antes de legalizar el instrumento, el Juez de Paz informará ampliamente al trabajador lesionado o persona o personas de él dependientes que firmen el documento en su lugar, de los derechos y privilegios que les otorga esta Ley, leyendo y traduciendo al dialecto propio de aquéllos, en caso de que no sepán inglés o español, las disposiciones de esta Ley que establecen el importe, los períodos de indemnización y otros privilegios a los que tienen derecho por razón del accidente, y certificará en la cláusula de legalización que se han cumplido todos estos requisitos. El patrono correrá con los gastos de legalización del contrato.

Cualquier incumplimiento por parte del patro-

no de su obligación de abonar cualquiera de las cantidades debidas al trabajador lesionado o a los que de él dependan, de acuerdo con esta Ley, facultará al beneficiario para reclamar la liquidación de la indemnización de una sola vez (Modificada por la Sec. 8 de la Ley n° 3812 y por la Sec. 16 de la Rep. Act n° 772).

Sec. 23. Reconocimiento médico. Después de sufrir una lesión o de contraer una enfermedad y durante el período de incapacidad, el trabajador se someterá, en tiempo y lugar oportunos, al reconocimiento de un médico o cirujano designado y pagado por el patrono. El obrero está facultado para que a tal reconocimiento asista un médico o cirujano designado y pagado por él mismo; pero este derecho no se interpretará en el sentido de negar al médico o cirujano del patrono el derecho de visitar al obrero herido o enfermo en cualquier momento oportuno y bajo las debidas condiciones, durante su incapacidad total. En caso de que un obrero se niegue a someterse a este examen o lo obstaculice de alguna manera, su derecho a actuar según esta Ley quedará en suspenso hasta que cese en su negativa o deje de poner obstáculos al reconocimiento médico, no abonándosele ninguna indemnización durante este tiempo (Modificado por la Sección 6 de la Commonwealth Act n°. 210).

Sección 24. Comunicación de la lesión y reclamación de la indemnización. Ninguna de las indemnizaciones procedentes según esta Ley podrá prosperar si no se ha comunicado al patrono la lesión o enfermedad, lo más pronto posible después de haberlas sufrido o contraído el obrero, y si no se ha hecho la reclamación de la indemnización antes de los dos meses siguientes a la fecha de la lesión o enfermedad, o, en caso de muerte, antes de los tres meses siguientes a ésta, sin tener en cuenta si la indemnización fué reclamada o no por el obrero mismo. Esta comunicación y reclamación puede hacerlas cualquier persona que se considere con derecho a la indemnización, o cualquiera otra persona en su nombre. En caso de que el patrono haya facilitado voluntariamente la asistencia médica y quirúrgica, los servicios de hospital y los productos necesarios, no será preciso hacer la comunicación de la lesión o enfermedad dentro del límite de tiempo antes determinado; y si el patrono hubiera satisfecho voluntariamente los plazos de la indemnización, no será necesario hacer la reclamación de ésta dentro de los plazos señalados más arriba (Modificado por la Sección 7 de la Commonwealth Act núm. 210).

Sección 25. Forma de la comunicación y de la reclamación. La comunicación y la reclamación se ha-

rán por escrito, diciendo constar en la comunicación el nombre y la dirección del obrero, manifestándose con claridad el tiempo, lugar, naturaleza y causa de la lesión o enfermedad, firmándola el obrero u otra persona en su nombre o, en caso de muerte de aquél, persona o personas de él dependientes, u otra persona cualquiera en su nombre. En la comunicación se puede incluir la reclamación (Modificado por la Sección 8 de la Commonwealth Act nº 210).

Sección 26. Entrega de la comunicación y la reclamación. La comunicación ordenada por esta Ley será entregada al empresario, o en caso de que se trate de una compañía a cualquiera de los socios. Si el patrono es una sociedad anónima, la comunicación puede entregarse a cualquier agente de la misma o a cualquier funcionario o agente al cargo de los asuntos de la sociedad en el lugar donde ocurrió la lesión. La comunicación se entregará personalmente o enviándose por correo certificado, dirigida al patrono en su último domicilio conocido, o al lugar donde tenga sus negocios. Las anteriores disposiciones serán aplicables al procedimiento relacionado con la reclamación.

Sección 27. Validez de la comunicación.
Toda comunicación hecha de acuerdo con las disposicio-

nes de la Sección 25 de esta Ley no podrá reputarse inválida o insuficiente por razón de alguna incorrección en la manifestación del tiempo, lugar, naturaleza o causa de la lesión, u otro dato cualquiera, a menos que se pruebe que el patrono ha sido realmente mal informado respecto de la lesión. La falta de comunicación o el retraso en hacerla no serán obstáculo para el procedimiento aquí establecido si se prueba que el patrono, su agente o su representante, tenían conocimiento del accidente, o que el empresario no resulta perjudicado por tal falta o retraso.

Sección 28. Limitación relativa a los menores y dementes. Ninguna de las limitaciones de tiempo establecidas en esta Ley será aplicable a las personas mentalmente incapaces o a menores no emancipados en tanto no tengan un tutor o amigo íntimo.

Sección 29. Acuerdo sobre la indemnización. En el caso de que el patrono y el obrero lesionado, o las personas dependientes con derecho a indemnización, lleguen a un acuerdo con relación a la indemnización establecida en esta Ley, para que tal acuerdo sea válido deberá determinar, por lo menos, la misma indemnización prescrita en esta Ley, debiendo ser aprobado por el Comisario para la Indemnización a los Obreros, o por al-

guno de sus representantes con poder para ello: disponiéndose que el empresario quedará libre de toda responsabilidad con arreglo a esta Ley tan pronto como la indemnización haya sido hecha efectiva según lo dispuesto en esta Sección, exceptuando las disposiciones de la Sección 6 de esta Ley (Modificado por la Sección 9 de la Ley núm. 3812 y por la Sección 17 de la Rep. Act. nº. 772).

Sección 30. Aseguramiento del pago de la indemnización. Los empresarios pueden garantizar a sus empleados y obreros el pago de la indemnización señalada por esta Ley asegurándola en una compañía de seguros. Sin embargo, los premios de la póliza serán pagados en su totalidad por el patrono, y cualquier contrato en el que se establezca una deducción del salario del empleado u obrero será nulo.

Sección 31. Intervención del Comisario para la indemnización a los obreros. Si un obrero accidentado o que contrae una enfermedad comprendida en las disposiciones de la Sección dos de esta Ley, o los que de él dependen, contratan los servicios de un abogado o de otras personas para ayudarlo a dirigirle en la demanda de indemnización contra su patrono ante el Comisario para la Indemnización a los Obreros, los hono-

rarlos de dicho abogado o persona no excederán del cinco por ciento de la suma total que el trabajador lesionado o enfermo, o los que de él dependan, reciba en concepto de indemnización; pero si estas personas prestan sus servicios en apelación, sus honorarios no excederán del diez por ciento de la suma antes dicha y todo el que, violando esta disposición, presente una minuta excesiva, será sancionado con multa que no excederá de doscientos pesos (Modificado por la Sección 10 de la Ley 3812 y la Sección 18 de la Republic Act nº 772).

Sección 32. Prioridad de la acción de indemnización. Las acciones de indemnización que se ejerciten ante los Juzgados de Paz o de Primera Instancia según lo establecido en esta Ley, tendrán prioridad sobre todos los demás casos que se hayan de ver en tales tribunales, con excepción de las actuaciones relativas al habeas corpus, los litigios referentes a elecciones y los casos criminales en que el acusado no esté en libertad bajo fianza. El demandado en el proceso de indemnización incoado según las disposiciones de esta Ley contestará a la demanda dentro de los plazos que marcan las leyes y las reglas de los tribunales de justicia, después de haber sido emplazado (DEROGADA por la Sección 20 de la Republic Act nº 772).

Sección 33. Lesiones sufridas fuera de las Islas. Cuando un trabajador contratado en las Islas Filipinas sufra una lesión personal por accidente ocurrido durante su trabajo, tendrá derecho a indemnización según la legislación de las Islas aunque sufriera la lesión fuera de éstas.

Cuando un trabajador contratado fuera de las Islas Filipinas sufra una lesión mientras está ocupado en los negocios de su patrono y tal lesión le dé derecho a indemnización según la ley del territorio o país en el que fué contratado, puede reclamarla de su patrono en estas Islas si sus derechos son tales que puedan ser fácilmente determinados y reconocidos por los Tribunales.

Sección 34. Prioridad de la indemnización. Todos los derechos de indemnización establecidos en esta Ley tendrán sobre los demás créditos contra el patrono la misma prioridad que la ley concede a los salarios debidos e impagados.

Sección 35. Cesión de derechos. No será transmisible ninguna demanda de indemnización según esta Ley, y ninguna indemnización o derecho a indemnización será objeto de reclamación por parte de acreedores.

Sección 36. Cooperación de otros funcionarios. En relación con sus funciones, el Comisario para

la Indemnización a los Obreros puede, si fuera necesario, solicitar la asistencia de los fiscales locales o provinciales, funcionarios de Sanidad locales o provinciales; jueces de paz u otros funcionarios nacionales, provinciales o locales, con objeto de asegurar el más exacto cumplimiento de esta Ley o de alguna de sus partes (Modificado por la Sección 21 de la Republic Act nº 772).

Sección 37. Información que ha de dar el patrono sobre el accidente. Todo patrono deberá, en lo futuro, llevar un registro de todas las lesiones, fueran fatales o no, sufridas por sus obreros en el curso del trabajo, cuando tales lesiones lleguen a su conocimiento. Tan pronto como sea posible, después de haber tenido lugar una lesión de la que resulte ausencia del trabajo durante uno o más días, el patrono lo comunicará por escrito al Comisario para la Indemnización a los Obreros, utilizando formularios especialmente preparados por dicho Comisario, y que el patrono deberá solicitar a su debido tiempo, o en caso de necesidad o urgencia, o si no hubiese formularios, empleando cualquier clase de papel; esta comunicación deberá contener la información especificada más adelante.

La comunicación deberá poner de manifiesto la

clase y naturaleza del negocio del patrono, el emplazamiento del establecimiento, el nombre, edad, sexo, jornal y empleo del trabajador lesionado, la fecha y hora del accidente del que resultó la lesión, la naturaleza y causa de la misma, si se admite la responsabilidad, o no, así como toda la información que el Comisario para la Indemnización a los Obreros solicite.

Antes de transcurridos sesenta días de la terminación de la incapacidad del obrero lesionado, el patrono o persona responsable del pago de la indemnización establecida en esta Ley dirigirá al Comisario para la Indemnización a los Obreros una declaración en la que manifieste qué pagos totales se han hecho o se han de hacer en concepto de indemnización y por servicios médicos al lesionado.

El patrono que se niegue a hacer la comunicación o a facilitar la información que exige esta Sección, o que descuide estas obligaciones, será sancionado con multa no superior a doscientos cincuenta pesos por cada falta: disponiéndose que en los casos de compañías comerciales o sociedades anónimas, el presidente, los directores o los gerentes de las mismas serán criminalmente responsables de cada violación de la ley, y en su defecto, lo será la persona que direc-

ta o indirectamente ocupe su puesto en la gerencia, dirección o administración del negocio (Modificado por la Sección 11 de la Ley nº 3812 y por la Sección 21 de la Republic Act nº.772).

Sección 38. Tráfico interinsular. Esta Ley cubrirá la responsabilidad de los empresarios hacia sus empleados ocupados en el cabotaje y tráfico interinsular y también en el tráfico con el extranjero cuando esto esté permitido por las leyes de los Estados Unidos y de las Islas Filipinas (Modificado por la Sección 12 de la Ley nº.3812).

Sección 39. Definición de varias palabras. La definición de diversas palabras usadas en esta Ley será, si en el contexto no se indica otra cosa, la siguiente:

(a) 'Patrono' comprende a toda persona o asociación de personas, en forma de compañía o no, pública o privada, y al representante legal del patrono fallecido. Están incluidos el propietario o arrendatario de una factoría, o establecimiento o lugar de trabajo, o cualquier otra persona que sea virtualmente la propietaria o gerente del negocio que se lleva a cabo en el establecimiento o lugar de trabajo, pero que, en razón de la existencia de un contratante independiente en di-

cho lugar, o por otra razón cualquiera, no es patrono directo de los obreros allí empleados.

(b) 'Obrero' se usa como sinónimo de 'empleado' y significa persona que ha admitido un empleo de un patrono o trabaja, en virtud de un contrato de servicios o de aprendizaje, para un patrono. No comprende a las personas cuyo empleo sea puramente accidental y no para servir los fines del negocio u ocupación del patrono. Cualquier referencia a un obrero lesionado, lo será, en caso de muerte de éste, a la persona dependiente del obrero, tal como se define en esta Ley, si el contexto así lo exige o si el empleado es un menor o incapacitado, a su tutor o próximo pariente.

(c) 'Lesión' o 'lesiones personales' comprende la enfermedad, 'lesión' o 'lesiones personales' o 'enfermedad' comprenden la muerte producida por la lesión o la enfermedad.

(d) 'Empleo industrial', tratándose de patronos privados, comprende todo empleo o trabajo en una industria, ocupación o profesión ejercida por un patrono con propósito de lucro, con la excepción del servicio doméstico.

(e) 'Empleo público' significa empleo al servicio del Gobierno Nacional o del gobierno de algu-

na provincia, ayuntamiento u otra subdivisión política de las Islas. No comprende el empleo de funcionario público elegido por votación popular, ni tampoco a las personas que perciban más de cuatro mil ochocientos pesos anuales.

(f) 'Incapacidad parcial' es la disminución de la capacidad para obtener un empleo, debida a la deformación producida por una lesión.

(g) 'Salario' comprende el valor comercial de la manutención, el alojamiento, combustible y otras cantidades que el obrero recibe de su patrono como parte de su remuneración.

(h) Una palabra en singular tendrá análoga significación en plural, y viceversa, y si en masculino, será también aplicable al femenino (Modificado por la Sección 13 de la Ley 3812; Sección 9 de la Commonwealth Act nº 210 y por la Sección 23 de la Republic Act núm. 772).

Sección 40. Sanción por falsedad. Toda persona que, intentando obtener algún beneficio o abono al amparo de las disposiciones de esta Ley, haga voluntariamente, en beneficio propio o ajeno, una declaración falsa, será penalmente culpable de una falta y sufrirá una sanción que no excederá de los doscientos pesos de

multa, siendo sancionada con pena privativa de libertad en caso de insolvencia.

Sección 41. Título de esta Ley. Esta Ley se denominará 'Ley de indemnización a los obreros'.

Sección 42. Derecho aplicable a las pequeñas industrias. Las reclamaciones de indemnización por razón de accidente en una empresa, industria o negocio, o en un comercio, ocupación o profesión ejercidos por un patrono con ánimo de lucro, cuyo capital sea menor de diez mil pesos y la industria o negocio no tenga características de peligro o sea perjudicial para los empleados, se regirán por las disposiciones de la Ley n° 1874 y sus modificaciones: estableciéndose que se contarán entre las empresas que se tienen por peligrosas o perjudiciales para los empleados los siguientes tipos:

(1) Toda empresa dedicada al transporte de personas, o de mercancías, o de ambas cosas a la vez.

(2) Toda factoría, establecimiento o tienda donde se utilice maquinaria.

(3) Toda factoría, establecimiento o tienda en que el empleado esté expuesto al polvo u otras partículas o materias, humos, gases y otras sustancias

químicas.

(4) Las instalaciones industriales o establecimientos dedicados a la fabricación o manufactura de artículos pirotécnicos, dinamita, municiones y productos similares.

(5) Los empleos en circos, boxeo, fútbol, baloncesto, lucha, carreras y deportes análogos.

(6) La pesca, los trabajos de maderaje y la minería (Modificado por la Sección 14 de la Ley n° 3812 y la Sección 23 de la Republic Act n° 772).

Sección 43. Cláusula derogatoria. Quedan derogadas cuantas leyes o partes de leyes se opongan a las disposiciones de la presente.

Sección 44. Presunciones. En los procesos que se sigan para hacer efectiva la reclamación de indemnización según lo dispuesto en esta Ley, se presumirá en ausencia de prueba sustancial en contra.

1. que la demanda se ha hecho de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley;

2. que se dió comunicación suficiente de ella.

3. que la lesión no se produjo como consecuencia del propósito, voluntariamente adquirido, del obrero lesionado de producirse la lesión o la muerte

o de causárselas a otro;

4. que la lesión no resultó únicamente de la embriaguez del lesionado durante su trabajo; y

5. que el contenido de los informes médicos y quirúrgicos que se presenten como testimonios por los demandantes sea exacto (Incluido por la Sección 24 de la Republic Act nº. 772).

Sección 45. Forma de proceder al pago de la indemnización. La indemnización establecida en esta Ley se pagará periódicamente y con puntualidad, en igual forma que los salarios, en la cantidad que resulte, y directamente a la persona o personas que tenga derecho a ella, sin necesidad de una orden formal del Comisario, excepto en los casos en que el derecho a la indemnización sea discutido por el patrono. Si el patrono o el asegurador no discuten el derecho del obrero lesionado a ser indemnizado, uno u otro deberá, antes del décimo-cuarto día posterior a la incapacidad o en dicho día, o dentro de los cinco días siguientes al en que el patrono tuvo conocimiento del accidente por vez primera, empezar el pago de la indemnización, notificando inmediatamente al Comisario en un impreso cuyo modelo será redactado por éste, que ha tenido lugar el comienzo del pago, acompañando la declaración subsiguiente de que el

patrono o el asegurador, según los casos, notificarán al Comisario el cese del pago de la indemnización, debiendo, tan pronto como terminen o suspendan dicho pago, comunicarlo al Comisario en un formulario que será determinado por éste. Después de haber efectuado el pago del primer plazo de la indemnización, los siguientes habrán de hacerse semanalmente; pero el Comisario tiene facultades para determinar que cualquier pago pueda hacerse mensualmente o en cualquier otro período de tiempo, según se considere aconsejable.

En caso de que el patrono decida discutir el derecho a la indemnización, deberá, antes del décimo-cuarto día de incapacidad o en ese día, o dentro de los diez días siguientes al en que tuvo noticia del accidente alegado, poner en conocimiento del Comisario, en un formulario prescrito por éste, que la indemnización no se está pagando, dando el nombre del que la reclama, el del patrono, la fecha del accidente y la razón por la que no se procede al pago de la indemnización. El incumplimiento de esta obligación por parte del patrono o del asegurador supondrá la renuncia al derecho a discutir la reclamación de indemnización, a no ser que existan motivos razonables por los que no se pudieran enviar los necesarios informes, en base

a cuyos motivos puede el Comisario resucitar el derecho del patrono a discutir la petición de indemnización.

Siempre que, por cualquier causa, cesen los abonos de la indemnización, el patrono o su asegurador deberán, dentro de los dieciséis días siguientes, comunicar al Comisario, en impreso por él establecido, que tal pago ha sido suspendido. En esta comunicación se hará constar el nombre del obrero lesionado, o de la persona que tenga mayores derechos entre las que de él dependan, la fecha del accidente, la fecha hasta la cual se verificó el pago de la indemnización, y el importe total pagado. En caso de que el patrono o su asegurador dejen de comunicar al Comisario la cesación de los pagos dentro de los doce días después de la fecha en que se pagó la indemnización, el Comisario pueda, previa audiencia, imponer a tal patrono o asegurador una multa que no excederá de cien pesos, y que se abonará al Fondo de Administración de la Indemnización a los obreros. Tal penalidad se cobrará del mismo modo que si se tratase de una orden de indemnización. Siempre que el Comisario lo juzgue aconsejable, podrá obligar a cualquier patrono o asegurador a constituir un depósito con el cual el Comisario asegure el pronto y conveniente pago de la indemnización, de cuyo depósito puede deducirse la mul-

ta que imponga el Comisario.

Todas las Órdenes de indemnización que hayan de ser hechas efectivas a menores, en virtud de lo dispuesto en esta Ley, serán abonadas en beneficio de tales menores de acuerdo con las reglas que pueda dictar el Comisario. Cuando tales órdenes sobre pasen la cantidad de cuatrocientos pesos el Comisario podrá, a su arbitrio, exigir el nombramiento de un tutor antes de que se haga el pago. El Comisario puede también exigir que haya un tutor que le eleve informes sobre el uso que se haga del dinero abonado a los menores (Insertado por la Sección 24 de la Republic Act nº. 772).

Sección 46. Jurisdicción. El Comisario para la indemnización a los obreros tendrá jurisdicción exclusiva para oír y decidir las reclamaciones de indemnización hechas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Indemnización a los obreros, sujeto a la apelación al Tribunal Supremo en la misma forma y con los mismos plazos que marca la Ley y la Reglas de Procedimiento para la apelación de las resoluciones del Tribunal de Relaciones Industriales ante el Tribunal Supremo.

Sección 47. Poderes generales y obligaciones. El Comisario tendrá pleno poder y autoridad:

a) Para hacerse cargo de la ejecución de

la Ley de Indemnización a los Obreros.

b) Para oír y decidir todas las peticiones de indemnización hechas al amparo de esta Ley, en la forma que en ella se dispone; para requerir y ordenar la prestación de servicios médicos a los obreros lesionados, según lo que en esta Ley se dispone; para aprobar y fijar los honorarios de los procuradores y las demandas por servicios médicos; para excusar el incumplimiento de la obligación de dar conocimiento de la lesión, enfermedad o muerte de un obrero; para aprobar acuerdos, dictar, modificar o anular sentencias y redactar disposiciones reglamentarias; para fijar el tiempo del pago de la indemnización y ordenar reembolsos a favor de los patronos por los adelantos hechos; para imponer sanciones, computar decisiones y comprometer acciones; para exigir y ordenar el reconocimiento físico de los obreros lesionados; y para ejercitar cuantos poderes sean necesarios para realizar los fines de esta Ley. Por cada acuerdo que se apruebe se cobrará al empresario una tasa de un peso por cada cien pesos del importe total de la indemnización que ha de pagarse, en concepto de gastos de administración: disponiéndose, sin embargo, que ninguna de estas cantidades se cargue a la indemnización debida al obrero. El

Comisario tendrá un sello para dar autenticidad a sus órdenes, sentencias y actuaciones.

c) Para dictar, modificar o anular, sujeto a la aprobación del Secretario de Trabajo, tales normas y reglamentos en la forma en que pueda resultar necesario para la realización de los fines de esta Ley.

d) Para nombrar, contratar y retener, sujeto a las leyes y reglamentos existentes sobre funcionarios civiles, los árbitros, agentes, médicos, enfermeras, abogados, contables, actuarios, inspectores y otros técnicos y personal de oficina que puedan ser necesarios para el desarrollo de los propósitos de esta Ley, o para cumplir las obligaciones y ejercer los poderes conferidos por la Ley al Comisario.

Sección 40. Árbitros - obligaciones y facultades. El árbitro debe dedicar todo su tiempo a los deberes de su cargo y recibirá una compensación no inferior a tres mil seiscientos pesos anuales. Será obligación del árbitro, siguiendo las normas y reglamentos del Comisario, oír y decidir demandas de indemnización de los obreros, dirigir las audiencias y examen de testigos y dictar las órdenes, sentencias y disposiciones que puedan ser exigidas por cualquier orden del Comisario.

Sección 49. Procedimiento. Cualquier litigio o controversia referente a la indemnización establecida por esta Ley se someterá a la decisión del Comisario en la forma que aquí se dispone.

Se celebrará audiencia por el Comisario, a iniciativa suya o por haberlo solicitado algunas de las partes interesadas. Hará que cada una de las partes tenga noticia de la celebración de la audiencia mediante notificación a las mismas, entregada personalmente o enviando por correo una copia de ella al último domicilio conocido. Esta audiencia puede ser aplazada libremente por el Comisario y puede celebrarse en el lugar o lugares que él designe. Las partes interesadas tendrán derecho a actuar en la audiencia por sí mismas o por abogados u otro agente o representante cualquiera, a presentar ante el Comisario los testimonios que sean procedentes para el desarrollo de la controversia, y a preguntar a los testigos de la parte contraria. El Comisario puede admitir como testimonio y utilizar como prueba de cualquier hecho litigioso las siguientes materias, además del juramento prestado en sesión pública:

1. Informes del médico asistente.
2. Informes de las investigaciones ordena-

das por el Comisario.

3. Informes del patrono, incluidas las copias de horarios, libros de contabilidad u otros testimonios.

4. Documentos del hospital relativos al caso.

El Comisario puede también ordenar que se haga un reconocimiento de la persona del obrero lesionado, o sin aviso obtener testimonio o inspeccionar el local donde ocurrió el accidente. Todos los testimonios "ex parte" admitidos por el Comisario se pondrán por escrito, y cualquier parte interesada tendrá oportunidad de examinarlos y destruirlos con pruebas subsiguientes.

La audiencia a que se refiere esta Ley tendrá lugar ante el Comisario o uno de los árbitros.

La parte interesada que no esté satisfecha con la orden dada por el árbitro puede solicitar la revisión de la misma, pudiendo el árbitro abrir de nuevo el caso, o enmendar o modificar dicha orden, constituyendo tal orden enmendada o modificada la decisión firme, a menos que sea objetada por una petición de revisión. En caso de que el árbitro no enmiende o modifica la orden, remitirá el expediente del caso al Comisario, quien lo revisará, pudiendo, a su criterio, po-

drá celebrar u ordenar que se celebren pruebas adicionales, sacando sus conclusiones y emitiendo su decisión. La decisión del Comisario finalizará el litigio, a menos que una de las partes interesadas solicite la revisión. Las peticiones de revisión se harán por escrito, especificándose detalladamente los errores y las objeciones. Estas peticiones habrán de hacerse dentro de los quince días siguientes a la fecha de registro de la orden del árbitro o de la decisión del Comisario, a menos que dicho árbitro o el Comisario, dentro de los mencionados quince días, amplien el plazo. Las partes interesadas serán notificadas del registro de toda orden arbitral o decisión del Comisario, y el aludido período de quince días empezará a correr solamente después de hecha tal notificación, considerándose cumplido este requisito por el envío por correo al último domicilio de la parte interesada de una copia de la orden o decisión.

El Comisario, o cualquier agente, representante o árbitro por él nombrado, tendrá poder y autoridad para hacer citaciones, obligar a comparecer a los testigos o a las partes, exigir la exhibición de libros, papeles o archivos y tomar juramento.

El Comisario puede, a su arbitrio, imponer

los gastos de asistencia y viaje de testigos citados por una de las partes en un proceso, a la otra parte en el litigio, cuando, a su juicio, la necesidad de citar a tales testigos hubiera surgido de un acto incompetente, irrelevante o falso de la otra parte.

Se archivarán cuidadosamente todas las actuaciones procesales que tuvieran lugar ante el Comisario, el Vicecomisario o cualquier árbitro en cualquier audiencia, transcribiéndose todas las pruebas por un taquígrafo designado por el Comisario.

La copia de la transcripción de la prueba y las actuaciones, o de una parte específica de cualquiera de ellas, o de cualquier examen de testigos o audiencia, hecha por el taquígrafo nombrado por el Comisario, certificada por dicho taquígrafo en el sentido de ser la transcripción verdadera y correcta de la declaración hecha en el examen o audiencia de un testigo determinado, o de una parte específica de la misma, cuidadosamente cotejada por el taquígrafo con sus notas originales, y como siendo la manifestación correcta de la prueba y las actuaciones hechas en dicho examen de testigos o audiencia, podrá ser admitida como prueba por el Comisario y por cualquier Tribunal con el mismo resultado que si el taquígrafo estuviera presente y testimo-

niase sobre los hechos certificados. Se dará copia de tal transcripción a petición de las partes y mediante el abono de cincuenta centavos por folio al taquígrafo que la expida.

Sección 50. Sentencia. Después de haber oído un caso el Comisario, el Vicecomisario o cualquiera de los árbitros dictarán sentencia con arreglo a los méritos del caso, siendo la decisión promulgada y firmada por el Comisario o el Vicecomisario. quince días después de promulgada la sentencia ésta se hará firme si no hubiera sido apelada.

Sección 51. Ejecución de la sentencia. Cualquier parte interesada puede presentar en cualquier tribunal de categoría superior a los Juzgados de Paz, en cuya demarcación jurisdiccional tuvo lugar el accidente, una copia certificada de la decisión de un árbitro o del Comisario, contra la cual no se haya elevado petición de revisión o apelación, según los casos, dentro del plazo concedido para ello, o una copia certificada de un escrito de conciliación debidamente aprobado por el Comisario, ante lo cual el Tribunal dictará un decreto o sentencia de acuerdo con la certificación, notificándoselo a las partes.

El decreto o sentencia, así como todas las

actuaciones con ellos relacionadas, producirán los mismos efectos que si hubieran sido decretados en juicio seguido ante el Tribunal, con la sola excepción de no haber apelación contra ellos.

El Comisario expedirá, a petición de la parte interesada o del Tribunal ante el que se interponga tal acción, una certificación de que el demandado no ha solicitado la revisión o la apelación dentro del plazo establecido en la Sección cuarenta y nueve.

Sección 52. Créditos. Se destina la suma de doscientos noventa y ocho mil pesos, no adscritos para otra cosa, para la debida ejecución de esta Ley: disponiéndose, sin embargo, que las cantidades que se abonen al Fondo de Indemnización a los Obreros sean inmediatamente habilitadas para costear los gastos de ejecución de esta Ley, como se dispone en la sección cincuenta y cinco de la misma.

Sección 53. Constitución de depósitos por las entidades gubernamentales, en garantía del pago de indemnizaciones. El Gobierno Nacional y los provinciales y municipales, así como las sociedades propiedad del Gobierno o por él controladas que utilicen trabajadores y empleados comprendidos en las disposiciones de esta Ley, depositarán en la Oficina del Comi-

sario para la indemnización a los obreros una cantidad que será determinada por dicho Comisario, para garantizar el pago de las indemnizaciones. Tales depósitos serán recibidos por el Comisario y desembolsados, a través de la autoridad del Comisario o del Vicecomisario, como indemnización a los obreros de las entidades gubernamentales que hicieron la aportación, o a los dependientes de los trabajadores, en los casos de muerte, siempre que dichos obreros o sus dependientes tengan derecho a indemnización al amparo de las disposiciones de esta Ley.

Sección 54.- Aportación de los aseguradores.

El Comisario estaba también autorizado para recaudar de los aseguradores el uno por ciento de sus ingresos totales por primas obtenidas por obreros, al objeto de cubrir gastos de administración: disponiéndose que nada de lo establecido en esta Ley impedirá al Gobierno que exija a los empleados obtengan pólizas de seguros del Gobierno a los fines de esta Ley.

Sección 55.- Gastos de administración. Se crea un fondo especial llamado Fondo de indemnización a los obreros, que estará bajo la custodia y control del Comisario para la indemnización a los obreros y que será utilizado únicamente para el pago de los gastos de administración originados por esta Ley. Las cantidades recauda-

das en virtud de lo dispuesto en la sección cuarenta y cuatro y en el párrafo (4) de la sección cuarenta y siete y en la sección cincuenta y cuatro de esta Ley, se ingresarán en dicho Fondo: disponiéndose que los gastos de la Comisión de Indemnización a los Obreros se incluyan en el presupuesto anual del Departamento de Trabajo: y disponiéndose además que los superavites del Fondo de Indemnización a los Obreros reviertan a los fondos generales del Tesoro Nacional.

Por cada sentencia firme que orden indemnizar al patrono no asegurado o al asegurador contra quien se dicte la sentencia abonarán al Fondo las cantidades de un peso y una sobregasa adicional de un peso por cada cien pesos del importe total de la indemnización que se ha de pagar.

Por cada audiencia aplazada y por cada sentencia arbitral confirmada en revisión por el Comisario, el patrono no asegurado o el asegurador que solicitó el aplazamiento o que trató de obtener la revisión pagará al fondo la cantidad de cinco pesos.

Si el capital del Fondo no fuera suficiente para cubrir los gastos de administración de un año fiscal, el Comisario determinará, lo antes posible, la cuantía del déficit. El Comisario entonces fijará y

recaudará de cada asegurador y empresario no asegurado cuyo capital exceda de diez mil pesos, una cantidad proporcional de tal déficit, proporcionada a los pagos totales hechos por tales empresarios no asegurados o por los aseguradores en relación con los pagos hechos por todos los aseguradores o empresarios no asegurados. Las cantidades así recaudadas se emplearán para reembolsar al Tesoro Nacional por los créditos habilitados por el Gobierno para el pago en primera instancia de los gastos originados por esta ley en concepto de gastos de administración.

Se crea una Junta compuesta por el Comisario para la Indemnización a los obreros como presidente, dos representantes de los aseguradores, que serán designados por el Secretario de Trabajo a propuesta de los patronos no asegurados y de los aseguradores, que tendrá por misión asesorar al Comisario para la Indemnización a los obreros en la ejecución de lo dispuesto en esta Sección.

A P E N D I C E

B

D E C R E T O - L E Y

8 de Octubre de 1932.

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ACCIDENTES DEL
TRABAJO EN LA INDUSTRIA

.....

CAPITULO I

DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO Y DE LA RESPONSABILIDAD EN
MATERIA DE ACCIDENTES

1. A los efectos de la presente ley, se entiende por accidente toda lesión corporal que el operario sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. (Trab., 140; R. Ac., 1).

2. Se considera patrono al particular o compañía, propietarios de la obra, explotación o industria donde el trabajo se preste.

Estando contratada la ejecución o explotación de la obra o industria, se considerará como patrono al contratista subsistiendo siempre la responsabilidad subsidiaria de la obra o industria.

El Estado, las Regiones autónomas, las Diputaciones Provinciales y Comisiones gestoras, los Cabildos insulares, los Ayuntamientos y las Mancomunidades de Corporaciones locales quedan equiparados, para los efectos de este artículo, a los patronos definidos en párrafos precedentes, incluso en las obras públicas que ejecuten por administración. (Trab., 141, 427; R. Ac., 2; Contr., 5).

3. Por el operario se entiende todo el que ejecute habitualmente un trabajo manual fuera de su domicilio,

por cuenta ajena, mediante remuneración o sin ella, aun-
cuando se trate de aprendices, ya esté a jornal, ya a
destaje, o en cualquier otra forma o en virtud de contra-
to verbal o escrito. (Trab., 142, 195, 427. 435; R. Ac., 3;
Contr. 6, 162 y 170).

4. A los efectos jurídicos del concepto determinado
en el artículo anterior, se entienden comprendidos en él
a los Agentes de la Autoridad, cualquiera que sea su cla-
se, del Estado, Región, Provincia, Cabildo insular, Municipi-
pio o Mancomunidades, por los accidentes definidos en el
art. 1º que sufran en el ejercicio de las funciones de su
cargo o con ocasión de ellas, siempre que por disposicio-
nes especiales no gocen del debido auxilio. (Trab., 143;
R. Ac., 4; Contr., 8).

5. Gozarán de los beneficios de la presente legisla-
ción los operarios extranjeros y sus derechohabientes que
residan en territorio español. Los derechohabientes que
residan en el extranjero al ocurrir el accidente gozarán
de dicho beneficio en el caso de que la legislación de su
país les otorgue en análogas condiciones a los súbditos
españoles, o bien cuando se trate de ciudadanos de un país
que haya ratificado el Convenio internacional de Ginebra
sobre igualdad de trato en materia de reparación de acci-
dentes del trabajo, o bien cuando se halla estipulado así
en Tratados especiales. (Trab., 144; R. Ac., 5.)

6. El patrono es responsable de los accidentes definidos en el art. 1º ocurridos a sus operarios, a menos que el accidente sea debido a fuerza mayor extraña al trabajo en que se produzca el accidente.

Deberá entenderse existente fuerza mayor extraña cuando sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el ejercicio de la profesión de que se trate. (R.Ao., 187; Civ., 1.105.)

La imprudencia profesional, o sea la que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y derivada de la confianza que éste inspira, no exime al patrono de responsabilidad. (Trab., 145; R. ao., 6).

7. Las industrias o trabajos que darán lugar a responsabilidad del patrono serán (R. Ao., 7).

1º. Las fábricas y talleres y los establecimientos industriales.

2º. Las minas, salinas y canteras.

3º. La construcción, reparación y conservación de edificios, comprendiendo los trabajos de albañilería y todos sus anejos, carpintería, cerrajería, corte de piedra, pinturas, etc.

4º. La construcción, reparación y conservación de vías férreas, puentes, caminos, canales, diques, acueductos, alcantarillas, vías urbanas y otros trabajos similares.

5º. Las explotaciones agrícolas, forestales y pecuarias, siempre que se encuentren en cualquiera de los si-

guientes casos:

a) Que hagan uso de máquinas agrícolas movidas por motores inanimados. En este último caso, la responsabilidad del patrono existirá respecto del personal ocupado en la dirección o al servicio de los motores o máquinas y de los obreros que fuesen víctimas de los accidentes ocurridos en los mismos.

Los accidentes ocurridos en las demás explotaciones de esta clase se regirán por el Decreto Ley de 12 Jun., 9 Sept. 931, y sus disposiciones complementarias (R.Ao. Ag.)

6.º El acarreo y transporte de personas y mercancías por vía terrestre, marítima y de navegación interior y la pesca. En el transporte marítimo se entenderán comprendidas las personas que formen la dotación de los buques. Para los tripulantes de las embarcaciones pesqueras se aplicará el Real decreto-Ley de 5 Ab. 929 y sus disposiciones complementarias.

7.º Los trabajos de limpieza de calles, pozos negros y alcantarillas.

8.º Los teatros, con respecto a su personal obrero. También tendrán derecho el personal artístico y el administrativo, siempre que sus haberes no excedan de 15 pesetas diarias. En todo caso, las indemnizaciones deberán computarse teniendo en cuenta la ganancia media anual de los interesados.

9. Los trabajos de los Cuerpos de Bomberos.

10. Los trabajos de colocación, reparación y desmonte de conductores eléctricos y de pararrayos, y la colocación y conservación de redes telegráficas y telefónicas.

11. Las faenas de carga y descarga.

12. Los establecimientos mercantiles, respecto de sus dependientes, manobras y viajeros. (Com., 292, 293)

13. Los Hospitales, Manicomios, Hospicios y Establecimientos análogos, con respecto a su personal asalariado, por los accidentes que sufra en el desempeño de sus funciones.

14. Las oficinas o dependencias de fábricas o explotaciones industriales comprendidas en cualquiera de los números anteriores, con respecto a los empleados que tengan un sueldo menor de 5.000 pesetas anuales, cuando éstos fuesen víctimas de un accidente ocurrido en dichas fábricas, talleres o explotaciones, como consecuencia de los trabajos que de ordinario se ejecutan en los mismos. (Trab., 146; R. Ac., 6)

8. Los efectos del artículo anterior no serán aplicables al servicio doméstico.

Se entenderá por servicio doméstico el que se preste mediante jornal, sueldo, salario o remuneración de otro género o sin ella y que sea contratado, no por un patrono, sino por un amo de casa que no persiga fin de lucro, para trabajar en una casa o morada particular al servicio ex-

clusivo del contratante, de su familia, de sus dependientes, bien se albergue en el domicilio del amo o fuera de él. (Trab.. 147; R.Ao.,8)

9. Los obreros tendrán derecho a indemnización por los accidentes indicados en el art. 1º. que produzcan una incapacidad para el trabajo, absoluta o parcial, temporal o permanente, en la forma y cuantía que establecen las disposiciones siguientes. (Trab., 148; Ao., 21, 24; R. Ao., 9).

CAPITULO II

DE LAS INCAPACIDADES E INDEMNIZACIONES.

10. Para los efectos de las indemnizaciones por accidentes del trabajo se considerarán cuatro clases de incapacidades:

- a) Incapacidad temporal.
- b) Incapacidad parcial permanente para la profesión habitual.
- c) Incapacidad permanente y total para la profesión habitual.
- d) Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo. (Trab., 149; Ao., 17- R. Ao., 11).

11. Se considerará incapacidad temporal toda lesión que esté curada dentro del término de un año, quedando el obrero capacitado para el trabajo que estaba realizando al sufrir el accidente. (Trab., 150; Ao., 23, 31; R.Ao.,12)

12. Se considerará incapacidad parcial o permanente para el trabajo habitual aquella lesión que, al ser dada de alta el obrero, deje a éste con una inutilidad que disminuya la capacidad para el trabajo a que se dedicaba al ocurrir el accidente. (Trab., 151- Ac., 17, 23, 31; R. Ac., 13).

13. Se considera como incapacidad permanente y total para la profesión habitual, toda lesión que, después de curada, deje una inutilidad absoluta para todos los trabajos de la misma profesión, arte u oficio a que se dedicaba el obrero al sufrir el accidente, aunque pueda dedicarse a otra profesión u oficio. (Trab., 152; Ac., 17, 21, 23, 31; R. Ac., 14).

14. Se considerará incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo aquella que inhabilite por completo al obrero para toda profesión u oficio. (Trab., 153; Ac., 17, 21, 23, 31; R. Ac., 15).

15. Los casos varios de incapacidad a que se refieren los cuatro artículos precedentes se determinarán en el Reglamento de ésta Ley. (Trab., 154; R. Ac., 13, 14, y 15.)

16. La determinación de las lesiones definidoras de incapacidad parcial que formula el artículo 13, no obstará, sin embargo, para la apreciación de las mismas, con relación a la incapacidad profesional del lesionado, a que se refiere la disposición 3.ª del art. 23. (Trab., 155

R. Ac., 16).

17. Todas las incapacidades son definidas, pero pueden coexistir con ellas otras de menos importancia, que se evaluarán con arreglo al siguiente cuadro, y harán cambiar la categoría de aquellas cuando sumen más de un 50 por 100, haciéndolas pasar a la superior inmediata, con arreglo a lo que dispone el artículo 23. (Trab. 157; Ac., 10, 18, 24, 31, 32, 38, 40 y 59; R. Ac., 25)

CUADRO DE VALORACIONES

Primero. Pérdida de la segunda falange del pulgar derecho, 25 por 100; izquierdo, 12 por 100.

Segundo. Pérdida total del índice derecho, 25 por 100; izquierdo, 18 por 100.

Tercero. Pérdida de cualquier otro de los dedos, 15 por 100.

Cuarto. Pérdida de una falange de cualquiera de los dedos de la mano, excepto del pulgar, 9 por 100.

Quinto. Anquilosis de la muñeca derecha, 45 por 100; izquierda, 30 por 100.

Cuando ocurran tan sólo lesiones de las del cuadro de valoraciones anterior, si sumasen 50 por 100 o más, darán lugar a la conceptualización de incapacidad parcial permanente para la profesión.

18. A los efectos del artículo anterior, y cuando

se trate de mujeres, cualquiera que sea su edad, y de obreros mayores de sesenta años, bastará que la suma de las valoraciones llegue al 40 por 100 para que la incapacidad pase a la categoría superior inmediata parcial permanente para la profesión. (Trabajo, 158).

19. Respecto a las incapacidades profesionales producidas por las hernias, será obligatoria la práctica de una información médica previa, conforme a lo que se dispondrá en el Reglamento de esta Ley. (Trab., 156; Ac., 23; R. Ac., 13, 17 a 23; 27).

20. La lesión conocida con el nombre vulgar de "ca-
llo recalentado", se considerará como incapacidad tempo-
ral para los efectos de la indemnización. (Trab., 159; R.
Ac., 24).

21. Las indemnizaciones debidas en caso de acciden-
te seguido de muerte o de incapacidad permanente de la
víctima serán abonadas a ésta o a sus derechohabientes
en forma de renta, con arreglo a los artículos 9.º y
25 de esta Ley.

Por excepción de esta regla, las indemnizaciones
podrán ser abonadas en totalidad o en parte, en forma
de capital, cuando, a juicio de la Autoridad competen-
te, se ofrezca la garantía de empleo juicioso de di-
cha suma. (R. Ac., 26).

22. Para el cómputo de las obligaciones estable-
cidas en esta Ley, se entenderá por salario la remune-

ración o remuneraciones que efectivamente gane el obrero, en dinero o en cualquier otra forma, por el trabajo que ejecuta por cuenta del patrono a cuyo servicio esté cuando el accidente ocurra, ya sean aquéllas en forma de salario fijo o a destajo, ya por horas extraordinarias, o bien por prima de trabajo, manutención, habitación u otra remuneración de igual naturaleza.

En la aplicación de este precepto se observarán las siguientes reglas (Trab., 169; Cont., 37 y s.; R.Ac., 37):

a) Las remuneraciones que, aparte del salario fijo o a destajo, gane el obrero en cada caso, sólo se computarán como salario cuando tengan carácter normal.

b) El salario diario, haya mediado o no estipulación, no se considerará nunca menor de dos pesetas, aún tratándose de aprendices que no perciban remuneración alguna o de operarios que perciban menos de esa cantidad.

c) Para fijar el salario que el obrero no percibe en dinero, sea en especie, en uso de habitación o en otra forma cualquiera, se computará dicha remuneración con arreglo a su promedio de valor en la localidad para los obreros de condición análoga a la de la víctima.

d) Si el servicio se contrató a destajo, debe regularse el salario apreciándose prudencialmente el que, por término medio, correspondería a los obreros de condiciones semejantes a las de la víctima del accidente en iguales trabajos, y, en su defecto en los más análogos

posibles.

e) Las horas extraordinarias, se considerarán remunerables, conforme a lo que determinen las disposiciones vigentes. (Jorn.. 6.)

f) Cuando los individuos de la dotación de un barco hubiesen sido ajustados a tanto alzado por viaje, la indemnización que les corresponda, en caso de accidente, se regulará dividiendo el importe de la suma convenida como tanto alzado por el número de días que normalmente debe durar la navegación de que se trate.

23. La indemnización a que se refiere el art. 9.º de esta Ley será abonada en la cuantía y forma siguiente. (Trab., 148; Ac., 11 a 14; 52, núm. 3; R. Ac., 12 al 15).

1.ª Si el accidente hubiera producido una incapacidad temporal, el patrono abonará a la víctima una indemnización igual a las tres cuartas partes de su jornal diario desde el día en que tuvo lugar el accidente hasta el en que se halle en condiciones de volver al trabajo o se le dé de alta con incapacidad permanente, entendiéndose que la indemnización será abonada en los mismos días en que lo haya sido el jornal, sin descuento alguno por los festivos.

Si transcurrido un año no hubiese cesado aún la incapacidad, la indemnización se regirá por las disposiciones relativas a la incapacidad permanente, sin perjuicio del resultado de la revisión que procediere.

(Trab., 148; Ac., 25, 26; R. Ac., 27, 54, 55 al 64).

2.ª Si el accidente hubiese producido una incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo, el patrono deberá abonar a la víctima una renta igual al 75 por 100 del salario.

3.ª Si el accidente hubiera producido una incapacidad permanente y total para la profesión habitual, pero que no impida al obrero, dedicarse a otro género de trabajo, la renta será igual al 55 por 100 del salario.

4.ª Si el accidente hubiera producido una incapacidad parcial y permanente para la profesión o clase de trabajo a que se hallaba dedicada la víctima, el patrono deberá satisfacer a ésta una renta igual al 35 por 100 del salario.

Para fijar la cuantía de la renta a que se refieren las disposiciones 2.ª, 3.ª y 4.ª de este artículo en el caso de que el salario estuviere determinado por cantidad diaria, no podrá hacerse otro descuento que el importe de los días en que, siendo obligatorio el descanso, con arreglo a los preceptos del descanso dominical, no habría correspondido al obrero percibir salario. Sólo procederá el descuento en el caso de que el obrero utilizare realmente el descanso antes del accidente y no percibiese salario por los días de reposo. (Trab., 148).

Si la retribución del obrero se hiciere por tanto

alzado mensual la cuantía de la renta mensual se fijará multiplicando por 0,75, 0,55 ó 0,35, respectivamente, la cantidad mensual que percibiera el obrero.

Si la retribución se hiciera por tanto alzado semanal, se multiplicará el importe de una de éstas por 52, adicionando una sexta parte de la asignación semanal para fijar la cantidad correspondiente a un año de salario, cantidad a la que se aplicarán los coeficientes legales respectivos para el señalamiento de la renta anual. (R. Ac., 27.)

24. Las indemnizaciones fijadas por la Ley serán objeto de un suplemento, otorgado a la víctima del accidente, cuando por la incapacidad consecuencia de éste necesite la asistencia constante de otra persona.

Disposiciones reglamentarias fijarán las normas para la aplicación del párrafo anterior.

Dicho suplemento será señalado por la Autoridad competente para conocer de los litigios que se susciten en ocasión de los accidentes del trabajo, de no haber existido acuerdo entre las partes interesadas, y sin que dicho suplemento pueda exceder de la mitad de la indemnización principal. (R. Ac., 35).

25. El patrono está también obligado a facilitar la asistencia médica y farmacéutica al obrero víctima de un accidente, hasta que se halle en condiciones de

volver al trabajo, o por dictamen facultativo se le declare comprendido en los casos definidos en los núms. 2.º, 3.º, y 4.º del art. 23, y no requiera la referida asistencia, la cual se hará bajo la dirección de facultativos designados por el patrono.

El obrero lesionado o su familia tienen, sin embargo, derecho a nombrar, desde luego, por su parte y a su cargo, uno o más Médicos que intervengan en la asistencia que le preste el Médico que intervenga en la asistencia que le preste el Médico designado por el patrono.

Tantos el patrono como el obrero podrán reclamar la asistencia de los Médicos de la Beneficencia municipal, los cuales deberán prestarla con arreglo a una tarifa que se fijará por Decreto, previo informe del Consejo de Sanidad y de la Academia Nacional de Medicina. En los Ayuntamientos se abrirá un registro, en el cual podrán inscribirse los Médicos que se comprometan a prestar su asistencia a las víctimas de accidentes del trabajo, acomodándose a dicha tarifa.

El obrero o su familia también tendrá derecho a proveerse de medicamentos en la farmacia que estime conveniente, si hubiere más de una en la localidad, siempre que las recetas sean firmadas o visadas por el Médico del patrono. En ese caso, el patrono no estará obligado a pagar

sino con arreglo a la tarifa de la Beneficencia municipal, y si en la localidad no la hubiera, con arreglo a la vigente en Madrid para dichos servicios, hasta que se fije una general por Decreto. Se abrirá en los Ayuntamientos otro Registro de Farmacias, en el cual se inscribirán las que se comprometan a suministrar los medicamentos necesarios en caso de accidente, con arreglo a las tarifas indicadas. Se dictarán las disposiciones oportunas para llevar a cumplido efecto el servicio médico-farmacéutico a que se refieren los párrafos anteriores.

El dictamen facultativo deberá ser extendido por el Médico designado por el patrono, el mismo día en que califique la incapacidad del obrero y dé por terminada su asistencia, o en el siguiente. La falta de dicho certificado establecerá a favor del obrero la presunción de que ha necesitado asistencia facultativa hasta el momento en que cualquier otro Médico califique su incapacidad.

El Médico designado por el patrono viene obligado a entregar un duplicado de su dictamen al lesionado el mismo día en que lo extienda. (Trab., 160, 217, 33; R. Ac., 9, 40 al 43, 52 al 77.)

26. El patrono estará obligado, además de facilitar la asistencia médica y farmacéutica al obrero víctima del accidente, conforme al artículo anterior,

a prestar la asistencia quirúrgica que sea necesaria como consecuencia del accidente. (R. Ac., 23, 72; B.Ao., 5.)

Dicha asistencia podrá estar a cargo de las Instituciones de Seguros, y en defecto de hallarse a cargo de éstas, lo estará a la del patrono.

27. La víctima del accidente del trabajo tendrá también derecho a que se suministren y se renueven normalmente, según los casos, por la Institución del Seguro o por el patrono, los aparatos de prótesis y ortopedia que se consideren necesarios para la asistencia del accidentado.

Podrá admitirse el abono de una indemnización suplementaria fijada al señalar la cuantía de la indemnización o al revisar dicha cuantía; indemnización que represente el coste probable del suministro y renovación de los aparatos antes indicados.

Disposiciones reglamentarias determinarán las medidas de inspección y la cuantía de la indemnización a que se refiere este artículo. (B. Ac., 6; R. Ac., 36.)

28. Si el accidente produjese la muerte del obrero, el patrono queda obligado a sufragar los gastos de sepelio por la cantidad que se fije en el Reglamento, y además a indemnizar a la viuda, descendientes legítimos o naturales reconocidos, menores de dieciocho años o inútiles para el trabajo, hermanos huérfanos menores de dieciocho años que se hallasen a su cargo y ascendiente, en

la forma y cuantía que establecen las disposiciones siguientes (Trab., 161; R. Ac., 20 al 33).

1.ª Una renta igual al 75 por 100 del salario que disfrutara la víctima cuando ésta dejase viuda con uno o más hijos o nietos huérfanos menores de dieciocho años o mayores de dicha edad inútiles para el trabajo, que se hallasen a su cuidado.

2.ª Una renta igual a la anterior cuando deje dos o más hijos o nietos huérfanos menores de dieciocho años o mayores inútiles para el trabajo.

Una renta equivalente al 50 por 100 del salario cuando quede un solo hijo o nieto huérfano menor de dieciocho años o mayor de esas edad, inútil para el trabajo.

3.ª Una renta equivalente al 37 y 1/2 por 100 del salario a la viuda con hijos mayores de dieciocho años o sin hijos ni otros descendientes del difunto.

En el concepto de hijos se entenderán también los asimilados con arreglo a los preceptos contenidos en el mismo Reglamento.

4.ª Una renta igual al 40 por 100 del salario para los ascendientes que reúnan las condiciones de la regla 4.ª del mentado art. 29. Si sólo quedase un derechohabiente de esta clase, la renta será reducida al 30 por 100. (R. Ac., 39).

Las disposiciones de los números 1.º, 2.º y 4.º serán aplicables en el caso en que la víctima del accidente sea mujer; pero la del núm. 1.º y la del 3.º, sólo beneficiarán al viudo cuando su subsistencia dependiera de la mujer víctima del accidente. Las contenidas en el párrafo primero y núms. 1.º y 2.º de este artículo serán aplicables a los hijos adoptivos y a los jóvenes prohigados o acogidos por la víctima, siempre que estos últimos estuvieran sostenidos por ella, con la antelación, por lo menos, de un año al tiempo del accidente y no tengan otro amparo.

En los Registros civiles correspondientes a cada localidad se abrirá un Registro especial, donde se hará constar el nombre de cada acogido, el de la persona que lo acoge y la fecha del acogimiento, sin que pueda reclamarse derecho a indemnización estando incumplido este precepto.

29. Cuando un obrero fallecido a consecuencia de un accidente del trabajo deje viuda y hijos del matrimonio con la misma e hijos de otros matrimonios anteriores, o hijos naturales reconocidos, se observarán respecto al pago de la indemnización establecida en el artículo anterior las siguientes reglas:

1.ª Correspondarán a la viuda la mitad de la renta total.

2.ª La otra mitad se distribuirá por partes iguales

entre los hijos de todos los matrimonios y los naturales reconocidos.

3.ª La viuda percibirá la parte de indemnización perteneciente a los hijos constituidos bajo su patria potestad.

4.ª Las partes correspondientes a los hijos de anteriores matrimonios y los naturales reconocidos se entregará a quienes de hecho los tuvieran a su cargo, sean la misma viuda u otras personas. (Trab., 162; Ao., 30; R. ao., 33.)

30. El derecho de la viuda por sí mismo a ser indemnizada, conforme a la disposición 1.ª del art. 28, no puede invalidarse por la circunstancia de tener hijos mayores de dieciocho años, debiendo, en este caso, considerarse equiparada a la viuda sin hijos (Trab., 162; Ao., 29; R. Ao., 33.)

31. Las indemnizaciones por incapacidad permanente definidas en los núms. 2º, 3º, y 4º del art. 23 serán independientes de las determinadas en el número 1º del mismo artículos para los casos de incapacidad temporal.

Asimismo, las indemnizaciones por causa de fallecimiento determinadas en el art. 28 no excluyen las que correspondieren a la víctima en el período que medió entre el accidente y su muerte. (Trab., 164; R. Ao., 38).

32. Las indemnizaciones determinadas por este texto se aumentarán en una mitad más de su cuantía cuando el accidente se produzca en un establecimiento u obra cuyas máquinas y artefactos carezcan de los aparatos de precaución a que se refiere el art. 39. (Trab., 165; Ao., 34, 35, 40, 48; R. Ao., 34, 46, 48, 59; F. T. II, 1.º)

33. La asistencia médica y farmacéutica y las indemnizaciones a que hacen referencia los arts. 9.º, 23 y 24, serán obligatorias, aún en el caso de que las consecuencias del accidente resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, siempre que estas constituyen complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que el patrono coloque al paciente para su curación. (Trab., 167; Ao., 1, 28; R. Ao., 10).

CAPITULO III

DE LA PREVENCION DE LOS ACCIDENTES.

34. El Ministerio de Trabajo y Previsión, oyendo, si lo estimare conveniente, el informe del Consejo de Sanidad y de la Academia Nacional de Medicina, y, en todo caso, al Consejo de Trabajo, dictará los Reglamentos y disposiciones oportunas para hacer efectiva la aplicación de los mecanismos y demás medios preven-

tivos de los accidentes del trabajo y las medidas de seguridad e higiene que considere necesarias. (Trab., 175; R. Ac., 44 al 50).

35. Se organizará en el Ministerio de Trabajo y Previsión un Gabinete de experiencias en que se conserven, para formar un Museo, los modelos de los mecanismos ideados para prevenir los accidentes del trabajo y en que se ensayen mecanismos nuevos (Trab., 177; R. Ac., 51).

CAPITULO IV

DE LA READAPTACION FUNCIONAL, DE LA REVISION DE INCAPACIDADES Y DE LA INSPECCION.

36. El servicio especial de readaptación funcional de inválidos del trabajo y los servicios médicos necesarios para la inspección y revisión de incapacidades dependerá de la Caja Nacional de Seguros contra accidentes del Trabajo, con sujeción a las normas establecidas en el Reglamento de esta Ley.

Disposiciones reglamentarias determinarán asimismo las funciones de inspección y el procedimiento de revisión de las indemnizaciones en los casos de accidentes no mortales y las modificaciones y transformaciones que deberán sufrir las rentas de los derechohabientes cuando varíe la situación que hubiese determinado su condición de beneficiario. (Traba., 178, 179, 496; B. Ac., 4; R. Ad., 78 al 86).

37. Sin perjuicio de las atribuciones que el Reglamento confiere a la Caja Nacional por lo que respecta a la obligatoriedad del Seguro y a las incapacidades, la inspección de cuanto se refiere a la aplicación de las disposiciones de esta Ley, y, en general, de cuanto se refiera a la seguridad e higiene del obrero en los trabajos e industrias, corresponde a la Inspección del Trabajo. (Trab., 176; R. Ac., 206 al 209).

CAPITULO V

DE SEGURO CONTRA LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO.

38 Todo patrono comprendido en esta Ley tiene obligación de estar asegurado contra el riesgo de accidente de sus obreros que produzca la incapacidad permanente o la muerte de los mismos.

Todo obrero comprendido en esta Ley se considerará de derecho asegurado contra dicho riesgo, aunque no lo estuviera su patrono. En el caso de que éste no indemnizara al obrero o a sus derechohabientes en el plazo que señale el Reglamento, la indemnización será abonada con cargo al fondo de garantía. (B. Ac., 2; Ac., 3, 4, 5, 7 y 8; R. Ac., 87 al 110.)

39. Los patronos podrán sustituir todas las obligaciones que les impone esta Ley, no consignadas en el artículo anterior, en una Mutualidad patronal o en

una Sociedad de Seguros, debidamente constituidas y que sean de las aceptadas para este efecto por el Ministerio de Trabajo. (Trab., 180; Ac., 44; R. Ac., 99, 111 y s.)

40. El riesgo de la indemnización especial a que se refiere el art. 32 no puede ser materia de seguro. Si se probare que alguna Entidad aseguradora lo asumía, deberá ser apercibida, y caso de persistir en pactar dicha condición, se le retirará la autorización oficial que se le hubiere concedido a los efectos de las presentes disposiciones. (Trab., 181; Ac., 32, 34, 48; R. Ac., 34, 48, 89).

41. La obligación del patrono de estar asegurado del riesgo de accidente de sus obreros que ocasione muerte o incapacidad permanente, podrá ser cumplida (B.Ac., 90, 91, 111 al 139, 146, 148, 149, 153):

a) Mediante seguro directamente convenido con la Caja Nacional, que creará el Instituto Nacional de Previsión en virtud de lo dispuesto en el art. 45.

b) Mediante la inscripción en Mutualidad patronal que tenga concertada con la Caja Nacional la entrega, en caso de accidente sufrido por obrero empleado por uno de sus asociados y que ocasione la muerte del obrero o su incapacidad permanente, del capital necesario para adquirir la renta que deba ser abonada como indemnización al obrero víctima de la incapacidad, o a su dere-

onohabientes, en caso de muerte.

e) Mediante seguro contratado con una Sociedad de seguros legalmente constituida que tome a su cargo, en caso de sobrevenir accidente del trabajo que ocasionare la muerte del obrero o una incapacidad permanente, la entrega a la Caja Nacional del capital necesario para el abono de la renta que corresponda como indemnización.

Las Sociedades de Seguros no podrán operar con tarifas inferiores a las que fije el Gobierno, oída la Caja Nacional.

42. Tanto las Mutualidades patronales como estas Sociedades de Seguros habrán de prestar fianza, en la cuantía que señalan las disposiciones reglamentarias, para garantía del cumplimiento de sus obligaciones. (Trab., 183; R. Ac., 105 al 110.)

43. La suma que el obrero ha de percibir de las Mutualidades o de las Sociedades de Seguros, a que se refiere el art. 39, en ningún caso podrá ser inferior a la que le correspondería con arreglo a las disposiciones de esta Ley. (Trab., 174, 188; Ac., 61; R. Ac., 102 al 104, 236).

44. No obstante el Seguro, el obrero y sus derechohabientes podrán ejercitar sus acciones directamente contra el patrono, si así les conviniera; pero cuando dirijan la demanda contra la Entidad aseguradora, deberán diri-

gírala a la vez contra el patrono. (Trab., 189; R. Ac., 101).

45. El Instituto Nacional de Previsión creará la Caja Nacional de Seguro contra accidentes del trabajo en la industria, en caso de muerte o incapacidad permanente, con arreglo al artículo 8.º de sus Estatutos, con separación completa de sus demás funciones, bienes y responsabilidades. (B. Ac., 8, 9, 10; Ac., 46 al 50; R. Ac., 140 al 159).

46. La Caja estará administrada por un Consejo, presidido por el Presidente del Instituto Nacional de Previsión o el Consejero del mismo en quien delegue, y formado por una representación del Consejo de Patronato, Vocales técnicos, patronales y obreros y representantes de los Ministerios de Trabajo y de Hacienda.

El Reglamento establecerá su número y la forma de su designación.

El Consejo nombrará la persona que haya de asumir la dirección delegada de los servicios de la Caja. (B. Ac., 9; Ac., 45, 47 al 50; R. Ac., 142 al 144).

47. La Caja podrá utilizar los servicios de las Cajas colaboradoras del Instituto Nacional de Previsión como delegados de este.

Podrá asimismo utilizar, como órganos locales auxiliares suyos, los servicios de Mutualidades patronales, tanto para el cobro de las primas como para propuestas de clasificación de riesgos, pago de indemnizaciones a

los obreros o a sus derechohabientes, etc.

La Caja podrá establecer conciertos con las Mutualidades patronales que ofrezcan para ellos las debidas garantías, para sustituir el sistema de Seguro directo en la Caja por el de entrega en la misma, por la Mutualidad, del capital necesario para adquirir la renta que debe ser abonado al obrero víctima del accidente o a sus derechohabientes. (B. Ac., 10, 11; Ac., 45, 46, 48 al 50; R. Ac., 145, al 147).

48. La Caja publicará las tarifas de primas, clasificando los riesgos, según sus distintas categorías (Ac., a. adicional.)

Las tarifas serán revisables por el Consejo de la Caja, y modificables en su aplicación por la Dirección de la misma, en aquellos casos en que las medidas de prevención disminuyan el riesgo o la carencia de ellas lo aumenten.

Las decisiones adoptadas por la Dirección podrán ser objeto de recurso ante el Consejo de Administración de la Caja (B. Ac., 12; Ac., 32, 34, 40; R. Ac., 34, 43, 89, 146 al 150.)

49. Todo patrono deberá suministrar periódicamente a la Caja, en los plazos que reglamentariamente se señalan, declaración nominal de los obreros por él ocupados y del importe de los salarios abonados a los mismos, debiendo tener a disposición de la Caja las listas de pago, en las

que deberá especificarse el salario que percibe cada obrero. (B. Ao., 13; Ao., 48, 50).

50. Los patronos estarán obligados a abonar a la Caja o a sus delegados las primas que correspondan, según el riesgo de su actividad, el número de sus obreros y el importe del salario abonado a los mismos en cada categoría de riesgos. (B. Ao., 14; R. Ao., 92, 104, 146, 152.)

CAPITULO VI

DEL FONDO DE GARANTIA

51. Si el patrono o alguna de las entidades a que se refieren las apartados b) y c) del artículo 41 dejasen de satisfacer el capital necesario para adquirir la renta que debe ser abonada como indemnización motivada por la muerte de un obrero o su incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, o por su incapacidad profesional, total o parcial, declaradas por la Autoridad competente, el pago inmediato de dicha indemnización correrá a cargo de un fondo especial de garantía, en la forma y límite que determinen las disposiciones reglamentarias.

A este efecto, corresponderán al organismo gestor de dicho fondo especial los derechos para reclamar, reconocidos al obrero víctima del accidente. (Trab., 184; R. Ao., 160 al 182).

52. El fondo especial de garantía se constituirá con los siguientes ingresos:

Primero. Con las multas que se impongan por incumplimiento de las disposiciones legales en materia de accidentes en la industria.

Segundo. Con la cantidad que el Estado señale en su presupuesto general anualmente.

Tercero. Con los capitales precisos para constituir una renta del 30 por 100 del salario de los obreros que mueran por accidente y sin dejar derechohabientes, con arreglo al Art. 23, capitales que deberán ser satisfechos por el patrono o entidad responsable en la forma y cuantía que determine el Reglamento. (R. Ac., 29, núm. 5, 179, núm. 3).

Cuarto. Con las sumas que la Caja recuperará de los propios patronos responsables del accidente, en los casos en que el fondo de garantía haya sustituido a los mismos en el cumplimiento de sus obligaciones. (R. Ac., 161, 179, núm. 4.); Y

Quinto. Con cuotas anuales, que serán fijadas cada año, por Decreto del Ministerio de Trabajo, a propuesta de la Caja Nacional, en milésimas de las primas del seguro, o de los capitales constitutivos de las rentas. (B. Ac., 16; R. Ac., 179, núm. 5.)

53. La Caja Nacional de Seguro a que se refiere el art. 44 administrará el fondo especial de garantía, con separación de sus restantes bienes y responsabilidades, se-

gún las normas de su gestión financiera y las que contenga el Reglamento de esta Ley. (R.Ac., 156,180 al 182; B. Ac., 8.)

La misma Caja atenderá al fomento del Seguro mutuo de accidentes del trabajo, preparando especialmente la reglamentación de Mutualidades, procurando su organización, asesorándolas para lograr la unidad de gestión y pudiendo mediar en sus conflictos, con concurso de las Cajas colaboradoras regionales. (R.Ac., 157.)

CAPITULO VII

EXENCIONES

54. Las Mutualidades patronales estarán exentas de impuestos (Trab., 183; R. Ac., 230 al 235.)

55. Las pensiones que se abonen al obrero o a sus derechohabientes como indemnización por accidentes del trabajo en los casos de incapacidad permanente o muerte, así como los capitales que pueden constituirse para abono de dichas pensiones o rentas, se declaran exentos del pago de derechos reales y de cualesquiera otros impuestos.

Asimismo quedarán exentos del impuesto del Timbre las pólizas y libros de la Caja Nacional. (B. Ac., 15; R. Ac., 231.)

56. Todas las reclamaciones que se formulen por el

obrero o sus derechohabientes, así como las certificaciones y demás documentos que se expidan a los mismos, tanto con ocasión de la aplicación de las disposiciones fundamentales como de las reglamentarias, se extenderán en papel común. (Trab., 192; R. Ac., 233.)

57. Las rentas que abone la Caja Nacional serán en todo caso propiedad de los beneficiarios, gozarán de la exención del art. 428 del Código de Comercio y no podrán ser objeto de cesión, embargo ni retención alguna, con arreglo al art. 31 de la Ley de 27 de Feb. 928 (Trab., 190; B. Ac. 4 17; R. Ac., 234.)

Los capitales que las Mutualidades y Compañías hayan de entregar a la Caja Nacional se considerarán afectos por Ministerio de la Ley, a la constitución de pensiones, y estarán libres de embargos que desvirtuen su finalidad y de reclamaciones de terceros. (R. Ac., 234.)

58. Las indemnizaciones por razón de accidentes del trabajo se considerarán incluidas entre los bienes exceptuados de embargo por el art. 1.449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no podrá hacerse efectiva en ellas ninguna responsabilidad. (Trab. 191; R. Ac., 235; Contr. 59.)

CAPITULO VIII

S A N C I O N E S

59. El patrono que no diera a las Autoridades o a los

funcionarios de la Inspección del Trabajo los partes o informaciones determinados en las disposiciones legales, con relación a los accidentes ocurridos en sus obras, explotaciones o industrias, o los diere fuera de los plazos que aquellas señalen, será castigado con la multa que fijen dichas disposiciones.

Para que proceda la imposición de la multa, deberá acreditarse, en caso de accidente leve, que el obrero o sus derechohabientes han dado parte del mismo al patrono. Cuando se trate de accidente grave, el obrero queda relevado de cumplir este requisito y su omisión no exime al patrono de la penalidad establecida en el párrafo anterior. (R. Ac., 222; al 226.)

Las Autoridades gubernativas y judiciales que reciban un parte de accidente del trabajo, lo transmitirán, bajo su personal responsabilidad, a sus superiores, en el plazo y forma que se determine en las disposiciones reglamentarias y complementarias. (Trab., 166; R. Ac., 193 al 190, 198 al 201, 211, 213, 215.)

60. Tanto las infracciones de los Reglamentos y disposiciones a que hace referencia el art. 34, como de cuantos pudieran dictarse en lo sucesivo en orden a la ejecución de lo contenido en este texto, se castigarán, independientemente de la responsabilidad civil o criminal a que en cada caso haya lugar, con multas de 25 a 250 pesetas.

En caso de primera reincidencia, con multa de 250 a 500 pesetas, y en segunda reincidencia con multas de 500 a 1.000 pesetas,

El señalamiento de las infracciones correrá a cargo de los Inspectores del Trabajo, y la imposición de multas y su exacción serán de la competencia de los Delegados provinciales de Trabajo.

Se determinarán reglamentariamente los recursos legales contra las correcciones a que se refieren los párrafos anteriores. (Trab., 194; R. Ac., 222 al 229.)

CAPITULO IX

DISPOSICIONES GENERALES

61. Serán nulos y sin valor toda renuncia a los beneficios de las disposiciones de esta Ley y todo pacto, convenio o contrato contrario a ellas, en cualquiera que fuera la época y la forma en que se realicen, quedando prohibidos expresamente los actos de conciliación y juicios de árbitros y amigables componedores sobre las cuestiones que se susciten entre los trabajadores y empresarios o entre aquellos y entidades aseguradoras sobre los beneficios que concede a los primeros las legislaciones de accidentes del trabajo. (Trab., 174; R. Ac., 236; Cont. 36.)

62. Prescribirán al año las acciones para reclamar

el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.

El término de la prescripción estará en suspenso mientras se siga sumario o pleito contra el presunto culpable, criminal o civilmente, y volverá a contarse desde la fecha del auto de sobreseimiento o de la sentencia absolutoria. (Trab., 170; R. Ac., 18, 217, 218.)

63. Todas las reclamaciones de daños y perjuicios por hechos no comprendidos en las presentes disposiciones, o sea aquellos en que mediere culpa o negligencia exigible civilmente, quedan sujetas a las prescripciones del derecho común. (Trab., 171; Ac., 64; R. Ac., 219 al 221; Civ. 1.908 al 1.910.)

64. Si los daños y perjuicios fueran ocasionados con dolo, imprudencia o negligencia, que constituyan delito o falta con arreglo al Código Penal, conocerán en juicio correspondiente los Tribunales ordinarios. (Trab., 172; Ac., 63, 65; R. A., 211, 220, 221.)

65.- Si estos acordasen el sobreseimiento o la absolución del procesado, quedará expédito el derecho que al interesado corresponda para reclamar la indemnización de daños y perjuicios, según las disposiciones de esta Ley.

Este artículo y los dos anteriores se aplicarán tanto al patrono como al obrero. (Trab. 173; R. Ac., 73, 221.)

66. Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a los accidentes ocurridos en los trabajos de Guerra y Marina y demás Departamentos Ministeriales, según las disposiciones reglamentarias. (Trab., 193, 334 al 426; R. Ac., 3ª transitoria y Cap.X.)

Artículo adicional. El presente texto, refundido, entrará en vigor el día 1º Ab. del próximo año 1.933, y a este efecto, en el plazo de tres meses, a partir de la promulgación de dicho texto, se publicará el reglamento para su aplicación, adicionando y modificando en lo necesario las disposiciones reglamentarias actualmente en vigor sobre la materia; y antes de 1º Feb. 933 habrán de publicarse las tarifas de primas a que se refieren los artículos 41 y 48 del texto refundido y que oportunamente ha de determinar la Caja Nacional del Seguro contra accidentes del Trabajo. (R. Ac., 146, 147.).

A P E N D I C E

C

LEY DE RESPONSABILIDADES DEL TERCARIO

TRADUCIDA AL ESPAÑOL

LEY N°. 1874

.....

LEY DE RESPONSABILIDADES DEL EMPRESARIO**LEY Nº. 1874**

LEY PARA AMPLIAR Y REGULAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS EMPRESARIOS POR LAS LESIONES CORPORALES O MUERTE SUFRIDAS POR SUS OBREROS DURANTE EL TRABAJO.

En nombre de los Estados Unidos, se dispone por el Parlamento filipino que:

Sección 1. Si un obrero sufriera una lesión corporal, estando ocupado en el cumplimiento de una obligación en el momento en que sufrió la lesión, y ésta fuere debida.

Primero, al estado defectuoso de los medios, talleres o maquinaria relacionados o utilizados para la industria del empresario, derivado o no descubierto o remediado por negligencia del empresario o de la persona al servicio de éste encargada por él de vigilar que los medios, talleres y maquinaria se hallen en debidas condiciones; o

Segundo, a la negligencia de la persona al servicio del empresario encargada de llevar a cabo la supervisión y ejercitando tal supervisión, y cuya única o principal obligación fuera la de supervisar, o, en ausencia de tal supervisor, a la negligencia de la

persona que actúe como supervisor, con la autorización o consentimiento del empresario; o

Tercero, a la negligencia de una persona al servicio del empresario que tuviere a su cargo o control una señal, un conmutador, una máquina locomotora, o un tren sobre carriles; el obrero o sus representantes legales, tendrán, sujetos a las disposiciones de esta Ley, los mismos derechos a indemnización y a acción contra el empresario que si no hubiera sido un obrero, ni estuviera al servicio del empresario, ni contratado para realizar trabajos para él.

Un vagón utilizado o poseído por una compañía ferroviaria será considerado como parte de los edificios, talleres o maquinaria de la sociedad que lo utilice o lo posea, en el sentido de la cláusula uno de esta sección, ya sea propiedad de tal compañía o de otra sociedad o persona. Uno o más vagones en movimiento, ya estén unidos a una máquina o no, constituirán un tren en el sentido de la cláusula tres de esta sección, y cualquiera que, como parte de su deber por el momento, controle o dirija físicamente el movimiento de una señal, conmutador, máquina locomotora o tren se considerará persona encargada de una señal, conmutador, máquina locomotora, o tren en el sentido de dicha cláusula.

Sec. 2. Si, como resultado de la negligencia del empresario o de una persona de cuya negligencia sea res-

ponsable el empresario según lo dispuesto en la sección uno, resultara muerto un obrero o muriera a consecuencia de las lesiones sufridas, su viuda, o herederos legítimos, o próximos parientes cuya subsistencia en el momento de la muerte dependiera del jornal del obrero fallecido, tendrán derecho a pedir al empresario el resarcimiento de los perjuicios causados.

Sec. 3. Si, en virtud de lo dispuesto en esta Ley, se concede el pago de los perjuicios ocasionados por la muerte, se fijarán con referencia al grado de culpabilidad del patrono o de la persona de cuya negligencia es responsable el patrono.

El importe de la indemnización por perjuicios que puede concederse, a consecuencia de una acción al amparo de las disposiciones de la sección uno, por una lesión corporal a un obrero, en la que no se conceda indemnización de perjuicios por muerte según lo dispuesto en la sección dos, no excederá de dos mil pesos.

El importe de la indemnización por perjuicios que puede concederse a consecuencia de tal acción, si se concediere indemnización por muerte según lo dispuesto en la sección dos, no será inferior a quinientos pesos ni superior a dos mil quinientos pesos, comprendidas tanto las lesiones como la muerte.

Sec. 4. No podrá mantenerse acción alguna por daños por lesiones o muerte al amparo de esta Ley, si no se

facilita al patrono aviso de ello dentro de los noventa días, de la fecha, lugar y causa de la lesión, o si la acción no se ejercita dentro del plazo de un año a partir del momento del accidente que causó la lesión o muerte. El aviso exigido por esta sección será escrito y estará firmado por la persona lesionada o por otra en su nombre, o si, por razón de incapacidad física o mental, es imposible el lesionado dar el aviso dentro del tiempo establecido en esta sección, dicho aviso podrá darse dentro de los diez días siguientes al cese de tal incapacidad, y en caso de muerte sin que dicho aviso haya sido dado y sin que el interesado hubiera tenido capacidad durante diez días, en cualquier momento posterior al período arriba mencionado, para dar el aviso, la viuda, los herederos legítimos, o los próximos parientes cuya subsistencia dependiera del salario del fallecido, podrán dar el aviso dentro de los treinta días siguientes a la muerte del obrero. Ningún aviso dado en virtud de las disposiciones de esta Ley será considerado nulo o insuficiente solamente por razón de algún descuido con relación a la fecha, lugar o causa de la lesión, si no hubo intención de engañar, o si el empresario no fué engañado por razón de tal descuido.

Sec. 5. Todas las acciones por daños que se ejerciten en virtud de esta Ley tendrán preferencia sobre

todas las demás materias, excepto los casos criminales y las materias sobre Habeas Corpus en los turnos de los Tribunales de Primera Instancia, y serán rápidamente juzgados por el Tribunal y fallados dentro del plazo de quince días siguientes a la sumisión final del caso al Tribunal para sentencia.

A solicitud de la parte lesionada o de sus representantes debidamente autorizados, el Tribunal podrá hacer la oportuna concesión de alimentos y asistencia médica durante la pendencia de la acción y mientras la asistencia médica sea necesaria por razón de la lesión: disponiéndose, sin embargo, que se dé al demandado ocasión de ser oído antes de que tal concesión sea hecha.

Sec. 6. Si un empresario contrata, por escrito o verbalmente, con un contratista independiente la realización de una parte del trabajo del empresario o si tal contratista contrata con otro subcontratista la realización de todo o parte del trabajo comprendido en el contrato de tal contratista con el empresario, tal contrato o subcontrato no será obstáculo a la responsabilidad del empresario por lesiones sufridas por los obreros del contratista o subcontratista causadas por el estado defectuoso de los medios, talleres, maquinaria o fábricas, si fueran propiedad del empresario o fueran por él suministrados, y si tal defecto tuviera su origen o no hubiera sido descubierto o remediado a causa de

la negligencia del patrono o de alguna persona por él encargada de vigilar que tales elementos se hallen en el debido estado.

Sec. 7. El empresario que haya contribuido a un fondo de seguro creado y mantenido con el propósito mutuo de indemnizar al obrero que sufra lesiones corporales por las cuales se pueda obtener indemnización según lo dispuesto en esta Ley, o que haya contribuido al fondo de alguna sociedad de ayuda con iguales propósitos, puede probar, para mitigar los daños abonables a un obrero según las disposiciones de esta Ley, la proporción de beneficio económico recibida por tal obrero de cualquier fondo o sociedad por cuenta de la aportación de tal empresario, toda vez que la aportación de dicho empresario a tal fondo o sociedad contribuye a la aportación total de éste.

Sec. 8. Ningún obrero o sus representantes legales tendrán derecho, en virtud de lo dispuesto en esta Ley, a ejercitar acción por daños contra el empresario, si tal obrero tenía conocimiento del defecto o negligencia que causó la lesión y no lo puso, dentro de un plazo razonable, en conocimiento del empresario o de algún superior suyo al servicio del empresario que tuviera a su cargo la supervisión general.

Sec. 9. Esta Ley no será aplicable al servicio de-

extiende al a los trabajadores agrícolas.

Sec. 10. Será nulo todo acuerdo renunciando a los beneficios de esta Ley hecho por el trabajador antes de que ocurra algún accidente que le produzca lesiones o la muerte.

Sec. 11. Esta Ley entrará en vigor desde la fecha de su aprobación.

Aprobada el 19 de Junio de 1918.